

EQUADOR

La insurrección
de octubre



CO|YUN|TU|RAS
CLACSO

 CLACSO

Ecuador la insurrección de octubre / Boaventura De Sousa Santos ...
[et al.]. - 1a ed.-

Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2020.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-722-608-9

1. Conflictos Sociales. 2. Ecuador. I. De Sousa Santos, Boaventura.
CDD 303.6

Otros descriptores asignados por CLACSO

Movimientos Populares / Insurrección / Democracia / Estado / Gobierno /
Violencia / Neoliberalismo / Autoritarismo / Ecuador / América Latina

ECUADOR

La insurrección de octubre

Edición a cargo de Camila Parodi y Nicolás Sticotti



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Karina Batthyány - Secretaria Ejecutiva

Nicolás Arata - Director de Formación y Producción Editorial

Equipo Editorial

Maria Fernanda Pampín - Directora Adjunta de Publicaciones

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

Maria Leguizamón - Gestión Editorial

Nicolás Sticotti - Fondo Editorial



LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES

CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE

Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital o adquirirse en versión impresa desde cualquier lugar del mundo ingresando a www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana

Ecuador: la insurrección de octubre (Buenos Aires: CLACSO, mayo de 2020).

ISBN 978-987-722-608-9

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

Foto de tapa: David Díaz / Bloomberg

Diseño de tapa: Villy Villian

Diseño de interiores: Ana Uranga

Edición: Camila Parodi y Nicolás Sticotti

Corrección: Martín Glikson

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor. La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | clacso@clacsoinst.edu.ar | www.clacso.org

Patrocinado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional



ECUADOR

La insurrección de octubre

Autoras y autores:

Adoración Guamán
Adrián Bonilla
Alfredo Serrano Mancilla
Bayardo Tobar
Boaventura de Sousa Santos
Denis Rogatyuk
Emilio Cafassi
Fernando Vera Cabrera
Francisco Hidalgo Flor
Guido Leonardo Croxatto
Guillaume Long
Isaac Bigio
Isaías Campaña C.
Iván Mora Manzano
Jorge Majfud
Katu Arkonada
Leonardo Parrini
Lucrecia Maldonado
Luis Herrera Montero
Magdalena Gómez
Magdalena León T
Manuel Castells
Marcelo Colussi
Marcelo Varela

Marco Teruggi
María Iglesias
Milena Almeida
Mónica Mancero
Nicolás Oliva Pérez
Noam Chomsky
Pablo Ospina Peralta
Pedro Pierre
Raúl Zibechi
Ricardo Restrepo Echavarría
Santiago Ortiz
Soledad Stoessel
Stalin Herrera
Víctor Hugo Torres Dávila
Virgilio Hernández

Fotógrafos y fotógrafas:

Andrés Yépez
David Díaz
Erick Allende
Iván Castaneira
Johis Alarcón
Josué Araujo
Karen Toro
Vicho Gaibor

ÍNDICE

Presentación. Ecuador, la insurrección de octubre	11
--	-----------

1. ANTECEDENTES. La insurrección recorre Nuestra América

Ecuador: del centro al fin del mundo	17
<i>Boaventura de Sousa Santos</i>	
Fin de ciclo (corto) en Ecuador	22
<i>Alfredo Serrano Mancilla</i>	
Crisis en Ecuador: de protestas y privilegios	26
<i>Nicolás Oliva Pérez</i>	
El gran carpetazo ecuatoriano	30
<i>Guido Leonardo Croxatto</i>	
Ecuador contra Lenín Moreno	36
<i>Pablo Ospina Peralta</i>	
Lenín y la dictadura del capital en Ecuador	42
<i>Katu Arkonada</i>	
Ecuador: Lenín vs. Lenin	46
<i>Isaac Bigio</i>	
“Lenín Moreno no va a derogar el gasolinazo”	54
<i>Entrevista a Guillaume Long por María Iglesias</i>	
Abuso de poder en Ecuador	60
<i>Virgilio Hernández</i>	

2. CONFLICTO. Octubre rojo: reflexiones al calor de la insurrección

Recetas del FMI: Arma de destrucción masiva, inestabilidad social, pérdida de soberanía	68
<i>CLAE</i>	
No hay peor reaccionario que el progresista arrepentido	78
<i>Iván Mora Manzano</i>	
La estigmatización de las pérdidas económicas por la movilización social	84
<i>Marcelo Varela</i>	

¿Ecuador sin proyecto nacional?	90
<i>Isaías Campaña C.</i>	
Vía empresarial: bajar salarios, bajar el impuesto a la renta a las grandes empresas, eliminar el impuesto a la salida de capitales, subir el IVA, eliminar aranceles, exportar o morir.....	104
<i>Bayardo Tobar</i>	
La perversidad del discurso mediático.....	112
<i>Lucrecia Maldonado</i>	
Toque de queda en Ecuador: vía libre para el uso de armas letales	116
<i>Artículo sin firma del diario La Jornada</i>	
Ecuador: Lenín Moreno persigue a comunicadores y opositores políticos.....	122
<i>Artículo sin firma de Anred</i>	
“El movimiento social que botó a tres presidentes ya no existe”	128
<i>Entrevista a Santiago Ortiz por Lissette Fossa</i>	

3. ACTORES. Ecuador desde sus protagonistas

Ecuador gana el primer round al FML.....	148
<i>Adoración Guamán</i>	
Inocencio de los páramos	144
<i>Leonardo Parrini</i>	
Hay quienes sueñan con monstruos: ¿quién sostuvo al movimiento indígena?.....	148
<i>Milena Almeida</i>	
Apuntes sobre el triunfo popular de octubre	152
<i>Revista Crisis</i>	
Ecuador: A pesar de la represión, la revolución de los zánganos socava el poder	156
<i>Denis Rogatyuk</i>	
Movimientos populares espontáneos, entre el espontaneísmo y la transformación...162	
<i>Marcelo Colussi</i>	
Triunfo de la insurrección indígena ecuatoriana	172
<i>Magdalena Gómez</i>	
Protestas en Ecuador: ¿símbolo de un cambio anunciado?	176
<i>Entrevista a Guillaume Long por el Institut de Relations Internationales et Stratégiques de Francia</i>	
¿Por qué la victoria del movimiento indigenista no es total?.....	180
<i>Marco Teruggi</i>	

“Fue una negociación pública inédita en la historia de Ecuador”	184
<i>Entrevista a Soledad Stoessel por Guido Vassallo</i>	
El fracasado discurso del éxito, turno de Ecuador	188
<i>Emilio Cafassi, Noam Chomsky, Manuel Castells y Jorge Majfud</i>	
El movimiento indígena y la insurrección de los zánganos	192
<i>Stalin Herrera</i>	
¿De qué ha servido la revuelta en Ecuador?	204
<i>Raúl Zibechi</i>	
Fue una revuelta histórica	208
<i>Pedro Pierre</i>	

4. REFLEXIONES. Insurrección y después

Comunidad, ágora, barrio: pilares del levantamiento indígena-popular	216
<i>Francisco Hidalgo Flor</i>	
Ecuador: regresión, ajuste y levantamiento indígena	225
<i>Víctor Hugo Torres Dávila</i>	
La resistencia antineoliberal en Ecuador: causas y perspectivas progresistas	234
<i>Ricardo Restrepo Echavarría</i>	
Sobre el sentido común antineoliberal y otros debates necesarios	248
<i>Magdalena León T.</i>	
Ecuador en movilización contra el totalitarismo neoliberal	260
<i>Luis Herrera Montero y Fernando Vera Cabrera</i>	
“Venimos a luchar por el pueblo, no por el poder”: el levantamiento indígena y popular en Ecuador de 2019	271
<i>Adrián Bonilla y Mónica Mancero</i>	
Referencias de medios	281
Referencias de los artículos publicados	283
Las y los autores	289

PRESENTACIÓN.

ECUADOR, LA INSURRECCIÓN DE OCTUBRE

Durante los primeros días de octubre de 2019, organizaciones indígenas, movimientos sociales, trabajadores y estudiantes tomaron el centro de la escena pública ecuatoriana.

La eliminación de subsidios a la gasolina y otras medidas de ajuste fiscal confirmaron el giro neoliberal del actual Gobierno ecuatoriano que encontró un pueblo movilizado en la calle y dispuesto a luchar frente a las denominadas "lógicas de austeridad fiscal". Las movilizaciones y protestas sociales que ganaron las calles a partir del decreto 883 produjeron un sismo político que aún resuena en todo el continente.

Ecuador. La insurrección de octubre aborda los acontecimientos de aquellas 12 jornadas desde una perspectiva plural y colectiva. Combinando una selección de los mejores textos producidos en los días más intensos de las revueltas y un conjunto de ensayos elaborados especialmente para esta publicación.

Sobre los primeros, el libro recopila diferentes coberturas y opiniones publicadas al calor de los acontecimientos, cuya selección tuvo una particular inclinación por recoger las reflexiones producidas por autores y autoras publicadas por los medios alternativos. No está de más resaltar el valor de estas publicaciones: fue a partir de estas que se logró romper el cerco mediático, sus aportes enfrentaron el vacío informativo, la censura y la complicidad de los medios de comunicación asociados al gobierno, las élites y los poderes económicos.

Las imágenes que acompañan los textos nos fueron cedidas por diversos colectivos de fotógrafos que cubrieron las jornadas. En efecto, la foto de portada que acompaña este libro es de David Díaz Arcos, cuyo retrato de una mujer indígena se transformó en un icono que dio la vuelta al mundo, sintetizando el rol activo de las mujeres en las protestas que tomaron el centro de Quito.

Al mismo tiempo, buscamos destacar el rol que cumplieron las redes sociales en esta protesta. Estas fueron sin duda un espacio de intensa disputa y discusión política en

esos días, pero al mismo tiempo cumplieron un rol imprescindible en las movilizaciones y convocatorias, y sobre todo como mecanismo de control frente a los abusos y dureza de las fuerzas de seguridad.

Por último, aunque no menos importante, incluimos una serie de ensayos escritos a finales de 2019 que buscan aportar otras lecturas y análisis sobre lo ya acontecido. Con este nuevo proyecto editorial, CLACSO busca contribuir con el estudio de las luchas y movilizaciones políticas en el Continente, realizando un aporte que -complementariamente- está dirigido a un público mucho más amplio que el del mundo académico.



Lenín Moreno

@Lenin

Las decisiones adoptadas ¡están en firme! He dispuesto el Estado de Excepción para precautelar el orden, la seguridad ciudadana y con el fin de controlar a quienes pretenden provocar caos. No accederemos a chantajes y actuaremos acorde a la ley. #NoAlParo #DecididosACrecer

COMUNICADO OFICIAL

03 de octubre de 2019

Esta mañana me he reunido con los ministros para evaluar la situación del país a raíz de las decisiones adoptadas en materia económica, estamos seguros de que son las correctas y ¡están en firme!

Para precautelar el orden, la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos y controlar a quienes pretenden provocar caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional.

Los derechos se exigen sin perjudicar los que verdaderamente son fundamentales para el progreso del país: el trabajo, la educación y la libre movilidad.

Reiteramos nuestra apertura al diálogo, un mecanismo que hemos aplicado desde el primer día de nuestro Gobierno con todos los sectores. No accederemos a chantajes y actuaremos acorde a la ley.

SECRETARÍA GENERAL DE
COMUNICACIÓN DE LA PRESIDENCIA



3:38 p. m. · 3 oct. 2019 · Twitter Web App





ANTECEDENTES

LA INSURRECCIÓN RECORRE NUESTRA AMÉRICA

#Neoliberalismo #ContextoInternacional
#ProcesoHistórico #Correísmo
#MovimientosIndígenas #LenínMoreno
#Encuestas #Ciudadanía #Democracia
#Crisis #Paquetazo
#Movilización #RafaelCorrea #Traición
#Constitución #Dolarización #FMI
#Conaie #Neoliberalismo
#ProcesosHistóricos #Movilización
#Represión #DerechosHumanos

ECUADOR: DEL CENTRO AL FIN DEL MUNDO



Foto: Josué Araujo / Fluxus Foto

#NEOLIBERALISMO
#CONTEXTointernacional
#PROCESOHISTÓRICO
#CORREÍSMO
#MOVIMIENTOSINDÍGENAS

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS

Como su propio nombre indica, Ecuador está situado geográficamente en el centro del mundo. Todo lleva a creer que el neoliberalismo ha decidido llevar a cabo su agenda de fin del mundo en este país. Como es sabido, el neoliberalismo es la versión más antisocial del capitalismo global porque está estrictamente vinculada a los intereses del capital financiero. Dado que no reconoce otra libertad que la libertad económica, le resulta fácil sacrificar todas las demás.

Por cierto, es bueno que los portugueses sepan esto con respecto al partido Iniciativa Liberal, la versión más avanzada del liberalismo en forma de bancarrota. La especificidad de la libertad económica consiste en que se la ejerce en la medida exacta del poder económico que uno tiene para ejercerla. Por lo tanto, su ejercicio

siempre implica una forma de imposición asimétrica sobre los grupos sociales que tienen menos poder, así como una forma de violencia brutal sobre aquellos que no tienen poder, es decir, sobre la gran mayoría de la población empobrecida del mundo. Tal imposición y violencia siempre se traduce en la transferencia de riqueza de los pobres (traducida en las magras políticas de protección social del Estado) a los ricos y en el saqueo de los recursos naturales, así como de los activos económicos, cuando los hay. El Fondo Monetario Internacional es el agente encargado de legalizar el robo en el que se traducen las políticas de austeridad impuestas por el capitalismo financiero.

El robo es evidente hasta el punto de que el monto de los préstamos casi siempre equivale a los beneficios públicamente contabilizados que se ofrecen

La persecución judicial contra Correa por presunta corrupción, que Moreno patrocinó, no era más que otra versión de la nueva estrategia estadounidense para neutralizar a los gobernantes que pusieran en peligro los intereses de las empresas de ese país, especialmente del sector petrolero: la supuesta lucha contra la corrupción.

a los acreedores internacionales y a las grandes corporaciones multinacionales que se articulan con ellos. Los casos más recientes de este proceso van desde Grecia hasta Portugal (2011-2015) y desde Argentina hasta Brasil, pasando por muchos países africanos. Lo que está sucediendo en Ecuador representa el paroxismo, el momento de máxima intensidad de la voluntad destructiva del neoliberalismo. Con el fin de salvaguardar el derecho al robo legal por parte de los acreedores y las empresas multinacionales se incendia socialmente el país, se declara un estado de excepción rápidamente legitimado por una Corte

Constitucional cómplice, se movilizan las Fuerzas Armadas entrenadas por la infame Escuela de las Américas (hoy con un nombre diferente que borra la historia pero mantiene los propósitos) a fin de ejercitarse en la lucha contra los enemigos internos, es decir, las grandes mayorías empobrecidas, se hiere y asesina a los manifestantes y se provoca la desaparición de cientos de niños. Es una estrategia maximalista y de fin del mundo dispuesta a arrasar el país para hacer cumplir la voluntad imperial y de las élites locales a su servicio.

Lo más trágico de todo es que Ecuador fue el país de la esperanza en la primera década de este siglo. Tuve el placer de ser consultor en la elaboración de una de las constituciones más progresistas del mundo, la Constitución de 2008; la primera que en su articulación consagró los derechos de la naturaleza y ofreció una alternativa al desarrollo capitalista. Esa alternativa se basaba en los principios de armonía con la naturaleza y de reciprocidad que los pueblos indígenas siempre han practicado, un modelo de vida que, por resultar tan extraño a la lógica occidental, tuvo que consagrarse en su versión original, en lengua quechua, el *suma kawsay*, traducido imperfectamente por *buen vivir*. Los años siguientes fueron años de experimentación innovadora

y grandes expectativas, especialmente para los pueblos indígenas que, sobre todo desde 1990, venían luchando por el reconocimiento de sus derechos, el respeto de sus formas de vida y la dignidad de su existencia como supervivientes del gran genocidio colonial moderno, perpetuado hoy por el nuevo colonialismo y el racismo que durante décadas caracterizó tanto a los partidos políticos de derecha como a los de izquierda.

La presidencia de la República la ocupaba Rafael Correa, un gran comunicador sin gran arraigo en los movimientos sociales, con un discurso antiimperialista, siempre polémico en sus posiciones y poco tolerante con las divergencias en su propio campo político. A pesar de ello, realizó un trabajo notable de renegociación de la deuda externa y de redistribución social, aunque erróneo y tal vez insostenible por dos razones principales. Por un lado, tenía dificultades para reconocer en los pueblos indígenas algo más que gente pobre: sus derechos colectivos, su cultura y su historia apenas contaban; la redistribución social implicaba centralismo de Estado y la liquidación de las autonomías territoriales del autogobierno indígena, garantizadas al menos desde la Constitución de 1998; y pronto se esforzó por demonizar a los líderes indígenas. Por otro lado, en contra de la Constitución e invocando

dificultades financieras, adoptó el modelo de desarrollo capitalista neoextractivista (centrado en la extracción de recursos naturales, especialmente de petróleo), aunque dando preferencia a los inversores chinos en detrimento de los inversores norteamericanos presentes históricamente. En los últimos años, una buena parte de la izquierda ecuatoriana abandonó a Correa no solo por su desarrollismo, sino también por su virulencia contra los líderes indígenas. Yo mismo fui crítico con Correa, pero nunca compartí los excesos de cierta izquierda, unida por la izquierda ecologista europea, que llegó a considerar a Correa como un líder autoritario de extrema derecha. Hoy deben estar experimentando un baño de realidad sobre lo que verdaderamente es la extrema derecha en Ecuador y en todo el subcontinente.

Rafael Correa estuvo en el poder entre 2007 y 2017 y fue relevado por su vicepresidente durante varios años, y ahora presidente, Lenín Moreno. Inicialmente, Moreno dio la idea de que lo que cambiaría solo sería el estilo de gobierno, no la sustancia. Sin embargo, quien conociera los antecedentes de Moreno debería haber estado estar más atento. Nadie se dio cuenta de que la persecución judicial contra Correa por presunta corrupción, que Moreno patrocinó, no era más que otra versión de la nueva estrategia

estadounidense para neutralizar a los gobernantes que pusieran en peligro los intereses de las empresas de ese país, especialmente del sector petrolero: la supuesta lucha contra la corrupción. Fue así contra Lula da Silva y Cristina Kirchner, entre muchos otros. Poco a poco, Moreno fue mostrando su verdadero propósito: realinear a Ecuador con los intereses de Estados Unidos. El acuerdo con el FMI culminó la celebración de esta alianza. El llamado “paquetazo” decretado el 1 de octubre, un paquete de medidas de austeridad, es de una violencia extrema para las familias de bajos ingresos, que representan la gran mayoría de la población ecuatoriana.

La trágica trayectoria de las recetas del FMI es de sobra conocida. Nunca dan nada más que buenos negocios para sus inversores. Siempre resultan en el empobrecimiento de las grandes mayorías. A pesar de ello, o tal vez por ello, siguen aplicándose, y cada vez que se aplican se las anuncia como la única alternativa para salvar el país. Que el FMI sea indiferente a las desastrosas consecuencias sociales

de sus recetas no sorprende, porque no se puede exigir que el capitalismo haga otra filantropía que la que redunde en su propio interés (y por tanto no es verdadera filantropía). Lo sorprendente es que Lenín Moreno parece no recordar que la resistencia de los pueblos indígenas, una resistencia aprendida a lo largo de los siglos, ya ha derribado a tres presidentes desde 1990, y es muy probable que él sea el próximo. Lo más trágico para el pueblo ecuatoriano es que los anteriores derrocamientos presidenciales (1997, 2000, 2005) fueron mucho menos violentos de lo que se anuncia para el siguiente. La tímida declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuya incapacidad para defender con autonomía los derechos humanos es bien conocida, es una señal de los tiempos autoritarios en los que nos encontramos. La esperanza de Ecuador reside en la dignidad de su pueblo. Para estar a la altura de esta dignidad, la solidaridad de los demócratas del mundo con el noble pueblo ecuatoriano debe ser inequívoca y activa.

**La esperanza de Ecuador reside en la dignidad de su pueblo.
Para estar a la altura de esta dignidad, la solidaridad
de los demócratas del mundo con el noble pueblo ecuatoriano
debe ser inequívoca y activa.**

**A FUERA
FMI!**



FIN DE CICLO (CORTO) EN ECUADOR



Foto: Johis Alarcón / Bloomberg

#LENÍNMORENO
#NEOLIBERALISMO
#ENCUESTAS
#CIUDADANÍA
#DEMOCRACIA

ALFREDO SERRANO MANCILLA

Ecuator es un ejemplo más de la incapacidad que tiene el neoliberalismo para brindar estabilidad política, social y económica. Y también lo es de cómo el FMI puede llegar a ser un “arma de destrucción masiva” en tiempo récord. Y más aún si el país fue previamente transformado con políticas progresistas bajo principios de soberanía. Como muchas veces nos precipitamos a creer, la ciudadanía no olvida tan velozmente: el ciclo progresista ecuatoriano, bajo la impronta del correísmo, no se terminó por ahora, a pesar del giro de 180 grados que ha pretendido imponer Lenín Moreno —de quien vale la pena recordar, por cierto, que no fue electo para ello—.

Precisamente, ese es uno de los puntos nodales en el que radica buena parte del dilema ecuatoriano. El presidente no

ganó la cita electoral con un programa neoliberal, ni tampoco planteando la salida de la Unasur y la adhesión al Grupo de Lima, y mucho menos pactando con toda la vieja política. Obtuvo el respaldo en las urnas con una propuesta que traicionó desde el primer minuto de juego. Y es realmente ese hecho político el que le ha condicionado desde el principio.

Así, la figura presidencial se fue debilitando a gran velocidad, porque toda la ciudadanía sabía que no era el presidente quien gobernaba, sino que esta responsabilidad era de otros. En la última encuesta CELAG, en marzo de este año, ya se constataba esta percepción tan generalizada: ante la pregunta de quién gobierna en Ecuador, el 46% manifestaba que lo hacen los grandes grupos económicos; el 27%, Estados Unidos, y el 26%, el viejo político socialcristiano Jaime Nebot.

Un presidente que no gobierna acaba siendo rehén de otros, y, en consecuencia, comienza a tomar decisiones en función del tironeo de intereses de actores que lo sostienen en tanto se los satisfaga. Esto tiene una contraparte inmediata: la figura presidencial se convierte en una autoridad ficticia que deriva en una institucionalidad frágil. Y, para colmo, el único intento de ganar legitimidad se hace en función de la crítica recurrente a la “pesada herencia”, mientras que la gente en la calle piensa mayoritariamente en el presente.

De esta forma, era inevitable que Lenín Moreno se transformara en un presidente descartable, cuya caducidad depende de dos factores: uno, del sostén que le

quieran dar ciertos poderes (internacional, mediático, judicial, militar y económico); y dos, del momento en el que el cansancio y hartazgo de la gente explote por una medida determinada. Y este ha sido el caso: el recorte de los “subsidios” a la gasolina, al mismo tiempo que se otorgan “incentivos” a los grandes empresarios. Mejor dicho, y sin eufemismos: se eliminan las ayudas a la gente que lo necesita mientras se subsidia a las grandes corporaciones empresariales por la vía de exoneraciones tributarias.

Entonces, al decidir deliberadamente atentar contra el bienestar ciudadano, todas las chispas latentes saltan por los aires; la gente protesta y todo se tambalea. El clima ya hace meses, medido también por CELAG en marzo, era el siguiente: 6 de cada 10 ecuatorianos tenían sensaciones negativas sobre la situación nacional (enojo, incertidumbre, miedo, resignación y sensación de caos). Con ese mar de fondo, y con la debilidad del presidente, unidos a una medida innecesaria impulsada por el FMI, el desenlace era el esperado.

Un país al borde del precipicio, con un Gobierno no acostumbrado a gobernar, al que se le nota demasiado la falta de práctica, y que lo único que hace es abusar de la fuerza en contra de las protestas. Estado de excepción, toque

El presidente no ganó la cita electoral con un programa neoliberal, ni tampoco planteando la salida de la Unasur y la adhesión al Grupo de Lima, y mucho menos pactando con toda la vieja política. Obtuvo el respaldo en las urnas con una propuesta que traicionó desde el primer minuto de juego.

de queda, huida a Guayaquil del presidente, orden de prisión a opositores y límite a la libertad de prensa han sido algunas de las armas usadas para procurar “estabilizar” al país; es decir, frenar la protesta y desalentar a los manifestantes, mientras se permite que gobiernen aquellos que no fueron electos para tal menester.

Es imposible, a partir de ahora, saber qué sucederá. Pero sí hay dos hechos inequívocos. Uno, Ecuador está en emergencia democrática, y la única forma de dirimir en política este tipo de situaciones es pedirle a la ciudadanía que

vote, más aún cuando esto está permitido constitucionalmente a través del mecanismo de muerte cruzada (se disuelve todo: Ejecutivo y Legislativo, y se llama a elecciones). Y dos, puede que Lenín sortee transitoriamente este momento gracias al apoyo de sus soportes, pero ya no hay vuelta atrás: el único acertijo es el de la fecha en que se pondrá fin a su mandato. Y sea cuando sea el momento de decir “*Good bye, Lenín!*”, sea ahora o, incluso, llegando al final de su mandato, la competencia electoral en este próximo tiempo solo tiene dos alternativas: el correísmo o un país inestable.

CRISIS EN ECUADOR: DE PROTESTAS Y PRIVILEGIOS



Foto: Johis Alarcón / Fluxus Fotos

NICOLÁS OLIVA PÉREZ

Hace apenas tres días, el presidente Lenín Moreno anunció un paquete de medidas económicas como consecuencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que incluye la eliminación del subsidio a las gasolinas (incrementos del 120 por ciento en el diésel y 30 por ciento en la gasolina regular) y una serie de reformas laborales y tributarias que afectan a los trabajadores y benefician a grupos empresariales.

Confió en que un estallido social era cosa del pasado y que la prensa podría imponer una matriz de opinión dominante. Se equivocó: el país está sumido en su peor crisis política desde 2005, y se ha visto forzado a decretar el estado de excepción (amparado en el artículo 165 de la Constitución). El Gobierno asegura que es una cuestión

de agitadores y golpistas, y ha reprimido con fuerza las protestas, por las que ya hay más de 350 detenidos. Parece que el relato gubernamental va quedándose sin eco y sus hasta ahora socios de gobierno, Jaime Nebot y Guillermo Lasso, líderes de la derecha guayaquileña, se distancian de él.

Los grandes grupos mediáticos, como parte del poder de trastienda en el Palacio de Carondelet, intentan instalar que las protestas son un reclamo motivado en la pérdida de privilegios. Buena parte de los analistas políticos buscan imponer la idea de que el populismo de Rafael Correa es el que llevó al país a esta situación.

Asegurar que las protestas son solo el resultado de la quita del subsidio es contar la mitad de la historia. Lo que vive Ecuador es una crisis de

En su incapacidad para gestionar el Estado, repartió el poder y asumió un rol secundario. Hoy, Lenín Moreno es la cara visible de un Poder Ejecutivo tricéfalo repartido entre los grupos económicos, los medios de comunicación y la embajada de Estados Unidos. La gente en las calles siente que el poder está, nuevamente, corporativizado.

representación. La sociedad no siente que el Gobierno esté actuando en beneficio de la mayoría: una vez agotado el discurso de odio que viene imponiendo, Moreno no ofrece nada más al país. De hecho, el empleo se deteriora, los servicios públicos escasean y no hay una defensa de la soberanía económica ni política. En su incapacidad para gestionar el Estado, repartió el poder y asumió un rol secundario. Hoy, Lenín Moreno es la cara visible de un Poder Ejecutivo tricéfalo repartido entre los grupos económicos, los medios de comunicación y la embajada de Estados Unidos. La gente en las calles

siente que el poder está, nuevamente, corporativizado. Era esperable que, en este contexto, exigir un esfuerzo extra desatara la ira ciudadana.

Moreno pensó que podía seguir exigiendo más esfuerzo a las clases trabajadoras mientras regalaba recursos a las clases dominantes, como ejemplifica esta última reforma económica. En treinta meses eliminó impuestos, amplió los escudos fiscales para facilitar la evasión y desmontó los aranceles que defendían al país y a la dolarización. En lo laboral, reduce derechos y busca flexibilizar el mercado y amputar los mecanismos de regulación. La estrategia de evocar la pesada herencia del correísmo, que al inicio capitalizó la imagen de Moreno, hoy socava su credibilidad y su capacidad para gobernar. El presidente, con la excusa de la corrupción, llevó al país a las antípodas del plan de gobierno de la Revolución Ciudadana. No es menor que en treinta meses haya dinamitado el 70 por ciento de su capital político.

Es equivocado pensar que son protestas para preservar privilegios. Es la gota que colmó el vaso. La gente sigue saliendo a la calle porque sabe que no existe corresponsabilidad ni justicia en las políticas adoptadas; no hay una justa distribución del esfuerzo y la carga es

desproporcionadamente más pesada sobre unos que sobre otros. La protesta parece que va ganado en calor e intensidad mientras Moreno ha dicho que no dará marcha atrás. Otros sectores se suman al paro y el bloqueo de vías es la tónica

de todo el país. Si el Gobierno no recula, puede presentarse un escenario como el de los años 1997, 2000 o 2005. En cualquier caso, el equilibrio es inestable y lo cierto es que cualquier cosa puede ocurrir en Ecuador.

EL GRAN *CARPETAZO* ECUATORIANO

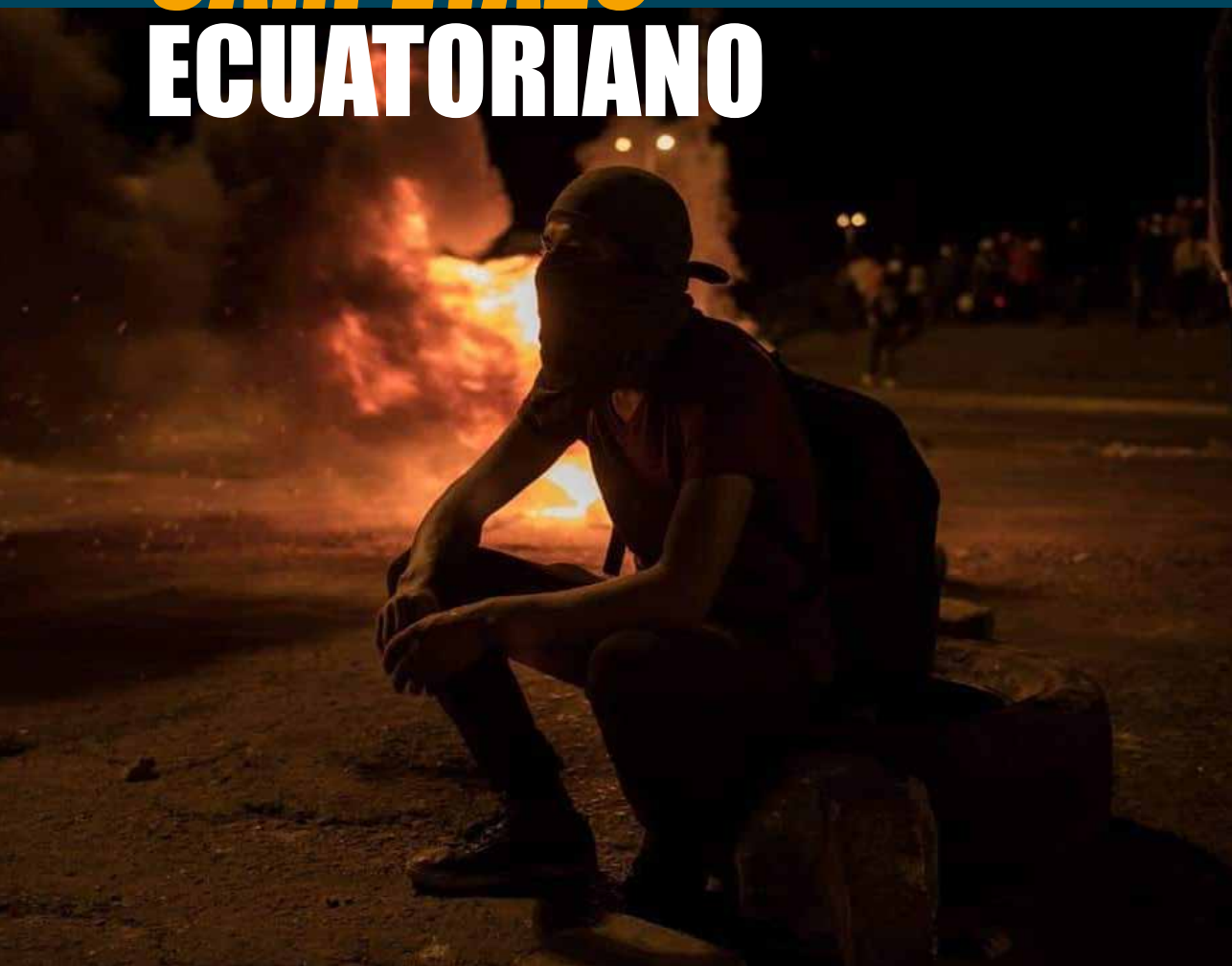


Foto: Josué Araujo / Fluxus Foto

#LENINMORENO
#RAFAELCORREA
#TRAICIÓN
#CONSTITUCIÓN

GUIDO LEONARDO CROXATTO

Lenín Moreno era el vicepresidente de Rafael Correa y debe a este su triunfo electoral. Sin embargo, a poco de asumir la presidencia acordó con toda la oposición a Correa, hizo procesar a su vicepresidente, lo encarceló y declaró vacante la vicepresidencia porque no se presentaba a ejercerla (claro, estaba preso), lo redujo en prisión a condiciones vejatorias y peligrosas para su vida y persiguió penalmente a todos los opositores.

Para eludir cualquier obstáculo constitucional y judicial, este Lenín ecuatoriano convocó una consulta popular en forma inconstitucional, porque omitió el control previo de la Corte Constitucional, llevándola adelante sin este requisito. No obstante el alto rechazo de los votantes, mediante la persecución y desarticulación de la oposición logró obtener la

mayoría, lo que lo habilitó para reemplazar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, órgano democrático y plural que tiene amplias facultades de designación y que, mediante este recurso, quedó bajo su mandato unipersonal. La democracia plural se convirtió de este modo en una democracia “plebiscitaria” (si se la puede seguir llamando “democracia”), pues en realidad el Lenín ecuatoriano asumió la suma del poder público: es el actual “Supremo” sudamericano.

En ejercicio de esas facultades omnímodas destituyó y reemplazó a los jueces de la Corte Constitucional y a los miembros del Consejo de la Judicatura, y mantiene a todos los jueces sometidos a una evaluación cuyo resultado negativo implica su destitución. También está ahora sometiendo a los jueces de la Corte Suprema a

un procedimiento de calificación de sus sentencias que, en caso negativo, implicaría asimismo su destitución. Además, como si todo esto fuese poco, un funcionario “anticorrupción” está habilitado para disponer “glosas”, casi cómico nombre con que se designan órdenes de embargo por cientos de miles de dólares contra todo funcionario o ex funcionario, incluyendo a diputados de la oposición, quienes para levantarlas deberán acudir a la justicia contenciosa, que acaba en la cúpula antes maniobrada y maniatada. Estas “glosas” implican “indicios” de responsabilidad penal, lo que hace que los afectados queden al borde de la prisión.

El escándalo institucional ecuatoriano es el más grave y aberrante de todo el continente, pues en verdad nadie se atrevió a tanto desde que cesaron las dictaduras de “seguridad nacional”. Si bien en Sudamérica sobran los casos de aberración institucional y los disparates de algunos presidentes —como el nuestro o Bolsonaro—, nada de lo que estos hicieron, por grave que fuese, se aproxima a los escándalos institucionales llevados a cabo por el Lenín ecuatoriano.

El escándalo institucional ecuatoriano es el más grave y aberrante de todo el continente, pues en verdad nadie se atrevió a tanto desde que cesaron las dictaduras de “seguridad nacional”. Si bien en Sudamérica sobran los casos de aberración institucional y los disparates de algunos presidentes —como el nuestro o Bolsonaro—, nada de lo que estos hicieron, por grave que fuese, se aproxima a los escándalos institucionales llevados a cabo por el Lenín ecuatoriano. Sin embargo, nadie usó la Carta Democrática de la OEA —por el contrario, el inefable Almagro lo defiende— y tampoco nadie se inmutó porque entregase miserablemente a Assange a las fieras, violando las más elementales normas de derecho internacional y de la más mínima ética humanitaria.

Se esforzó al máximo para tratar de hundir en la cárcel a su predecesor, al que debe su candidatura y su triunfo, pues fue electo por su fuerza política. Por suerte, Correa, viendo cómo pintaba la traición de su “candidato”, optó por quedarse con su familia en Bélgica. El “Supremo” no dejó de hacer papelones internacionales, pues solicitó la captura de su exjefe a Interpol, que se la negó por considerarla una persecución política. Ante esto, no dudó en cortarle los víveres a Correa, privarlo de su pensión,

quitarle la custodia y, más malignamente aún, enviarle agentes ecuatorianos para que lo provoquen e insulten a él y a su familia en Bruselas. Tampoco dudó en quitarle la personería jurídica a la fundación de estudios de Correa en Quito.

Últimamente ha aparecido en Ecuador también un cuaderno, supuestamente escrito por una secretaria de Correa durante un vuelo de treinta minutos entre Quito y Guayaquil, donde esta señora detalla con cifras muy precisas supuestas *coimas* o sobornos, haciendo gala de una memoria y de una capacidad de escritura veloz nunca vista. La historia del cuaderno no es nada original para nosotros ni para nuestro fiscal “rebelde” (por prófugo, no por independiente, claro), pero en este caso tiene algunas particularidades interesantes: no se trata de fotocopias sino del original; fue encontrado detrás de la estufa de la casa de la señora, quien dice haberlo escrito hace tres años, no obstante lo cual, según el código de barras, el cuaderno habría sido comprado el año pasado. Quizá Einstein con la teoría de la relatividad del tiempo podría explicar este fenómeno de increíble desprolijidad. Como es natural, la diligente y memoriosa señora se rectifica y afirma que lo escribió el año pasado.

Por cierto, la maldad de este “Supremo” sudamericano no tiene límites, pero justo

es recordar que el Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, el “Supremo” histórico que inspiró la famosa novela de Augusto Roa Bastos, en el fondo fue un defensor de la soberanía de su país. Este ejemplar plástico contemporáneo, en cambio, hace todo lo contrario, pues —como nuestro Macri— no duda en hundir a su país en el endeudamiento y la pobreza abrazado al FMI.

De todas formas, parece que el pueblo ecuatoriano no está muy conforme, pues pese a haber proscrito por todos los medios al correísmo, este —con los rótulos que pudo encontrar— le ganó las elecciones municipales. Su popularidad se precipitó aún más cuando, para satisfacer las exigencias del FMI, quiso poner en práctica fuertes recortes presupuestarios que —como siempre— recaen sobre los planes para los sectores más pobres, quienes comenzaron a tomar las calles de Quito encabezados por las comunidades de pueblos originarios. Ante esto, el blanquísimo “Supremo” —que no se deja amedrentar por los “indios”—, declaró el equivalente a nuestro “estado de sitio”, militarizó las ciudades, acabó por decretar el “toque de queda” desde las 15 horas en adelante y reprimió a los manifestantes, con el resultado de cinco muertos (reconocidos oficialmente), más heridos y muchos presos.

Por supuesto que el “Supremo” y su equipo, convenientemente cubiertos por los medios monopólicos locales, no dejan de gritar a voz en cuello —o, mejor, de aullar, con perdón de lobos y perros— que todo esto está orquestado por Correa desde algún café de Bruselas, que cuenta con el apoyo de Maduro, que maneja una conspiración universal en la que solo faltan los marcianos verdes y demás patrañas, a las que nos tiene acostumbrados a nosotros nuestro “gorilismo” local, hoy renovado por Durán Barba (quien también parece andar dando vueltas alrededor del nuevo “Supremo”).

De todos modos, dado el avance de las protestas en Quito, no tuvo mejor idea que trasladar la capital de la República a Guayaquil, mientras sigue la represión con claros tintes racistas contra los originarios que se manifiestan pacíficamente al

grito de “Fuera el FMI”. Cabe precisar que Ecuador no es un país cuyo pueblo haya “normalizado” la violencia homicida ni mucho menos. En este sentido, al igual que en la Argentina, la violencia política letal es abiertamente rechazada. Todo esto, y su repliegue a Guayaquil, hace suponer que este “Supremo” de plástico distará mucho de durar lo que el de Roa Bastos.

Todo esto, que se considera normalmente una traición a Correa, suele explicarse con el argumento de que las traiciones son comunes en la política. Ese razonamiento, sin embargo, no resulta demasiado convincente: esto es demasiada traición, excesiva incluso como tal, y, por ende, requeriría otra explicación que, finalmente, empezó a salir lentamente a luz. La cuestión estalló en noviembre de 2018, cuando en tres portales digitales (Milhojas, LaFuente y PlanV) se reveló la existencia

Convenientemente cubiertos por los medios monopólicos locales, no dejan de gritar a voz en cuello —o, mejor, de aullar, con perdón de lobos y perros— que todo esto está orquestado por Correa desde algún café de Bruselas, que cuenta con el apoyo de Maduro, que maneja una conspiración universal en la que solo faltan los marcianos verdes y demás patrañas, a las que nos tiene acostumbrados a nosotros nuestro “gorilismo” local, hoy renovado por Durán Barba

de una *offshore* vinculada a los parientes y la esposa de Moreno. En febrero de este año, dos periodistas de investigación exponen con detalle la existencia de las famosas empresas *offshore*, constituidas en los paraísos fiscales de Panamá y Belice a nombre del hermano del “Supremo” y de otros familiares, con cuentas en el Balboa Bank de Panamá. Todo aparece vinculado a la construcción de una hidroeléctrica, cuya negociación habría dado lugar al pago de una “contribución” de 18 millones de dólares. Si bien de inmediato el hermano del presidente se apresuró a ordenar que borrasen su nombre de esas empresas y que se procediese a disolver una de ellas, las diez impresiones digitales ya no se podían eliminar.

De la cuenta familiar —en la que, a diferencia de la de Macri, no aparece el nombre del presidente, pero sí de sus allegados íntimos— se pagaron muebles antiguos destinados a su hija en Ginebra y el dinero para la compra de un apartamento en Alicante (España). Todo esto dio lugar a que se decidiera la indagación previa número 030-2019-FG contra el presidente, su esposa, su hija, su yerno y su hermano, pero como esta medida quedó en manos de la Fiscal General previamente nombrada *ad hoc* por el asistente más diligente del propio “Supremo”, allí se halla convenientemente “cajoneada”.

Estos negocios habían sido iniciados en tiempos en que el hoy omnímodo mandón era vicepresidente de Correa y, sin duda, estaban en conocimiento de los siempre atentos servicios de “inteligencia” extranjeros, que también con seguridad habrían preparado una más que prolija “carpetita” con copia de toda la información detallada y que, oportunamente —con su discreto y habitual estilo mafioso— se la habrían hecho llegar al “Supremo”. Dicho de manera harto grosera, este habría sabido oportunamente que estaba “agarrado” por la zona más sensible de su anatomía.

No es necesario abundar en consideraciones para concluir que esta explicación es mucho más satisfactoria que la que atribuye su conducta a un mero afán o costumbre traicionera o a características personales de psicólogos improvisados. También explica que la intensidad de la traición haya hecho saltar las agujas del *traicionómetro* hasta superar sus registros máximos. Cabe imaginar que la actual filtración de la información sobre las *offshores* y las cuentas también forman parte del *carpetazo*, advirtiéndole que ya no puede jugar a las escondidas y que debe obedecer *his master's voice*, la voz del amo, en forma incondicional, tal como lo viene haciendo.

**ECUADOR
CONTRA**

LENÍN MORENO



Foto: David Díaz / Fluxus Foto

PABLO OSPINA PERALTA

Una semana antes de que estallaran los primeros brotes de la protesta de los transportistas, el vicepresidente de la República, el empresario Otto Sonnenholzner, ya estaba pidiendo perdón por las medidas que se avecinaban. Esta semana, el país se encuentra envuelto en una ola de protestas que recuerda las de fines de la década de 1990 y comienzos de 2000 y que obligaron a cambiar la sede de gobierno a Guayaquil ante la amenaza de la movilización indígena sobre la capital.

Ecuador le pidió al FMI 4200 millones de dólares y a otros organismos multilaterales otros 6000 millones para sanear sus cuentas fiscales, en un contexto de economía dolarizada en el que los instrumentos de política monetaria son inexistentes. A cambio, se comprometió a impulsar “reformas estructurales”.

Una parte de la brutalidad de las medidas económicas y del insólito raquitismo de las compensaciones (solo dos días después de las protestas lideradas por los transportistas se anunció que se revisaría el costo de los pasajes) provino de la presión fiscalista y de la temeraria austeridad a la que nos tiene acostumbrados la sabiduría del FMI. Pero otra parte se originó en una genuina y sincera ceguera vernácula ante el peso del sacrificio que se les exige a los pobres.

Meses repletos de tertulias televisivas y radiales entre los mismos *opinólogos* neoliberales que despotricaban contra el déficit fiscal y la “obesidad del Estado” como los mayores problemas del Ecuador contemporáneo convencieron al Gobierno, a la prensa y a sus amigos de las cámaras empresariales de que había un consenso para las medidas de ajuste.

Ayer un periodista manifestaba su insólita extrañeza: “No entiendo —decía— esta furia desatada, cuando estábamos de acuerdo en que eran medidas necesarias”. ¿Necesarias para quién?

Entre todas las medidas, la supresión de los subsidios a la gasolina de 85 octanos y al diésel (el gasoil) es la más importante y la que más contribuye al incendio que nos rodea. Según cifras gubernamentales, estos dan cuenta de 1500 millones de dólares de los más de 2000 millones que esperan recuperar con todas las medidas juntas. El diésel, que sirve para el transporte pesado de mercancías y para el transporte público de pasajeros, da cuenta de 1170 millones, mientras que la gasolina, que afecta ante todo a los automóviles privados, de propiedad del 25% de la población, explica los 330 millones restantes. Para ser más claros: el gobierno decidió que el 75% más pobre de la población, que usa el transporte público, debía pagar 78% del costo de la eliminación del subsidio, mientras que el 25% más rico de la población debía pagar el 22% restante.

El mayor problema económico de Ecuador no es el déficit fiscal, como aducen los neoliberales. Hay un problema fiscal, pero no es ni remotamente de la misma magnitud que el problema del déficit de la balanza comercial y de la balanza de pagos. Todo lo importado

es más barato, producto del régimen de dolarización que impide devaluar la moneda nacional. Por eso, miles de ecuatorianos acuden cada día a comprar todo tipo de productos a IpiALES (sur de Colombia) o Piura (norte del Perú). Los tejidos colombianos están desquiciando la producción textil del país; los zapatos brasileños están destrozando la producción de calzado de Tungurahua; lo mismo sucede con las confecciones chinas, el ganado peruano, la leche argentina, los automóviles europeos. Ecuador es un país demasiado caro para producir.

La dolarización, en un contexto de apreciación del dólar y devaluación generalizada en América Latina, convierte también a Ecuador en un destino turístico demasiado caro para recibir a los visitantes que podría. Como Argentina en el año 2000, bajo el régimen de la convertibilidad, Ecuador importa todo y lo que exporta es cada vez más difícil de colocar. El impacto inflacionario de la subida de 130% en el precio del diésel es grande, aunque difícil de precisar: sus efectos se expanden mediante el aumento de los pasajes y del precio del transporte de todas las mercaderías. Por la vía de la inflación, el problema de competitividad recrudece.

No contento con empeorar drásticamente el serio problema de la competitividad

externa, el gobierno de Lenín Moreno anunció otras medidas que solo pueden ser calificadas de suicidas: reduce los aranceles a computadoras, *tablets*, teléfonos y automóviles para que las importaciones de bienes de consumo se hagan más baratas. Y reduce a la mitad el impuesto a la salida de divisas, lo que hace que el déficit de la balanza de pagos empeore. La ceguera no conoce límites. El subsidio a los combustibles podría perfectamente modificarse sustancialmente: que lo pagaran los automóviles privados y subsidiaran con su pago el transporte público, de personas, de alimentos y mercaderías. Un alza mucho mayor de las gasolinas y el mantenimiento o un alza muy moderada del diésel habrían podido financiar de otro modo la eliminación del subsidio haciendo recaer 78% del peso de su costo en el 25% más rico de la población. Pero una medida de esa naturaleza no entra en el radar del Gobierno. Era posible incluso, de esta manera socialmente más justa, contar con un excedente para modernizar ecológicamente el parque automotor del transporte público y avanzar en un sistema razonable de subsidio al transporte masivo desincentivando el automóvil privado.

El resultado de su ceguera de clase les estalla en las manos y han reaccionado

con un estado de excepción desproporcionado y una represión que solo rivaliza con la del correísmo en sus peores momentos. Esta vez, a diferencia de los tiempos de Correa, Moreno cuenta con el apoyo incondicional de los grandes medios de prensa. Moreno pensó quizás, con los mismos lentes deformados, que el Gobierno anterior había debilitado, criminalizado y golpeado lo suficiente a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) como para no tener un liderazgo social en la resistencia. Las protestas se han extendido y alcanzan carreteras en la Costa y zonas empobrecidas de las áreas urbanas. Es una clásica protesta contra el

Una parte de la brutalidad de las medidas económicas y del insólito raquitismo de las compensaciones (...) provino de la presión fiscalista y de la temeraria austeridad a la que nos tiene acostumbrados la sabiduría del FMI. Pero otra parte se originó en una genuina y sincera ceguera vernácula ante el peso del sacrificio que se les exige a los pobres.

ajuste fondomonetarista, que ensancha el foso que separa a los sectores empobrecidos, que son condenados a cargar el mayor peso de la crisis, de los sectores privilegiados, que se resguardan de ella.

Al momento de escribir estas líneas, está convocada una huelga nacional para el 9 de octubre. El gobierno y la prensa acusan al correísmo de estar detrás del escenario con planes de desestabilización y a la Conaie de ser el caballo de Troya del viejo dueño del país. La acusación no es nueva. La hacía el correísmo cada vez que había un levantamiento en su contra: los indígenas y los ecologistas le “hacían el juego a la derecha”. Pero los

movimientos sociales siempre han buscado un camino de autonomía en el que los enemigos de sus enemigos no son necesariamente sus amigos. Siempre existe la posibilidad de una renacimiento correísta, pero ese riesgo es entera responsabilidad de Moreno y no de los movimientos de protesta.

Qué efectos tendrá todo esto en un plazo mayor sobre un Gobierno débil e inepto o quién será capaz de capitalizar el descontento dependerá de la política de los próximos días y los siguientes meses. La suerte no está echada. Lo que sí está claro es que cualquier Gobierno que venga pensará tres veces más antes de tomar medidas similares.

El gobierno decidió que el 75% más pobre de la población, que usa el transporte público, debía pagar 78% del costo de la eliminación del subsidio, mientras que el 25% más rico de la población debía pagar el 22% restante.



LENIN Y LA DICTADURA DEL CAPITAL EN ECUADOR



Foto: Iván Castaneira / Wambra.ec Medio digital comunitario

#NEOLIBERALISMO
#PROCESOSHISTÓRICOS
#MOVILIZACIÓN
#REPRESIÓN
#DERECHOSHUMANOS

KATU ARKONADA

La historia de Ecuador es una historia de rebelión. Entre 1997 y 2007, el país de Eloy Alfaro tuvo ocho presidentes; tres de ellos —Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez— fueron derrocados por levantamientos populares. Solo Rafael Correa logró la estabilidad suficiente, ocupando su cargo durante diez años, entre 2007 y 2017. Correa fue sucedido por Lenín Moreno, quien había sido su primer vicepresidente.

En los tres casos de presidentes derrocados, el detonante fue la aplicación de medidas neoliberales contra el pueblo. Bucaram elevó en un 500 por ciento las tarifas de la luz y dejó de subsidiar las del gas, Mahuad dolarizó la economía y Gutiérrez —que había llegado con un programa de centroizquierda y el apoyo del movimiento indígena— traicionó

su programa y apoyos para acercarse a Estados Unidos y Colombia. Fue finalmente desalojado del poder tras unas movilizaciones de la clase media urbana contra la corrupción y cooptación del poder judicial, en lo que se conoció como la rebelión de los forajidos.

Este es un esbozo de la memoria larga de las rebeliones en Ecuador, pero para entender lo que sucede hoy en el país andino también es importante una memoria corta que examine cómo nace la rebelión que vivimos actualmente, la rebelión de los zánganos, en palabras del presidente de apellido Moreno, cuyo nombre no me atrevo a teclear para no mancillar el recuerdo de un gran revolucionario. Este es un presidente que llegó a ser candidato para suceder a Correa por las encuestas: de haber sido por capacidad o por lealtad al proyecto, ahí estaban Ricardo

Hacia la derecha siempre se puede girar aún más, y la nueva vuelta de tuerca llegaba el primero de octubre con el anuncio por parte de Moreno del Decreto 883, un paquetazo de medidas económicas como condición impuesta a los más de 4 mil millones de dólares prestados por el Fondo Monetario Internacional.

Patiño o Gabriela Rivadeneira para sucederlo. Los sondeos arrojaban que un señor bonachón en silla de ruedas, que venía de ser enviado especial del secretario general de la Naciones Unidas para la Discapacidad y Accesibilidad tras ser vicepresidente del primer gobierno de Rafael Correa, tenía más posibilidades de ganar al candidato de las élites económicas, el banquero Guillermo Lasso. Así fue: Moreno ganó en segunda vuelta con 51 por ciento de los votos, y en menos de dos años y medio de mandato metió en la cárcel a su vicepresidente Jorge Glas (también vicepresidente en el primer gobierno de la revolución ciudadana); aplicó el *lawfare* contra Rafael Correa; destruyó Alianza País a nivel nacional

y la Unasur a nivel internacional; sacó a Ecuador del ALBA y de la OPEP; se incorporó al Grupo de Lima, y avanzó en su integración a la Alianza del Pacífico al mismo tiempo que retiraba el asilo a Julian Assange. Es decir, consumó un viraje de 180 grados a la derecha.

Pero hacia la derecha siempre se puede girar aún más, y la nueva vuelta de tuerca llegaba el primero de octubre con el anuncio por parte de Moreno del Decreto 883, un paquetazo de medidas económicas como condición impuesta a los más de 4 mil millones de dólares prestados por el Fondo Monetario Internacional: eliminación del subsidio a las gasolinas (que suponía un incremento de 120 por ciento al diésel y 30 por ciento a la gasolina regular); reducción de 20 por ciento a la remuneración de los contratos ocasionales; reducción de las vacaciones de los empleados públicos de 30 a 15 días; eliminación del impuesto de salida de divisas, y otra serie de medidas clásicas del *shock* neoliberal al estilo de las impuestas por el capital en la Argentina de Macri, con el objetivo de la flexibilización laboral en primer lugar.

Las protestas de estos días, sin embargo, recuerdan más a la Guerra del Agua de Cochabamba del año 2000, con trabajadores (los transportistas fueron quienes comenzaron las protestas), estudiantes,

indígenas y clases medias en las calles, protestando contra un Gobierno y un presidente que tuvo que huir de Quito a Guayaquil e imponer el estado de excepción, sacando a los militares a las calles a reprimir las protestas. Se trata, además, de protestas con múltiples voces y sin un liderazgo claro; ni siquiera el de la Conaie, cuyos dirigentes han sido rebasados por sus propias bases.

El saldo preliminar de una semana de represión deja siete muertos y más de 600 heridos, además de 13 periodistas encarcelados y nueve medios de comunicación intervenidos. Ya se sabe que la primera víctima de cualquier guerra es la verdad. Y el gobierno no quiere que la comunidad internacional conozca la verdad sobre lo que sucede en Ecuador.

¿Es el fin del gobierno del señor de apellido Moreno? Aún es pronto para decirlo. No parece que las movilizaciones por sí solas vayan a provocar la renuncia del presidente, pero tampoco es probable que Moreno, sin estructura partidaria ni gabinete propios (sus ministros son imposiciones de los diferentes grupos de poder), pueda llegar hasta la próxima elección presidencial de 2021 si las élites

económicas, los medios de comunicación y la embajada de Estados Unidos dejan de sostenerlo una vez cumplida su misión, tal como sucedió con Temer en Brasil.

El saldo preliminar de una semana de represión deja siete muertos y más de 600 heridos, además de 13 periodistas encarcelados y nueve medios de comunicación intervenidos. Ya se sabe que la primera víctima de cualquier guerra es la verdad.

La solución podría ser la muerte cruzada, una fórmula plasmada en la Constitución de 2008 que permite materializar el “Que se vayan todos”. El presidente tiene facultad para disolver la Asamblea Nacional, así como la Asamblea tiene la facultad de destituir al Presidente, pero en ambos casos se debería llamar a elecciones para sustituir a los integrantes de los dos poderes, Ejecutivo y Legislativo. Mientras tanto, el estado de excepción y la violencia contra las mayorías sociales imponen en Ecuador la dictadura del capital.

ECUADOR: LENÍN VS. LENIN



Foto: Karen Toro / Fluxus Foto

ISAAC BIGIO

Lenín moreno parece contradecirse constantemente. El primer gobernante del mundo tocayo del líder de la revolución bolchevique rompió con su pasado de militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y de simpatizante de Lenin.

Quien durante una década fuese un promotor del “socialismo del siglo XXI” junto con Correa, el castrismo y el chavismo acabó gobernando con la derecha. Quien lanzó un duro plan de ajustes ahora decide suspenderlo a fin de evitar ser depuesto por movilizaciones callejeras.

¿Qué ha hecho que el Lenín tropical tanto vaya contra el Lenin ruso, y ahora también contra todo lo que hizo como vicepresidente de Correa? ¿Qué puede pasar ahora?

A los trece días de haber ordenado el alza del precio del combustible y la reducción

de sueldos y vacaciones laborales para muchos trabajadores, el Gobierno ecuatoriano se vio obligado a derogar el Decreto 883 en el que estipulaba esas duras medidas de ajuste económico. El domingo 13, Lenín Moreno hizo el anuncio tras haber sido jaqueado por una ola de protestas que condujeron a que decenas de miles de personas tomaran las calles de Quito, a donde también llegaron multitudes de indígenas, y a que el país hubiese estado casi paralizado. A pesar de haber impuesto el estado de emergencia, el toque de queda y la militarización, a pesar de los cientos de detenidos y los siete muertos, la protesta social parecía imparable y estaba a punto de extenderse a la costa y a Guayaquil, donde el presidente se había refugiado.

Para las izquierdas lo acontecido es interpretado como una victoria y como

una muestra de lo que las masas movilizadas son capaces de hacer. Estas conciben que el retroceso de Moreno se da de la mano con la derrota del fujimorismo peruano o la que se viene de Macri en Argentina. Sin embargo, la resolución de la crisis ecuatoriana no es clara y puede que no sea de corte permanente. Las negociaciones mediadas por el clero católico y las Naciones Unidas condujeron, igualmente, a que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) también suspenda su marcha sobre la capital y diversas acciones y paralizaciones callejeras. Se supone que el Gobierno ahora buscará aplicar otras medidas de ajuste, pero “graduales” y “consensuadas”, lo cual ha de implicar que se busque un tipo de cooptación de dirigentes sociales al plan de Moreno, el cual requiere de una serie de recortes como condición para recibir miles de millones en préstamos del FMI.

Levantamiento en Ecuador

Ecuador se convirtió en el único país americano en mudar la sede de su Gobierno. El presidente Lenín Moreno y su gabinete se trasladaron de Quito a Guayaquil el 8 de octubre, en la víspera de que esta ciudad, la más poblada del país, celebre su aniversario. Guayaquil se apresta a conmemorar el bicentenario de haber sido, el 9 de octubre de 1820,

la primera república independiente en lo que hoy es el Ecuador y antes fuera el virreinato del Perú. Uno podría pensar que tal decisión tiene como objetivo celebrarlo.

Sin embargo, las razones de tal mudanza no tienen nada que ver con conmemorar a la Perla del Pacífico y al mayor puerto de los Andes. Estas se deben exclusivamente a la descomunal crisis que azota a la ciudad de Atahualpa. En una entrevista con la BBC, Moreno reconoce que tuvo que adoptar la medida debido a que los miles de indígenas que llegaron a protestar y pernoctar en las calles de Quito y las multitudes que a diario marchan sobre esa capital “venían por mí”. La muchedumbre llegó a ocupar la Asamblea Nacional (el parlamento unicameral ecuatoriano). Diversos choques con las fuerzas del orden han ocasionado incendios, incluyendo los de vehículos y oficinas policiales.

Las protestas se han dado como reacción a que el primero de octubre Moreno anunció un paquete de medidas que incluyen cancelar los subsidios a los hidrocarburos produciendo el alza del 120% del precio del diésel, algo que encarece el transporte y el precio de todos los productos. Además, propone una reforma de ley que disminuye las vacaciones anuales de los trabajadores estatales de

30 a 15 días y permite que los trabajadores temporales solamente puedan renovar sus contratos ganando un 20% menos de su sueldo anterior.

Moreno ha denunciado al expresidente Rafael Correa y al presidente venezolano Nicolás Maduro de estar detrás de movimientos que buscan sacarlo, en tanto que los presidentes pro-EE. UU. de Colombia, Brasil, Perú, Chile, Argentina y Paraguay han salido en su total defensa. Esto llama la atención, pues hace doce años Moreno llegó al poder como vicepresidente de Correa y durante más de una década fue un incondicional de sus mentores Correa y Chávez. Hoy, en cambio, reniega de todos sus antiguos aliados de izquierda y se sostiene por el apoyo de la antigua oposición de derecha y de todos los gobiernos antisocialistas de la región.

Cuando Moreno era chavista

Cuando en 2017 se celebraba el centenario de la revolución soviética que llevó al poder a Lenin, en Ecuador acaba de tomar posesión de la presidencia otro Lenin, el primer tocayo del líder bolchevique que llegaba a gobernar un país.

El actual mandatario ecuatoriano vino al mundo 14 días después que falleciera Iósif Stalin el 5 de marzo de 1953. Su padre era tan ferviente partidario del

Para las izquierdas lo acontecido es interpretado como una victoria y como una muestra de lo que las masas movilizadas son capaces de hacer. Estas conciben que el retroceso de Moreno se da de la mano con la derrota del fujimorismo peruano o la que se viene de Macri en Argentina. Sin embargo, la resolución de la crisis ecuatoriana no es clara y puede que no sea de corte permanente.

comunismo que bautizó a su hijo con el nombre del fundador de la primera “dictadura del proletariado” exitosa. Por una extraña coincidencia, su apellido es el mismo que el seudónimo de quien para cuando él nacía ya se estaba convirtiendo en el principal dirigente histórico del trotskismo argentino y latinoamericano: Nahuel Moreno.

Cuando joven, Lenin Moreno se integró al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el cual propiciaba una lucha armada al estilo guevarista para “derrocar a la oligarquía y al imperialismo”. Luego sus antiguos camaradas

miristas lograron que el Movimiento Alianza País le colocara como el candidato a la vicepresidencia de Rafael Correa. En 2006, la fórmula Correa-Moreno ganó las presidenciales; en 2009, este mismo binomio fue reelecto en primera vuelta con el 52% de los votos. Esto mostraba la alta popularidad de dicho movimiento en un país donde usualmente los gobernantes solo llegaban a palacio en una segunda vuelta y no por mucho tiempo. En los nueve años que discurren entre agosto de 1996 y abril de 2005, Ecuador tuvo diez Gobiernos con nueve presidentes y una junta compuesta por tres personas, además de otros tres Gobiernos paralelos (dos compuestos por presidentes y uno por otra “junta de salvación nacional” de tres personas).

Correa y Moreno iniciaron lo que ellos llamaron la “revolución ciudadana” y el “socialismo del siglo XXI”, un concepto similar que compartieron con la “revolución bolivariana” de Hugo Chávez y

Nicolás Maduro en Venezuela. La dupla Correa-Moreno hizo que Ecuador se sumase a la Alternativa Bolivariana de Nuestra América (ALBA) junto a Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Honduras y cuatro países de las Antillas y que Quito se convirtiese en la sede de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur), el primer bloque de las doce repúblicas de dicho continente.

En su política exterior, Correa-Moreno trabajaban estrechamente junto a los Castro, Evo Morales, Chávez-Maduro y Daniel Ortega para apoyar a los gobiernos del Partido de los Trabajadores en Brasil, del Frente Amplio del Uruguay y del kirchnerismo argentino. Su cancillería, además, se vinculó estrechamente a Rusia e Irán buscando crear un contrapeso a EE. UU. Con la intención de mostrar que Ecuador era un líder en la lucha por la libertad de prensa y contra el imperialismo, Correa-Moreno permitieron que Julian Assange, el principal

Moreno no es el primer exponente del antiimperialismo latinoamericano que acaba convirtiéndose en un aliado de Washington. Eso ya había pasado antes con el PRI mexicano, el peronismo argentino, el MNR boliviano o el APRA peruano. Sin embargo, en todos esos casos la evolución pasó por largos procesos o interregnos.

revelador de cables secretos norteamericanos del mundo, pudiese asilarse en junio de 2012 en su embajada de Londres. La orientación crítica a Washington iba de la mano con cuestionar lo que ellos denominaron como el modelo neoliberal y privatizador que —según ellos— había conducido a numerosos ajustes económicos y protestas sociales en los años previos a su gobierno.

La dupla Correa-Moreno propuso no perforar en los bosques amazónicos en búsqueda de petróleo y otros recursos naturales a cambio de recibir dineros de los países occidentales como compensación por esa restricción. Su política económica se centró en promover el mercado interno incrementando el poder adquisitivo y varios derechos de los trabajadores, así como extendiendo subsidios sociales y aumentando el gasto social en educación, salud y vivienda.

Tanto Bolivia como Ecuador habían sido los países más inestables de Sudamérica, aquellos donde más a menudo se habían generado las caídas de los presidentes a causa de protestas callejeras y huelgas. Sin embargo, estas políticas de inversión social junto a un discurso proindígena y “socialista” habían logrado dar cierta estabilidad a ambas repúblicas. Correa fue elegido tres veces consecutivas a la presidencia ecuatoriana, la cual ejerció

durante diez años y cuatro meses, desde enero de 2007 a mayo de 2017. Luego, en ese mes, Correa logra que Moreno sea electo presidente como portavoz de su partido Alianza País, y que Jorge Glas, quien fuera su último vicepresidente, pasase a ser el compañero de fórmula de Moreno.

Los “socialistas” latinoamericanos han sido cuestionados por los antiguos partidos de gobierno de sus respectivos países por tener una agenda que afecta la “libre inversión” y las buenas relaciones con Washington, así como por izquierdistas que les cuestionan no estatizar todas las grandes empresas y cancelar la deuda externa. Sin embargo, Moreno se ha convertido en el primero que proviene de esta corriente que abiertamente se pasa al campo de la derecha tradicional.

Lenín versus Lenin

Cuando llega a la presidencia, Moreno se convierte, junto al cubano Miguel Díaz-Canel y al venezolano Nicolás Maduro, en uno de los tres nuevos gobernantes del “socialismo latinoamericano” que sustituyen en su cargo a los famosos predecesores izquierdistas que fueron sus mentores. Mientras que Cuba y Venezuela han continuado esencialmente la misma orientación del castrismo y

el chavismo, en Ecuador Moreno decidió romper radicalmente con su maestro Correa.

Cuando Jorge Glas —quien fue su compañero de fórmula en tanto candidato a vicepresidente— empezaba a cuestionar su acercamiento a Donald Trump y a la oposición de derecha, Moreno decidió suspenderlo de su cargo y permitir que sea sentenciado a seis años de cárcel por haber sido acusado de recibir 13,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht.

Moreno convocó a un referendo en febrero de 2018 buscando aprobar una serie de reformas, incluida la prohibición de volver a postularse para Correa. Tras vencer en la consulta, se lanzó a pedir la extradición del expresidente.

Moreno, quien respaldó incondicionalmente a Maduro en sus primeros cuatro años en la presidencia, acabó recibiendo en su despacho a Juan Guaidó, a quien ha reconocido como el presidente legítimo venezolano. Mientras Trump ha aplicado draconianas sanciones e intentos violentos para derrocar al sucesor de Chávez, a Moreno le brinda total apoyo y hace que el FMI le entregue miles de millones de dólares en préstamos. Estos últimos los condiciona a que Moreno aplique políticas de

ajuste como las que han producido esta nueva revuelta popular.

Moreno ha sacado a su país del ALBA y la Unasur. Hasta la liberal revista *The Economist* se ha sorprendido de que llegase al extremo de echar a la Unasur de su sede central en Quito, algo impensable con la Unión Europea.

Moreno ha abierto las Galápagos a la presencia de aviones militares estadounidenses. También decidió repentinamente quitar la ciudadanía ecuatoriana a Assange y permitir que Scotland Yard lo sacara de su embajada en Londres para llevarlo a la cárcel en la cual se encuentra.

Moreno no es el primer exponente del antiimperialismo latinoamericano que acaba convirtiéndose en un aliado de Washington. Eso ya había pasado antes con el PRI mexicano, el peronismo argentino, el MNR boliviano o el APRA peruano. Sin embargo, en todos esos casos la evolución pasó por largos procesos o interregnos. También se han dado casos como los de los militares Lucio Gutiérrez u Ollanta Humala, quienes, tras inicialmente haber dado golpes de estado como el de Chávez, acabaron llegando a la presidencia para aplicar el modelo del FMI. En todas esas experiencias, el giro se da debido a la dificultad

de estructurar una economía de mercado autónoma ante EE. UU.

La novedad de Moreno reside en que él es el primero en que luego de haber sido un protagonista directo del nuevo modelo nacionalista y sin haber nunca salido del poder decide destruir su propia criatura. Si bien Moreno pensaba que su giro pro-Trump le iba a generar

réditos, es posible que la jugada le salga como un tiro por la culata. No se puede descartar que vuelva a tener la misma suerte de los numerosos gobernantes que antes tuvo Quito, los cuales acabaron cayendo bajo la protesta popular. Por el momento Moreno parece haber logrado desviar el huracán social, pero su Gobierno ha quedado mal parado y muy debilitado.

“LENÍN MORENO NO VA A DEROGAR EL ‘GASOLINAZO’”



Foto: Erick Allende / Migrar Photo

ENTREVISTA A GUILLAUME LONG POR MARÍA IGLESIAS

Los arrestos de ‘correístas’ y las amenazas llevan a la expresidenta de la Asamblea Nacional a refugiarse en la Embajada de México en Quito y al exjefe de la diplomacia ecuatoriana a declarar que “el ciclo de derecha en América Latina será corto si es democrático, pero si es autoritario logrará ser largo”.

Guillaume Long, excanciller ecuatoriano en los gobiernos de Rafael Correa (2007-2017) –equivalente a Ministro de Asuntos Exteriores en España– denuncia que el acuerdo para derogar el Decreto 883 de eliminación de subsidios al combustible que causó trece días de fuertes protestas, “no ha sido derogado pasadas ya veinticuatro horas y no se va a derogar”. En palabras de quien también fuera ministro de Cultura y de Coordinación de Conocimiento “ha habido una

manipulación de mala fe por el gobierno de Lenín Moreno, mientras el mediador de la ONU, Arnaud Peral, rompía el deber sagrado de neutralidad”. Según Long, en vez de derogar el decreto “se va a crear una comisión para aprobar otro, con el fin de ganar tiempo y agotar a los manifestantes para que dejen la calle y pierdan fuerza en la negociación”.

Guillaume Long hizo ayer estas declaraciones en entrevista a Público, durante su participación en la jornada *Una nueva ruta hacia el desarrollo* en Ciudad de México, organizada por el foro de ideas progresista Common Action Forum (CAF). “Hay vídeos del líder del movimiento indígena, Leonidas Iza, exclamando que eso no es lo acordado”, manifestó el excanciller, “así que no sabemos si los indígenas dejarán las protestas, ni qué harán los transportistas

La justicia actual está cooptada por el poder ejecutivo para *descorreizar* al país. Sufrimos el *lawfare*, la persecución judicial, igual que en Brasil pasa con Lula y Rouseff y en Argentina con Kirchner

y estudiantes que clamaban contra el gasolinazo y el empobrecimiento de la vida por el decreto”.

La detención de Paola Pabón, la prefecta de Pichincha —una de las veinticuatro provincias del país y la que de hecho integra a la capital, Quito— era ayer una de las mayores preocupaciones de Guillaume Long. “Forma parte de la persecución judicial salvaje del gobierno de Lenín Moreno contra todo nuestro Movimiento Revolución Ciudadana, lo que la prensa llama el correísmo”, declaró Long, quien informó de que se están produciendo peticiones de refugio como la de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, ante la embajada de México en Quito para ser protegida junto a sus hijos. “Conocemos el *modus operandi*: a Pabón la arrestaron con la excusa de que una camioneta de la prefectura bloqueaba la carretera en las

protestas y a partir de ahí allanan su domicilio, entra en los teléfonos celulares y por cualquier chat en WhatsApp que tengas te involucran en la figura de asociación ilícita”, plantea Long.

Frente a la acusación del presidente Moreno de que es el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro quien alentó las protestas; y a la del embajador de Ecuador en España, Cristóbal Roldán, sobre que el expresidente Rafael Correa estaría detrás cuando “si lo que quiere es ser candidato, lo que tiene que hacer es venir y rendir cuentas a la Justicia”, Guillaume Long contesta que “es insultar la inteligencia de los ecuatorianos, que tienen motivos para ser contrarios al Decreto 883”. Entre ellos, el gasolinazo, los recortes en salarios y derechos de funcionarios (como reducir las vacaciones de treinta a quince días), las medidas macroeconómicas “que alentarían fuga de divisas” y las de “austeridad violenta exigidas por el FMI”. Recortes, según Long, innecesarios, pues “eliminar el subsidio a los combustibles ahorra 1300 millones de dólares año para conseguir el préstamo de 4200 millones del FMI, cuando se acaban de eliminar impuestos al patrimonio, las sucesiones y las rentas altas por valor de 4300 millones”.

A criterio del ex responsable de relaciones exteriores de Ecuador, “la justicia

actual está cooptada por el poder ejecutivo para *descorreizar* al país. Sufrimos el *lawfare*, la persecución judicial, igual que en Brasil pasa con Lula y Rouseff y en Argentina con Kirchner”, asegura Long, que apunta a la existencia de una veintena de exministros correístas acusados y en el exilio, de los que se excluye “porque no tengo proceso judicial en contra, aunque sé que no puedo volver”. Ante la actual coyuntura, los dirigentes del Movimiento Revolución Ciudadana, Long incluido, solicitan “el llamado a elecciones generales por graves momentos de conmoción social, una figura prevista en la Constitución que nada tiene que ver con alentar un golpe de estado, como dice Moreno”. Y para argumentar esta disolución del Gobierno elegido en mayo de 2017, Guillaume Long apunta que “de un lado ha habido fraude a los ciudadanos porque Moreno fue vicepresidente de Correa y se le eligió como opción de continuidad, pero traicionó la fe ciudadana depositada para cambiar toda la política pública, como el mejor caballo de Troya imaginable”. Además, a su criterio, “su popularidad, que ya era solo del 14 por ciento, ha bajado a lo abismal por la violación de derechos humanos al reprimir las manifestaciones: 1150 detenidos sin el debido proceso, cifra oficial de siete muertos que sabemos muchos más, 900 heridos, estado de excepción

y toque queda con protagonismo de las fuerzas armadas sobre las autoridades políticas”.

“El ciclo político de derecha en América latina será corto si es democrático, y largo si es autoritario”, afirmó tajante Long. “Vemos en Argentina que el Gobierno de Macri será seguramente derrocado porque sus políticas no han gustado a la ciudadanía, pero encarcelan a Lula en Brasil y acusan injustamente a Correa en veintinueve procesos para que no pueda volver de Bélgica, porque saben que la ciudadanía les elegiría”.

Guillaume Long participó este lunes en la mesa redonda *El Sur global, líder del Green New Deal* dentro de la jornada *Una nueva ruta hacia el desarrollo* organizada en Ciudad de México por el *think tank* progresista Common Action Forum. “Son importantes foros como este para articular propuestas progresistas frente a situaciones oscuras como la de Ecuador que ha dado un giro de 180 grados a su política exterior, que era la de inserción en un mundo multipolar y diversificación de relaciones exteriores, para volver a la sumisión a EE. UU. y sumarse al eje de derecha dura de Trump y Bolsonaro. Hasta se llegó a abandonar la Unasur cuando éramos la sede, que es como si como Bélgica se saliera de la Unión Europea”.

Long y el también exministro con Correa y ex director general del Banco Central de Ecuador Andrés Arauz ofrecieron, en el marco del CAF de México, una rueda de prensa en la que Arauz fue aún más lejos sobre el Decreto 883 y su no derogación. “Este decreto fue respuesta a la amenaza expresa del FMI de cancelar la entrega de fondos si no se aplicaban medidas austericidas antes

del 2 octubre, pero al FMI le parece insuficiente y ni con el decreto autoriza el desembolso, sino que exige más medidas”. De modo que, prevé Arauz, “pese a las noticias de la prensa nacional e internacional, el decreto ni se ha derogado ni se derogará, porque Moreno se ha plegado a la exigencia del FMI de liberalizar los precios de los combustibles de aquí a 2021”.

Este decreto fue respuesta a la amenaza expresa del FMI de cancelar la entrega de fondos si no se aplicaban medidas austericidas antes del 2 octubre, pero al FMI le parece insuficiente y ni con el decreto autoriza el desembolso, sino que exige más medidas



Foto: Karen Toro / Fluxus Foto

ABUSO DE PODER EN ECUADOR



Foto: David Díaz / Fluxus Foto

#PERSECUCIÓN POLÍTICA #EXILIO #PRIVACIÓN DE LIBERTAD #PRESOS POLÍTICOS

VIRGILIO HERNÁNDEZ

Como ustedes saben, en Ecuador hemos vivido días de profunda conmoción política y social como consecuencia de las medidas dictadas por el FMI y aprobadas por el presidente Lenín Moreno, que cuenta con apenas el 15% de aceptación del pueblo ecuatoriano. Durante los últimos doce días el país escuchó, en cadenas nacionales y en los medios internacionales, cómo las máximas autoridades nos responsabilizaban, sin ninguna prueba; presidente, vicepresidente y sus ministros no ahorraron calificativos: mafiosos, terroristas, golpistas, zánganos, desestabilizadores y una serie más de adjetivos usados por el poder para intentar desprestigiar la movilización. Los propios dirigentes indígenas, sin embargo, tomaban distancia del correísmo.

¿Cuál es la razón de la acusación de desestabilización? En mi caso, haber dicho al siguiente día de la adopción de las medidas que el Gobierno tenía una disyuntiva: “Se cae el paquetazo o se cae el Gobierno”, tema obvio para quienes conocemos la historia del Ecuador. Luego, porque ante la cruenta represión, propusimos la aplicación de la muerte cruzada, que es una figura constitucional contemplada en los artículos 130 y 148 de nuestra Carta Magna, mediante la cual la Asamblea Nacional puede destituir al presidente y viceversa, precisamente cuando hay grave crisis política y conmoción interna. (Cabe mencionar que esta es una figura que adoptamos en la Constituyente con la actual ministra del Interior, María Paula Romo, y que además es el tema de reflexión de mi tesis de Doctorado para la Universidad de Buenos Aires).

Desde la madrugada del lunes 14 se desató la persecución contra el “correísmo.” Ese día fueron allanados los domicilios de la Prefecta de Pichincha y destruidos el mío y los de cinco personas más; entre ellos, el de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, quien ha solicitado refugio en la Embajada de México con otros tres asambleístas. Se detuvo a Paola Pabón; a otro dirigente de Revolución Ciudadana, Christian González, y a una persona vinculada a la pastoral social, y se emitieron órdenes de detención “con fines investigativos” para mí y otras tres personas. Yo no me encontraba en mi domicilio por elementales razones de seguridad. Vale indicar que la prefecta había señalado que ella permanecería despachando en su oficina y la detienen en su casa. En mi caso, he dicho siempre que quiero permanecer en Ecuador y defenderme en el país, que solo pido la aplicación de las garantías de la Constitución. Como ha sucedido en otras ocasiones, cuando se trata de correístas, la detención con fines investigativos derivó en audiencia de formulación de cargos y la medida cautelar, que debía ser la *ultima ratio*, de prisión preventiva se convirtió en la que impusieron a la autoridad electa de la provincia de Pichincha y a Christian González. Mientras, se liberó con prohibición de salida del país y obligación de

presentarse cada ocho días a Pablo Del Hierro, que jamás fue mi colaborador, como dicen en medios desinformativos, sino militante, más bien, de movimientos cristianos de base. El delito por el que se nos acusa es el de rebelión, que podría tener penas que van desde los cinco a los diez años. Las evidencias son publicaciones de Twitter y orientaciones a la militancia para que acompañe a la movilización indígena; todas ellas, hechas en el marco de la ley, circulaban públicamente por redes sociales.

A la prefecta Pabón se le acusa además de colaborar en la movilización con volquetes, sin mostrar una sola foto o pruebas de dicha acusación que la sustente, cuando paradójicamente la alacaldesa de Guayaquil anunció por medios de comunicación y redes sociales que ella sí colocó volquetes cargados con piedras para evitar la entrada de manifestantes indígenas a Guayaquil. Cabe indicar que en la audiencia de formulación de cargos de la prefecta ante el presidente de la Corte Provincial estuvo entre el público la fiscal general del Estado. ¿Podían actuar el fiscal y el juez de acuerdo a la Constitución y la ley con personaje tan importante sentada en la sala, con la presión de los medios de comunicación social? ¿No tenía otras causas que atender, propias de su alto cargo, la fiscal general?

¿Puede existir la mínima objetividad con dicha presión?

Acusación de rebelión sostenida con los “argumentos demoledores” de publicaciones en redes públicas, sin un solo elemento más que sustente una acusación tan grave y la medida cautelar que priva del ejercicio de su cargo a la principal autoridad de la provincia en la que está Quito, la capital del Ecuador, y a otro dirigente del correísmo. En mi caso, ratifico ante ustedes mi voluntad de concurrir al proceso. Simplemente quiero que se me brinden las garantías de la Constitución y las convenciones internacionales de derechos humanos, como la de ser considerado inocente y tratado como tal, y la aplicación de las normas del debido proceso. Nada más. El concurrir al proceso también permitirá que el presidente de la república y otros altos funcionarios demuestren las graves acusaciones o queden en evidencia frente al país. No espero disculpas ni indemnizaciones; simplemente la verdad, para que mis hijos, el último de catorce años, puedan saber que las cosas que se dijeron de su padre solo eran un abuso de poder.

Durante los últimos doce días el país escuchó, en cadenas nacionales y en los medios internacionales, cómo las máximas autoridades nos responsabilizaban, sin ninguna prueba; presidente, vicepresidente y sus ministros no ahorraron calificativos: mafiosos, terroristas, golpistas, zánganos, desestabilizadores y una serie más de adjetivos usados por el poder para intentar desprestigiar la movilización. Los propios dirigentes indígenas, sin embargo, tomaban distancia del correísmo.



0:46 152.2 mil reproducciones

8:49 p. m. · 12 oct. 2019 · Twitter Web App



"aquí no venimos a formar comisiones, el pedido, no del movimiento indígena, sino del pueblo ecuatoriano es la derogatoria del decreto 883" @jaimevargasnae, presidente de la Conaie



8:42 p. m. · 13 oct. 2019 · Twitter for Android

3.5 mil Retweets 7.4 mil Me gusta



Bernie Sanders @SenSanders · 14 oct. 2019

I applaud Ecuador's Indigenous-led grassroots movements who stood up to repression and blocked the IMF's austerity agenda.

Economic elites keep pushing austerity worldwide, making life unbearable for working people. The U.S. should stop supporting this.



Ecuador deal cancels austerity plan, ends indigenous protest
Ecuador President Lenín Moreno will withdraw the IMF-backed package that included a sharp rise in fuel costs. Indigenous leaders will end ...
latimes.com

814

6.4 mil

22.6 mil



Cristina Kirchner @CFKArgentina · 15 oct. 2019

La democracia tiene nombre de mujer y en Ecuador está presa. Libertad a Paola Pabón, prefecta de Pichincha, preza y Gabriela Rivanedeira, azorada. Mujeres jóvenes, comprometidas y votadas por su pueblo.



2.3 mil

8.6 mil

19.2 mil



Ecuador deal cancels austerity plan, ends indigenous protest
Ecuador President Lenín Moreno will withdraw the IMF-backed package that included a sharp rise in fuel costs. Indigenous leaders will end ...
latimes.com

814

6.4 mil

22.6 mil



#SOSEcuador

Inminente desalojo del movimiento indígena de la Casa de la Cultura, cuando ya se estableció esta como una zona de paz y corredor humanitario, alertamos a todos los organismos de #DDHH @CIDH @ONU_es @UNSR_VickyTauli @DEFENSORIAEC

#RomoCriminal

#JarrinCriminal



8:49 p. m. · 12 oct. 2019 · Twitter Web App



Alberto Fernández @alferdez · 15 oct. 2019

Veo con mucha preocupación los graves hechos que se viven en Ecuador y la persecución política y judicial que están sufriendo dos mujeres jóvenes que son referentes de la oposición política.



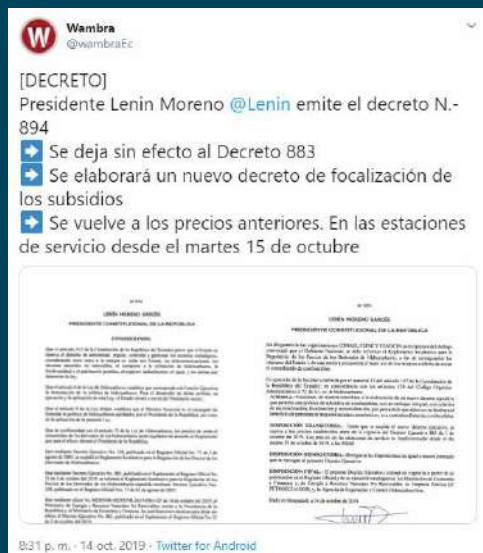
409

3.3 mil

7.1 mil



#ToqueDeQueda



#ParoNacional





CONFLICTO

OCTUBRE ROJO: REFLEXIONES AL CALOR DE LA INSURRECCIÓN

#Neoliberalismo #Paquetazo #Represión #FMI
#Gobierno #Manifestación #Progresismo
#Izquierdas #Feminismos #Represión
#Disciplinamiento #DerechosHumanos
#Economía #Paro #Gastos #Inflación
#Movilización #Elites #BurguesíaEmpresarial
#FMI #Deuda #Economía #ReformaLaboral
#Medios #Manipulación #Información
#Represión #ToqueDeQueda
#MediosDeComunicación #Censura
#Persecución #Periodistas #DetencionesIlegales
#MediosAlternativos #Sindicatos #CONAIE

RECETAS DEL FMI: ARMA DE DESTRUCCIÓN MASIVA, INESTABILIDAD SOCIAL, PÉRDIDA DE SOBERANÍA



Foto: David Díaz / Fluxus Foto

#NEOLIBERALISMO
#PAQUETAZO
#REPRESIÓN
#FMI
#GOBIERNO

CENTRO LATINOAMERICANO DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO
CON APORTES DE ARAM AHARONIAN, ELOY OSVALDO PROAÑO,
EDGAR ISCH, JUAN GUAHÁN Y ÁLVARO VERZI RANGEL.

Si pueden sacarse dos conclusiones de la crisis en Ecuador son que el Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha convertido nuevamente en un arma de destrucción masiva de nuestros pueblos y que las recetas neoliberales aplicadas por Gobiernos de derecha provocan la pérdida de soberanía, inestabilidad social, económica y política de nuestros países.

Ecuador vive una profunda conmoción. De un lado, el sistema de poder; del otro, el pueblo, con dos manifestaciones diferenciadas: una de la corriente identificada con el progresismo y la izquierda y otra con el poderoso movimiento indígena. Los sucesos muestran una profunda inestabilidad y crisis de gobernabilidad que va mucho más allá de la coyuntura y que afecta a toda la región.

El combustible habitual es la insistencia de los Gobiernos de derecha en imponer paquetes de medidas diseñadas por el FMI que suponen reformas estructurales en la economía, acompañadas además de reformas laborales y tributarias.

La protesta ecuatoriana no es solo una reacción contra el aumento en los precios de los combustibles, sino al mal gobierno de Moreno, quien está acusado de haber incurrido en actos de corrupción y que se apoyó en los grandes grupos empresariales, financieros y mediáticos del país; es decir, en su poder fáctico. Un elemento se destacó en el estallido social ecuatoriano: el protagonismo de los movimientos sociales y ciudadanos, dejando en evidencia que no es posible seguir mejorando la situación de los sectores populares sin tocar la riqueza.

Ecuador fue uno de los países de Nuestra América que, bajo la conducción de Rafael Correa, se constituyó —en las primeras décadas de este siglo— en una referencia del progresismo en la región. Pero antes de Correa, durante su gobierno y luego de este, hubo otra fuerza expresada por los indígenas que influyó —y mucho— en esa hermana nación. Ambas fuerzas, en momentos de dominio de fuerzas neoliberales y neocoloniales, ocupan el centro del escenario de esa sociedad. Se trata de una lucha que hace reverdecer las esperanzas en esta región.

Costo humano

Según la Defensoría del Pueblo, hasta la medianoche del 12 de octubre se habían producido 1152 detenciones de ciudadanos. Las cifras mayores se produjeron en Pichincha (499) y Guayas (309). En el 97% de los casos se trató de varones. En cuanto a la separación por edades, el 36% de apresados contaba entre 15 y 19 años de edad, el 26% entre 20 y 24 años y el 5% eran menores de 15 años. De los detenidos, 274 fueron procesados y 878 fueron liberados sin acusación fiscal ni penal (24% sin causa). Se registraron oficialmente siete muertes y 1340 heridos (913 en Pichincha, 122 en Azuay, 40 en Guayas), de los cuales más de 400 fueron atendidos en centros asistenciales.

Cuadro de situación

Estado de excepción, toque de queda, huida a Guayaquil del presidente y su Gobierno, ciudadanos apaleados, gaseados, heridos y muertos, orden de prisión a opositores y censura de prensa fueron algunas de las armas usadas para procurar *estabilizar* al país. Son las mismas que las aplicadas por todos los gobiernos neoliberales de la región para imponer sus *paquetazos*. Tras más de diez días de estallido social, quedó el saldo de varios muertos, medio millar de heridos, un centenar de desaparecidos, centenares de ciudadanos detenidos, seis decenas de periodistas agredidos por la policía (y trece de ellos encarcelados), nueve medios de comunicación intervenidos, una treintena de políticos apresados, y la detención de catorce migrantes venezolanos que no participaban en las marchas.

Cabe recordar que el actual presidente, Lenín Moreno, no fue electo por sus propuestas neoliberales, sino como sucesor de las reformas progresistas e inclusivas de su antecesor y promotor, Rafael Correa. Moreno es responsable de la entrega de la soberanía del país, de la destrucción de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), el único foro de integración política sudamericano, y de llevar a cabo una política facciosa y agresiva contra el Gobierno

constitucional de Venezuela. Es también responsable de favorecer solamente los intereses de los Estados Unidos, de sus empresas transnacionales y del poder fáctico de la corrupta clase capitalista del país. Ante la pregunta de una encuesta de Celag de marzo último, el 46% de los ecuatorianos señalaba que quien gobierna en Ecuador son los grandes grupos económicos; el 27%, Estados Unidos, y el 26%, el añejo político socialcristiano Jaime Nebot, quien aprovechó la crisis para exponer una vez más sus ideas xenóforas.

El gobierno progresista de Correa tuvo relaciones ambiguas con el conjunto del movimiento popular y particularmente con los indígenas y la Conaie. Los indígenas apoyaron (en segunda vuelta) la candidatura de Correa y su partido Alianza País. También se expresaron favorables a la Revolución ciudadana y la reforma constitucional promovida por el presidente, pero en todos estos casos dejaron sentadas sus diferencias con la política presidencial. Sus voces críticas crecían progresivamente. Las principales se centraban en la política correísta respecto del medio ambiente y los recursos naturales o bienes comunes. La Conaie alegó que estos se entregaban a empresas extranjeras, sin respetar los intereses de sus pueblos y los acuerdos

Si pueden sacarse dos conclusiones de la crisis son que el FMI se ha convertido nuevamente en un arma de destrucción masiva de nuestros pueblos y que las recetas neoliberales aplicadas por Gobiernos de derecha provocan la pérdida de soberanía, inestabilidad social, económica y política de nuestros países.

y normas existentes. Otra crítica sostenía que el Gobierno prefería establecer vínculos individuales con miembros de la Conaie y no con la organización como tal. Por último, lo cuestionaban por la “oportunidad perdida”, al no reparar las injusticias históricas cometidas contra los pueblos indígenas y al no haber realizado cambios necesarios en el modelo económico. También se sumaban a las críticas por los hechos de corrupción de los que fuera acusado el Gobierno de Correa.

La represión y el autoritarismo de Estado de los últimos días tienen que parar. No es digno de un Gobierno democráticamente electo traicionar los principios con los que llegó al poder. No es humano ni honesto acusar de

vándalos y criminales a quienes protestan legítimamente por ver sus derechos vulnerados. No es justo, ni para unos ni para otros, dividir al país en bandos: las medidas de ajuste dictadas por organismos como el FMI afectan a sociedades enteras en todos los continentes, señala una carta abierta de más de doscientos parlamentarios, artistas, intelectuales, periodistas y expresidentes. Existe, según el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana, una salida institucional y democrática: el presidente Lenín Moreno Garcés está facultado para disolver la Asamblea Nacional “por grave crisis política y conmoción interna” y

A las críticas que el movimiento indígena le venía haciendo a Correa por el acceso al agua y su uso por parte de los serranos y la entrega del petróleo y la minería en la Amazonia, se le agregó una dura reacción de los sectores urbanos ante el fin del subsidio y la suba en el precio del combustible y su consecuente e inmediato efecto sobre el transporte de pasajeros.

permitir así que “(e)n un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral (pueda convocar) para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales”, añade la carta magna.

Un estallido abonado por el neoliberalismo

El estallido no se produjo de golpe, sino que el malestar social y popular se vino alentando con sucesivas medidas políticas, económicas y laborales; con la condonación de deudas de banqueros y empresarios por un monto superior a los 4200 millones de dólares recibidos del FMI, y los subsidios a las grandes empresas trasnacionales y nacionales por la vía de exoneraciones tributarias. La política de ajuste comenzó a instalarse sobre la realidad social ecuatoriana. A las críticas que el movimiento indígena le venía haciendo a Correa por el acceso al agua y su uso por parte de los serranos y la entrega del petróleo y la minería en la Amazonia, se le agregó una dura reacción de los sectores urbanos ante el fin del subsidio y la suba en el precio del combustible (123%) y su consecuente e inmediato efecto sobre el transporte de pasajeros.

El 3 de octubre Moreno decretó el estado de excepción. Decidió cambiar la

sede gubernamental de Quito a la portuaria Guayaquil, mucho más amigable con sus políticas. Los indígenas se sumaron a la protesta y marcharon sobre Quito. El pasado miércoles 9 se inició un paro nacional por tiempo indeterminado. Ese día, las protestas fueron masivas. Los sectores urbanos encabezados por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), tuvieron fuertes choques con las fuerzas represivas; los indígenas, no obstante practicar su “movilización pacífica activa”, quisieron ocupar la casa de Gobierno; si bien no consiguieron ese objetivo, sí llegaron a controlar el Palacio Legislativo.

Apawki Castro, máxima figura de la Conaie, hizo saber que “nos hemos declarado en resistencia” y que seguirán luchando contra el ajuste, las mafias y el extractivismo. Esta lucha y la actitud de los indígenas ya constituyen un hito más en la lucha de los pueblos conquistados. El futuro de los acontecimientos determinará la influencia inmediata de estos hechos y su prolongación en otras situaciones de Nuestra América.

La derecha también intentó hacer lo suyo en un apoyo a las medidas impuestas por el FMI, que se expresó en Guayaquil y con debilidad en Quito y Cuenca, incluidas las declaraciones xenofóbicas del líder socialcristiano Jaime

Nebot. La lucha de clases se visibiliza en los discursos, en las acciones y en las propuestas; el pueblo ecuatoriano aprende quiénes son sus amigos y quiénes sus enemigos.

La principal ventaja que tiene el Gobierno en este momento es que, más allá de los reclamos puntuales, las organizaciones opositoras no han generado una agenda política. La FUT y la Conaie no parecen dispuestos a negociar y nadie puede predecir lo que va a suceder en los próximos días, con un Gobierno que tiene cada vez más limitada su capacidad de negociación. En cualquier caso, queda en evidencia que la derecha vernácula no estaba preparada para una resistencia popular prolongada.

El adelantamiento de elecciones, reclamado entre otros por Correa, puede ser entendido como una válvula de escape momentánea. La deuda social, externa y económica del Gobierno es enorme, y afrontar sus consecuencias es limitar las posibilidades de cualquier nuevo Gobierno. Esto deja en claro el desgaste de la clase política (que recibe más rechazo que adhesión) y la ausencia de figuras que puedan garantizar un mínimo de gobernabilidad. Nadie puede aventurarse a opinar sobre qué pasaría si renunciase Moreno.

El Gobierno ha ocultado las numerosas violaciones de derechos humanos, los muertos y heridos producto de la represión, así como las actitudes de policías y militares que procuran no reprimir e incluso llegan a acuerdos con grupos de manifestantes en una posible desobediencia a sus jefes. Junto a sus socios del Partido Social Cristiano, el Gobierno creyó su propia propaganda y subestimó el poder organizativo y el nivel de conciencia de los pueblos indígenas al tratar de profundizar el plan neoliberal, a lo que respondieron con un nivel represivo brutal: estado de excepción, toque de queda nocturno y despliegue de fuerzas militares junto a la policía en la represión. Los centros de poder y el Estado ejercen un ninguneo constante de los pueblos y el movimiento indígena, que se amplifica por la acción de los medios de prensa.

Echar la culpa a otros

Otto Sonnenholzner, el vicepresidente, trató de mentir con mayor profundidad:

señaló que la disyuntiva era entre las medidas o acabar con la dolarización. Esta, según los expertos, podría correr riesgo dadas las medidas actuales del Gobierno, que permiten la más fácil y rápida salida de dólares. También quiso explicar que la quita de los subsidios y la suba del 12% en los precios de los combustibles no afectan a la inflación.

Entre sus mayores mentiras, dijo que se trata de una medida ambientalista, cuando no hay pruebas en ningún país del mundo de que ello reduzca a mediano plazo el consumo de combustibles fósiles, causa fundamental del cambio climático. Es ridículo que ese argumento lo usen quienes fomentan la explotación petrolera en el Yasuní, la destrucción que trae la minería a cielo abierto o la posible afectación a las islas Galápagos que pasa a ser “portaviones natural” para las naves estadounidenses. Una de las mentiras del Gobierno, de la que tuvo que retractarse, fue la de fingir que todo era un intento de golpe de Estado

El levantamiento popular fue invisibilizado por los cartelizados medios hegemónicos trasnacionales y por la prensa nacional. Ellos son parte militante del paquetazo, parte del poder fáctico, los que marcan el camino que debe seguir un presidente títere.

y acusar a grupos correístas que, si bien están presentes en algunos lugares, son reducidos y rechazados por las organizaciones en lucha. La consigna de “Ni Correa, ni Moreno; ni Nebot ni Lasso; el pueblo está contra el paquetazo”, identificó también a los apoyos oligárquicos a las medidas, expresadas en dos potenciales candidatos de la derecha más dura.

Como acusar al correísmo no daba resultado, el Gobierno dijo que el presidente venezolano Nicolás Maduro financiaba y coorganizaba manifestaciones, asaltos y violencia. Acusar a Maduro no es un acto ridículo como parece, sino que es repetir la propaganda de Washington sobre el peligro que implica Maduro para la región. Estos argumentos resultan tan inválidos como las mentiras presentadas por el presidente de Colombia, Iván Duque, en plena Asamblea de la ONU. Sirvieron, sin embargo, para activar al cartel proestadounidense conocido como Grupo de Lima y amplificar la acusación que le es útil para justificar la activación del TIAR y la invasión armada contra el pueblo venezolano. En Ecuador, esa mentira solo la reproducen sectores de la derecha, pero ni ellos le dan tanta importancia. A diferencia de Venezuela, donde el secretario general de la OEA Luis Almagro llamó al derrocamiento del presidente constitucional

por cualquier vía, incluida la de la intervención extranjera, en Ecuador este consideró “fundamental que todas las partes respeten el término constitucional por el que fue electo el presidente Lenín Moreno” y reiteró su “rechazo a cualquier forma de interrupción de su Gobierno”.

La bronca acumulada

Ya en marzo, el 60% de los ecuatorianos manifestaba su enojo, miedo, incertidumbre, resignación y sensación de caos, y dejaban al borde del abismo a un Gobierno incapaz y sometido a los dictados de Washington, que hoy ha puesto en emergencia democrática al Ecuador y del que solo falta saber hasta cuándo podrá resistir. Muchos analistas creen que esto significa el retorno del correísmo. “Este gobierno está muerto clínicamente, no tiene salida”, dijo el expresidente desde su exilio en Europa. Pero los líderes indígenas dejaban en claro que su lucha era contra el neoliberalismo y el gobierno de Moreno, y no por el retorno de Correa, con quien mantuvieron serias diferencias.

El levantamiento popular fue invisibilizado por los cartelizados medios hegemónicos trasnacionales y por la prensa nacional (más allá de la censura a la prensa impuesta por Moreno, su

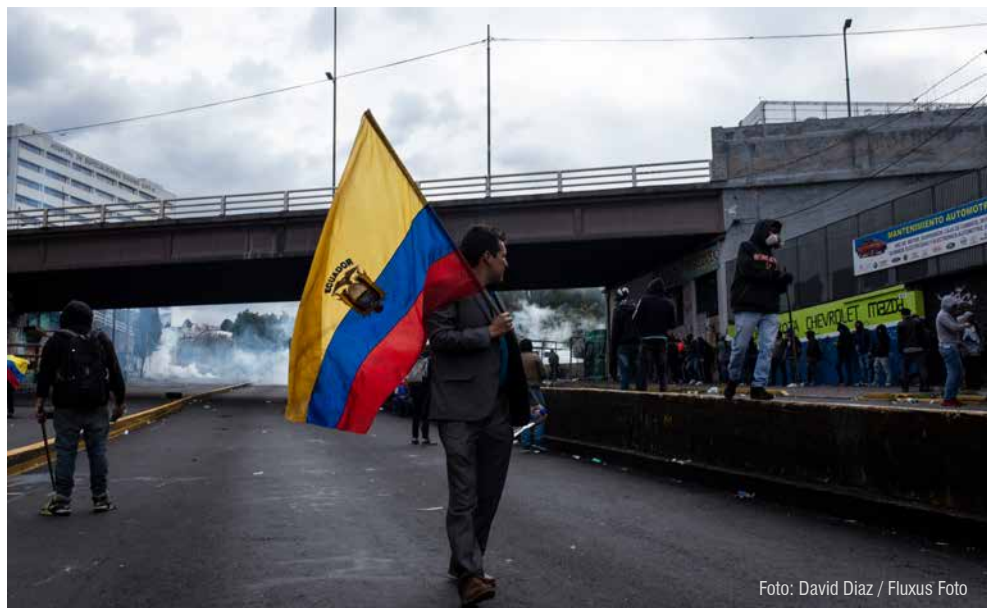


Foto: David Díaz / Fluxus Foto

agenda regional solo prevé el ataque constante al Gobierno de Venezuela). Ellos son parte militante del paquete, parte del poder fáctico, los que marcan el camino que debe seguir un presidente títere.

Decenas de miles de personas marcharon a Quito el miércoles desde la Amazonia, las sierras y la costa en el marco del paro nacional contra el ajuste con recetas del FMI. La multitud estuvo encabezada por el movimiento indígena, pero también se plegaron sindicatos, estudiantes, colectivos de mujeres y organizaciones sociales. Los acompañaron también los ciudadanos indignados de un Ecuador que se encuentra en ebullición.

Según los datos oficiales, los indígenas son en Ecuador algo más de un millón de personas, es decir, el 7% de la población total, de 17,3 millones. Otras formas de medir esa presencia indican que un 15%, de aquellos que hoy son ecuatorianos hablan su lengua originaria, y más del 50% de los habitantes de esas tierras tienen raíces indígenas. Sus principales puntos de asentamiento están en la zona de las sierras y la Amazonia, con eje en la ciudad de Quito. En el área rural ecuatoriana, la pobreza afecta al 44% de la población, mientras que la pobreza extrema alcanza al 17,8%.

En 1980 se promovió una organización de los pueblos indígenas y en 1986 quedó

constituida la Conaie. En su escudo aparecen los catorce agrupamientos que la integraron y los conceptos de “Tierra”, “Cultura” y “Libertad”, que simbolizan sus valores. La definieron como un modo organizativo independiente de empresas, politiqueros y religiosos foráneos a la comunidad; asumieron el compromiso de conservar sus valores y construir una sociedad intercultural, e impulsaron un proyecto político para avanzar hacia un sistema plurinacional, refundando al actual Estado, con un programa de amplias reivindicaciones en defensa de su tierra, su cultura y los derechos colectivos de sus pueblos. Desde allí en adelante, esa organización tuvo un protagonismo decisivo en diversas instancias de la política ecuatoriana. Las largas marchas

desde la sierra y su paso conmovedor por las calles de Quito tuvieron a maltraer a diferentes Gobiernos, como los de Abdalá Bucaram (1996/1997) y el de Jamil Mahuad (1998/2000). En tanto, el Coronel Lucio Gutiérrez terminó gobernando (2003/2005) luego de un golpe militar. Formaron parte del Gobierno de dicho coronel algunos ministros propuestos por la Conaie y el Pachakutic, un movimiento político auspiciado por aquel agrupamiento indígena, con apoyo de la socialdemocracia europea. El acuerdo de Gutiérrez con los EE. UU. y el FMI acabó con esa alianza y también con su gobierno, acosado por las fuerzas populares urbanas y los sectores indígenas.

NO HAY PEOR REACCIONARIO QUE EL PROGRESISTA ARREPENTIDO.



Foto: David Díaz / Fluxus Foto

#MANIFESTACIÓN
#PROGRESISMO
#IZQUIERDAS #FEMINISMOS
#REPRESIÓN #DISCIPLINAMIENTO
#DERECHOSHUMANOS

IVÁN MORA MANZANO

*“La guerra terminaría si los muertos
pudiesen regresar.”*

James Baldwin

Hace unos días, la discusión era de posturas. Ya violentas, pero igual posturas: oponerse al paquetazo criminal versus vagos déjenlos trabajar. Las dos podían ser analizadas y —tal vez— defendidas como tesis. Neoliberales versus socialistas y sus variables, una discusión tan antigua como inútil cuando se trata de conversar con alguien que piensa diferente en un país con poca capacidad real de debate. Yo creo fervientemente en que la humanidad está (entre otras cosas) en comprender al que piensa diferente, en entenderlo, en ser amigo no solo de los iguales. En pedir en los chats de la familia y del colegio que no se hable

de política, para seguir siendo amigo de gente que quieres desde niño y que ahora no entiendes que no pueda ver el mundo con tus ojos, pero que estás seguro: no quieres dejar de querer.

Por supuesto, no es lo mismo una diferencia de criterios político-económicos que una diferencia sobre derechos humanos. Creo que existen aspectos en los que las opiniones dejan de ser respetables: un crimen de odio no puede ser defendido cánidamente con el paraguas de la subjetividad y de Yo tengo mi opinión. El panorama es más complejo que blanco y negro, pero si eres racista, homófobo, regionalista, misógino, clasista y demás, tu opinión ya no tiene ningún valor como tal. Un crimen de Estado no puede ser justificado porque “quiero trabajar y quiero paz”.

Para poder desarrollar esta idea, es necesario volver a citar a James Baldwin,

ese fabuloso escritor/pensador de las minorías que vivía con pasión y peligro su compromiso (que, por cierto, le costó la vida): “We can disagree and still love each other, unless your disagreement is rooted in my oppression and denial of my humanity and right to exist”¹. Es decir: “Podemos estar en desacuerdo y amarnos igualmente, a menos que tu desacuerdo esté enraizado en mi opresión y en la negación de mi humanidad y derecho a existir”.

Mientras en los peores momentos de la lucha social de estos días los medios formales representan el papel vergonzoso de poner telenovelas o *El Chapulín Colorado*, las redes sociales, el periodismo ciudadano y valientes medios alternativos liderados por jóvenes nos muestran casi en tiempo real cómo cada día de marcha los derechos humanos son más quebrantados. Nos asombramos con la capacidad de empeorar, de caer más bajo: el supuesto uso progresivo de la fuerza que desde el día uno fue vulnerado se vuelve inversamente proporcional al desuso progresivo del cerebro por parte del Gobierno. La paradoja es chistosa, pero no hace reír.

El país se derrumba, pero los seres humanos no estamos sufriendo por los

adoquines, el patrimonio y las paredes coloniales; eso, con todo el valor que tiene, vale mucho menos que una vida humana. Hoy, mientras escribo esto, veo el video viral captado por un celular de cómo un francotirador de la policía le dispara en la cara a un manifestante que, envuelto en una bandera del Ecuador, se protegía con un cartón. Esta imagen nos destruye por dentro a todos. Ningún canal de televisión reproduce esta noticia o ninguna similar. Pero sí reproducen en primera plana la agresión número 56 a un periodista, agresión cobarde y miserable, similar a las primeras 55 agresiones a periodistas, todas ellas causadas por la policía, que en cambio fueron ignorados por sus colegas.

Todos los que compartimos la generación que ronda los cuarenta y pico de años en Ecuador nos hacemos hoy la misma pregunta: ¿cómo se convirtió María Paula Romo en ese monstruo de represión, mentira institucionalizada y odio civil? ¿En qué momento la enfermedad del poder transformó a la izquierdista-feminista primero en socialdemócrata, luego en neoliberal, luego en socialcristiana y ahora en represora de los derechos humanos y cómplice de crímenes de lesa humanidad? ¿Y sus

1 La cita corresponde al escritor Robert Jones, Jr. (*N. del Ed.*)

coidearios? ¿Norman? ¿Hasta qué punto siguen tuiteando argumentos neoliberales y empiezan a hacerle frente a los derechos humanos vulnerados?

Después de los primeros días de manifestación ya se evidenciaba en la ciudad con más desigualdad del Ecuador, mi querido pueblo de Guayaquil, que las protestas degeneraban fácilmente hacia el vandalismo basetero propio de la miseria y la desesperación de la pobreza y la marginalidad. Esto por supuesto desató el discurso clasista. Es increíble el síndrome de Estocolmo de la ciudad que no entiende la relación entre esa pobreza y tantos años de municipio socialcristiano, de roldosismo, de robaburros, de iglesias evangélicas, desigualdad social, conservadurismo y exclusión. Nebot empeoró todo: los vándalos no son indígenas ni serranos ni bajaron del páramo, Sr. Bigotón, alcalde racista (porque sí, el bigotón sigue siendo el alcalde). Los vándalos son guayacos de cepa, maderas de guerrero, barcelonistas y emelescistas, con hambre y sin ley.

Al mismo tiempo los indígenas nos dan lecciones que parecían olvidadas: la capacidad de reacción social, de preguntarnos quiénes somos, quiénes podríamos ser; nos revelan la incapacidad de organización urbana; nos comparten otra forma de justicia (basta recordar la

imagen, que será histórica, de los propios policías cargando el féretro de las víctimas); nos recuerdan la tara del individualismo y la incapacidad occidental de trabajar desde lo comunitario. Nos recuerdan que todos llevamos adentro la colonia, y que estamos lejos de superarla.

Vivimos tiempos penosos en Ecuador. Cada crisis política desnuda nuestro subdesarrollo: debemos dejar de usar argumentos para justificar los abusos a los derechos humanos. Los derechos humanos no son simplemente puntos de vista. Cuando la derecha justificó las muertes, apareció el fascismo; cuando lo hizo la

Mientras en los peores momentos de la lucha social de estos días los medios formales representan el papel vergonzoso de poner telenovelas o *El Chapulín Colorado*, las redes sociales, el periodismo ciudadano y valientes medios alternativos liderados por jóvenes nos muestran casi en tiempo real cómo cada día de marcha los derechos humanos son más quebrantados.

Vivimos tiempos penosos en Ecuador. Cada crisis política desnuda nuestro subdesarrollo: debemos dejar de usar argumentos para justificar los abusos a los derechos humanos. Los derechos humanos no son simplemente puntos de vista. Cuando la derecha justificó las muertes, apareció el fascismo; cuando lo hizo la izquierda, también apareció el fascismo. El fascismo no tiene ideología.

izquierda, también apareció el fascismo. El fascismo no tiene ideología.

Mi tío, Juan Hadatty, decía siempre una frase que me marcó: “No hay peor reaccionario que el progresista arrepentido”. Él se refería en su época a militantes que traicionaron sus ideales como Guevara Moreno, el primer populista. Ese ejemplo se puede contar muchas veces en Ecuador: los trotskistas que luego se fueron a hacer opinión desde Miami, los que militaban en el MIR y luego trabajaban para USAID, el mismo

Lenín Moreno que en el fondo lo que quería era ser parte de una élite contra la cual marchaba en su juventud. Y, por supuesto, tal vez la mayor decepción de nuestra generación: María Paula Romo (¿Plomo?), quien le reclamaba a Correa su capacidad de represión y el no seguir los debidos procesos. Ella no solo se convirtió en lo que más repudiaba, ignorando todos los procesos humanitarios, sino que lo superó y nos retrocedió treintatres años en ocho días, haciéndonos recordar que la máxima de que el poder corrompe sigue siempre vigente.



Foto: Iván Castaneira. Wambra.ec Medio Digital Comunitario

LA ESTIGMATIZACIÓN DE LAS PÉRDIDAS

ECONÓMICAS POR LA MOVILIZACIÓN SOCIAL



Foto: Iván Castaneira. Wambra.ec Medio Digital Comunitario

MARCELO VARELA

En los últimos días, hemos visto en todos los canales de televisión del país, tanto públicos como privados, frases del estilo de “Millonarias pérdidas que deja el paro en el Ecuador”, “es mejor trabajar que no hacerlo”, “únete al desarrollo del país y no a su retroceso”, etc. Pero, ¿cuál es la verdadera realidad de las pérdidas que genera el paro nacional? Y ¿cuáles serían las pérdidas por no hacerlo?

En términos económicos, no se puede analizar solamente las pérdidas que genera la movilización nacional, sino que se debe contraponer estas pérdidas a las que sufriría el país a futuro por aplicar las medidas económicas neoliberales. Para hacerlo, vamos a sostener estas pérdidas de lado y lado: 1) por hacer la movilización nacional, y 2) por no hacer la movilización nacional.

Las pérdidas económicas por hacer la movilización nacional representarían, aproximadamente, 18,4 millones de dólares al día. Mientras tanto, las pérdidas económicas por no hacer la movilización nacional representarían, aproximadamente, 87,9 millones de dólares al día. Estas últimas, además, serían *pérdidas infinitas*.

Los supuestos de este comparativo se sustentan en los siguientes elementos:

- La movilización no se realiza en su totalidad (100% de paralización) en las veinticuatro provincias del país, sino en un 40% de ellas. En las que están paralizadas totalmente, incluso, los negocios trabajan a un 40%.
- El comercio y el resto de actividades (incluido el turismo) no se han visto afectados en su totalidad (un 90% de las actividades no han cerrado:

En términos económicos, no se puede analizar solamente las pérdidas que genera la movilización nacional, sino que se debe contraponer estas pérdidas a las que sufriría el país a futuro por aplicar las medidas económicas neoliberales.

tiendas, abarrotes, panaderías o industrias, ni tampoco puertos o aeropuertos, e incluso instituciones del Estado).

- La eliminación de un día de sueldo y de quince días de vacaciones.
- La reducción del 20% de sueldos y salarios para los servidores públicos que tienen contrato, que son el 40% del total de servidores públicos.
- La inflación que se ha generado, considerando el aumento de pasajes (40%) y de productos (11% en promedio, según las autoridades del gobierno, MAGAP).
- Los beneficios que obtendrán las oligarquías económicas, producto de las propias medidas: a) reducción del 50% al impuesto a la salida de divisas (ISD), b) devolución del IVA e ICE a exportadores e importadores, y c) remisiones tributarias,

laborales y subfacturación en las importaciones.

- Se toman, para el ejercicio, datos del año 2018.
- Se asume que el valor de la economía (PIB) en el 2019 será el mismo de 2018.
- Se consideran las pérdidas por día.
- Se consideran aproximaciones.

Al hacer el análisis de las pérdidas económicas por realizar la movilización nacional, se puede deducir lo siguiente:

- En el año 2018, el transporte generó 5364 millones de dólares. Si se asume que un 40% del sector ha sido afectado, estamos hablando de que dejaría de percibir anualmente 2146 millones de dólares. Claro que la movilización no va a durar 365 días; por tanto, dividimos por 365 días y las pérdidas diarias en el sector serían de 5,9 millones de dólares.
- El sector del comercio, en el año 2018, generó 10 453 millones de dólares. Si la paralización afectó a un 10% del sector, entonces las pérdidas anuales serían de 1045 millones de dólares, o 2,9 millones de dólares al día.
- El resto de sectores afectados, entre ellos el turismo, bordea los 35 000 millones de dólares al año. Si la paralización afectó a un 10% en otros

sectores, entonces las pérdidas anuales serían de 3504 millones de dólares. Las pérdidas por día en otros sectores, entonces, serían de 9,6 millones de dólares al día.

Las pérdidas totales, por realizar la movilización nacional serían de 18,4 millones de dólares por día. Mientras, al hacer el análisis de las pérdidas económicas por no realizar la movilización nacional, y que se apliquen las medidas económicas, se deduce lo siguiente:

- La eliminación de un día de sueldo al mes representa doce días al año, mientras que la reducción de las vacaciones equivale a quince días. Si los sueldos y salarios del sector público son de cerca de 9500 millones de dólares anuales, y se restan veintisiete días, la disminución en sueldos y salarios al año representaría 816 millones de dólares. Por tanto, esta medida representaría 27 millones de dólares al día.
- La reducción del sueldo en un 20% a los servidores públicos (considerando que el 40% del total no tiene nombramiento sino contratos). Si, como se señaló, los salarios del sector público se acercan a los 9500 millones de dólares anuales, y el 40% de los servidores públicos no tiene nombramiento sino contratos,

la masa salarial anual representaría 3800 millones de dólares. La reducción del 20% a estos trabajadores representaría 784 millones de dólares al año, o 2,1 millones de dólares al día.

- La inflación promedio del 11% (según las autoridades del Gobierno, aunque los pasajes solamente se incrementan en 40%), generada por la eliminación de subsidios sin que cambie el salario, y considerando que el PIB puede ser de 108 000 millones de dólares, muestra que cerca de 12 000 millones de dólares se verían afectados, porque la inflación reduce los salarios y la economía. Dividido por 365 días, el costo de esta medida representaría 32,6 millones de dólares diarios.

Las pérdidas totales por no realizar la movilización nacional serían entonces de 61,6 millones de dólares por día. Mientras, al hacer el análisis de las pérdidas económicas, y si no se realiza la movilización nacional, lo que el estado dejaría de recaudar por beneficiar a los grupos económicos y financieros, muestra lo siguiente:

- Reducción del 50% del impuesto a la salida de divisas (ISD). Si en el año 2018 la recaudación por ISD fue de más de 1200 millones

de dólares (salieron del país más de 24 400 millones de dólares), el Estado dejará de recaudar más de 600 millones de dólares al año. Como el 90% de la salida de divisas corresponde a los grupos económicos y la banca, estos dejarían de pagar 540 millones de dólares, que el Estado dejaría de recaudar. Esta medida significa que el Estado dejaría de percibir 1,5 millones de dólares al día.

- Devolución del IVA a las exportaciones e importaciones. Al año 2018, representaría cerca de 1700 millones de dólares de recaudación para el Estado. El 90% de la devolución del IVA corresponde a los grandes exportadores e importadores, con un valor correspondiente a 1530 millones de dólares al año. Por tanto, esta medida implicaría que el Estado dejase de percibir 4,2 millones de dólares al día.
- La remisión tributaria correspondió a más de 7500 millones de dólares (más de 4500 por remisión tributaria, cerca de 1000 millones por remisión laboral y más de 2000 millones por subfacturación de importaciones). Dividido por 365 días, el costo de esta medida representaría que el Estado dejaría de percibir 20,5 millones de dólares al día.

Las pérdidas totales, entonces, por no realizar la movilización nacional, y por lo que dejaría de recaudar el Estado, serían de 26,2 millones de dólares por día. Ahora bien, si sumamos las pérdidas por no realizar la movilización nacional, y lo que el estado dejó de recaudar, podemos decir que las pérdidas por aplicar las medidas económicas en caso de que no se realizara la movilización nacional, serían de 87,9 millones de dólares. Si las pérdidas por realizar la movilización nacional son de 18,4 millones de dólares, y no hacerla representaría cerca de 88 millones de dólares de pérdida, queda claro cuán importante y beneficiosa es la movilización.

Este ejercicio muestra que mientras la movilización genera pérdidas económicas por 18,4 millones de dólares diarios y se realiza solamente por algunos días, las pérdidas por no realizar la movilización representarían cerca de 88 millones al día de manera sostenida en el tiempo. Las causas de estas pérdidas infinitas en el tiempo se verían reflejadas en una transferencia de los pobres hacia los ricos. Por lo tanto, esas pérdidas permanentes darían como resultado una mayor pobreza y un aumento de la desigualdad, índices que ya se han incrementado en estos dos últimos años.

Digan ustedes, ¿es preferible hacer una movilización nacional y pedir que se

deroguen las medidas que afectarán profundamente a la mayoría de ecuatorianos, o no hacer una movilización y “dedicarnos a trabajar”? Quienes están en las movilizaciones, ¿no son acaso madres que trabajan en el hogar, campesinos que trabajan la tierra, trabajadores tanto del sector privado como del público, e incluso estudiantes? ¿Entonces, por qué se pide que trabajen o, como algunos mencionan, que “ya dejen de ser vagos”? A sabiendas, además, de que todos estos trabajadores y estudiantes son luchadores que están buscando el bienestar para todos.

Por todo ello, antes de oponerse a la movilización vale la pena pensar si se está entre los pocos beneficiarios, o si se es uno de los muchos afectados.

En palabras de Desmond Tutu: “Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.

Quienes están en las movilizaciones, ¿no son acaso madres que trabajan en el hogar, campesinos que trabajan la tierra, trabajadores tanto del sector privado como del público, e incluso estudiantes? ¿Entonces, por qué se pide que trabajen o, como algunos mencionan, que “ya dejen de ser vagos”? A sabiendas, además, de que todos estos trabajadores y estudiantes son luchadores que están buscando el bienestar para todos.

¿ECUADOR SIN PROYECTO NACIONAL?



Foto: David Diaz / Fluxus Foto

#ELITES
#BURGUESÍAEMPRESARIAL
#FMI
#DEUDA
#ECONOMÍA

ISAÍAS CAMPAÑA C.

El país sin norte, sin rumbo

Las élites económicas y políticas, en los últimos años, no llegaron a presentar un proyecto nacional, una agenda nacional con una visión y misión del país que se pretendería alcanzar a largo plazo, que incluyera objetivos y estrategias políticas, programas y proyectos viables. Se han limitado a sus propias reivindicaciones sectoriales y gremiales. A través de los diversos órganos del Estado, las élites consiguieron mantener los subsidios a los combustibles, exoneraciones de impuestos a nuevas inversiones y hasta cinco remisiones tributarias (esto es, condonación de intereses, multas y recargos por las deudas que tenían con el Servicio de Rentas Internas). Y últimamente presionan por la eliminación del impuesto a la salida de capitales, por la flexibilización laboral y por concesiones de las empresas más grandes y rentables

del Estado, y tratan de convertir al país en un paraíso fiscal para los grupos económicos y las empresas multinacionales.

A pesar de las dieciocho cartas de intención que suscribió Ecuador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos efectos económicos y sociales fueron negativos, y de la reciente y desastrosa experiencia del plan de rescate financiero por 57 000 millones de dólares para Argentina, los representantes de los gremios empresariales, que ocupan las Carteras más importantes en el “Gobierno de todos”, promovieron que Ecuador suscriba una nueva carta de intención a fin de obtener un préstamo de 4 200 millones de dólares. En el marco de la Carta de intención el Gobierno nacional se planteaba como objetivos reforzar el sistema de dolarización, incrementar los niveles de vida de los ciudadanos más

vulnerables, fortalecer la competitividad y la creación de empleo y asegurar que el Gobierno rinda cuentas a la población que sirve. El Gobierno nacional se comprometía con el organismo multilateral, en un plazo corto, a reducir la deuda por debajo de la meta referencial del 40% del PIB y a bajar el déficit primario no petrolero del sector público no financiero en un 5% del PIB en los próximos tres años. Para alcanzar esta meta se estableció la contracción de la masa salarial del sector público, la optimización del subsidio a los combustibles, la reforma del sistema tributario y una reducción

del gasto público de capital y de bienes y servicios.

El Ejecutivo se comprometía, en 2019, a continuar con la optimización del subsidio a los combustibles mediante la normalización de los precios al diésel de uso industrial; a mejorar los términos y las condiciones en la contratación pública de bienes y servicios; a actualizar las tarifas por servicio al ciudadano de entidades públicas para que reflejen con mayor exactitud los costos, y a monetizar activos que permanecerán bajo propiedad pública pero cuyos derechos de concesión serán otorgados a socios privados.

En el marco de la Carta de intención, el “Gobierno de todos” redujo drásticamente las inversiones públicas con el objeto de bajar el déficit fiscal que ha sido un factor determinante en la contracción de la economía. La formación bruta de capital descendió de 10 293 millones de dólares en 2016 a 6456 millones en 2018, se estima que para fines de 2019 no llegará a los 4000 millones.

Acelerado endeudamiento público

El “Gobierno de todos” ha continuado con la dinámica de contratación de deuda pública cuyo servicio de amortización e intereses crece exponencialmente. En marzo de 2017, la deuda pública era de 43 106 millones de dólares, lo que equivale al 41,3% del PIB. Al mes de agosto de 2019, con la nueva metodología para su cálculo, esta asciende a 55 729 millones de dólares, lo que representa cerca del 50% del PIB, por encima del techo establecido en la Constitución de la República. En el *Boletín de deuda pública con metodología actualizada* del Ministerio de Economía y Finanzas, con fecha 7 de junio de 2019, se informa:

Es importante señalar que el Señor Presidente de la República mencionó días atrás que las obligaciones que el Estado ecuatoriano mantiene con diversos actores alcanzan los USD 75 000 millones. Esta cifra contempla, además de la deuda pública, fondos de terceros, obligaciones por convenios de cooperación, provisiones a la seguridad, entre otros pasivos del Sector Público No Financiero. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019).

Únicamente al servicio de la deuda pública externa, que incluye el pago de amortización e intereses, a fines de 2016 se destinaron 3038 millones de dólares, que representan el 3% del PIB. En 2019 (hasta agosto) se desembolsaron 5249 millones, equivalentes al 4,8% del PIB. Se prevé que hasta diciembre podría alcanzarse el 7% del PIB. Al incluirse el servicio de la deuda interna que tiene el Ejecutivo con las instituciones públicas (IESS, BEDE, Petroamazonas, bonos emitidos en el mercado nacional, incentivos por jubilación), más de 14 mil millones de dólares, se estima que el servicio de la deuda pública supera el 10% del PIB, lo cual es insostenible a mediano plazo por su acelerado ritmo de crecimiento: el 24 de septiembre de 2019, el Ejecutivo realizó una nueva emisión de

bonos colocados en los mercados financieros internacionales por un monto de 2000 millones de dólares, de los cuales 600 millones fueron a tasas de interés del 7,8% y otros 1400 millones a tasas del 9,5%. Se sigue contratando deuda que no se destina a inversiones en obras de infraestructura que demanden mano de obra calificada y no calificada, sino para pagar deuda. No salimos del perverso círculo vicioso.

La incesante salida de capitales

Entre 2014 y 2019 (hasta julio), el déficit de la balanza comercial no petrolera, básicamente del sector privado, ascendió a 25 344 millones de dólares. En cambio, la balanza comercial petrolera, fundamentalmente del sector público, registra un superávit comercial de 23 539 millones; es decir, las empresas públicas petroleras, con sus ingresos, compensan el déficit comercial del sector privado.

A pesar de los sucesivos Gobiernos que se han comprometido a fortalecer la dolarización, en el periodo comprendido entre 2010 y 2018 la transferencia neta de recursos, que es el resultado del total de ingresos netos de capitales menos los pagos netos de utilidades e intereses, fueron de 9 851 millones de dólares. Únicamente en el año 2013 se registró

un saldo positivo de 1450 millones, lo que significa una incesante salida de capitales del país (CEPAL, 2019).

El flujo de las remesas de los migrantes ecuatorianos que trabajan en el exterior ha sido un elemento importante para el sostenimiento del sistema de la dolarización. En el primer semestre de 2019, los migrantes enviaron por concepto de remesas 1546 millones, monto que, comparado con el primer semestre de 2018, registró una contracción de 0,2%. Las principales ciudades beneficiarias de las remesas fueron Guayaquil (338 millones), Quito (254 millones) y Cuenca (245 millones) (BCE, 2019). Sin embargo, con la llegada masiva y sin ningún control de migrantes de diversos países, los cuales realizan actividades de servicios, comercio, hotelería, restauración y de sectores informales, las remesas enviadas por trabajadores desde Ecuador al exterior se incrementan significativamente. El flujo de remesas enviadas al resto del mundo en el primer semestre de 2019 ascendió a 317 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 85,6% con respecto al primer semestre de 2018. Los principales países beneficiarios de las remesas desde Ecuador son Colombia (221 millones), Perú (28 millones) y China (9,7 millones), entre otros (ibídem).

Pobre desempeño de la economía

En el Anexo 1 de la Carta de intención, titulado *Memorando de políticas económicas y financieras*, se dice lo siguiente: “Tenemos el firme compromiso (...) de dejar a las siguientes generaciones una economía correctamente administrada, más equitativa, eficiente y competitiva”. En el ranking del PIB per cápita de los doce países de Suramérica, en 2019, en el primer lugar se ubica Uruguay con un PIB per cápita de 17 870 dólares, seguido de Chile (16 280 dólares), Brasil (9160) y Argentina (9050). Ecuador se ubica en la octava posición con un PIB per cápita de 6280, por debajo de Perú (7360) y Colombia (7050), que en años anteriores estaban en peores condiciones económicas que el país. Desde el año 2015 hasta fines de 2019, la economía nacional se ha visto prácticamente estancada. Si a este estancamiento de la producción se lo relaciona en valores constantes con la población, el PIB per cápita, que es un indicador referencial del nivel de vida de la población, registra tasas negativas de crecimiento en 2015 (-1,4%), 2016 (-2,7%), 2018 (-0,1%) y seguramente de nuevo en 2019 (BCE, 2019).

En el marco de la Carta de intención, el “Gobierno de todos” redujo drásticamente las inversiones públicas con el objeto de bajar el déficit fiscal que ha sido

un factor determinante en la contracción de la economía. La formación bruta de capital descendió de 10 293 millones de dólares en 2016 a 6456 millones en 2018, y se estima que para fines de 2019 no llegará a los 4000 millones (ibídem). En el último año, el FMI estima una tasa negativa de crecimiento de la economía de 0,5%; esto es, que el país entrará en una nueva recesión.

Decenas de proyectos como centrales hidroeléctricas, escuelas, hospitales, centros de salud, viviendas, complejos deportivos o parques se encuentran paralizados por falta de recursos. Sin embargo, y de manera paradójica, desde Carondelet se siguen ofertando proyectos como el “tren playero” o la organización del Mundial de fútbol del año 2030 en conjunto con otros países.

Crecen dramáticamente la informalidad y la pobreza

Si la economía no crece, si se mantiene estancada, la consecuencia lógica es el deterioro de las condiciones sociales en el país. El subempleo y otras formas de empleo de segmentos de la población cuyos ingresos son inferiores al salario mínimo crecen sustancialmente en los últimos años. El empleado adecuado, segmento de la población que percibe ingresos iguales o mayores al salario

Los niveles de pobreza y extrema pobreza registran un sistemático crecimiento como consecuencia de las políticas económicas liberales y la masiva migración de venezolanos. A junio de 2019, se considera a una persona pobre por ingresos si percibe un ingreso familiar per cápita menor a 85 dólares mensuales. A nivel nacional, la pobreza aumentó de 22,9% a fines de 2016 a 25,5% a junio de 2019. En este último año, la pobreza urbana fue de 16,8% y la rural de 43,8%.

mínimo, cae de 3,4 millones de personas en junio de 2016 a 3,1 millones al mismo mes de 2019. Por el contrario, en el mismo periodo, el subempleo aumenta de 1,3 millones a 1,7 millones; es decir, 300 mil personas migraron del empleo adecuado al subempleo (INEC, 2019).

Los niveles de pobreza y extrema pobreza registran un sistemático crecimiento como consecuencia de las políticas económicas liberales y la masiva migración de venezolanos. A junio de

2019, se considera a una persona pobre por ingresos si percibe un ingreso familiar per cápita menor a 85 dólares mensuales. A nivel nacional, la pobreza aumentó de 22,9% a fines de 2016 a 25,5% a junio de 2019. En este último año, la pobreza urbana fue de 16,8% y la rural de 43,8%. Las ciudades de Quito y Machala registraron los mayores porcentajes de pobreza (11,9%), seguidas de Guayaquil (8,4%) y Ambato (6,8%) (INEC, 2019). Por otra parte, se considera pobreza extrema cuando una persona percibe un ingreso familiar per cápita menor a 48 dólares mensuales. Este indicador sube en el periodo 2016 - 2019 (a junio) de 8,7 a 9,5%. En el último año, a nivel urbano la pobreza extrema fue de 5,6% y la rural 17,9% (ibídem).

En Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad, se evidencia el crecimiento del desempleo, subempleo, pobreza y extrema pobreza. En sus calles, avenidas y plazas hay hombres y mujeres con niños en brazos pidiendo una ayuda económica, discapacitados esperando que algún transeúnte les dé alguna moneda, personas con cocinetas y tanques de gas que preparan y venden alimentos en condiciones precarias, vendedores ambulantes con canastos vendiendo papas, choclos y habas. En las principales

avenidas, a ellos se suman limpiadores de parabrisas y malabaristas, generando una imagen nada atractiva para el turismo que paradójicamente se pretende fomentar.

Las medidas económicas sin consenso

El 1 de octubre de 2019, como parte del acuerdo con el FMI, el Ejecutivo, sin intentar alcanzar un consenso mínimo con los sectores sociales, sorpresivamente resolvió eliminar los subsidios a la gasolina extra y diésel, medida que generaría ingresos al fisco por 1400 millones de dólares. El precio referencial se establecía a nivel internacional, en función del comportamiento del marcador de crudo West Texas Intermediate (WTI), con lo cual la venta al público por galón quedaba en 2,30 y 2,27 dólares respectivamente. La gasolina extra y el diésel son utilizados por diversos sectores de la economía (agrícola, pesca, industria, transporte de carga y de pasajeros, entre otros), por lo que los incrementos de costos implicados, los empresarios y transportistas iban a transferirlos a los consumidores. Esto a su vez habría generado alzas generalizadas de los precios de los bienes y servicios.

Adicionalmente, el “Gobierno de todos” envió un conjunto de reformas

tributarias y laborales con carácter económico urgente a la Asamblea Nacional. Entre ellas se contaban la eliminación del anticipo en impuesto a la renta, la reducción del impuesto a la salida de capitales (2,5%), la reducción en las vacaciones de los empleados públicos (de 30 a 15 días), la reducción del 20% en remuneración para los contratos que se renueven y el aporte, por parte de los trabajadores de las empresas públicas, de un día de sueldo, entre otras. Por un lado, se establecían incentivos a los sectores empresariales y, por otro, el peso de las medidas recaía fundamentalmente en empleados, trabajadores y en general en los sectores de menores ingresos de la población.

Al siguiente día de las medidas decretadas por el Ejecutivo empezaron las movilizaciones de las organizaciones indígenas lideradas por la Conaie, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Federación de Afiliados al Seguro Social Campesino y los gremios de los transportistas. La Federación de Transportistas del Ecuador resolvió la paralización de sus actividades a nivel urbano y rural, tanto el transporte de carga como en el de pasajeros. Los gremios de los taxistas bloquearon calles y avenidas en las principales ciudades para evitar la circulación de vehículos particulares.

En las capitales provinciales, las organizaciones indígenas y sociales realizaron concentraciones y marchas, y se tomaron varias instituciones públicas (tales como gobernaciones) exigiendo la derogación del Decreto 883. El bloqueo de vías no permitía la movilización de pasajeros y el abastecimiento de alimentos a las ciudades, así como la circulación de productos destinados a las exportaciones, como flores y brócoli, entre otros.

A medida que pasaban los días, las movilizaciones y protestas de las organizaciones sociales se fueron intensificando y radicalizando. En la región Oriental, grupos de manifestantes tomaron campos petroleros, con lo cual se suspendió temporalmente la producción. El movimiento indígena se hallaba dividido entre quienes exigían la derogación de las medidas económicas y aquellos sectores que además querían la renuncia del presidente Moreno, vinculados al movimiento de la Revolución Ciudadana. Las organizaciones indígenas realizaron marchas a la capital de la república exigiendo el cese de las medidas económicas y focalizaron sus protestas en la Asamblea Nacional y en la casa de Gobierno. Los manifestantes llegaron a ingresar a la planta baja del palacio legislativo, pero fueron desalojados por las fuerzas de seguridad. Igualmente, intentaron llegar al

Palacio de Carondelet, pero, por mutuo acuerdo con funcionarios del Ejecutivo, la marcha indígena se realizó por las calles aledañas. No obstante, grupos radicales pretendían reeditar las caídas de los gobiernos de Mahuad, Bucaram y Gutiérrez, y en sus intentos causaron grandes daños en centro histórico del Patrimonio Cultural de la Humanidad.

El clímax de las protestas llegó el sábado 12 de octubre. Grupos de manifestantes bloquearon las vías en sectores estratégicos de la capital de la república, que se convirtió en el epicentro de las protestas. En las redes sociales se informaba que grupos de saqueadores trataban de ingresar a conjuntos habitacionales y lanzaban piedras y palos a las ambulancias y vehículos de los bomberos.

En los canales de televisión se transmitía en vivo la quema de vehículos en Teleamazonas y la destrucción de una parte de su infraestructura. Otros grupos ingresaron violentamente a la Contraloría General del Estado y provocaron el incendio del edificio, donde seguramente se hallaban documentos de las auditorías realizadas a los proyectos emblemáticos del régimen anterior. Los hechos vandálicos causaron temor en la población, por lo cual se cerraron tiendas, almacenes y pequeños y grandes negocios. En los conjuntos habitacionales

se empezaron a organizar para impedir el ingreso de grupos vandálicos. La fuerza pública fue desbordada por los grupos más violentos de los manifestantes, y más de doscientos cincuenta policías y soldados fueron retenidos. El Ejecutivo tuvo que declarar el estado de excepción y el toque de queda en la ciudad de Quito.

Sin embargo, miles de manifestantes seguían protestando. Ante la gravedad de los hechos, el presidente Moreno se vio obligado a llamar a un diálogo a los dirigentes indígenas, quienes mantenían sus exigencias de derogar el decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles. Las movilizaciones y protestas del movimiento indígena y de los grupos sociales fueron las más grandes e inéditas registradas en Ecuador desde el retorno a la democracia. El Ejecutivo accedió a las demandas del movimiento indígena, con lo cual se volvió a una calma relativa en el país, a la espera del contenido del nuevo decreto. Las movilizaciones lideradas por la Conaie evidenciaron la división interna en su organización entre quienes luchan por reivindicaciones económicas y sociales y aquellos sectores radicales que pretendían la renuncia del primer mandatario.

Luego de once días de protestas a nivel nacional, además de las pérdidas

económicas (más de 2000 millones de dólares), vidas humanas (ocho muertos), detenidos (más de 1200 personas), ha emergido nuevamente el regionalismo en ciertos sectores sociales del puerto principal, ya sea para conseguir su autonomía o para alcanzar un estado federal en el Ecuador.

¿Qué hacer?

UNO

En condiciones de estancamiento o recesión de la economía el Estado debe fomentar las actividades productivas para estimular la demanda agregada. Esto puede lograrse a través de la dotación de una infraestructura adecuada, del financiamiento con bajas tasas de interés o reduciendo impuestos (aranceles, impuestos a la renta, impuesto al valor agregado) que son altos comparados con países como Colombia, Perú, Chile o Paraguay. El llamado *establishment* —economistas ortodoxos, analistas políticos, voceros de las cámaras empresariales, medios de comunicación— no se han pronunciado respecto de la deuda que tienen grandes empresas nacionales y filiales de empresas extranjeras con el SRI. Con corte al 1 de octubre de 2019, las deudas en firme con la institución tributaria llegan a 1462 millones de dólares, y las deudas impugnadas a 1110 millones, lo que en

conjunto representa 2572 millones (SRI, 2019).

En vez de cargar el peso de las reformas en los sectores de ingresos medios y bajos de la población, las reformas a las leyes tributarias deberían estar orientadas a agilizar las impugnaciones que interponen en las instancias judiciales los grandes contribuyentes, lo que impide a la autoridad competente cobrar los impuestos oportunamente. Igualmente, las reformas deberían tener como objetivos evitar que se aplique reiteradamente la remisión tributaria y reducir sustancialmente la elusión y evasión tributaria que son altos en el país.

DOS

En contracorriente a los intereses nacionales, se pretende concesionar la Refinería de Esmeraldas en condiciones desventajosas, cuya repotenciación tuvo un costo de 2300 millones de dólares. A fines de 2018, la venta interna de derivados y las exportaciones de derivados de petróleo por parte de Petroecuador sumaron 4820 millones; la mayor parte de estos recursos fueron generados por la Refinería de Esmeraldas, por lo que al concesionarla se estaría fomentado la salida de capitales.

Entre 2014 y 2019 (a julio), se realizaron importaciones de combustibles y

lubricantes por un valor de 23 939 millones. Con estos recursos ya se podrían haber construido dos refinerías. De lo descrito se infiere que es necesario construir una nueva refinería y se lo puede hacer a través de la modalidad de *joint venture*, para evitar la salida de capitales que son necesarios para fortalecer el sistema de dolarización.

TRES

Diario Expreso, en su edición del 25 de septiembre de 2019, informaba que, en los siete primeros meses de 2019, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) tuvo ingresos por 509 millones de dólares y gastos por 452,8 millones. Tuvo, por lo tanto, un excedente de 56,3 millones. Asimismo, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) registró ganancias por 220,6 millones y la Corporación Nacional Eléctrica

del Ecuador (Celec) alcanzó 15 millones en utilidades (Montenegro Fernández, 2019). A su vez, la más grande empresa pública del Ecuador, Petroecuador, reportó de enero a julio de 2019 un excedente de 1413 millones de dólares; Empresa del Agua, 26,5 millones; Flopec, 23,7 millones; y Ferrocarriles, 2,3 millones. En conjunto, únicamente las siete empresas públicas de las veintiuna que administra el Estado generaron excedentes por 1757,4 millones, recursos que ingresaron al presupuesto general del Estado.

Al 31 de diciembre de 2018, Petroecuador registró superávit del ejercicio por 2942 millones de dólares, según el Informe de Gestión-Rendición de Cuentas (Petroecuador, 2019). De esta información se deduce que, con toda la ineficiencia que se les atribuye a las empresas públicas, estas generan ganancias y podrían generar mayores utilidades si fuesen

Ante la gravedad de los hechos, el presidente Moreno se vio obligado a llamar a un diálogo a los dirigentes indígenas, quienes mantenían sus exigencias de derogar el decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles. Las movilizaciones y protestas del movimiento indígena y de los grupos sociales fueron las más grandes e inéditas registradas en Ecuador desde el retorno a la democracia.

eficientemente administradas. Bajo esta consideración, se debería llamar a un concurso público para que únicamente su administración esté a cargo de una empresa internacional privada, similar a la modalidad que se utilizó con el Banco del Pacífico.

CUATRO

El problema del déficit fiscal ha sido crónico en el país, y se pretende reducirlo con las mismas medidas que ejecutaron los sucesivos Gobiernos que se alternaron en el poder en los últimos decenios. El déficit fiscal también es consecuencia de los déficits que arrastran los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). No ha habido innovación o creatividad de parte del equipo económico del “Gobierno de todos” ni en los GAD para optimizar el gasto público y generar ingresos.

El Código orgánico Ambiental, en el numeral 4 de su artículo 9, que aborda los principios ambientales, establece:

El que contamina paga. Quien realice o promueva una actividad que contamine o que lo haga en el futuro, deberá incorporar a sus costos de producción todas las medidas necesarias para prevenirla, evitarla o reducirla. Asimismo, quien contamine estará obligado a la reparación integral y

la indemnización a los perjudicados, adoptando medidas de compensación a las poblaciones afectadas y al pago de las sanciones que correspondan. (Ministerio del Ambiente, 2018)

La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado incluyó el impuesto a la contaminación vehicular que entró en vigor por el Ministerio de la Ley en 2011. El impuesto llegó a recaudar más de 700 millones de dólares, entre 2012 y 2018. Sin embargo, el Gobierno nacional, por presión de pequeños grupos de propietarios de vehículos, solicitó a la Asamblea Nacional la derogación del impuesto.

El Código Orgánico Ambiental, artículo 27, numeral 10, que describe las facultades de los Gobiernos autónomos descentralizados, metropolitanos y municipales, establece como una de sus obligaciones en el área urbana: “Controlar el cumplimiento de los parámetros ambientales y la aplicación de normas técnicas de los componentes agua, suelo, aire y ruido” (Ministerio del Ambiente, 2018).

El transporte vehicular es el que más contamina en las ciudades y afecta a la salud de las personas y causa incluso miles de muertes al año. No obstante, las autoridades de los GAD no aplican las sanciones y multas correspondientes.

Lo mismo ocurre con las personas que botan basura y materiales de construcción en calles, avenidas, plazas, parques o playas, o con las empresas operadoras de televisión por cable, internet y teléfonos, cuyas conexiones se realizan en forma precaria en las urbes, generan cada vez más contaminación visual. La Ley de Transporte Terrestre determina distintos niveles de velocidad para circular en vías, avenidas, autopistas, en la ciudad o en carretera; sin embargo, no se aplican las multas correspondientes por falta de voluntad política.

Por tanto, el Ejecutivo y los Gobiernos autónomos descentralizados tienen las disposiciones legales vigentes no solo para generar ingresos, sino también para mejorar la cultura de la población en temas ambientales, tránsito, salud, patrimonio y organización adecuada de las ciudades, pero no lo aplican a cabalidad, con las excepciones puntuales, porque priorizan los intereses personales, políticos, de grupos de presión, frente a los intereses nacionales o locales.

Referencias

Banco Central del Ecuador. (2019). *Evolución de las remesas, 1er semestre 2019*. Recuperado de <https://contenido.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000985>

Banco Central del Ecuador (BCE) (2019). *Información Estadística Mensual N.º 2010-agosto de 2019*. Recuperado de <https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/IEMensual/m2010/IEM2010.zip>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2019). *Estudio Económico de América Latina y el Caribe*. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44674/221/S1900414_es.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019). *Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. Indicadores de pobreza y desigualdad. Junio, 2019*. Recuperado de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2019/Junio-2019/201906_PobrezayDesigualdad.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019). *Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. Indicadores laborales. Junio, 2019*. Recuperado de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2019/Junio/201906_Mercado_Laboral_final.pdf

Ministerio de Economía y Finanzas. (2019). *Boletín de deuda pública con*

metodología actualizada. Recuperado de <https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/06/Bolet%C3%ADn-de-Deuda-Boletín-de-Prensa.pdf>

Ministerio de Economía y Finanzas. (2019). *Carta de intención*.

Recuperado de <https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/LOI-MEFP-Espa%C3%B1ol.pdf>

Ministerio del Ambiente. (2018). *Código orgánico del ambiente*.

Recuperado de http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/01/CODIGO_ORGANICO_AMBIENTE.pdf

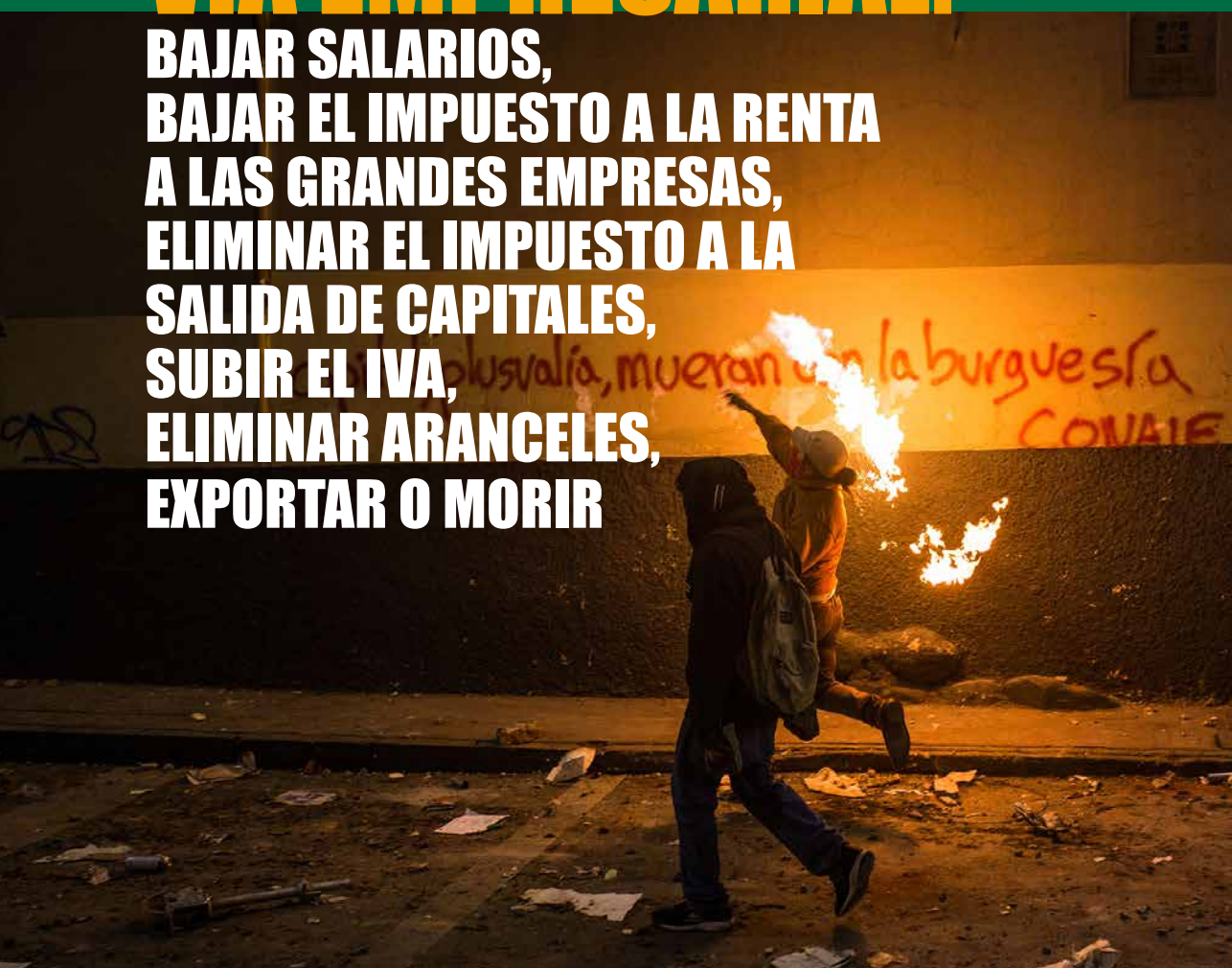
Montenegro Fernández, J. (25 de septiembre de 2019). El Gobierno quiso concesionar a las empresas más rentables. *Diario Expreso*. Recuperado de <https://www.pressreader.com/ecuador/diario-expresso/20190925/281616717092156>

Petroecuador. (2019). *Informe de Gestión – Rendición de Cuentas 2018*. Recuperado de <https://www.eppetroecuador.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/02/INFORME-RENDICION-DE-CUENTAS-2018-SIDOC.pdf>

Servicio de Rentas Internas. (2019). *Ranking de deudas*. Recuperado de <https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/inicio/NAT>.

VÍA EMPRESARIAL:

**BAJAR SALARIOS,
BAJAR EL IMPUESTO A LA RENTA
A LAS GRANDES EMPRESAS,
ELIMINAR EL IMPUESTO A LA
SALIDA DE CAPITAL,
SUBIR EL IVA,
ELIMINAR ARANCELES,
EXPORTAR O MORIR**



#ECONOMÍA
#NEOLIBERALISMO
#FMI
#PAQUETAZO
#REFORMALABORAL

BAYARDO TOBAR

“**L**a contradicción es la ley fundamental de la naturaleza y la sociedad y, por consiguiente, también la ley fundamental del pensamiento. No hay cosa que no contenga contradicción; sin contradicción no existiría el mundo”, resumía Mao Tse-Tung. Y proseguía: “en matemáticas, + y -, diferencial e integral; en mecánica, acción y reacción; en física, electricidad positiva y negativa; en química, combinación y disociación de los átomos; en la guerra, la ofensiva y la defensiva” (Tse-Tung, 2001). En economía, capital y trabajo, ganancia y salarios o valor de uso y valor de cambio son todas parejas de fenómenos contradictorios. Cuando el movimiento ascendente de una economía dependiente de las exportaciones de productos primarios se interrumpe por la caída de precios de su principal producto de

exportación (el petróleo, por ejemplo), baja el ritmo de actividad económica y se afecta, en última instancia, la tasa de ganancia del capital. Así, se agudiza la contradicción entre el capital y el trabajo, entre los empresarios por mantener (y si es posible incrementar) sus ganancias reduciendo los salarios y los trabajadores por defender el salario y la estabilidad en el trabajo.

Cuando el Ecuador tenía moneda propia y se presentaba un shock externo, la reducción de los salarios y el incremento de las ganancias operaban a través de la devaluación / inflación. En una economía dolarizada ello no es posible, porque la moneda es ajena; por tanto, los esfuerzos se centran en la llamada “modernización laboral”, que debe ser entendida como lo que es: la expresión de una ofensiva del capital en contra del trabajo para

mantener sus ganancias en una situación crítica.

La ofensiva del capital contra el trabajo no cesa y se recurre cada vez más a una propaganda engañosa. Se afirma, en primer lugar, que con la reforma laboral se dará empleo a cinco millones de ecuatorianos, especialmente jóvenes y mujeres, que se encuentran desempleados, subempleados o con empleo informal o inadecuado (como quiera llamarse). No se dice ni cómo, ni en qué tiempo.

En realidad, el problema del desempleo y sobre todo del subempleo es un problema estructural que ni siquiera en los períodos de auge de la economía se ha podido bajar del 50% de la población económicamente activa (PEA) a nivel nacional, y del 60% de la PEA en el sector rural. No es un problema del “subdesarrollo” sino del sistema.

En efecto, el aspecto más progresista del sistema capitalista es el extraordinario desarrollo tecnológico que comporta, y su origen se encuentra en la competencia entre capitalistas y en la competencia con los trabajadores para producir más, en menor tiempo y con menos trabajadores. Las máquinas sustituyen el trabajo humano hasta llegar a la robotización de la producción que, al tiempo de superar las contradicciones de origen, genera

otras más graves: la concentración de la producción y la conversión del desempleo en un fenómeno global; pues, como resume con claridad Julio Boltvinik,

(1) la automatización y la desterritorialización de la producción conllevarán la devaluación de la fuerza de trabajo, el desempleo masivo combinado con la precarización del trabajo que va quedando y, con ellos, la globalización o generalización de la pobreza. El capitalismo solo puede ser salvado con medidas radicales como el ingreso ciudadano universal (ICU) que llevarían a su transformación gradual hacia una sociedad poscapitalista. Si no es radicalmente transformado desde dentro, el capitalismo destruirá el planeta con sus patadas de ahogado. (Boltvinik, 2019)

En segundo lugar, se afirma, sin evidencia empírica alguna, que los salarios están por encima de la productividad del trabajo. Sin embargo, a partir de las tablas oferta-utilización del 2017, procesadas en la Unidad de Coyuntura del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central, se comprueba que:

La producción por empleado en el Ecuador en 2017 alcanza los 1879 dólares al mes; sin embargo, el salario

medio mensual de los asalariados bordea los 735 dólares. De esa manera, existe una brecha del 61% entre la producción del empleado y el nivel de salario percibido. Por otro lado, al analizar detalladamente las 68 ramas de actividad se observa que 54 de ellas (un 79%) tienen una brecha por encima del promedio de la economía total. Es decir que en casi 8 de cada 10 ramas de actividad, la brecha entre el salario percibido y el monto producido por los asalariados supera el 61%. Así, por ejemplo, en el cultivo de banano, café y cacao la producción mensual promedio por empleado declarado asciende a 701 dólares y su nivel de salario tan solo alcanza los 120 dólares (brecha del 73%). En el caso de la construcción se observa una producción de 2858 dólares y un salario de 471 (brecha del 84%). Eso demuestra la enorme capacidad de los empleados para producir ganancias para el empresariado y, al mismo tiempo, el bajo nivel de salarios entregados a este sector. (Báez, 2019)

Por otro lado, si de productividad y competitividad se trata, habría que preguntar al Comité Empresarial Ecuatoriano: ¿es el cambio tecnológico y organizacional un recurso importante en la búsqueda de mejoras competitivas por parte de

nuestras industrias? ¿Tiene Ecuador una industria que podría calificarse como innovadora? ¿Cuanto invierte el sector industrial corporativo y el agronegocio en I+D, ingeniería y diseño o capacitación? ¿Por qué son escasos —casi inexistentes— los vínculos de los empresarios con el sistema de Ciencia y Técnica en procura de conocimientos para mejorar sus productos y procesos?

Quando el Ecuador tenía moneda propia y se presentaba un shock externo, la reducción de los salarios y el incremento de las ganancias operaban a través de la devaluación / inflación. En una economía dolarizada ello no es posible, porque la moneda es ajena; por tanto, los esfuerzos se centran en la llamada “modernización laboral”, que debe ser entendida como lo que es: la expresión de una ofensiva del capital en contra del trabajo para mantener sus ganancias en una situación crítica.

En tercer lugar, el economista Augusto de la Torre afirma que “Si lo que se quiere es abaratar los costos al productor nacional para mejorar la competitividad externa, lo que habría que reducir es el impuesto sobre la renta corporativa, y no el IVA” (De la Torre, 2019). Sin embargo, no existe evidencia de que reducir los impuestos o la remisión de multas e intereses a las empresas o corporaciones incremente las inversiones. Todo lo contrario. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, la condonación de intereses y multas a las deudas tributarias y las “generosas exoneraciones tributarias” (Spurrier, 2018) contempladas en la Ley de Fomento Productivo (agosto de 2018), no lograron ni siquiera que todos los deudores tributarios paguen sus deudas (se les perdonaron 987 millones de dólares y siguen debiendo 727 millones más), ni menos aún que la inversión del sector privado dé muestras de que está en capacidad de sustituir al estado como motor de la economía.

Para comprobarlo, basta leer la opinión de analistas económicos mediáticos. Xavier Basantes sostuvo sobre la Ley de Fomento Productivo que esta “incluyó incentivos a las nuevas inversiones así como importantes exoneraciones de impuestos (...) creyendo que 114 empresas iban a invertir 9400 millones de dólares en 48 meses” (Basantes, 2019).

Para Washington Herrera,

(d)e los sueños de atraer inversiones por 9500 millones de dólares solo se ha visto que una gran marca quiere invertir para vender más gaseosas en el Ecuador, pero esta es una empresa acusada de depredadora del agua, a la que Bélgica, Holanda y Luxemburgo comenzaron a cobrarle por el uso y desperdicio de su agua. Tampoco la inversión de 750 millones anunciada por una cadena de supermercados tiene efectos multiplicadores importantes, pues se trata de abrir nuevos almacenes de venta de productos nacionales y extranjeros, que de todas maneras tiene que hacerse para mantener su presencia en el mercado. (Herrera, 2018)

Walter Spurrier opinó que “(e)stá muy bien que las generosas exoneraciones tributarias hayan estimulado la modernización de las cadenas de distribución de productos de consumo. Pero hoy tiene particular importancia atraer capital vinculado a las exportaciones” (Spurrier, 2018). Y, para Mauricio Pozo Crespo,

solo en el caso de estas dos variables (ritmo de crecimiento de la economía y monto estimado de inversión extranjera 2019-2022) se puede evidenciar que hay muy poco dinamismo

del sector privado, lo que conspira para el crecimiento económico y el empleo. Mantener cuatro años de estancamiento sin posibilidad de recuperar un solo puesto de trabajo es un serio problema social y político. (Pozo Crespo, 2019)

Para rematar, Gonzalo Ortiz, refiriéndose a los empresarios, afirma que

Como la experiencia lo dicta, ni aunque les atendieran esos pedidos (quitar el Impuesto a la Salida de Divisas, rebajar el Impuesto a la Renta y una extrema flexibilización laboral) estarían satisfechos. Difícilmente van a invertir en el Ecuador, porque, salvo contadas excepciones, no creen en el Ecuador. (Ortiz, 2019)

En el caso de Estados Unidos, el crecimiento de la economía y la reducción de la tasa de desempleo durante el gobierno de Trump no se deben a la reducción de impuestos a las corporaciones y a los más ricos, sino al gasto deficitario que los republicanos (durante el gobierno de Obama) afirmaban que destruiría EE. UU., y que cubren imprimiendo dólares. Es la opinión de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, en el artículo publicado en *El País* de España con el sarcástico título de “La teoría económica de Donald J. Keynes” (Krugman, 2019).

En cuarto lugar, el economista De la Torre (*et al*) también afirma que

Un estímulo al consumo tendría un efecto expansivo muy modesto sobre la producción nacional porque gran parte del consumo se dirigiría hacia productos importados, en lugar de nacionales, generando poca reactivación económica, a costa de un déficit externo. (De la Torre, 2019)

Ello ocurriría si se incrementa el poder de compra de los sectores de ingresos medios y altos, no los salarios e ingresos de los trabajadores formales e informales, que demandan casi exclusivamente bienes-salarios o de consumo básico; ignora, además, las medidas que se pueden adoptar para limitar importaciones de bienes de consumo suntuario. Subestimar el rol de la demanda efectiva y el mercado interno para reactivar la economía va acompañado de propuestas delirantes como la que sigue. Dice el economista Vicente Albornoz, en quinto lugar, que

si queremos crecer sostenidamente, la única opción que tenemos es hacerlo hacia fuera (...) La oportunidad está en reconocer que más allá de nuestras fronteras hay mercados que equivalen a 999 veces el nuestro y a los que podemos venderles todo lo imaginable. (Albornoz Guarderas, 2019)

Valga la aclaración de que no producimos “todo lo imaginable”, pues, como lo reconoce el propio autor de tan original idea: “Claro que primero hay que producir esas cosas y ahí es donde todavía estamos fallando”. Sí, no leyó mal, eso mismo propone, la única opción: exportar cosas en las que estamos fallando (ibídem). Además de que esta novedosa propuesta tiene ascendencia colonial (producir y exportar productos primarios e importar valor agregado), hay que recordar que no existe

una regla universalmente válida entre peso de las exportaciones en el PIB y crecimiento económico. Que tampoco es válida la idea de que la liberalización comercial y la reducción de la injerencia gubernamental son una fórmula mágica del desarrollo y que solo mediante una estrategia endógena y pragmática de desarrollo del mercado interno y de inserción eficiente y digna en la economía internacional, (Ecuador) encontrará su propio camino hacia la prosperidad. (Boltvinik, 2018)

Referencias

Albornoz Guarderas, V. (19 de mayo de 2019). “Dos buenas noticias”. En *El Comercio*. Recuperado de <https://www.elcomercio.com/opinion/>

[buenas-noticias-columna-vicente-albornoz.html](https://www.elcomercio.com/opinion/buenas-noticias-columna-vicente-albornoz.html)

Báez, J. (9 de mayo de 2019). “Nuevas formas de contratación: el empleo como chantaje y ganancia empresarial”, en *Unidad de análisis y estudios de coyuntura*. Recuperado de <https://coyunturaip.wordpress.com/2019/05/09/nuevas-formas-de-contratacion-el-empleo-como-chantaje-y-ganancia-empresarial/>

Basantes, X. (11 de mayo de 2019). “Mesa de competitividad, ¿borra y da de nuevo?”. En *El Comercio*. Recuperado de <https://www.elcomercio.com/blogs/solo-para-empresas-y-emprendedores/xavier-basantes-mesa-competitividad-opinion.html>

Boltvinik, J. (16 de noviembre de 2018). “Economía moral. Ampliar el mercado interno: fundamental para el desarrollo económico”. En *La Jornada*. Recuperado de <https://www.jornada.com.mx/2018/11/16/opinion/026o1eco>

Boltvinik, J. (19 de abril de 2019). “Economía moral. Keynesianismo bienestarista y neoliberalismo”. En *La Jornada*. Recuperado de <https://www.jornada.com.mx/2019/04/12/opinion/024o1eco>.

De la Torre, A. (14 de abril de 2019). “Reducir el IVA es acentuar el estancamiento económico”. En *El Comercio*. Recuperado de <https://www.elcomercio.com/tendencias/reducir-iva-acentuar-estancamiento-economico.html>

Herrera, W. (25 de septiembre 2018). “Minería y exportaciones”. En *El Comercio*. Recuperado de <https://www.elcomercio.com/opinion/columna-washingtonherrera-mineria-exportaciones-opinion.html>

Krugman, P. (17 de mayo de 2019). “La teoría económica de Donald J. Keynes”. En *El País*. Recuperado de https://elpais.com/economia/2019/05/17/actualidad/1558104364_953596.html

Ortiz, G. (21 de febrero de 2019). “Trabajando por Correa”. En *El Comercio*. Recuperado de <https://www.elcomercio.com/opinion/trabajando-por-correa.html>

www.elcomercio.com/opinion/trabajando-correa-gonzalo-ortiz-opinion.html

Pozo Crespo, M. (4 de mayo de 2019). “Mejorar acuerdo con el FMI”. En *El Comercio*. Recuperado de <https://www.elcomercio.com/opinion/columnista-opinion-mejorar-acuerdo-fmi.html>

Spurrier, W. (25 de septiembre de 2018). “Falta el plan”. En *El Comercio*. Recuperado de <https://www.elcomercio.com/opinion/columna-walterspurrer-falta-plan-opinion.html>

Tse-Tung, M. (2001). “Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo”, en *Obras Escogidas*, tomo V. Recuperado de <https://www.marxists.org/espanol/mao/escritos/CHC57s.html>.

LA PERVERSIDAD DEL DISCURSO MEDIÁTICO



Foto: Josué Araujo / Fluxus Foto

LUCRECIA MALDONADO

El video, grabado por un transeúnte, es elocuente: la reportera de los medios públicos le hace a un ciudadano una pregunta que es más una afirmación; lo único que el hombre tendría que hacer, si fuera obediente, es darle la razón. Pero como es un ser deliberante, no lo hace. Es más, pregunta el nombre a la reportera que, ofendida al no ser valorada en la majestad del cargo que ostenta, explica displicentemente: “¡Yo le estoy en-tre-vis-tan-do!”, como quien dice “Yo le estoy sal-van-do-la-vi-da”. Y cuando el hombre le explica el porqué de su actitud, ella se enoja, cierra el micrófono y apaga la cámara con cara de reina vilipendiada. Tal vez, en su obcecación, no advierte que ella también está siendo grabada y que en estos tiempos de redes sociales en pocos minutos el video podría dar la vuelta al mundo... o al Ecuador, lo cual ya sería suficiente.

Se supone que los comunicadores sociales (ese es el pomposo nombre que se dan, cuando antes se llamaban ‘periodistas’) deben ayudar a tender puentes entre la sociedad y los acontecimientos. Y hay una serie de cualidades que ellos mismos proclaman sin que les tiemble la voz o se les acelere un parpadeo: objetividad, imparcialidad, veracidad... Sin embargo, la realidad demuestra otra cosa.

Lo primero que llama la atención poderosamente es esa aura de infalibilidad pontificia de la que algunos se ufanan. ¿Por qué? ¿Por qué la opinión de un periodista tiene que ser más valiosa que la de un ciudadano? Incluso si fuera un analista político de verdad (porque, bien mirado, aparte del codeo con políticos que de una u otra forma los agasajan, cuántos han estudiado politología,

sociología o aunque sea leído un par de libros sobre el tema para decir que tienen autoridad moral para pontificar) sus opiniones no se convertirían en realidades por el mero hecho de brotar de sus bocas. Diferenciar un hecho de una opinión es una destreza intelectual básica de cuya carencia se ufanan la mayoría de ‘politólogos’ a la fuerza que más bien son opinólogos a secas contratados por las emisoras de radio y canales de televisión a lo largo y ancho del país. Hay que oírles: el tono admonitorio, el hablar golpeado y enfático. Hay que verles: las cejas convergiendo en la base de la nariz porque están “¡in-dig-na-dos!!!” Pero no hay que creerles. ¿Acaso son más que usted o que yo? ¿Por qué?

Cuando el hombre le explica el porqué de su actitud, ella se enoja, cierra el micrófono y apaga la cámara con cara de reina vilipendiada. Tal vez, en su obcecación, no advierte que ella también está siendo grabada y que en estos tiempos de redes sociales en pocos minutos el video podría dar la vuelta al mundo.

Desde la más tierna infancia se nos ha inculcado la idea de que los medios de comunicación nos servían para estar *informados*, que una persona culta y educada debía leer los periódicos para saber lo que pasaba en el mundo y enterarse de lo que opinaban mentes *preclaras* en relación con cualquier hecho de la vida, sobre todo política nacional o internacional. Sin embargo, y salvo excepciones, ya desde antiguo, las opiniones de los articulistas, así como las noticias, iban siempre en el mismo sentido. No digamos que mintiendo abiertamente, sino ocultando arteramente lo que no les convenía, utilizando verbos ambiguos, olvidando los nombres de los detractores del sistema así como sus acciones.

Pero en estos días de paros y convulsión social, las reporteras y reporteros de medios públicos y privados hacen gala de una perversidad grosera, o de una grosería perversa, cuando sus entrevistados no dicen lo que ellas y ellos pretenden que deben decir, o lo que sus jefes les han indicado que deben decir para difundir en sus medios. La susodicha reportera mencionada al principio de esta nota se exaspera cuando es interpelada por su entrevistado; del otro lado, un hombre ya de edad que habla pausada y respetuosamente, aunque con firmeza. Le cierra el micrófono en la cara, lo trata

como a un infante, sin respeto ni consideración, poniendo cara de hastío y dando a entender que allí no podrá conseguir nada. No es la única vez que lo hace, y tampoco es ella la única que lo hace, pues sin mencionar nombres ya desde hace tiempo uno de los más connotados divos de la televisión se especializaba en no dejar hablar a sus entrevistados. Otros personajes también descalifican a

quienes no repiten su libreto. Pretenden imponer sus ideas, cierran los micrófonos en la cara de quienes no replican sus discursos, interrumpen, hablan golpeando, son corteses hasta la lambisconería con aquellos con quienes están de acuerdo, y groseros y alevosos con aquellos con quienes disienten. No quieren tener Dios ni ley. La pregunta fundamental es: ¿qué corona tienen?

**TOQUE DE QUEDA
EN ECUADOR;**

**VÍA LIBRE PARA
EL USO DE ARMAS
LETALES**



Foto: Karen Toro / Fluxus Foto

#REPRESIÓN #TOQUEDEQUEDA #MEDIOSDECOMUNICACIÓN #CENSURA

LA JORNADA

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, cuyas fuerzas armadas tienen la orden de usar armas letales contra manifestantes, dispuso ayer el toque de queda a partir de las tres de la tarde y la militarización de Quito en una jornada en la que la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie)—que aceptó dialogar con el régimen la derogatoria o revisión del decreto que eliminó los subsidios a los combustibles— se deslindó del incendio y saqueo a la Contraloría, y otros ataques a medios de comunicación.

En una señal de distensión, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Sistema de Naciones Unidas anunciaron anoche que el Gobierno y las organizaciones indígenas sostendrán una reunión hoy a las tres de la tarde en Quito, luego de que Moreno anunció su disposición para analizar el

Decreto 883, el cual eliminó los subsidios a combustibles, y otras medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional.

El toque de queda fue anunciado con 38 minutos de anticipación, y prohíbe la circulación por esta capital de 2,7 millones de habitantes. Luego, el mandatario, atrincherado en Guayaquil, a donde trasladó la sede del gobierno, lo amplió a todo el país desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana. “He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, inmediatamente, tomar las medidas y operaciones que sean necesarias”, señaló el mandatario en un breve mensaje, flanqueado por el vicepresidente, Otto Sonnenholzner, y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín. Ante el anuncio, se virilizó una entrevista que hace una semana Jarrín concedió a Teleamazonas, en la que señaló que los militares están listos para

#REPRESIÓN #TOQUEDEQUEDA

el uso de armas letales “No olviden que nuestra Fuerza Armada, orgulosamente, tiene experiencia de guerra”.

Ayer las calles de Quito se convirtieron en un virtual campo de batalla, con las fuerzas de seguridad lanzando gases lacrimógenos a los manifestantes en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, la Casa de la Cultura, y otros puntos de la capital.

Más tarde, Moreno insistió que su antecesor Rafael Correa y el mandatario venezolano Nicolás Maduro están detrás de una violencia nunca antes vista en Quito. “Fuerzas oscuras, vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigidas por Correa y Maduro —en complicidad con el narcoterrorismo, con pandillas y con ciudadanos extranjeros violentos— causaron zozobra, violencia nunca antes vista”, señaló Moreno en un mensaje a la nación. Cientos de manifestantes, muchos encapuchados, se apoderaron de diversos sectores de la capital y áreas periféricas, paralizando calles y atacando con palos y piedras vehículos particulares. Decenas de encapuchados incendiaron y saquearon el edificio de la Contraloría General, institución que investiga actos de corrupción, especialmente cometidos durante el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), muchos de cuyos más altos

funcionarios están bajo investigación y procesados.

La ministra del Interior, María Paula Romo, tuiteó que fueron detenidas treinta personas en las inmediaciones de la Contraloría.

Telesur, fuera del aire

El diario *El Comercio* y el canal privado Teleamazonas fueron también blanco de ataques durante la tarde, aunque los manifestantes no lograron entrar a las instalaciones. La Conaie se deslindó de las agresiones contra la Contraloría y ambos medios. La cadena Telesur denunció en Twitter que está sin señal de cable y satelital para sus transmisiones. En los alrededores de la Asamblea Legislativa, indígenas levantaron barricadas con troncos y escudos de madera para enfrentarse a policías que lanzaron una lluvia de gas lacrimógeno, indicaron periodistas de la AFP.

Entre las protestas se destacó ayer una multitudinaria de mujeres al grito de “No más muertes”, mientras otros manifestantes bloquearon las vías al aeropuerto capitalino. La Conaie denunció anoche que fuerzas de seguridad lanzaron bombas lacrimógenas a la Casa de la Cultura, donde miles de indígenas, entre ellos niños y mujeres, se mantienen concentrados.

Desde que estallaron las manifestaciones el pasado día 3, han muerto seis civiles y se registran 937 heridos y 1127 detenidos, dijo la Defensoría del Pueblo. El toque de queda decretado ayer por Moreno, que se suma al estado de excepción dispuesto el 3 de octubre, siguió al anuncio de la Conaie de aceptar el diálogo propuesto por el mandatario para buscar una salida a la crisis, en medio de nuevos y cada vez más numerosos focos de violencia. La organización indígena declaró ayer en un comunicado que decidió participar en las conversaciones después de un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales. Precisó que negociará la derogatoria o revisión del Decreto 883 —que eliminó los subsidios a los combustibles y encareció los precios de la gasolina y el diésel hasta en 123 por ciento—, pero continuarán las movilizaciones a escala nacional. Leonidas Iza, dirigente de la Conaie, dijo al canal de televisión Ecuavisa que las condiciones para las conversaciones incluían que fueran públicas y transmitidas por los medios. Más tarde, Iza pidió ayuda a las fuerzas armadas para garantizar la paz y a regresar el orden constitucional. Iza añadió que ese movimiento no va a caer en las intenciones de ciertos grupos políticos que han intentado aprovecharse de la

reacción del movimiento indígena del pueblo ecuatoriano, aunque no hizo precisiones, indicó AP.

Ayer las calles de Quito se convirtieron en un virtual campo de batalla, con las fuerzas de seguridad lanzando gases lacrimógenos a los manifestantes en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, la Casa de la Cultura, y otros puntos de la capital.

Al cierre de esta edición, la Conaie destacó en un tuit “la conmovedora e incansable voluntad de nuestra gente de luchar, mujeres, jóvenes, mayores y toda la población que llegó desde todos los rincones del país”, y reiteró que “realizaremos los acercamientos para tratar la derogatoria del Decreto 883”. Después, Moreno anunció cinco medidas para abrir negociaciones. La primera, que se analizará el Decreto 883 para estudiar sus efectos y asegurar que los recursos lleguen al campo. Dijo que se evaluarán también la reducción de sueldos por renovación de contratos ocasionales y el recorte de vacaciones, incluidos

en un proyecto enviado a la Asamblea Nacional, y que propondrá un bono de veinte dólares mensuales que pagarán las empresas privadas a sus empleados.

El diario El Comercio y el canal privado Teleamazonas fueron también blanco de ataques durante la tarde, aunque los manifestantes no lograron entrar a las instalaciones. La cadena TeleSur denunció en Twitter que está sin señal de cable y satelital para sus transmisiones.

Como cuarta medida señaló que se trabaja para apoyar a quienes han perdido su producción lechera o sus cultivos y animales tras la paralización, y, por último, que se incluirá un impuesto para grandes empresas para que aquellos que más ganen sean los que más contribuyan al país.

Habitantes de Calderón, un pueblo cerca de la capital, soltaron a decenas de

policías y militares que habían capturado. En Guayaquil y otras ciudades hubo enfrentamientos y caos. Por la noche, miles de ciudadanos hicieron sonar sus cacerolas exigiendo paz, e incluso en algunos barrios pequeños grupos se han animado a salir a las calles formando improvisadas brigadas de vigilancia para exigir su deseo de paz. Los militares junto con la policía patrullan las calles de la capital.

El transporte de petróleo, la mayor fuente de divisas, se mantuvo interrumpido a causa de la ocupación en la Amazonia de pozos del principal ducto del país.

En el gobierno desde 2017, el mandatario enfrenta su mayor crisis debido a los ajustes económicos que impuso a cambio de préstamos que obtuvo del FMI por 4200 millones de dólares destinados a aliviar el pesado déficit fiscal. Además del fin de los subsidios, las medidas prevén recortar derechos a empleados públicos y despidos masivos. Desde el pasado 3 de octubre, el galón de diésel pasó de 1,03 a 2,30 dólares y el de gasolina regular de 1,85 a 2,40.



ECUADOR: LENÍN MORENO PERSIGUE A

COMUNICADORES Y OPOSITORES POLÍTICOS



Foto: Iván Castaneira. Wambra.ec Medio Digital Comunitario

#PERSECUCIÓN
#PERIODISTAS
#DETENCIONESILEGALES
#MEDIOSALTERNATIVOS

AGENCIA DE NOTICIAS REDACCIÓN (ANRED)

Detenciones arbitrarias a comunicadores y opositores políticos, amenazas a medios alternativos y denuncias a la prensa internacional. El Gobierno de Lenín Moreno se toma revancha contra el levantamiento popular que obligó a derogar el decreto del ajuste. La relevancia de la contrainformación que rompió el cerco mediático dejó al desnudo la complicidad entre el Gobierno, los empresarios y los medios hegemónicos.

El Gobierno ecuatoriano se ha abocado a una cacería contra opositores políticos luego de haber tenido que dar marcha atrás, el pasado 14 de octubre, con el Decreto 883, que quitaba los subsidios al combustible y disparaba el costo de vida en la población. La histórica rebelión que se vivió en el país andino fue la más grande durante décadas y paralizó al país

durante once días de crecientes movilizaciones que dejaron mal herido a todo un plan de ajuste acordado con el FMI. Con la fiscalización del levantamiento, el Gobierno está tomando represalias contra los medios alternativos que no acataron el apagón informativo.

En estos días la violencia policial para contener las protestas fue inusitada y denunciada por organismos de DD. HH. locales e internacionales. La represión hasta el momento registrada se cobró ocho muertos, 1192 detenidos y 1400 heridos. De los encarcelados, treintaidós manifestantes han sido procesados por “rebelión”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está acompañando a la Defensoría del Pueblo en un relevamiento de las vulneraciones a los DD. HH. durante el paro nacional. Mientras, los medios de comunicación alternativos y

#PERSECUCIÓN #PERIODISTAS

activistas sociales denuncian que se están llevando a cabo detenciones selectivas, amenazas y una situación de pánico direccionada a comunicadores que informaron durante las protestas. El periodista del medio alternativo *Nuestroamericano*, Cristian González, fue detenido mediante un allanamiento a su vivienda en donde se secuestraron equipos. Se lo acusó de “incitación a la rebelión”, al igual que sucedió con la detención el 15 de octubre de Pablo Del Hierro, referente del Centro de Formación Leonidas Proaño de Quito.

La propia ministra Paula Romo denunció un complot de golpe de estado orquestado por comunicadores, medios alternativos y correístas, y en plena conferencia de prensa increpó a una comunicadora del medio *Wambra*, y dijo: “ustedes también han colaborado con las noticias falsas”. La misma funcionaria indicó que le “llamaba la atención que la agencia de noticias rusa RT transmitiera en vivo lo que sucedía en Ecuador”. A la par, se daba la detención de dirigentes correístas, como fue la del domingo pasado de la exalcaldeza de Durán, Alexandra Plúas, y el lunes

el allanamiento y detención de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón.

Los grandes medios, acusados de ocultar lo que estaba sucediendo mientras las movilizaciones paralizaban al país, hoy acomodaron sus opiniones para justificar las detenciones que se llevan adelante. Un ejemplo de esto es el artículo escrito por Roberto Aguilar publicado en *expreso.ec*, en donde reconoce la importancia de los medios alternativos e incluso el carácter de guerra que posicionó a los grandes medios alineados al oficialismo por un lado y a los medios alternativos y comunicadores populares por el otro: “jugaron un papel decisivo en la guerra informativa que acompañó al intento golpista”. Aguilar se esfuerza por asociarlos a la violencia y la imparcialidad, y nombra a *Wambra Radio* y a INREDH como organismos que accionaron de esta forma.

Hoy el Gobierno intenta generar pánico no solo deteniendo y señalando a medios alternativos sino amenazando a las personas que registraron las protestas.

La relevancia de la contrainformación que rompió el cerco mediático dejó al desnudo la complicidad entre el Gobierno, los empresarios y los medios hegemónicos.

“Muchas personas están borrando los videos y las fotos que filmaron, temen que los vayan a detener”, comentaba un comunicador. En los últimos días, la ministra de Gobierno avisó que utilizarían lo encontrado en las redes sociales como prueba para intentar identificar y criminalizar tanto a comunicadores como a las personas que salen en las filmaciones.

“Esto no ha finalizado, tenemos muchas preocupaciones. El Gobierno a través de la ministra María Paula Romo no ha parado el asedio contra las organizaciones y los medios de comunicación alternativos. Estamos viviendo momentos donde tenemos un avance fascista de persecución y donde vimos la violencia ejercida, incluso denunciada por Amnistía Internacional y otras organizaciones de DD. HH. Ayer el Ministerio de Gobierno acaba de denunciar a los líderes de los movimientos indígenas del país, lo que agrava la situación y muchos exasambleístas opositores han tenido que resguardarse en la embajada y pedir asilo en otros países. Estos correístas que fueron señalados son chivos expiatorios. Pero la persecución se extendió a comunicadoras y medios alternativos. Han allanado casas de compañeros y han secuestrado equipos para incriminarlos por, supuestamente, difundir información falsa y acusándolos por la destrucción de bienes

materiales”, explicó Gabriel Buitrón, comunicador de *Revista Crisis* (Ecuador) y Casa Pukara. En comunicación con integrantes del equipo de comunicación de la Conaie y la Confenaie (las organizaciones indígenas más grandes del país) explicó que los medios alternativos ganaron relevancia ante la evidencia de que los grandes medios estaban desinformando: “Nuestras plataformas digitales cumplieron un rol fundamental y fueron las fuentes confiables. Nuestro equipo cubrió todo el país y durante los días de paro tuvimos unos dos millones de personas siguiendo nuestras plataformas virtuales. En represalia a esta labor informativa la ministra arremetió contra nosotros acusando de difundir información falsa. Y esto es mentira, ya que estuvimos en el lugar de los hechos. Al contrario, nuestra labor fue contrarrestar la información falsa y tergiversada. Nuestra información se puede corroborar en nuestras plataformas. La ministra, con sus declaraciones, siembra el odio entre periodistas y obedece a un plan de desprestigiar la lucha del pueblo ecuatoriano. Y la declaración de la ministra sobre la sorpresa que le provocó la cobertura de RT en Ecuador nos demuestra su actitud injustificable, que cuestiona a los medios que hacen su trabajo. Entonces es claro que el fin era el ocultamiento”.

Los medios populares y comunicadores han publicado un pronunciamiento manifestando que “el Gobierno nacional pretende deslegitimar de manera sistemática” su trabajo, y que la información difundida fue “frontal, verificable y verificada desde el lugar de los hechos”, señalando que el trabajo en red logró “romper el cerco mediático”. Denuncian “que fueron afectados por la censura tecnológica y digital” y reprimidos por órganos gubernamentales, y responsabilizan al Gobierno nacional por “la integridad de cada uno de nosotras, nosotros y nuestras plataformas”.

Los medios alternativos en los once días del paro nacional

Recordemos que las protestas iniciadas el 3 de octubre con el anuncio del paro de transportistas rápidamente tomaron una fuerza que nunca dejó de crecer en los once días, que culminaron con una verdadera rebelión popular en la ciudad de Quito, ocupada por columnas del movimiento indígena que llegaron desde todo el país y que fue fortalecida por otros sectores como se vio el último día con la adhesión de los barrios periféricos con barricadas y cacerolazos. Durante todo el conflicto, los medios hegemónicos públicos y privados se alinearon para difundir el discurso del Gobierno, primero agitando la versión

del fantasma de Maduro, las FARC o el expresidente Correa, y luego reduciendo las protestas a saqueos y vandalismo. Mientras se daban los conflictos en las calles algunos noticieros proyectaban novelas o dibujos animados. Las fuerzas de seguridad fueron endureciendo la represión y focalizando contra comunicadores. Muchos sufrieron detenciones y roturas de equipos, y se contabilizaron más de veinte periodistas detenidos en los enfrentamientos.

También se caían cuentas en las redes sociales y se sucedían apagones de internet para dificultar la difusión de las imágenes represivas. El cerco informativo cobró una fuerza fenomenal. A diferencia del anterior Gobierno, como señala la investigadora Anahí Macaroff, los medios públicos cayeron presos del oficialismo. La radio pública Pichincha Universal desató el mandato, salió a entrevistar a manifestantes en la calle y luego sufrió un allanamiento de la Fiscalía General en plena protesta. Incluso, durante el último día (13 de octubre) la prensa informaba que los cacerolazos que inundaban Quito eran en apoyo al Gobierno por el llamado al orden y reciente toque de queda ampliado. En Argentina, el canal Todo Noticias, del grupo de medios Clarín, replicó el error noticioso que rápidamente tuvo que corregir.

Las noticias falsas (*fake news*) fluyeron durante todo el conflicto: fotomontajes, falsos comunicados de organizaciones sociales, de las Fuerzas Armadas, decretos del ejecutivo, saqueos que no existían o asesinatos masivos, entre otras noticias falsas. Hoy el Gobierno acusa también a los medios alternativos y a organizaciones políticas de agitar las *fake news* para desestabilizar. Sin embargo, los manifestantes denunciaban lo contrario por parte de anónimos y de los grandes medios: “Incluso los medios difundieron noticias falsas y riesgosas, como por ejemplo que se reanudarían las clases en medio de la convulsión y eso podría llevar a situaciones riesgosas a niños y adolescentes. Estas noticias falsas apuntaban a desmoralizar a la población y a asustar. Decían todo el tiempo que estaban militares preparándose para atacar y asesinar a manifestantes para generar miedo”.

Los medios hegemónicos trataban de instalar la idea de una ciudad insegura y de constantes actos vandálicos, pero los enfrentamientos eran contra las fuerzas de seguridad: “había solidaridad entre la gente a pesar de algunos hechos aislados”. La prensa internacional comenzó a tomar de fuente a los medios alternativos y las redes sociales donde actuaban los comunicadores. Mientras, a algunas

Los medios hegemónicos trataban de instalar la idea de una ciudad insegura y de constantes actos vandálicos, pero los enfrentamientos eran contra las fuerzas de seguridad: “había solidaridad entre la gente a pesar de algunos hechos aislados”. La prensa internacional comenzó a tomar de fuente a los medios alternativos y las redes sociales donde actuaban los comunicadores.

cadenas como Telesur se les quitó la señal sin explicación alguna. Las manifestaciones identificaron que “la prensa corrupta” actuaba para los intereses del Gobierno y muchos medios hegemónicos fueron atacados. Las instalaciones de la emisora Teleamazonas fueron asediadas por una movilización y luego fueron incendiadas. También el medio *El Comercio*. En la ciudad de Ambato, provincia de Tugurahua, unos 3000 indígenas ocuparon las antenas de las grandes emisoras en protesta por la desinformación y dejaron sin señal a gran parte de la sierra central del país.

“EL MOVIMIENTO SOCIAL QUE BOTÓ A TRES PRESIDENTES YA NO EXISTE”



Foto: Josué Araujo / Fluxus Foto

#PAQUETAZO
#FMI
#SINDICATOS
#CONAIE
#PARO

ENTREVISTA A SANTIAGO ORTIZ POR LISSETTE FOSSA

Las fuertes protestas por las medidas económicas anunciadas por Lenín Moreno —para cumplir con las exigencias de un crédito del FMI— fueron lideradas principalmente por el gremio transportista y los estudiantes. En esta entrevista, Santiago Ortiz, experto ecuatoriano, analiza el estallido social, así como la situación política de ese país. “Este es un gobierno de los empresarios y de los medios de comunicación”, afirma.

Esta semana, Lenín Moreno vivió su peor momento desde que asumió la presidencia de Ecuador en mayo 2017, supuestamente como continuador de las políticas de Rafael Correa, de quien fue vicepresidente entre 2007 y 2013. Tras anunciar un paquete de reformas económicas, laborales y sociales —que fue una condición para que el Fondo

Monetario Internacional le entregara a su Gobierno un préstamo de 4200 millones de dólares—, el jueves estallaron protestas en todo el país que obligaron a Moreno a decretar el estado de excepción. En especial el fin del subsidio a los combustibles, en un país que es productor de petróleo, provocó la ira de los sectores de transporte. En medio de la incertidumbre, *Interferencia* conversó con Santiago Ortiz, académico ecuatoriano de Flacso, doctor en Ciencias Sociales, quien ha seguido de cerca la política de su país, y ha estudiado y escrito acerca de la participación territorial y los movimientos sociales. Ortiz analizó las manifestaciones de esta semana, y aunque no se atreve a afirmar su continuidad, opina que estas medidas económicas toman por sorpresa a las principales organizaciones sociales, lo que dificulta el diálogo en este

Lenín Moreno fue modificando sus acciones con el sector empresarial de manera muy rápida, y de hecho los medios de comunicación lo han respaldado. Este es un gobierno de los empresarios y de los medios de comunicación.

momento. A continuación, una versión editada de esta conversación.

Hace años que no se veían disturbios sociales como los de esta semana. ¿Qué provocó este estallido social?

Desde hace algún tiempo se han venido tomando algunas medidas económicas que han afectado a la población, como los ajustes fiscales y la baja de la inversión pública. Eso generó un ambiente enrarecido, donde la población ha perdido confianza. De hecho, el presidente Lenín Moreno llegó a tener 60% de popularidad y hoy está en menos de 20%. Ha habido un desgaste del Gobierno, especialmente en el plano económico, donde las ofertas de Lenín Moreno no se han cumplido.

Otro elemento importante es el hecho de que el sindicato de choferes siempre

ha sido un actor importante en el país. Durante los últimos quince años no había tenido este tipo de acciones, pero en general tuvo una relación de interlocución con el Gobierno anterior y en ese sentido pudo mantener la fuerza de los sindicatos. Estos son los dos actores de lo que ocurre ahora, el Gobierno y los sindicatos de transporte. Y el elemento que detona todo esto fue el acuerdo con el FMI.

¿Las manifestaciones del jueves se relacionan solo con la subida del diésel y la gasolina?

El tema de eliminar el subsidio a la gasolina y al diésel es una medida que afecta a toda la población. Con ello suben los precios de todos los productos y en ese sentido toda la población se ve afectada. Yo tengo la impresión de que la mayoría de las organizaciones están participando de una manera marginal; el grueso de las manifestaciones son choferes, pero con apoyo de estudiantes, otros sindicatos... Pero quienes conducen este proceso son los choferes.

¿Cómo van a evolucionar estas manifestaciones? ¿Pueden ir creciendo o se van a quedar como demandas sectoriales de los transportistas?

Yo no tengo una visión clara de lo que va a suceder, porque es un paro sorpresivo, con la fuerza que ha tomado. Prácticamente se ha paralizado todo el

país: los choferes sacaron sus unidades de los terminales de buses y pusieron sus buses en las entradas estratégicas de la ciudad, con el fin de bloquear el paso del transporte. Las ciudades han sido bloqueadas, así como las grandes carreteras. Por otro lado, están las manifestaciones de estudiantes y trabajadores, especialmente en Quito, que crearon disturbios en el centro de la ciudad. Ese es el repertorio que se ha estado usando, pero esos hechos no han sido transmitidos en los medios masivos de comunicación, que están respaldando al Gobierno.

¿Los grupos indígenas se han manifestado sobre este tema?

Los grupos del Frente Unitario de Trabajadores, que ya venía bastante debilitado, y la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), que mantiene cierta fuerza especialmente a nivel político, tuvieron al principio una actitud conciliatoria con el nuevo Gobierno, en la medida que habían sido atacadas por el gobierno de Rafael Correa. Por ejemplo, a la Unión Nacional de Educadores le quitaron la personalidad jurídica. Quisieron quitarle su local a la Conaie y se les vetó la educación bilingüe; entonces, eran medidas inadecuadas de parte del Gobierno anterior, que los enemistó. Por eso, estaban dialogando con el Gobierno actual. Esa actitud ha

cambiado por parte de la Conaie, porque especialmente en las zonas mineras han tenido conflictos abiertos con empresas respaldadas por el Gobierno. Ahí hay comunidades indígenas y la Conaie ha tenido que respaldarlas. Eso ha generado que la Conaie haya tomado una posición frontal contra el Gobierno.

¿Y existen tratativas de diálogo entre los transportistas y el Gobierno para llegar a una solución?

El problema es que el Gobierno ya firmó el acuerdo con el FMI, que incluye el aumento de los combustibles, pero también una serie de reformas de carácter laboral, lo cual genera un conflicto con los gremios de trabajadores. También está prevista por parte del Gobierno una reforma de la previsión social, que puede que implique privatización, y una serie de reformas con respecto a impuestos, contrataciones laborales, salarios, etc. Es decir, este es el primer *shock*. Hay muchos actores que piden que se solucione el conjunto de estos problemas, no solo lo de las subvenciones.

Yo tengo la impresión de que, si bien el tema inicial era el de la gasolina, estos otros temas están empezando a inquietar a la población. Se suman una serie de movimientos de una manera desordenada, no hay una plataforma común,

son actores heterogéneos. Y tras diez o doce años en que no hubo movilización popular, en los que las organizaciones jugaron un rol marginal, ahora de nuevo están recuperando el espacio público. Y en ese sentido, el Gobierno ha sido duro: no quiere moverse de implementar el acuerdo con el FMI, pero este Gobierno está debilitado.

Recordemos que este Gobierno surgió de la Alianza País, que estaba liderada por Correa. Sale de una fracción de este partido, con el apoyo de Moreno, pero ha ido perdiendo fuerza desde el punto de vista de la política electoral. En las últimas elecciones cumplió un rol secundario y quizás en las próximas elecciones ni siquiera se presente. Entonces, los que están jugando detrás del Gobierno son partidos como el socialcristiano y partidos de derecha. Esta coyuntura debe tomarse en cuenta, porque la reforma neoliberal implica abrir y dejar limpio el terreno para que estos otros actores políticos, más importantes y relevantes, sacrifiquen a Lenín Moreno y puedan ganar en un proceso electoral futuro. Quieren volver al Gobierno sin tener que sufrir lo que significa el desgaste de estas reformas.

¿En qué estado se encuentran los movimientos sociales en Ecuador hoy? ¿Están fortalecidos o debilitados?

Mi impresión es que el movimiento social que existió en el periodo neoliberal antes del 2007, del Gobierno de la Revolución Ciudadana, ha sido profundamente transformado por una serie de factores. Y son factores estructurales. Es decir, el proceso de crecimiento económico de los últimos quince años produjo una fuerte movilidad social y se amplió la clase media. Hubo migración y se erosionaron muchos de los actores sociales. En ese sentido, la base social del movimiento indígena también pasó a ser parte de los barrios urbanos y cambiaron su situación. Por eso, el movimiento social que derrumbó a tres presidentes ya no existe como tal.

El movimiento indígena perdió su textura como eje vertebral de los movimientos sociales; los trabajadores industriales prácticamente desaparecieron; se debilitaron mucho, así también, los sindicatos de trabajadores públicos. Y todos estos actores entraron a participar del Gobierno de la Revolución Ciudadana de manera debilitada y un poco subordinada. Llegaron a algunos acuerdos en el comienzo, pero el Gobierno de Rafael Correa fue un gobierno muy Estado-céntrico. La tecnocracia que gobernaba, con el liderazgo de Correa, hizo una serie de reformas sociales, avanzaron en la inversión pública, aumentó el PIB, pero las organizaciones sociales se debilitaron. Y

con el Gobierno de Lenín Moreno esto se profundizó. Y lo que tenemos por ahora, en las protestas, es un sector popular bastante insatisfecho, que sigue siendo nostálgico del periodo de Correa, pero con sectores medios que son críticos al gobierno de Correa por el tema de la corrupción y lo que llaman autoritarismo, que es un discurso que han difundido en los medios de comunicación.

Lo que sí vemos es una recuperación de movimientos antimineros, ambientalistas, que son localizados en las zonas afectadas por la minería. También ha sido significativo el movimiento de las mujeres. Pero el conjunto de los movimientos sociales ha sido debilitado. Los transportistas y sus sindicatos no fueron tocados por Correa, por eso se mantuvieron con el poder que tienen desde hace mucho tiempo.

Desde afuera llama la atención que un Gobierno que prometía continuar con las políticas de Correa hoy llegue a un

acuerdo con el FMI. ¿Cómo ocurrió este proceso?

Este proceso comenzó un poco antes del cambio de Gobierno. Ya se notaba un fraccionamiento de Alianza País, que gobernaba en ese momento. Y había algunos sectores vinculados al empresariado y a instituciones internacionales. De hecho, Lenín Moreno negoció al inicio de su gobierno con Donald Trump el apoyo sobre el tema de Julian Assange de la embajada de Ecuador, en Gran Bretaña, y la salida del Unasur. Y los partidos de derecha y los medios de comunicación lograron establecer un discurso supuestamente democrático, que le permitió legitimar estas acciones, pero ya con una agenda claramente neoliberal, que se afirmó con el acuerdo del FMI. El sector de Correa lo cataloga como una traición. Lenín Moreno fue modificando sus acciones con el sector empresarial de manera muy rápida, y de hecho los medios de comunicación lo han respaldado. Este es un gobierno de los empresarios y de los medios de comunicación.

Ecuador deal cancels austerity plan, ends indigenous protest
Ecuador President Lenin Moreno will withdraw the IMF-backed package that included a sharp rise in fuel costs. Indigenous leaders will end ...
latimes.com

814

6.4 mil

22.6 mil



2.3 mil

8.6 mil

19.2 mil



Marco Teruggi
@Marco_Teruggi

Moreno llama al diálogo y luego reprime con más fuerza. La respuesta de la CONAIE es la que repiten desde hace días: diálogo si el gobierno deroga el decreto 883, por lo tanto no parece que habrá diálogo. La crisis sigue su espiral de escalada. #EcuadorEnCrisis

CONAIE @CONAIE_Ecuador · 11 oct. 2019
[Boletín]

La CONAIE después de 9 días de exitosa movilización nacional y resistencia en todo el país, soportando la represión, con más de 554 heridos, 929 detenidos, 5 muertos y otros tantos desaparecidos, nos disponemos al diálogo con @Lenin cuando se derogue el decreto 883



CONAIE
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
ACUERDO - CODENPE N° 817-31 de enero del 2008
Creado legalmente - 24 de agosto de 1989 - M.B.S.01734

0.M. Quito, 13 de octubre 2019

SOBRE LA LLAMADA DEL PRESIDENTE LENIN MORENO AL "DIALOGO"

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, después de 9 días de exitosa movilización nacional y resistencia en todo el país, por la derogatoria del Decreto 883, le expresamos al Gobierno Nacional que ya mediamos el diálogo hacia afuera y hacia adentro, con resultados positivos.

En consecuencia, el diálogo que promueve carece de credibilidad, en este escenario la lucha social, encabezada por el Movimiento Indígena, es la única vía para la deroga de la Ley



Gabriela Rivadeneira
@GabrielaRivas

COMUNICADO:

Las diferencias políticas deben tramitarse con argumentos y con altura, jamás con amenazas mucho menos en contra de los hijos, ni a los míos ni a los de nadie.

Respecto del pedido de protección en la Embajada del hermano país de México, manifiesto lo siguiente ➡

Gabriela

Contexto:

El pasado miércoles 10 de octubre, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Enríquez, anunció que el gobierno de Ecuador se comprometió a garantizar la seguridad de los manifestantes que se encuentran en la Embajada de México en Quito.

Este anuncio fue recibido con satisfacción por la comunidad indígena y por la comunidad internacional, ya que representa un compromiso del gobierno de Ecuador con la protección de los manifestantes.

La comunidad indígena y la comunidad internacional han expresado su apoyo al gobierno de Ecuador por este compromiso.

Este compromiso es un primer paso hacia la resolución de la crisis.

3:07 p. m. · 13 oct. 2019 · Twitter for Android



Rafael Correa
@MashiRafael

Sucesos como los de Ecuador o Chile no son obra de desestabilizadores sino de pueblos indignados ante gobiernos que olvidaron sus derechos. ¡Basta de absurda persecución!



2:17 p. m. · 25 oct. 2019 · Twitter for iPhone



Plataforma Digital Voces
@Voces.Ecu

#VocesEnMovilización

[#ATENCION] En la inmediaciones de la @AsambleaEcuador, hubo una brutal represión por parte de uniformados del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), quienes dispararon a matar a manifestantes desarmados. #ParoNacionalEC

Créditos: Fernanda Gallardo



10:42 p. m. · 11 oct. 2019 · Twitter for Android

#Paquetazo

@CONAIE_Ecuador

"aquí no venimos a formar comisiones, el pedido, no del movimiento indígena, sino del pueblo ecuatoriano es la derogatoria del decreto 883" @jaimevargasnae, presidente de la Conaie





5:21 p. m. · 16 oct. 2019 · Twitter for Android



#DialogoPorLaPaz

¿Crees que el gobierno de Lenin Moreno @Lenin debe derogar el Decreto 883 (eliminación subsidio de la gasolina) y transparentar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional FMI?



5,872 votos · Resultados finales

10:46 p. m. · 13 oct. 2019 · Twitter for Android

234 Retweets · 190 Me gusta



Así desinforma una agencia: titula con la "violencia de los manifestantes". La noticia es al revés: #ToqueDeQueda del gobierno, manifestantes asesinados, inmensa represión. Esa es la protección mediática de estos gobiernos. A esta hora hay #cacerolazos en toda la ciudad.

DW Español @dw_espanol · 12 oct. 2019

#Ecuador: manifestantes atacan a sedes de medios de comunicación

Generaron focos de incendios en las instalaciones de el diario El Comercio y el canal Teleamazonas. El país tiene toque de queda durante 24 horas [tg]

#EcuadorEnCrisis #Moreno #Decreto883



10:56 p. m. · 12 oct. 2019 · Twitter Web App



Sin NINGUNA justificación a esta hora nuestra señal ha sido retirada de canal satelital 722 y cable 626 en Ecuador. Denunciamos este hecho y llamamos a nuestros usuarios en este país a exigir a las operadoras la restitución inmediata de teleSUR.



7:11 p. m. · 12 oct. 2019 · Twitter for iPhone

7,7 mil Retweets · 7,4 mil Me gusta



2:18 · 834.7 mil reproducciones

12:09 p. m. · 11 oct. 2019 · Twitter for Android

12.3 mil Retweets · 19.5 mil Me gusta



No deja de sonar #Cacerolazo en #Quito y otras ciudades de #Ecuador, ante #ToqueDeQueda dispuesto por @Lenin Moreno, ciudadanos salen a la calle

Las demandas son diversas, entre ellas:

- No al paquetazo económico
- Paz para Ecuador
- Basta de represión

Fotos: Juan C. Aguilar



12:16 a. m. · 13 oct. 2019 · Twitter for Android



CIDH pide a Ecuador investigar violaciones de derechos humanos y delitos en protestas – Confirmado.net



CIDH pide a Ecuador investigar violaciones de derechos humanos y delitos en pr... En el comunicado, la CIDH calificó de graves "los episodios de hostigamiento que sufrió la delegación durante su visita a la cárcel de Latacunga (centro), por parte ... @confirmado.net

4:29 a. m. · 6 nov. 2019 · Twitter for iPhone

#SosEcuador





ACTORES

ECUADOR DESDE SUS PROTAGONISTAS

#Negociación #DerechosHumanos #Marchas
#Resistencia #CONAIE #MovimientoIndígena
#Acuerdo #Levantamiento #Paro
#SujetoHistórico #DerogaciónDelDecreto
#Triunfo #Constitución #Paquetazo
#MovimientosSociales #PartidosPolíticos
#Represión #DerechosHumanos
#Plurinacionalidad #PanoramaRegional
#PersecuciónPolítica #Exilio #Racismo
#Otriedad

**ECUADOR
LE GANA**

**EL PRIMER ROUND
AL FMI**



Foto: David Díaz / Fluxus Foto

#NEGOCIACIÓN
#DERECHOSHUMANOS
#MARCHAS
#RESISTENCIA
#CONAIE

ADORACIÓN GUAMÁN

La acumulación de fuerzas que se ha tejido estos días va a marcar el futuro del país, incluso de la región, pero lo que ocurra en el corto plazo sigue siendo incierto.

El domingo 13 de octubre la ciudad de Quito amaneció en una tensa calma. Las calles estaban prácticamente vacías y el centro, militarizado, mientras los manifestantes permanecían agrupados en los centros de acopio y de descanso. El anuncio del inicio de una negociación entre el Gobierno y los diversos líderes del movimiento indígena mantenía la situación en una larga pausa, enmarcada en un estado de excepción con toque de queda permanente.

Tras doce días de movilización y represión recrudecida, los datos de la Defensoría del Pueblo emitidos el mismo día 13 arrojaban un saldo escalofriante.

Hasta ese momento se contabilizaban siete víctimas mortales, 1152 detenidos y 1340 heridos. Además, los informes de la Defensoría revelan indicios que permiten afirmar un uso desproporcionado de la fuerza en las dinámicas de represión de la protesta: un 22% de los detenidos tiene menos de diecinueve años y muchos incluso menos de quince; sin embargo, los testimonios relatan que no se han seguido procedimientos específicos en estos casos; solamente un 24% de las personas detenidas han sido puestas a disposición judicial. En cuanto al resto, no pudo demostrarse la existencia de motivos que justificaran su detención. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha manifestado su preocupación por la escalada de violencia, tanto a través de un comunicado emitido el día 9 como mediante una serie de tuits en los que, de forma

poco ortodoxa pero efectiva, denunciaba distintas violaciones de derechos humanos y exhortaba al Gobierno a controlar el uso desmedido de la fuerza. La CIDH señaló, por ejemplo, denuncias documentadas de prácticas de tortura contra detenidos; uso aleatorio de gases lacrimógenos contra comunidades indígenas; restricción del uso de redes sociales; corte de la señal de cadenas de televisión y radio (como Telesur o Radio Pichincha) y agresiones contra periodistas. Los derechos a la integridad física, a la libertad, seguridad, expresión e información han sido gravemente afectados, según demuestran innumerables videos e imágenes registradas durante las protestas. En paralelo, las últimas jornadas han estado marcadas por la quema de edificios públicos o las agresiones contra determinados medios privados de comunicación, generando una durísima tensión social, alimentada por el Gobierno que insiste en su estrategia de confrontación y la utilización del correísmo como chivo expiatorio.

La tensión llegó a un punto crítico el sábado. Por un lado, la protesta se vio engrosada desde temprano con la movilización de los barrios más humildes de la capital. La marcha de mujeres y los centenares de personas que bajaban del norte de la ciudad evidenciaban la

ampliación del campo popular en pie, una reconfiguración fundamental que resignificaba los márgenes del conflicto. Quedaba ya claro que con los indígenas, los estudiantes y los movimientos sociales se levantaban los desposeídos en el conjunto del país. Desde las distintas provincias llegaban imágenes de marchas y movilizaciones de intensidad creciente. La respuesta del Gobierno se mantuvo en la línea de la militarización y uso de la fuerza como elemento de gestión de las protestas. El sábado a mediodía se anunció la ampliación del toque de queda, que pasaba a regir en Quito y los alrededores durante las veinticuatro horas del día. Diversos comunicados, ya no del Gobierno sino del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, matizaron un confuso decreto presidencial y se llegó a enviar un SMS a la población para informar de la hora de inicio de la restricción total de circulación. Los vuelos de salida y entrada de Quito comenzaron a cancelarse; se extendió el rumor, nunca confirmado, de cortes de agua o internet; el miedo recorría los barrios más acomodados de la capital, mientras que en numerosos barrios populares se desataban protestas focalizadas y duramente reprimidas. Al caer la noche, circularon las imágenes de estudiantes y médicos haciendo un cordón humanitario alrededor de los centros de acopio

y emergencia donde se resguardaban heridos. A las 8 de la tarde, desafiando el toque de queda, se convocó un cacero-lazo en la capital, exigiendo el fin de las medidas y de la violencia: el seguimiento fue masivo. La necesidad de encontrar una salida al conflicto era ya impostergable. Los medios de comunicación internacionales ya habían comenzado a abrir los canales de información y las imágenes de los enfrentamientos y el uso de la fuerza contra la población daban la vuelta al mundo. Ya caída la noche, la Conaie (Confederación de Nacionalidades de Indígenas del Ecuador) emitió un comunicado afirmando que iban a delegar a una “interlocución exploratoria” para evitar un baño de sangre y diseñar las medidas para salir de la encrucijada, concretándose el objetivo en la derogación del Decreto 883 (que elimina los subsidios a los combustibles y que ha provocado la chispa que encendió el conflicto). Con la posibilidad de diálogo abierta y el ofrecimiento de la misión de Naciones Unidas en el país y la Conferencia Episcopal para mediar, se emplazaron las partes a una reunión el domingo a las tres de la tarde. La negociación debía ser transmitida en directo por diversos medios de comunicación.

Con tres horas de retraso, después de un día de tensiones y enfrentamientos

Tras doce días de movilización y represión recrudescida, los datos de la Defensoría del Pueblo emitidos el mismo día 13 arrojan un saldo escalofriante. Hasta ese momento se contabilizaban siete víctimas mortales, 1152 detenidos y 1340 heridos.

permanentes fuera de la capital, el domingo 13 a las seis de la tarde dio comienzo una reunión de varias horas que pudimos seguir en directo, al menos parcialmente. Bajo la mirada del Coordinador Residente del Sistema ONU en Ecuador, el presidente Moreno y varios miembros de su gabinete se sentaban en una mesa de diálogo con distintos líderes de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. El comienzo fue desalentador, el presidente se mantuvo en el discurso ya conocido de la confabulación castro-chavista con Correa a la cabeza para desestabilizar el país, haciendo duras acusaciones a los “extranjeros” que habrían ingresado en Ecuador para orquestar una suerte de golpe de Estado. El ofrecimiento fue mínimo, no retiraría el decreto pero negociaría medidas sociales para repartir entre los “más necesitados” los ahorros de la

eliminación de los subsidios. La contestación de los líderes fue una lección de dignidad, serenidad, fortaleza y... de cómo manejar la economía del país.

Jaime Vargas por la CONAIE, Leonidas Iza por el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) o Miriam Cisneros, presidenta del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku tomaron la palabra a turnos en un debate que manejaron con soltura, frente a un Gobierno que demostró poca capacidad en el conocimiento de los datos para defender su postura y con ofrecimientos mínimos. Los movimientos se mantuvieron firmes en la exigencia de la derogación del decreto, además, denunciaron la práctica inacción del Gobierno (“Tiene usted unos ministros vagos, señor presidente” le llegaron a decir), reiteraron la falsedad de los argumentos conspirativos del Gobierno, exigieron la destitución de los ministros de Defensa y Gobierno (Interior) y la publicación del completo contenido de los acuerdos del FMI, entre otras cuestiones. Miriam Cisneros finalizó su intervención con rotundidad: “Se me han secado las lágrimas llorando por nuestros hijos muertos. Que en su conciencia queden, presidente, todos los hermanos caídos”. Tras estas palabras y más de una hora de debate, el mediador de Naciones Unidas decidió llamar a un

receso de quince minutos que se convirtió en un paro de la transmisión de más de hora y media, pero la negociación seguía en privado.

Cuando a las 21:40 volvieron a conectar en directo, el acuerdo ya estaba redactado. Las partes habían consensuado dejar sin efecto el Decreto 883 e instalar una comisión para elaborar un nuevo decreto en el que participarán el Gobierno, el movimiento indígena, la Conferencia Episcopal, y Naciones Unidas. De manera paralela, se comprometía el fin de las movilizaciones y el movimiento indígena afirmaba el retorno a sus comunidades para “retomar la paz”. La tensión era evidente. Para cerrar la sesión, tomó la palabra el secretario particular del presidente señalando que “aquí hemos cedido todos”, esto “no es una derrota de nadie” y “ningún acto vandálico quedará sin respuesta”. Ningún miembro del Gobierno dijo una palabra relativa a la represión, detenciones o heridos. Al contrario, la ministra de Interior, María Paula Romo, ausente en el debate, negaba en ese momento desde su cuenta de Twitter la existencia de desaparecidos y subrayaba las “mentiras” en el recuento de muertos y heridos.

Tras la desconexión, empezaron a circular vídeos que daban cuenta de la situación en la sala de negociaciones y

que evidenciaban que llegar a un acuerdo no iba a ser tan fácil. Mientras en las calles el movimiento indígena y miles de quiteños celebraban la victoria política frente al Gobierno y el fin de los enfrentamientos, los negociadores discutían en tono cada vez más duro. Desde su cuenta de Twitter, el secretario particular del presidente afirmaba: “Hoy trabajaremos en la modificación del decreto, que garantice cómo vamos a racionalizar los subsidios y que no vaya hacia quienes no lo necesitan. ¡En eso nos comprometimos!” ¿A eso se habían comprometido?

Cerramos esta crónica a la una de la madrugada, hora de Quito, todavía en tensa espera. No es posible negar que haber llegado hasta aquí, haber forzado al Gobierno a sentarse y recular en una medida que consideraban “fundamental” para el país, es una victoria del campo popular que, en lo simbólico y en lo material, evidencia una reconfiguración de las alianzas. La acumulación de fuerzas que se ha tejido en estos días, la identificación clara del enemigo común (el FMI y las medidas neoliberales) va a marcar el futuro del país, incluso de la región, pero lo que ocurra en el corto plazo sigue siendo incierto. El acuerdo fondomonetarista es amplísimo, quedan las reformas laborales, la liquidación del sector público, el asalto a los derechos de los funcionarios,

las rebajas fiscales y las amnistías a los grandes capitales, incluso la subida del IVA... Ahora la pregunta es ¿podrá un gobierno debilitado por una derrota como esta llevar adelante las otras medidas?, ¿podrá en sentido contrario negarse a cumplir un acuerdo ya pactado con el FMI y con las élites económicas que lo sostienen? Y, más cercano todavía: ¿se levantará mañana Quito con un acuerdo que permita el fin de este conflicto?, ¿van a depurarse responsabilidades respecto de los excesos en el uso de la fuerza?, ¿qué va a pasar con los detenidos?

Las dudas que se abren en este fin del primer asalto son enormes. Lo que sí podemos afirmar es que en Ecuador se ha corroborado lo que ya se ha ido plasmando en otros escenarios, como Brasil: el neoliberalismo actual no solo es incompatible con el bienestar de las mayorías sociales, sino también con la propia democracia. Los gobiernos plegados al fondomonetarismo requieren el uso de la fuerza para imponer las medidas económicas y sociales exigidas por el autoritarismo de mercado, ya sea por medio de medidas de *lawfare* contra adversarios políticos, ya sea a través de la directa represión de las manifestaciones de protesta con la mano dura policial y militar. Pero los pueblos son duros, tienen memoria y se levantan.

INOCENCIO DE LOS PÁRAMOS



Foto: Iván Castaneira. Wambra.ec Medio Digital Comunitario

#CONAIE
#MOVIMIENTOINDÍGENA
#ACUERDO
#MEMORIA
#HISTORIA

LEONARDO PARRINI

Tras las jornadas de movilización del movimiento indígena, los dirigentes de la Conaie y sus pueblos y nacionalidades, encabezados por Jaime Vargas, Leonidas Iza y Miriam Cisneros, se retiran a sus territorios amazónicos y serranos. Lo hacen con la satisfacción del deber cumplido, pero con el dolor del costo pagado en las calles de Quito con la cara vida de Inocencio Tucumbi, el dirigente asesinado en la represión de la policía ecuatoriana. Inocencio había nacido hace cincuenta años en la localidad de Yanahurco de Juigua, en el cantón Pujilí, en Cotopaxi.

Inocencio tenía siete hijos criados con el esfuerzo de su oficio de agricultor y albañil. Una mañana salió de su comunidad a sumarse a la lucha política y social de sus hermanos indígenas convocados por la Conaie. Nunca Inocencio

—acaso sí— pensó que no regresaría con los suyos, que una bomba policial iba a derrumbar sus sueños de justicia y acabaría con su vida campesina la mañana del 10 de octubre de 2019.

Inocencio nunca sabrá que sus hermanos consiguieron los objetivos de su movilización a Quito, que le doblaron la mano a un régimen socialmente insensible y políticamente represivo. Nunca sabrá que la derogatoria de la infame medida que motivó la lucha lleva su nombre y el triunfo sobre ese despropósito está escrito con su sangre. Acaso sepa que él es uno de los miles que ofrendaron generosamente su vida en este continente reprimido para hacer justicia a su pueblo ancestral. Acaso Inocencio no sabe que el Decreto 883 ya no existe y que su funesto recuerdo remite a su alegría de hombre del pueblo.

Inocencio era parte de una historia escrita con sangre. El 4 de junio de 1990 tuvo lugar el primer levantamiento indígena. Siete provincias de estirpe indígena iniciaron una protesta que duró cuatro días. Pedían la solución de conflictos de tierra y la plurinacionalidad. En 1994, la promoción de la Ley de Desarrollo Agrario abrió un nuevo cauce de lucha indígena con una protesta que duró diez días. Esta vez exigían redistribución de tierras y el acceso a tecnologías locales.

Inocencio sí sabía que su historia es la historia de Cecilio Taday, Fernando Daquilema, Alejo Sáenz, Jesús Gualavisí o Dolores Cacuangó, destacados líderes y lideresas indígenas que han encabezado guerras, levantamientos y rebeliones. Junto a ellos está Inocencio Tucumbi en el atrio de la historia. Por su lucha y entrega generosa nosotros sabemos del acuerdo conseguido la noche del domingo 13 de octubre; por la lucha de sus hermanos, el Decreto 883 quedó derogado.

Antonio Vargas, líder de la Conaie, movilizó en el 2000, desde Cotopaxi hasta Quito (Pichincha), a alrededor de ocho mil indígenas en contra de la dolarización decretada por el entonces presidente Jamil Mahuad. Allí estuvo Inocencio luchando junto a los suyos. Las fuerzas indígenas se tomaron el Congreso Nacional y el Palacio de Carondelet con apoyo de un sector del Ejército. Fue en el 2001 que diez mil manifestantes llegan a Quito liderados por la Conaie, el Frente Unitario de Trabajadores y la Fenocin. La lucha se extendió por dos semanas con un saldo de seis muertos y treinta heridos. En el año 2006, tras el anuncio del gobierno de tener negociaciones del Tratado de Libre Comercio, miles de indígenas y campesinos bloquearon las principales vías de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y la localidad de Cayambe. En el Gobierno de Rafael Correa, en 2009, la Conaie y las Juntas de Regantes y Agua Potable realizaron una marcha por la defensa del agua, la vida y el Estado plurinacional.

Inocencio sí sabía que su historia es la historia de Cecilio Taday, Fernando Daquilema, Alejo Sáenz, Jesús Gualavisí o Dolores Cacuangó, destacados líderes y lideresas indígenas que han encabezado guerras, levantamientos y rebeliones.

Junto a ellos está Inocencio Tucumbi en el atrio de la historia. Por su lucha y entrega generosa nosotros sabemos del acuerdo conseguido la noche del domingo 13 de octubre; por la lucha de sus hermanos, el Decreto 883 quedó derogado. Inocencio sabe que no se fue solo, que junto a él cayeron dos, tres, cinco, siete, diez de sus compañeros de lucha o una cantidad que deberá aclarar el ministerio responsable de sus muertes

Su vida y lucha están en la conciencia de su pueblo y su muerte en la conciencia de los ministros que ordenaron reprimir. Inocencio ha vuelto al páramo. Allí deambula eternamente su *jayni*, alma pura.

Hasta siempre, hermano Inocencio. Tu vida ejemplar ilumina la lucha por el *sumak kausay* de tu pueblo que sigue tu sendero.

**HAY QUIENES SUEÑAN
CON MONSTRUOS:**

**¿QUIÉN SOSTUVO
AL MOVIMIENTO
INDÍGENA?**

Foto: Johis Alarcón / Fluxus Foto

#MOVIMIENTOINDÍGENA #LEVANTAMIENTO #PARO

MILENA ALMEIDA

Durante los once días de huelga nacional se construyeron imaginarios de una huelga financiada por el correísmo, primero, y por Maduro, después. Parecía que muchos medios tenían un guión claro: mantener a Lenín Moreno y construir los elementos necesarios para convencer al pueblo de que se fraguaba un intento de golpe de Estado. Pero la pregunta a responder es: ¿quién sostuvo durante once días al movimiento indígena?

Doña Carmita, la costurera de la subida a La Gasca, ella financió al movimiento indígena. Sin redes, sin preparación formal en la política, reunió a la familia para preparar unos sándwiches, porque sabe que en la Central están sus hermanos de Cotopaxi y han de tener hambre, y han de tener frío también. Por eso lleva la cobijita más abrigada, los zapatos

fuertes del hijo, esos de planta resistente para que caminen y unos trapitos cortados para ponerles agua con bicarbonato para que no les hagan mal las bombas lacrimógenas.

Y financiaron las familias de Guayllabamba que reunieron a las comunidades para recoger los mejores aguacates, porque la comida es más rica si le ponen aguacate al loco, pero también quintales de pepinillos para una ensaladita, y cebolla para la sopita de fideos, y agüita para que no tengan sed.

Y los estudiantes de Tena que recogieron medicinas, porque falta paracetamol y zablón. Luego era un camioncito con vendas, algodón, esparadrapo.

Financiaron los barrios de Toctiuco, La Comuna, Las Casas; de allí bajaron familias a cocinar, para que nunca les

Ese es el monstruo con el que sueña Moreno, un pueblo que se levantó para sostener la huelga, el paro nacional. Ese monstruo es el vecino que cogió la escoba para barrer, ese monstruo es la peluquera, el albañil, la costurera, el gremio de panaderos que no dejaron de elaborar pan, cientos de cajas de panes de todo tipo, injertos, mestizos, manitas, empanadas.

falte arrozito y caldito caliente, ellas venían con su tablita de picar y el cuchillo más afilado para preparar el mejor picadillo.

Ese es el monstruo con el que sueña Moreno, un pueblo que se levantó para sostener la huelga, el paro nacional.

Ese monstruo es el vecino que cogió la escoba para barrer, ese monstruo es la peluquera, el albañil, la costurera, el gremio de panaderos que no dejaron de elaborar pan, cientos de cajas de panes de todo tipo, injertos, mestizos, manitas, empanadas.



APUNTES SOBRE EL TRIUNFO POPULAR DE OCTUBRE



Foto: Johis Alarcón / Bloomberg

#SUJETO HISTÓRICO #MOVIMIENTO INDÍGENA #ACUERDO #DEROGACIÓN DEL DECRETO #TRIUNFO

REVISTA CRISIS

Aunque las voces escépticas dudaban del triunfo popular en el levantamiento nacional liderado por el movimiento indígena, las jornadas del octubre rebelde de 2019 y el sorpresivo desenlace de la batalla de Quito concluyeron con la derogatoria total del acuerdo 883 y con la construcción de nuevas figuras en la política nacional.

A través del Decreto 894 se calma el país al dar, sin dilaciones, la medida solicitada por los manifestantes en la calle, y, además, permite el integrar a más actores de los movimientos y organizaciones sociales a las mesas de negociación para el tratamiento del tema de los subsidios y su focalización en los sectores más necesitados. Ahora, las negociaciones y la calidad del decreto que presentarán a la ciudadanía en los siguientes días serán un

termómetro importante para entender el compromiso de las dirigencias del movimiento indígena con sus bases (asunto que han demostrado sostener con legitimidad hasta ahora), así como la fuerza del Gobierno para proponer medidas ancladas ideológicamente en el proyecto país-hacienda de las oligarquías.

Un nuevo momento

En las movilizaciones quedó claro que el sujeto histórico de transformación profunda de nuestro país son los pueblos-nacionalidades indígenas y las formas colectivas tradicionales de organización. No se trata de una figura mesiánica, como se construyó la política en la década pasada, sino que es todo un pueblo que está altamente organizado y tiene dirigentes de gran valía. Por tanto, quienes asumían una supuesta dirección del

En las movilizaciones quedó claro que el sujeto histórico de transformación profunda de nuestro país son los pueblos-nacionalidades indígenas y las formas colectivas tradicionales de organización. No se trata de una figura mesiánica, como se construyó la política en la década pasada, sino que es todo un pueblo que está altamente organizado y tiene dirigentes de gran valía.

bloque contrahegemónico, al sentirse los más avanzados de la tendencia, se dieron cuenta de que no es así, de que el Ecuador profundo está listo para superar los liderazgos tecnócratas y el esquema golpista del pasado, ya que al término de otras jornadas históricas, la defenestración del primer mandatario implicaba que el sucesor usualmente era un cuadro mediador de las oligarquías. Ahora, hasta el momento, con el objetivo cumplido, esto no sucedió y se vislumbra una nueva generación de representantes políticos nacidos del seno popular en contradicción con los políticos de siempre.

Por su parte, el Gobierno, desgastado y con una muy baja popularidad, al verse sin más cartas por la profunda molestia que significó el alza del 127% en el precio del diésel —el combustible fundamental para el comercio interno—, retrocedió en sus pretensiones, no sin antes amenazar con judicializar a todos quienes estuvieron en el paro, con especial saña en contra de los remanentes institucionales del correísmo (esto, como para no dejar campo a que se organicen para el 2021). Pero el resultado de esto no es solo el retroceso de Correa como una posibilidad, sino la crisis absoluta de los partidos políticos y movimientos en su totalidad, señalando que el camino a seguir es uno diferente, que es hora de que las bases, el pueblo, asuman la conducción de sus destinos a través de las formas de organización colectivas ya existentes.

División de clases

La fractura no solo es en la esfera de la política electoral, sino también en los acuerdos políticos del bloque progresista, en el que muchas personalidades o *influencers* que asumieron una postura pro pueblos y nacionalidades a medida que la lucha en contra del correísmo avanzaba pocos años atrás, ahora se han revelado contrarios a estos mismos actores porque asumieron una postura clasista, esto es, en defensa de los millones de

pobres de la patria. De esta manera, el objetivo no fue la salida del presidente, sino la caída de las medidas que el FMI nos impone como parte de su agenda de economía política en la región. Es, en esa medida, la primera victoria concreta ante las intenciones de la burocracia bancaria internacional, a pesar de la violencia desatada desde el Estado.

Ricos y pobres; eso quedó en la retina de una gran cantidad de espectadores que pudieron observar las negociaciones entre el gobierno y la Conaie. Por un lado,

un ministro Richard Martínez, representante de las cúpulas, que da un ejemplo de un auto de cuarenta mil dólares; frente a él, la postura de un dirigente de base, Leonidas Iza, quien lo analiza desde el tractor y el ingreso de una familia de escasos recursos. Ahora queda cuidar la victoria, seguir trabajando por la unidad del bloque popular y el desarrollo de una política desde las bases que sea capaz de transformar este Estado que no puede dar respuestas en algo que realmente sirva al pueblo.

ECUADOR: A PESAR DE LA REPRESIÓN, LA REVOLUCIÓN DE LOS ZÁNGANOS SOCAVA EL PODER



Foto: Andrés Yépez / Fluxus Foto

DENIS ROGATYUK

Se acabó la zanganería (“vamos a dejar de zumbar”). Es con estas palabras que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha decretado el fin de una política de subsidio a la gasolina y los combustibles que ha beneficiado a las clases populares durante cuarenta años. Zánganos (que significa “abejorros”, pero también “perezosos”) es un término utilizado por los sectores más ricos de la población ecuatoriana para referirse a los trabajadores y a los pobres y para sugerir su debilidad mental o falta de educación. El insulto llegó al punto de que los opositores de Lenín Moreno finalmente lo convirtieron en una pancarta y designaron su movimiento como una “revolución de zánganos”. Este enfrentamiento a una severa represión por parte del Estado ecuatoriano.

Una serie de protestas masivas siguió a la conmoción, ya que el Gobierno de Lenín Moreno anunció un nuevo programa de reforma neoliberal para cumplir con los requisitos del Fondo Monetario Internacional (FMI). La causa de semejante explosión de protestas está en el anuncio del Gobierno del día 1 de octubre, que revela una serie de medidas económicas destinadas a reducir el gasto público “derrochador” y a equilibrar el presupuesto. La eliminación completa de los subsidios a la gasolina, establecidos desde la década de 1970, fue la medida más controvertida; resultó en un aumento del 123% en el precio del diésel y en un aumento similar en los precios de otros combustibles.

Anticipando la probabilidad y la magnitud de las protestas dirigidas contra su Gobierno, Lenín Moreno declaró un

“estado de emergencia nacional” y procedió a desplegar la policía y el ejército para asegurar la capital, Quito, así como los puntos estratégicos del país. Entre las fuerzas políticas más visibles al frente del movimiento se encontraban el Movimiento para la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, así como una serie de movimientos sociales y sindicatos, como el Frente Unido de Trabajadores y la poderosa organización indígena Conaie. A esto deben agregarse los sindicatos de transporte y las asociaciones de taxistas, que anunciaron su apoyo a la huelga del 3 de octubre, paralizando la actividad de varias ciudades importantes, como Quito y Cuenca. La provincia de Pichincha se ha convertido en el epicentro de la protesta popular, con más de 10 000 huelguistas y manifestantes. Aunque los sindicatos del transporte suspendieron sus acciones el 5 de noviembre, las acciones de otras organizaciones, en particular las organizaciones indígenas, no mostraron signos de disminuir. Por el contrario, las protestas tomaron la magnitud de verdaderos levantamientos el martes 9 de octubre, cuando los manifestantes irrumpieron brevemente en el Parlamento ecuatoriano.

El estado de emergencia ha sido criticado por el Movimiento Revolución

Ciudadana por su inconstitucionalidad, su falta de parámetros específicos con respecto a su proporcionalidad, legalidad, extensión temporal y territorial, así como por su propia racionalidad (los criterios establecidos en la Constitución para declarar el estado de emergencia). Se lo considera mayoritariamente un medio para prevenir levantamientos masivos en las principales ciudades del país, similares a los que derrocaron a los Gobiernos de Jamil Mahuad en 2002 y de Lucio Gutiérrez en 2005. Hay 350 ecuatorianos arrestados desde el inicio de las protestas el 2 de octubre, mientras que veinte de ellos resultaron heridos y uno murió. En Caymabe, ciudad de Pichincha, hay informes sobre el uso de munición real contra los manifestantes.

La eliminación de los subsidios a la gasolina no ha hecho más que agregar leña al fuego del descontento popular que crece a partir del giro neoliberal del mandato de Lenín Moreno y su represión autoritaria de los movimientos de protesta. Moreno ha intentado en repetidas ocasiones desacreditar la política económica implementada por Rafael Correa desde 2007, que consistió en una combinación de aumento del gasto social, inversión pública en energía y proyectos de infraestructura destinados a la diversificación de una economía dependiente del petróleo. En

contraste, el Gobierno de Lenín Moreno ha implementado una serie de reformas decididas en las oficinas del FMI que incluyen el despido de miles de funcionarios, la reducción y privatización del sector público (en particular, del sector bancario público), así como recortes presupuestarios en las áreas de salud y educación. Como resultado, los indicadores de pobreza y desigualdad han aumentado significativamente durante el período de gobierno de Moreno.

Según cifras oficiales, la tasa de pobreza estructural, que se situó en el 23,1% en junio de 2017, alcanzó el 25,5% en junio de 2019. Varios economistas estiman que superará el 30% si se implementan todas las reformas anunciadas por Moreno. La pobreza extrema experimentó un aumento similar, al pasar de 8,4 a 9,5% durante el mismo período. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad entre el 10% más rico y el 10% de menos ingresos en una población, y para el que un valor de 0 es igual a una igualdad perfecta (mientras que un valor de 1 denota una situación en la que una única persona tiene todos los ingresos de un país), también empeoró: alcanzó un valor de 0,48 en junio de 2019, frente al 0,46 de junio de 2017.

Estas nuevas orientaciones económicas se combinan con una violación

La causa de semejante explosión de protestas está en el anuncio del Gobierno del día 1 de octubre, que revela una serie de medidas económicas destinadas a reducir el gasto público “derrochador” y a equilibrar el presupuesto. La eliminación completa de los subsidios a la gasolina, establecidos desde la década de 1970, fue la medida más controvertida.

permanente de la ley constitucional, que se manifiesta en una cacería de brujas dirigida contra los principales líderes de la Revolución Ciudadana –el ex vicepresidente Jorge Glas, encarcelado por cargos dudosos, el exministro Ricardo Patiño o la exdiputada Sofía Espin–, la censura de varios medios críticos, la disolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social –una asamblea de participación popular cuya elección está planificada por la Constitución ecuatoriana de 2008–, o la retirada de Ecuador de la Unasur, del ALBA y de la OPEP. Todo esto ocurre en el contexto de la revelación del escándalo de corrupción *INA Papers*, el descubrimiento

La eliminación de los subsidios a la gasolina no ha hecho más que agregar leña al fuego del descontento popular que crece a partir del giro neoliberal del mandato de Lenín Moreno y su represión autoritaria de los movimientos de protesta.

de cuentas bancarias en el extranjero relacionadas con la familia de Moreno. El Movimiento Revolución Ciudadana liderado por Rafael Correa aprovecha este doble rechazo popular del autoritarismo y el giro neoliberal del Gobierno. Según explica Esther Cuesta, miembro del Movimiento, “Millones de ecuatorianos (...) rechazan las medidas económicas neoliberales dictadas por el FMI

e impuestos al pueblo de Ecuador por el Gobierno de Lenín Moreno porque empobrecerán a la gran mayoría de la población: a la clase media, la clase trabajadora y los pobres, así como al pequeño comercio”. Cuesta ubica al movimiento de los zánganos en un contexto histórico más amplio: “Desde que se anunció el paquete de medidas, lo que comenzó como una huelga de transporte resultó ser un movimiento social emergente en todo el país y en diferentes sectores de la población. Los ecuatorianos tienen buena memoria. Las políticas de ajuste estructural implementadas en los años ochenta y noventa causaron desempleo masivo, empobrecieron a la población y empujaron al 12% de los ecuatorianos a emigrar”. Un rechazo de las políticas neoliberales de las cuales el Movimiento Revolución Ciudadana podría beneficiarse en las próximas elecciones presidenciales, en 2021... si las hubiera.



MOVIMIENTOS POPULARES ESPONTÁNEOS, ENTRE EL ESPONTANEÍSMO Y LA TRANSFORMACIÓN



Foto: Karen Toro / Fluxus Foto

#MOVIMIENTOSSOCIALES
#PARTIDOSPOLÍTICOS
#ESPONTANEÍSMO
#HISTORIA
#AMÉRICALATINA

MARCELO COLUSSI

¿Pueden estas insurrecciones populares espontáneas dirigirse solas a un cambio revolucionario, o es necesaria la presencia de una organización política articulada que oriente el camino? Vieja y trascendental discusión.

Partidos políticos en crisis

A partir de las últimas décadas del siglo pasado asistimos a una gradual pero permanente decadencia de los partidos políticos tradicionales. Esto se da tanto en la derecha como en la izquierda. Las poblaciones van evidenciando un creciente hastío en relación a las formas tradicionales de la “política profesional”, dada por tecnócratas, burócratas siempre alejados de la gente y “mentirosos de profesión”. La política hecha a través de los partidos (farsante, embustera, manipuladora) sigue siendo la forma en que se maneja la

institucionalidad de los Estados nacionales, pero cada vez más es la mercadotecnia, el manejo “de mentes y corazones” —como pedía Joseph Goebbels en su momento en la Alemania nazi, o más recientemente el polaco-estadounidense Zbigniew Brzezinski, maestro en estas artes—, la tecnología publicitaria, la que *hace* la política. O, al menos, la que se encarga de *manejar* a las grandes masas. Las decisiones fundamentales, por supuesto, se siguen haciendo en las sombras. Y no las toman los políticos de profesión precisamente, sino los que les financian las campañas y para quienes, en definitiva, trabajan.

De ningún modo esos partidos están agotados, pues continúan siendo correas de transmisión entre el poder económico —los verdaderos amos— y las grandes masas, ofreciendo las capas de burócratas

que manejan los aparatos estatales. Pero la credibilidad de esos partidos está en este momento por los suelos en todos los países capitalistas del mundo. De todos modos, el credo fundamental de la politología oficial, de la llamada democracia representativa, está dado por la existencia de esos partidos. El resguardo de lo que la ciencia política de derecha funcional al sistema llama gobernabilidad (o el inefable neologismo de *gobernanza*) son esos –aunque desacreditados y un tanto aborrecidos– partidos políticos. Por así decir: un mal necesario para el sistema.

En el campo de la izquierda las cosas también están complicadas. Caídas las primeras experiencias socialistas de la historia (por la desintegración de la Unión Soviética y la extinción del bloque socialista europeo), el avance de las fuerzas de cambio social quedó un tanto –o bastante– relegado. Hoy, una pregunta clave en el campo de la izquierda es la de cómo construir alternativas

válidas, consistentes, realmente efectivas. Los partidos políticos clásicos, con un esquema leninista, si se quiere, en el momento actual no están en crecimiento. Antes bien: han perdido credibilidad, no arrastran gente, al menos en lo que llamamos Occidente. El caso de la República Popular China es otra historia, con un Partido Comunista único por su tamaño (90 millones de afiliados) y su papel histórico. Es el verdadero garante de las transformaciones en curso, de haber sacado de la pobreza a 700 millones de personas, y de haber hecho del país una potencia económica, científica y tecnológica. Pero, insistamos, ese es un caso peculiar, irrepetible quizá en nuestras latitudes.

Hoy por hoy todo lo que suene a confrontación, como consecuencia de décadas de bombardeo mediático-ideológico, es visto como peligroso o, cuando menos, como desconfiable. De ahí que los partidos políticos de izquierda, los

Estos movimientos campesinos y de reivindicación de territorios propios constituyen una clara afrenta a los intereses del gran capital transnacional y a los sectores hegemónicos locales. En ese sentido, funcionan como una alternativa, una llama que se sigue levantando, y arde, y que eventualmente puede crecer y encender más llamas.

tradicionales partidos comunistas (leninistas, o también maoístas, o trotskistas), no están hoy precisamente en crecimiento. Y si se trata de partidos socialdemócratas, es decir, de fuerzas políticas que hablan un lenguaje capitalista “moderado”, “capitalismo con rostro humano”, no hay la más mínima diferencia con los partidos políticos de derecha. Los movimientos guerrilleros, por otro lado, en la actualidad no son opción. Fuerzas alzadas en armas con décadas de acción político-revolucionaria hoy se desarman para entrar al juego democrático-parlamentario, sin conseguir con ello poner en marcha el ideario que los acompañó anteriormente.

A decir verdad, actualmente no se ve muy clara ninguna propuesta real de transformación social. Ello no significa, en modo alguno, que el sistema capitalista esté blindado ante los cambios. Son incontestables los elementos que demuestran su inviabilidad a futuro: el solo ecocidio (la monumental catástrofe medioambiental) que ha producido con su alocado modelo de consumo, o el tener las guerras como una siempre posible válvula de escape cuando se traba, deja ver su insostenibilidad. Sus negocios más grandes son las armas, el petróleo y las drogas ilegales, es decir: todas industrias de la muerte. Pero, aunque no

ofrezca salida, solo, por su propio peso, no cae. Es necesario que alguien lo derribe. ¿Quién es el sujeto revolucionario en la actualidad, entonces? ¿Es posible hoy levantar las banderas de partidos políticos revolucionarios?

Esto en modo alguno implica que los partidos comunistas que han llegado al poder (caso chino, caso cubano o norcoreano) sean obsoletos, estén en retirada o no gocen de alta credibilidad. Son ellos, en realidad, la garantía última de la construcción socialista que, con diferencias y características propias particulares, está teniendo lugar en cada uno de esos países. Pero ante este panorama de despolitización forzada, esta apatía por lo social que se vive desde la implementación de los planes neoliberales, con esta manipulada conducta de indolencia política que se ha impuesto, en distintas latitudes del planeta, y sin dudas en Latinoamérica con una considerable fuerza (ganan las elecciones candidatos de ultraderecha como Macri, Bolsonaro, Duque, Piñera, Giammattei), los que sí se van dibujando como alternativas anti-sistémicas, rebeldes, contestatarias, son los grupos que presentan demandas más puntuales, quizá sin un proyecto político socialista en sentido estricto: luchas por la tierra, movimientos de desempleados, de jóvenes, de amas de casa. O, con

una gran fuerza y sentido antisistémico, movimientos campesinos e indígenas que luchan y reivindican sus territorios ancestrales.

Movimientos populares

Quizá sin una propuesta clasista, revolucionaria en sentido estricto (al menos como la concibió el marxismo clásico, como las que han levantado los partidos comunistas tradicionales a través de los años en el siglo xx), estos movimientos campesinos y de reivindicación de territorios propios constituyen una clara afrenta a los intereses del gran capital transnacional y a los sectores hegemónicos locales. En ese sentido, funcionan como una alternativa, una llama que se sigue levantando, y arde, y que eventualmente puede crecer y encender más llamas. De hecho, en el informe *Tendencias Globales 2020 – Cartografía del futuro global* del consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, dedicado a estudiar los escenarios futuros de amenaza a la seguridad nacional de ese país, puede leerse: “A comienzos del siglo xxi, hay grupos indígenas radicales en la mayoría de los países latinoamericanos, que en 2020 podrán haber crecido exponencialmente y obtenido la adhesión de la mayoría de los pueblos indígenas (...) Esos grupos podrán establecer relaciones con grupos terroristas internacionales

y grupos antiglobalización (...) que podrán poner en causa las políticas económicas de los liderazgos latinoamericanos de origen europeo. (...) Las tensiones se manifestarán en un área desde México a través de la región del Amazonas” (Yepe, 2011). Para enfrentar esa presunta amenaza que afectaría la gobernabilidad de la región poniendo en entredicho la hegemonía continental de Washington y cuestionando así sus intereses (¿quizá también la lógica capitalista en su conjunto?), el Gobierno estadounidense tiene ya establecida la correspondiente estrategia contrainsurgente: la *Guerra de Red Social* (guerra de cuarta generación, guerra mediático-psicológica donde el enemigo no es un ejército combatiente sino la totalidad de la población civil), tal como décadas atrás lo hiciera contra la Teología de la Liberación y los movimientos insurgentes que se expandieron por toda Latinoamérica.

Hoy, como dice el portugués Boaventura de Sousa Santos refiriéndose al caso colombiano en particular y latinoamericano en general, escrito antes de la desmovilización de la principal fuerza guerrillera de Colombia, pero igualmente válido ahora, “la verdadera amenaza no son las FARC [o alguna organización guerrillera vigente]. Son las fuerzas progresistas y, en especial, los movimientos

indígenas y campesinos. La mayor amenaza [para la estrategia hegemónica de Estados Unidos, para el capitalismo como sistema] proviene de aquellos que invocan derechos ancestrales sobre los territorios donde se encuentran estos recursos [biodiversidad, agua dulce, petróleo, riquezas minerales], o sea, de los pueblos indígenas” (De Sousa Santos, 2008). Anida allí, entonces, una cuota de esperanza si de transformación se trata. ¿Quién dijo que todo está perdido?

No hay dudas de que la contradicción fundamental del sistema sigue siendo el choque irreconciliable de las contradicciones de clase, de trabajadores y capitalistas. La savia vital del sistema es aún la producción centrada en la ganancia empresarial. En ese sentido, las premisas de trabajo asalariado y capital siguen siendo absolutamente determinantes: los trabajadores generan la riqueza que una clase, la poseedora de los medios de producción, se apropia. Esa contradicción –que no ha terminado, que sigue siendo el motor de la historia, amén de otras contradicciones sin dudas muy importantes: las asimetrías de género, la discriminación étnica, el adultocentrismo, la homofobia o el desastre ecológico– pone como actores principales del escenario revolucionario a los trabajadores en cualquiera de sus formas: proletariado

industrial urbano, proletariado agrícola, campesinos pobres, trabajadores de clase media de la esfera de servicios, intelectuales, personal calificado y gerencial de la iniciativa privada, amas de casa, subocupados varios, trabajadores precarizados e informales. Lo cierto es que, con la derrota histórica de estos últimos años luego de la caída del Muro de Berlín y de los retrocesos habidos en el campo socialista, con el tremendo revés que la clase trabajadora ha sufrido a nivel mundial a manos del capitalismo salvaje de estos años, eufemísticamente llamado *neoliberalismo* (precarización de las condiciones generales de trabajo, pérdida de conquistas históricas, retroceso en la organización sindical, tercerización), los trabajadores, los verdaderos y únicos productores de la riqueza humana, quedaron desorganizados, vencidos, quizá desmoralizados. De ahí que estos movimientos campesinos-indígenas que reivindican sus territorios son una fuente de vitalidad revolucionaria sumamente importante.

La pregunta sigue siendo por dónde ir si hablamos de transformación, de cambio social. Evidentemente la potencialidad de este descontento, que en buena parte de América Latina se expresa en toda la movilización popular anti-industria extractiva (de minería, centrales

hidroeléctricas y monoproducción agrícola destinada al mercado internacional) puede marcar un camino. Fidel Castro, interrogándose por la situación actual de la lucha revolucionaria en todo el mundo, preguntaba:

¿Puede sostenerse, hoy por hoy, la existencia de una clase obrera en ascenso, sobre la que caería la hermosa tarea de hacer parir una nueva sociedad? ¿No alcanzan los datos económicos para comprender que esta clase obrera -en el sentido marxista del término- tiende a desaparecer, para ceder su sitio a otro sector social? ¿No será ese innumerable conjunto de marginados y desempleados cada vez más lejos del circuito económico, hundiéndose cada día más en la miseria, el llamado a convertirse en la nueva clase revolucionaria? (Castro, 1998)

Sin dudas, las posibilidades de transformación social se ven hoy bastante escasas. El sistema capitalista ha sabido cerrar filas contra el cambio. Pero siempre quedan rendijas. El sistema lleva en sí mismo el germen de su destrucción. Las contradicciones que le son inherentes -la lucha de clases- dinamizan la historia, y en algún momento eso estalla. Como dijo el multimillonario estadounidense Warren Buffett: “Por supuesto

que hay luchas de clase, pero es mi clase, la clase rica, la que está haciendo la guerra, y la estamos ganando” (en Stein, 2006). La gran incógnita es cómo hacer hoy para encender esa mecha que ponga en marcha las transformaciones.

Movimientos populares y vanguardia

Esos movimientos populares espontáneos que mencionábamos más arriba, definitivamente tienen una gran potencialidad. En Argentina, por ejemplo, en diciembre del 2001, al grito de “¡Que se vayan todos!”, en dos semanas sacaron a cinco presidentes. En Ecuador, los movimientos indígenas, liderados en parte por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y en parte actuando espontáneamente, ya tienen una larga tradición de lucha y movilización, pues en estos últimos años expulsaron del Gobierno a tres presidentes por corruptos, antipopulares y represores: Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez. Y en estos pasados días, con una valiente acción de calle incendiando la ciudad capital, Quito, lograron que el claudicante presidente Lenín Moreno diera marcha atrás con un acuerdo fijado por el Fondo Monetario Internacional que contenía un “paquetazo” de medidas de ajuste económico antipopular.

Ejemplos de movimientos populares espontáneos hay muchos, heroicos en todos los casos, valerosos, que se enfrentaron en numerosas ocasiones a las fuerzas represoras, y triunfaron: la reacción espontánea de la población venezolana ante un aumento desmedido de tarifas en lo que se conoció como *Caracazo*, en 1989, y que posibilitó la aparición de Hugo Chávez años después. O la salida espontánea de cientos de miles de seguidores de Hugo Chávez, ya presidente, cuando fue derrocado por un golpe de Estado de extrema derecha en 2002, logrando su restitución casi inmediata.

En la historia reciente hay cuantiosos ejemplos de estallidos populares, de movimientos sin propuestas partidarias, pero de gran energía política, que influyen en las dinámicas sociales, a veces de forma profundísima: el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, los movimientos okupa en diversas partes del mundo tomando tierras y construcciones abandonadas para habitar, los movimientos por la diversidad sexual u otros estallidos espontáneos como el de la Primavera Árabe (luego manipulada y tergiversada). Aclárese rápida y muy enfáticamente que no hacemos entrar aquí lo que se conoce como “Revoluciones de colores”, por ser ellas manipulaciones arteras hechas desde centros de poder

con fines bien delimitados, utilizando descontentos populares que son vilmente manejados (recuérdese Goebbels y Brzezinsky).

Ahora bien, la pregunta fundamental ante todo esto es si estos movimientos –desde la reivindicación anti-industria extractiva a los desfiles del orgullo gay; desde las protestas estudiantiles con toma de universidad hasta los cacero-lazos que aparecen espontáneamente cada tanto– constituyen un verdadero fermento revolucionario, una verdadera chispa que pueda encender el fuego del cambio profundo. La observación serena de los resultados de todos ellos muestra que sí, efectivamente, como acaba de suceder en Ecuador, tienen una enorme fuerza política (le torcieron el brazo a uno de los más poderosos organismos

No hay dudas de que la contradicción fundamental del sistema sigue siendo el choque irreconciliable de las contradicciones de clase, de trabajadores y capitalistas. La savia vital del sistema es aún la producción centrada en la ganancia empresarial.

del capital global en este caso), pero no alcanzan para colapsar al sistema, para producir una revolución victoriosa. Como alguna vez expresó un mural callejero durante la guerra civil española: “Los pueblos no son revolucionarios, pero a veces se ponen revolucionarios”. ¿Qué se necesita para que esa chispa, ese enorme descontento popular que anida en la gente se pueda transformar en un verdadero cambio de estructuras? Una vanguardia, un grupo organizado y con claridad política que pueda conducir esa fuerza contestataria encausándola en un auténtico proyecto transformador.

Este breve opúsculo no hace sino poner en debate este espinoso, dificultoso y controversial tema de la vanguardia (o como quiera llamársele). ¿Pueden estas insurrecciones populares espontáneas dirigirse solas a un cambio revolucionario, o es necesaria la presencia de una organización política articulada que oriente el camino? Vieja y trascendental discusión. Entiendo que la experiencia

enseña que el espontaneísmo solo no alcanza. Pero ¿cómo se construye esa fuerza de vanguardia?

Referencias

Castro, F. (1998). *Respuesta a Pablo Mora*. Recuperado de http://www.archivocubano.org/especial_fidel2.html

De Sousa Santos, B. (13 de marzo de 2008). “Estrategia continental”. En *Página/12*. Recuperado de <https://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-100577-2008-03-13.html>

Stein, B. (26 de noviembre de 2006). “In Class Warfare, Guess Which Class Is Winning”. En *The New York Times*. Recuperado de https://www.nytimes.com/2006/11/26/business/yourmoney/26every.html?_r=0

Yepe Papastamatin, R. (2011). *Los informes del Consejo Nacional de Inteligencia*. Recuperado de <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=140463>



TRIUNFO DE LA INSURRECCIÓN

INDÍGENA ECUATORIANA



Foto: Iván Castaneira. Wambra.ec Medio Digital Comunitario

#DEROGACIÓNDELDECRETO #ACUERDO #MOVIMIENTOINDÍGENA #CONAIE

MAGDALENA GÓMEZ

La virtual insurrección indígena nacional en Ecuador, encabezada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), ha logrado un triunfo el pasado 13 de octubre, con el acuerdo de la derogación del Decreto 883. El acuerdo es producto de la negociación entre el dirigente de la Conaie Jaime Vargas, junto al resto de liderazgos, y el presidente Lenín Moreno. Las conversaciones se transmitieron en cadena nacional por pedido de la propia Conaie; el acuerdo resultante se logró con la mediación del representante en Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas en conjunto con la Conferencia Episcopal. Con la derogación se instalará una comisión formada por representantes de ambas partes y de otros sectores sociales para elaborar un nuevo decreto.

Para valorar la trascendencia de este triunfo, vale la pena ofrecer un recuento del levantamiento y las reacciones y posturas que de este se derivaron: desde las diversas regiones del país avanzaron hacia Quito miles de integrantes de los diversos pueblos y nacionalidades con la exigencia de que el presidente Lenín Moreno derogara el Decreto 883 que, siguiendo al Fondo Monetario Internacional (FMI), emitió el pasado 1 de octubre. Con él se establecía el fin de los subsidios a los combustibles, con un alza de 123% en el precio del galón de diésel y de 30% al de la gasolina; además, se incluían medidas laborales contra los derechos de los trabajadores.

Aparte de la ocupación de Quito, no había región del país que no estuviera paralizada y sufriendo desabasto. Si bien la Conaie representa la fuerza más

Nuestra lucha es por la salida del #FMI de Ecuador. No permitiremos a los que nos criminalizaron por diez años aprovecharse de nuestra lucha y la del pueblo ecuatoriano.

significativa, también participaron la central Frente Unitario de los Trabajadores, los sindicatos de educadores y la federación de estudiantes universitarios, a los que se sumaron amplios sectores. Las universidades crearon centros de paz y de acopio de víveres. La Defensoría del Pueblo denunció en una semana más de un millar de detenciones y otro tanto de heridos y al menos siete personas fallecidas. Hacia el fin de semana, intelectuales destacados, entre ellos Noam Chomsky, analizaron el neoliberalismo en Ecuador y en otro pronunciamiento muy amplio se introdujo la referencia constitucional ecuatoriana para transitar a una nueva elección presidencial. Ninguno colocó en el centro a los pueblos indígenas que encabezaron el levantamiento.

La energía y voluntad indígena se cruzaron con la intervención del correísmo enarbolado por el expresidente Rafael Correa, que buscó aprovechar este levantamiento para alimentar su aspiración de retomar el control del país. Algunos dirigentes indígenas denunciaron cómo en las manifestaciones estaban activos sus

simpatizantes. Basta observar algunos de los videos que se difundieron y constatar cómo la demanda de la derogación del Decreto 883 quedaba en segundo plano, para colocar en el primero el reclamo por la caída de Moreno.

La respuesta del presidente ecuatoriano al levantamiento consistió en ampliar la represión e implantar un toque de queda el sábado 12 de octubre; en otras palabras, en dar el poder a las fuerzas armadas y policiales. De inmediato, el comando conjunto de las fuerzas armadas anunció, más allá de las bombas lacrimógenas y balas de goma, el control de espacios públicos, de registro de personas, de actos de delincuencia, aprehensiones, y de antenas receptoras de telecomunicaciones entre otras medidas. En diez días, el presidente ecuatoriano pasó del estado de excepción a la militarización abierta.

En contraste, la Conaie logró recuperar la capacidad de movilización masiva, en la que participaron generaciones nuevas. Un paso en falso les podía significar un retroceso difícil de superar; la

mayoría de los dirigentes, empezando por su presidente, lo sabían. Dado este panorama, para la Conaie fue crucial detener el paquetazo económico que afectó las de por sí depauperadas economías de la mayoría de la población. Por ello se deslindaron del correísmo. Así lo tuiteó el presidente de la Conaie (el 8 de octubre de 2019): “Nuestra lucha es por la salida del #FMI de Ecuador. No permitiremos a los que nos criminalizaron por diez años aprovecharse de nuestra lucha y la del pueblo ecuatoriano. ¡Miserables!”. Pareció que esta fue la señal esperada por Lenín Moreno para aceptar la mediación y la derogación de su acuerdo, pues en el diálogo transmitido fue muy enfático en la crítica al

correísmo y la intervención de fuerzas externas aliadas, así como en la ponderación al deslinde de la Conaie. No resultaron creíbles su retórica en favor de los indígenas y su supuesto asombro por la afectación que el decreto causaría. Tampoco lo es que la medida fuera para evitar que las fuerzas contrarias a la ley traficaran combustible y se favorecieran. De la parte indígena fueron contundentes al ubicar los problemas estructurales que tienen por el neoliberalismo, el capital trasnacional y las concesiones. Todo un desafío la redacción de un nuevo acuerdo. La Conaie ha suspendido las medidas de hecho en el territorio y celebró con alegría popular al grito de ¡Sí se pudo!

PROTESTAS EN ECUADOR:

¿SÍMBOLO DE UN CAMBIO ANUNCIADO?



Foto: David Díaz / Fluxus Foto

#MOVIMIENTOSOCIAL
#MEDIDAS
#FMI
#CORREA

ENTREVISTA A GUILLAUME LONG POR EL *INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATÉGIQUES DE FRANCIA*

Tras el anuncio de varias reformas en Ecuador, la población se movilizó fuertemente en todo el país, lo que provocó enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes. En respuesta, el presidente Lenín Moreno declaró el Estado de emergencia. Guillaume Long, investigador asociado del Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), ofrece un análisis de la situación y su impacto en América Latina.

¿Cómo se puede entender el movimiento social que se desarrolla repentinamente en Ecuador? ¿La situación del Estado de emergencia no tiene precedentes para el país?

El movimiento social en Ecuador sigue los anuncios del presidente Moreno de

reformas económicas y sociales. Hay tres partes distintas: por un lado, el fin de los subsidios estatales sobre el precio del combustible, lo que resulta en un aumento del 123% de un día para el otro. Esto tiene un efecto muy significativo en un país como Ecuador, ya que los subsidios afectan no solo el combustible utilizado para el transporte individual, sino también el del transporte público y el de los alimentos, que han experimentado un aumento generalizado de los precios. Por otro lado, se implementa una reforma de la legislación laboral que incluye la reducción de las vacaciones pagadas para los funcionarios de 30 a 15 días. Finalmente, el presidente Moreno anunció una reforma en el campo macroeconómico, menos visible, pero igual de grave, porque Ecuador es una economía

dolarizada y, por lo tanto, muy sensible a la caída del capital. Solía haber un impuesto sobre el capital que salía del territorio para evitar la fuga de divisas, que se eliminó. Se eliminaron las barreras comerciales y se liberalizó la entrada de importaciones, lo que también significa que saldrán más dólares del país. Esto puede conducir a una crisis e incluso cuestionar el sistema financiero de dolarización del país, que podría colapsar.

La reacción inmediata de la población fue la organización de una huelga general con el bloqueo de carreteras en veinte de las veinticuatro provincias del país. Esto fue seguido por una gran manifestación estudiantil, luego por las de las poblaciones indígenas, sindicatos, etc. Estas manifestaciones son las más grandes observadas desde la caída del gobierno de Gutiérrez en 2005. La reacción del gobierno de Moreno fue declarar el Estado de excepción (equivalente al Estado de emergencia) por un plazo renovable de sesenta días, lo que significa la suspensión de las garantías constitucionales. La Constitución contempla el Estado de emergencia para casos extremadamente graves: invasión, guerra civil o desastre natural. Para el último caso, ya se han declarado estados de excepción, pero solo a escalas regionales. Esta es la primera vez que se decreta a

nivel nacional a causa de manifestaciones. El impacto es muy grave y puede conducir a la militarización de las calles, arrestos arbitrarios, censura de los medios, etc. La situación es muy preocupante y pone en peligro los derechos humanos y la democracia en Ecuador.

Estas manifestaciones, dirigidas en particular contra el aumento de los precios del combustible, van acompañadas de protestas contra las reformas del Código del Trabajo. ¿Podemos ver una protesta más general de la política de Lenin Moreno, quien dirigió al partido de izquierda Alianza País, fundado por su predecesor Rafael Correa, al centro del espectro político?

Podemos ver detrás de estas manifestaciones el hartazgo de la población, que durante los últimos dos años y medio ha sido sometida a políticas de ajuste estructural neoliberales muy agresivas: suspensión de ciertos derechos, beneficios sociales, etc. Desde la llegada de Moreno al poder, en 2017, vemos un cambio hacia la derecha neoliberal, que busca reducir el papel del Estado y la carga de los impuestos. Ha habido una gran amnistía fiscal para las personas más ricas de la sociedad mientras que, al mismo tiempo, el país sufrió un déficit fiscal que obligó al Gobierno a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional. El FMI

otorgó un préstamo de 4200 millones de dólares, pero exigió a cambio una reducción en el gasto del Gobierno y del empleo público, lo que condujo a muchos despidos. Esto marca un gran contraste con el período anterior, el del presidente Correa, que fue un período de progreso social, reducción de las desigualdades y crecimiento económico. El Gobierno de Correa había duplicado el PIB en diez años, sin hacer reformas neoliberales.

Alianza País apenas existe como partido: los partidarios de Rafael Correa se han reenfocado en el partido Revolución Ciudadana, mientras que Moreno solo tenía un 14% de opinión favorable en las encuestas incluso antes de anunciar las reformas. Lenín Moreno ahora está muy débil, pero ¿quién capitalizará su debilidad? Dada la persecución legal contra Correa, que se encuentra exiliado en Bélgica, y contra el correísmo y sus líderes en general, es difícil predecir lo que podría suceder.

¿Cuáles podrían ser las consecuencias de la situación en Ecuador en la escena regional? ¿Qué nos dice sobre la secuencia política y geopolítica que se desarrolla allí?

Desde principios del siglo XXI ha habido una gran marea rosa en el subcontinente, lo que ha llevado al poder a los

Gobiernos de izquierda. Luego, la derecha volvió a entrar en vigor a partir de 2015, en lo que constituye un verdadero punto de inflexión. Pero no les está yendo muy bien hoy: enfrentan problemas económicos, como en Argentina o Ecuador, en parte debido al retorno del FMI y sus recetas impopulares, además de técnicamente cuestionables. Y esta derecha no se beneficia de una mayoría parlamentaria en la mayoría de los países donde controla al Ejecutivo. Los resultados de las encuestas van a la baja; por lo tanto, podría darse un nuevo cambio en el tablero de ajedrez político. El 27 de octubre habrá elecciones importantes en Argentina, que Alberto Fernández, candidato del centro izquierda, debería ganar. Esto es importante porque el Gobierno actual, el de Macri, es una especie de líder de la derecha liberal en América Latina, y por el hecho de que en Ecuador las reformas de Moreno están muy inspiradas por las realizadas en Argentina bajo la supervisión del FMI. Conducen, por lo tanto, al mismo tipo de consecuencias sociales, económicas y políticas catastróficas. Un cambio político en Argentina y las grandes protestas en Ecuador indicarían, quizá, el comienzo del declive de este nuevo ciclo neoliberal en la región, que podría ser más corto de lo que muchos analistas han presagiado.

¿POR QUÉ LA VICTORIA

DEL MOVIMIENTO INDIGENISTA NO ES TOTAL?



Foto: David Díaz / Fluxus Foto

MARCO TERUGGI

Ecuator vive su primer día con descompresión de las movilizaciones. El escenario es complejo: la táctica del Gobierno fue reconocer a los indígenas como interlocutores legítimos y criminalizar al correísmo.

Hay celebraciones en Ecuador. Comenzaron el domingo por la noche cuando el Gobierno nacional y el movimiento indígena centralmente agrupado en la Coordinadora de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) anunciaron haber llegado a un acuerdo respecto al Decreto 883, aquel que quitó los subsidios a la gasolina. La reacción fue doble. Por un lado, las calles se llenaron de euforia luego de lo que fue considerado como una victoria tras once días de protestas enfrentadas a una fuerte represión. El escenario de batalla del centro de Quito fue entonces de aplausos, bocinas, camiones cargados de

gente con banderas del Ecuador, taxistas, barrios populares. Por otro lado, se abrió la pregunta acerca de qué se había logrado exactamente. ¿Se había tratado de una derogación inmediata y efectiva, como anunció y celebró la Conaie? ¿O de una sustitución sin fecha determinada, como anunció en su cuenta de Twitter el presidente Lenín Moreno? Parte de la respuesta fue aclarada por el comunicado de Naciones Unidas Ecuador, organismo mediador en el diálogo, que afirmó que “se deja sin efecto el Decreto 883” y “se procederá de manera inmediata a trabajar en la elaboración de un nuevo decreto que permita una política de subsidios, con un enfoque integral, que precautele que estos no se destinen al beneficio de personas con mayores recursos y a los contrabandistas, con criterios de racionalización, focalización y sectorialización”.

Ecuador vive su primer día con descompresión de las movilizaciones. El escenario es complejo: la táctica del gobierno fue reconocer a los indígenas como interlocutores legítimos y criminalizar al correísmo.

La misma noche del domingo fue instalada la comisión para, según informó la Conaie, la “redacción del decreto que lo reemplaza. Esto no termina hasta que el acuerdo no se concrete a cabalidad”. De esta manera se logró una victoria parcial dentro del conjunto de medidas acordadas entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional, siendo el Decreto 883 el de mayor impacto en la economía y en la batalla simbólica. El resultado final de esa parcialidad dependerá del nuevo decreto acordado. Por fuera del espacio de diálogo estuvo también, hasta ahora, un acuerdo acerca de un procedimiento para investigar las actuaciones y abusos de las fuerzas de seguridad del Estado que costaron al menos siete muertos, 1152 detenidos y 1340 heridos.

¿Existía la posibilidad de lograr una victoria mayor? Esa pregunta reúne los

principales interrogantes. Según quienes protagonizaron las jornadas, es decir la Conaie, no la había. Y las movilizaciones, si bien no fueron únicamente del movimiento indígena, recayeron principalmente en su capacidad de acción, tanto en Quito como en los bloqueos de carreteras en el país.

Otro escenario se profundizó en paralelo al debate sobre el decreto: la persecución a dirigentes de Revolución Ciudadana, el espacio político del expresidente Rafael Correa. Ese accionar había sido anunciado por Moreno al descargar la responsabilidad de los hechos de violencia acontecidos en las espaldas de Correa. La táctica del Gobierno fue reconocer a los indígenas como interlocutores legítimos y criminalizar al correísmo. El despliegue persecutorio comenzó durante los días de la movilización: la asambleísta Gabriela Rivadeneira debió refugiarse en la embajada de México, y la exalcaldesa Alexandra Arce fue detenida. En la madrugada del lunes fue detenida en su casa la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y en la mañana fue allanada la casa del exasambleísta Virgilio Hernández. Estos arrestos y persecuciones a través del poder judicial articulado a la condena mediática se sumaron a casos anteriores, como el del

exvicepresidente Jorge Glas, el del ex-canciller Ricardo Patiño, refugiado en México, y el del mismo Correa.

De esta manera Ecuador avanza sobre varios tiempos en simultáneo: el de la celebración de la victoria parcial de la Conaie y la movilización popular que duró once días; el de la persecución al correísmo como parte del ataque político de Moreno a su adversario, y el del mismo Gobierno, que debió ceder sobre el Decreto 883, pero que busca cómo no modificarlo sustancialmente. Dentro de ese cuadro se destaca un elemento de mayor complejidad: las diferencias entre una parte de la dirección de la Conaie y el correísmo, que llevan varios años, fueron resaltadas vía Twitter durante los días de protesta y quedaron en primer plano durante el diálogo, cuando el presidente del movimiento indígena Jaime Vargas arremetió contra la Revolución Ciudadana.

Ecuador, que amanece hoy en su primer día con descompresión de las movilizaciones, vive un escenario complejo.

El Gobierno de Moreno no se detendrá en su intento de neoliberalización de la economía que tiene en el FMI un punto de profundización, así como en su alineamiento con Estados Unidos como epicentro de su política exterior. ¿Cuáles serán los próximos pasos de la Conaie? ¿Qué hará el correísmo ante la persecución política? Las piezas están en movimiento.

El gobierno de Moreno no se detendrá en su intento de neoliberalización de la economía que tiene en el FMI un punto de profundización, así como en su alineamiento con Estados Unidos como epicentro de su política exterior. ¿Cuáles serán los próximos pasos de la Conaie? ¿Qué hará el correísmo ante la persecución política?

**“FUE UNA
NEGOCIACIÓN
PÚBLICA INÉDITA
EN LA HISTORIA
DE ECUADOR”**



Foto: David Díaz / Fluxus Foto

ENTREVISTA A SOLEDAD STOESSEL POR GUIDO VASSALLO

La académica Soledad Stoessel reflexiona sobre la situación en Ecuador tras el acuerdo entre el Gobierno y los sectores populares; el rol de los medios y de las fuerzas armadas, así como sobre la persecución al correísmo.

Stoessel es profesora de sociología y politóloga en la Universidad Nacional de La Plata y en FLACSO-Ecuador. Siguió de cerca las jornadas de paro y movilización que se prolongaron durante once días y que dejaron, producto de la represión estatal, un saldo de ocho muertos, 1152 detenidos y 1340 heridos, según cifras de la Defensoría del Pueblo. En diálogo con *Página/12*, analiza las consecuencias de la derogación del Decreto 883, el rol de los medios y de las fuerzas armadas a lo largo del conflicto, la ruptura de Lenín Moreno con el correísmo y su futuro inmediato.

¿La derogación del Decreto 883 constituye una victoria para el pueblo ecuatoriano?

Creo en primer lugar que la derogatoria del decreto es el resultado de una negociación pública inédita en la historia de Ecuador, aunque se trata de una victoria parcial del campo popular. El decreto era el núcleo duro del paquete. Todavía persisten propuestas adicionales tales como la eliminación del impuesto a la renta, y la reforma laboral que el Gobierno está intentando enviar al Congreso. Se trata de una reforma sumamente regresiva en términos de derechos laborales, que disminuye el salario, reduce las vacaciones, habilita el despido de empleados públicos y permite privatizar la seguridad social. Es decir que el resto de las demandas quedan subsumidas a la derogación de ese decreto, con

Moreno promovió una estigmatización profunda del indígena, de los sindicatos, de los estudiantes; en suma, de los sectores populares. Se encargó de abrir una brecha entre el campo popular y su propio Gobierno. Todo este proceso de crisis constituye un punto de inflexión para un Gobierno que ya venía debilitado por distintas medidas de ajuste tras el acuerdo con el FMI en marzo.

lo cual todavía queda mucho camino por recorrer.

¿Qué escenario se abre ahora para el gobierno de Lenín Moreno?

Moreno promovió una estigmatización profunda del indígena, de los sindicatos, de los estudiantes; en suma, de los sectores populares. Se encargó de abrir una brecha entre el campo popular y su propio Gobierno. Todo este proceso de crisis constituye un punto de inflexión para un Gobierno que ya venía debilitado por distintas medidas de ajuste tras el acuerdo con el FMI en marzo, mediante decreto. La propia Constitución ecuatoriana prohíbe acordar con el FMI sin que el pueblo se entere de los detalles de dicho acuerdo. Como decía, se trata de un Gobierno muy debilitado que perdió capacidad. La Asamblea ha dejado de sesionar y recién ahora retomará las sesiones. El Gobierno queda muy expuesto, y

ahora tendrá poco margen para aplicar políticas públicas. El otro hecho a considerar es que todavía faltan dos años para las próximas elecciones. Se abre un momento de mucha incertidumbre. Y hay que tener en cuenta que la única agenda política de Moreno consiste en perseguir al correísmo. De hecho, lo primero que hace Moreno después de derogar el decreto es comenzar a perseguir a referentes del correísmo (la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, fue detenida el lunes por fuerzas policiales sin orden judicial y tras un allanamiento ilegal).

Moreno culpa a Rafael Correa de estar detrás de su destitución. ¿En qué momento se quebró la relación entre ambos?

Hay distintas hipótesis al respecto. Lenín Moreno ganó en segunda vuelta en 2017 por un margen bastante ajustado. Evidentemente estaba interesado por el discurso de esa derecha que no

ganó. Apenas asume, se monta sobre ese discurso, buscando gobernabilidad. Por eso genera un pacto con los mismos banqueros que habían causado la gran crisis de 2009. Empieza a acercarse a las elites y adopta el panorama económico del *establishment*. Sus tres grandes aliados pasan a ser, a partir de ese momento, el poder económico concentrado, las fuerzas armadas y los medios de comunicación.

En ese sentido, ¿cuál fue el rol de la prensa durante los once días de protesta?

Moreno ha sido el presidente más blindado por los medios desde el retorno democrático. En esta coyuntura, eso se volvió aún más nítido. No mostraron ninguna de las protestas, se alinearon con el marco del Gobierno en torno a la conspiración correísta, bajo la idea de que todo era mafioso o vandálico. Por suerte, la contracara fue un gran número de medios alternativos y plataformas

virtuales que transmitieron todo *online* y en vivo.

Mencionó también a otro de los grandes aliados del gobierno, las fuerzas armadas, que cumplieron un rol fundamental durante estos once días de conflicto.

Fuimos testigos de una represión brutal por parte de las fuerzas del orden. Jamás se ha visto en Ecuador tamaño nivel de agresión. Se trata directamente de violaciones a los derechos humanos. La ministra de Gobierno María Paula Romo, que comandó la represión, y el ministro de Defensa Raúl Oswaldo Jarrín, con una larga trayectoria militar, son los principales responsables. De hecho, una de las principales exigencias de los movimientos indígenas consistía en el pedido de revocación de estos dos ministros, pedido que obviamente nunca fue cumplido.

EL FRACASADO DISCURSO

DEL ÉXITO, TURNO DE ECUADOR



Foto: Karen Toro / Fluxus Foto

EMILIO CAFASSI, NOAM CHOMSKY,
MANUEL CASTELLS Y JORGE MAJFUD

¿Cómo lograr que una microminoría del uno por ciento continúe, década tras década, acumulando más riqueza que el restante noventa y nueve por ciento de una sociedad? Quienes lo han hecho lo saben bien: 1) propaganda masiva y ubicua, invisible pero real, como el aumento de CO₂ en la atmósfera, y 2) acoso político, económico y militar de cualquier otra opción que contradiga el asalto.

Otra forma es enlazar disputas y axiomas diversos sin una necesaria relación lógica: la religión de las armas y el amor religioso, el aborto y la baja de impuestos a los más ricos, la negación del cambio climático y el odio a los inmigrantes, la libre circulación del capital y el patriotismo, etc. De esta forma, el uno por ciento continúa recogiendo los frutos de toda

una sociedad y de toda una historia, con el apoyo necesario de una elite criolla dominante o, incluso (cuando existen elecciones) de un número significativo de quienes no pertenecen al uno por ciento.

Así, en América Latina, las opciones al neoliberalismo, cuando han fracasado, han fracasado por errores propios y, sobre todo, por el criminal bloqueo económico de la superpotencia del mundo. Eso cuando no han recurrido a los más tradicionales golpes militares para defender la libertad del capital de la minoría criolla (clasista y racista) aliada a las más poderosas transnacionales. Así, por otro lado, en América Latina las imposiciones neoliberales han fracasado a pesar de repetidas inundaciones de capitales en formas de créditos multimillonarios que no dejaron en sus países ni progreso

ni desarrollo sino deudas masivas y más pobreza.

En América Latina las imposiciones neoliberales han fracasado a pesar de repetidas inundaciones de capitales en formas de créditos multimillonarios que no dejaron en sus países ni progreso ni desarrollo sino deudas masivas y más pobreza.

Para el neoliberalismo, solo el éxito económico cuenta como éxito. No obstante, este mito del éxito económico ni siquiera ha tenido éxito en la economía de los países colonizados por el mito del éxito económico. No, por el contrario, se insiste en “el probado fracaso” de sus otras opciones apuntando a países acosados, bloqueados y en ruinas, lo cual es un patrón de acción y de narración política. América Latina es parte de esta ola que, a falta de mejor nombre, se suele denominar neoliberalismo. Esa ola que arrasa, quema y destruye cualquier malla de contención social y ambiental hasta poner en riesgo la propia supervivencia planetaria, y cuyas consecuencias económicas y sociales volvemos a

presenciar en todo el continente como una historia que se repite de forma cíclica. Si bien en estos días la atención está mayormente concentrada en el vergonzoso estado de sitio en Ecuador y la consecuente represión de las movilizaciones contra las medidas antipopulares del gobierno de Lenín Moreno, una amplia mayoría de países vive en estado de permanente amenaza e incertidumbre al mismo tiempo que los inversores presionan, amenazan y aumentan sus ganancias.

No habrá que soslayar que mientras escribimos estas líneas la respuesta gubernamental ecuatoriana viene cobrándose muertos, heridos y detenidos en números aún inciertos por el ejercicio de la censura y el toque de queda. Pero las movilizaciones que comienzan a resistir esta crisis humanitaria, producto de políticas adulatorias del poder mundial y generadoras de miseria, se extienden de norte a sur. Como en Colombia (sede de la mayor cantidad de bases militares de Estados Unidos en el hemisferio y sede del narcotráfico mundial y del paramilitarismo impune) se opone al único proceso de paz concreto propuesto en cincuenta años. Como en Perú, donde idéntico desconocimiento mutuo entre dos poderes fundamentales del Estado (Ejecutivo y Legislativo) es considerado

una opinable cuestión constitucionalista mientras que en Venezuela (no se lea este manifiesto como un apoyo a su Gobierno) la mafia hegemónica llama a la intervención militar. Argentina vive envuelta en piquetes frente a la aceleración exponencial de la pobreza y el endeudamiento súbito, mientras en Chile y en Brasil se siguen profundizando la inequidad social, la desprotección, el narcotráfico y la violencia civil y policial, que ya amenazan hasta a países como Uruguay por razones de proximidad.

Aún están pendientes en Argentina, Bolivia y Uruguay diferentes procesos electorales en lo que resta del año.

Otros seguirán en los años por venir. La disyuntiva continúa siendo entre la narrativa del uno por ciento (el autoritarismo de las elites, el militarismo reaccionario, el odio de los racistas, de los nacionalistas, de los clasistas, del machismo que se resiste a ceder paso, del neomedievalismo, de la destrucción del medio ambiente a cambio de unos dólares) y la construcción de una democracia progresiva, solidaria, no consumista, que ponga el énfasis en el ser humano y no en las riquezas de unos pocos a costa de unos muchos. Una sociedad capaz de construir un mundo para todos y no solo para una minoría elegida por un dios que nunca la eligió.

La disyuntiva continúa siendo entre la narrativa del uno por ciento y la construcción de una democracia progresiva, solidaria, no consumista, que ponga el énfasis en el ser humano y no en las riquezas de unos pocos a costa de unos muchos.

EL MOVIMIENTO INDÍGENA

Y LA INSURRECCIÓN DE LOS ZANGANOS



Foto: Karen Toro / Fluxus Foto

#MOVIMIENTOINDÍGENA
#REVOLUCIÓNDELOSZÁNGANOS
#MOVILIZACIONESDEOCTUBRE
#PARO
#CONAIE
#FUT

STALIN HERRERA

Aunque hay quienes pueden criticar los resultados de las movilizaciones de octubre en el Ecuador, yo diría que ganamos muchas de las cosas que habíamos perdido; sobre todo, repusimos la posibilidad de reapropiarnos de la historia, aunque el futuro siempre sea incierto. Pero para avanzar necesitamos hacer balances de los claros y oscuros que nos mostró la jornada. Ana María Guacho, una de las miles de mujeres indígenas que tomaron un palo para caminar por sus hijos, en medio de sus lecciones de economía y política para Moreno, nos cuenta que vivimos un segundo levantamiento indígena. Los once días de movilizaciones recuperaron de la memoria colectiva el gran levantamiento de 1990, pero es evidente que este tiene otros elementos que debemos explorar. A diferencia del de los años noventa,

el movimiento indígena hoy es el movimiento social y popular organizado más grande del Ecuador; pero, al igual que en los noventa, el proceso fue más insurreccional que el resultado de su convocatoria. La misma dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) no lo esperaba, y todos teníamos dudas de lograr una marcha importante.

Las medidas se anunciaron tempranamente y el Gobierno, en nombre de la crisis y alineado con el plan de austeridad del Fondo Monetario Internacional (FMI), pedía a la ciudadanía que sea comprensiva y arrimara el hombro; cuando presentó las medidas, sin embargo, proponía que los trabajadores pagaran la crisis para asegurar las ganancias de las elites (reducción de salarios y vacaciones para unos, reducción de impuestos y

libre mercado para otros). Así, mientras el Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Conaie intentaban acordar la fecha del gran paro nacional que luego se convocaría para el 9 de octubre de 2019, los primeros en reaccionar fueron los transportistas y los estudiantes, que empezaron a tomarse las calles al día siguiente. El gremio de transporte negoció rápidamente y María Paula Romo, ministra de Gobierno, tras la desmovilización de los transportistas afirmó que en las calles solo quedaban unos cuantos zánganos. La gente invirtió el símbolo y bautizó la protesta como “la rebelión de los zánganos”.

Las organizaciones mantuvieron la autoconvocatoria y el paro nacional; las protestas se multiplicaron en los territorios y en los barrios; algunas filas del gremio de transporte que no se sintieron reconocidas en la negociación también se sumaron; las organizaciones de bases de la Conaie empezaron marchar hacia la capital antes de lo previsto, y el 7 de octubre, cuando los indígenas empezaron a llegar a Quito, los estudiantes, las mujeres, los trabajadores y los barrios llevaban varios días sosteniendo la protesta. En Quito, desde los barrios populares del sur y norte salieron a las calles a recibir las marchas con aplausos, consignas, agua y comida; en el parque de El

Arbolito había mucha gente movilizada para preparar la bienvenida, y su entrada fue casi una fiesta. Hubo mucha expectativa de que el movimiento indígena pudiera poner orden, dar cierta dirección y empujar hacia delante las acciones.

Cuando llegó el día del paro nacional, el presidente Moreno había trasladado la sede del Gobierno a Guayaquil –el bastión de las oligarquías terratenientes y conservadoras– y la Asamblea Nacional dejó de sesionar por seguridad. Se produjo una marcha enorme: el cálculo más conservador fue de 35 000 personas: 20 000 indígenas que anunció la Conaie, unos 5000 trabajadores convocados por el FUT y unas 10 000 personas más que se autoconvocaron. Personalmente, creo que la marcha superó largamente esos números, pero el Gobierno y los medios de comunicación tampoco se atrevieron a dar una cifra e intentaron construir la idea de que en Quito no pasaba nada. En las provincias, miles de personas expresaban su apoyo al paro con una multiplicidad de agendas y demandas, tal como lo reconoció Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, en uno de sus primeros discursos: “tras el movimiento hay un agenda antiminera y de los trabajadores”. El MICH, por ejemplo, planteó la

necesidad de una agenda territorial con la agenda nacional, y el Pueblo Montubio convocaba a los productores porque las medidas afectan los costos, la producción y la comercialización. Sin embargo, tanto el FUT como el Frente Popular que habían sido convocantes del paro nacional palidecieron frente a la abrumadora presencia indígena. Aquello que comenzó como un paro nacional se transformó en un levantamiento indígena popular, y con esto también perdieron visibilidad las demandas de los estudiantes, las mujeres, los ecologistas, etc. Este fenómeno no responde únicamente a la fortaleza del movimiento indígena, sino también a la debilidad del resto de movimientos para situarse en el escenario; la mayor parte de organizaciones optaron por plegarse a la demanda nacional, bajar las banderas propias y sostener la movilización.

Para los que marchábamos ese día, en la mañana nos llamó la atención la forma de ordenar una de las pocas tarimas del proceso. Aunque el presidente del FUT, Mesías Tatamuez, pasó por ahí invitando al movimiento a la marcha de los trabajadores que estaba convocada al otro lado del parque, la tarima tenía su ritmo y no le hicieron mucho caso; hablaron solamente dirigentes y autoridades de los pueblos y nacionalidades, manteniendo

un discurso radical contra el Gobierno, el paquetazo, el FMI y el Correísmo.

Además, en la tarima volvieron a estar la Feine y la Fenocin, organizaciones que mantuvieron fuertes rivalidades durante el periodo de Correa, en una articulación/participación que no se había visto desde la Ley de Tierras de 2012. Al mismo tiempo, fue notorio que las autoridades electas del Pachakutic y grandes figuras del último periodo como Yaku Pérez o Salvador Quishpe tuvieron un rol secundario; así como que la bancada legislativa mostrase poca iniciativa política para acompañar al movimiento.

Hubo quienes criticamos las formas de organizar la tarima y construir la vocería del proceso. Se percibía la disputa por la conducción y la representación, pero en Chimborazo reportaron elementos similares; los dirigentes de base se negaron a que las autoridades electas y los viejos dirigentes condujeran el proceso. Pero más allá de la disputa por la representación, en los actos estaba presente la tensión entre lo social y lo político, entre la organización y su representación política. Esta tensión fue posible gracias a la clara distancia entre las autoridades electas y su base social. En ese sentido, vale mencionar que varios representantes del PK en la Asamblea Nacional votaron a favor del proyecto por la

Aunque hay quienes pueden criticar los resultados de las movilizaciones de octubre en el Ecuador, yo diría que ganamos muchas de las cosas que habíamos perdido; sobre todo, repusimos la posibilidad de reapropiarnos de la historia.

reactivación económica que permitió la condonación de la deuda en firme de las empresas y en contra de la despenalización del aborto en casos de violación (aunque la Conaie había manifestado públicamente su apoyo).

Sin duda la instalación de una tarima ayudó a sintonizar a la dirección nacional con las dirigencias de base, pero no fue suficiente para contener las tensiones y las demandas. En el desarrollo de la marcha los dirigentes de base reclamaban la presencia de las autoridades y las orientaciones resultaron confusas. Aunque a lo largo de la marcha se evitaron las confrontaciones con la policía y se mantuvo la disciplina gracias a la Guardia Indígena, en la tarde la represión de la policía desató la confrontación nuevamente. La gente marchó sin dirección clara; unos querían tomar la

casa de Gobierno y otros la Asamblea, pero como el presidente había cambiado su sede, simbólicamente intentábamos ocupar instituciones vacías.

En los siguientes días la protesta en las calles fue en ascenso. El movimiento hizo esfuerzos por desmarcarse de la violencia, pero en el proceso se incendió la Contraloría General del Estado y la respuesta del Gobierno también fue cada vez más fuerte. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, advirtió a la población, entre líneas, que se usarían armas letales, y la respuesta del Gobierno fue en esa línea: decretó estado de excepción, toque de queda y movilizó tanto a la policía como al ejército.

La represión de esos días dejó ocho fallecidos, 1340 personas que recibieron atención médica y 1192 detenidos a escala nacional (según el informe de la Defensoría del Pueblo del 14 de octubre del 2019). A la vez, los once días de movilización fueron posibles porque la protesta se inundó de la solidaridad de la población que llevaba comida, frazadas y medicamentos; estudiantes de medicina que atendían a los heridos; voluntarios de todos los colores que corrían de un lugar a otro y limpiaban o cuidaban niños; cocinas populares; universidades que abrieron sus puertas para que los indígenas durmieran. Sin embargo,

la imagen de la Contraloría General del Estado incendiada fue el símbolo elegido por los grandes medios de comunicación para instalar una imagen de vandalismo.

Todos los que participamos de la convocatoria y la movilización, frente al silencio de las dirigencias, la ausencia de la mesa de coordinación entre el FUT y la Conaie, la creciente impaciencia y la dificultad para articular las múltiples movilizaciones y la explosión de las desconfianzas que las falsas noticias sembraban en la movilización, preguntábamos por la estrategia para salir del paro. Cuando el Gobierno se abrió al diálogo directo, lanzó el desenlace en las manos de la dirigencia, y cuando la Conaie aceptó, se sintió un profundo alivio. Aunque varios dirigentes decían que podrían sostener la movilización por un mes (reflexión que no resultaba descabellada: el tejido comunitario y la diáspora campesina sostenía a sus delegados y representantes en una estrategia de relevos), esas no eran las condiciones del resto de organizaciones.

El planteo resultó ser una carta de negociación cuya agenda reveló la profunda incompreensión del campo y la absoluta distancia de los ministros respecto de los sujetos que habían tomado la ciudad.

Era una propuesta de desarrollo rural de los años ochenta mezclada con propuestas que el Gobierno ya viene haciendo desde el periodo de Correa (vías rurales, hectáreas de pastura, riego, crédito, kits y tecnología); proponía proyectos para que sean manejados por los indígenas, en un intento de reeditar los programas de desarrollo indígena tipo Prodepine; la reapertura de las escuelas multigrados (lo que recordó a la educación uni-do-cente de los 90). En el fondo, no mostraba otra cosa que el racismo institucional que históricamente domina la organización de la política agraria en el Ecuador por parte de las élites.

Pero el movimiento indígena respondió con un diálogo condicionado, que sea directo y televisado al público. Mientras se producía el diálogo, los memes incendiaron las redes y alguien dijo “parece un *reality show*. De un lado, gente que apenas puede expresarse, maneja malamente el castellano y casi no se deja entender en español; del otro, los indígenas”. Otros lo comparaban con un partido de 5 a 0, o con un autogol del gobierno. El hecho es que los indígenas habían hecho su tarea; mientras que el gobierno planteaba la revisión del Decreto 883 para incluir unas medidas compensatorias, los dirigentes daban clases de economía y política; mostraron una posición

unitaria; explicaron con manzanas el problema de paquetazo; y recogieron la subjetividad de insubordinación en dos frases: “Señor presidente, no está hablando con la Conaie, sino con todo un país”, y “No hemos venido solos, sino que estamos acompañados de la gente”.

El Gobierno finalmente acepta cambiar el decreto y, de manera amenazante, compromete al movimiento a sacar uno nuevo que incluya las compensaciones que eviten el desangre de la economía resultado de las compensaciones. En un momento, recorrían las redes una parte del diálogo que no se televisó, un intento del Gobierno de engañar al movimiento, sosteniendo que no se derogaría el decreto hasta que no estuviera listo el nuevo, pero el movimiento y el Gobierno afirmaron que se derogaba el Decreto 883.

Más allá del decreto mismo, el movimiento indígena logró una histórica articulación entre la Conaie, Feine, Fenocin

y la estratégica representación de las mujeres amazónicas, recuperando el lugar de representación política para el conjunto de las fuerzas populares.

El Gobierno, los medios de comunicación y las élites nacionales desplegaron una compleja campaña para desmovilizar a la población. Esta merece un análisis aparte, pero el estado de excepción, el toque de queda y el despliegue policial militar deben ser entendidos en el marco de un extraño proceso de insurrección que lograba una escala nacional, y que solamente pudimos seguir gracias a los medios de comunicación que rompieron el cerco mediático.

- A pesar del estado de excepción, el toque de queda y la amenaza de guerra planteada por el Gobierno, la población salió a las calles para solidarizarse con los indígenas y participar del paro nacional; la misma noche del decreto de toque de queda,

Más allá de la disputa por la representación, en los actos estaba presente la tensión entre lo social y lo político, entre la organización y su representación política. Esta tensión fue posible gracias a la clara distancia entre las autoridades electas y su base social.

- se convocó a un cacerolazo y la gente salió a las terrazas y a las calles a mostrar su apoyo. Además, las redes mostraron que su eco llegó incluso hasta a la lejana provincia de Loja.
- Los medios intentaron difundir algunas acciones de los indígenas frente a los símbolos modernos de la dominación terrateniente: un intento de toma contra una empresa lechera y la invasión de varias florícolas, pero el movimiento desmintió los hechos y estas no generaron mucha conmoción.
 - Entre los elementos destacables está el ejercicio de autonomía y derechos colectivos realizado por el movimiento indígena. Ante la declaración del estado de excepción, la Conaie y el Pueblo Kitukara emitieron comunicados donde se establecía un estado de excepción en sus territorios: advertían que los policías y militares que intervinieran en los territorios serían castigados por la justicia indígena.
 - En las jornadas de protesta, las organizaciones tomaron ocho gobernaciones. Se destacan entre estas las acciones de Chimborazo e Imbabura, que impulsaron asambleas populares y autogobierno.
 - A diferencia de otros levantamientos, se registraron acciones de protesta en casi todas las provincias. Solo en Quito se mapearon algo más de trece focos/barrios en resistencia, en su mayoría sectores populares, zonas cercanas a los mercados y las comunas indígenas de la ciudad.
 - En la Costa, a pesar del regionalismo sobre el cual se construye una parte de la identidad nacional, en El Oro, Quevedo, Manta y Guayas, las organizaciones salieron a las calles a solidarizarse con el levantamiento indígena y como consigna coreaban “Quito aguanta que Manta se levanta” o “Quito aguanta que Quevedo se levanta”.
 - A esto se suma un hecho sobre el cual no conozco un registro histórico similar. Un grupo de indígenas deciden caminar hacia Guayaquil y Jaime Nebot y Cynthia Viteri (alcaldesa de la ciudad, líderes del Partido Social Cristiano) responden con un racismo virulento, llaman a la ciudad a defender la democracia, piden a los funcionarios que de forma voluntaria se movilicen y envían a los camiones del municipio a colocar llantas en el puente Unidad Nacional para evitar su entrada. Pero los medios no difundieron imágenes claras

sobre la dimensión de la convocatoria o las marchas que sí se produjeron en Guayaquil (casi todo debimos verlo en las redes).

Los dos últimos hechos, la solidaridad costeña con Quito y las marchas de las organizaciones indígenas apostadas en Guayaquil, mostraron fisuras en el régimen de lealtades sobre el cual se sostienen las elites. Este hecho se reforzó con la convocatoria en defensa de la ciudad, la cual resultó pequeña en comparación con las de otros momentos en los cuales han demostrado una gran capacidad de movilización.

Con once días de movilización con manifestaciones nacionales, en otros tiempos del neoliberalismo era fácil imaginar una salida presidencial antes que la derogación del 883. Sin embargo, el Gobierno contó con el respaldo de los medios de comunicación, las élites económicas, el Partido Social Cristiano y el FMI; así, tras el rostro bonachón se esconde una sólida alianza conservadora. Esta alianza, sabiamente cultivada, le permitió al Gobierno desplegar una estrategia de contención compleja y simultánea que fue más allá del uso de la fuerza policial y militar. Mientras el país se encendía, los medios de comunicación y el Gobierno intentaron construir una imagen de que el problema se encontraba

localizado en Quito —en la radio y en la televisión pasaron propagandas que mostraban al resto de ciudades en paz y una sociedad que demandaba tranquilidad para volver al trabajo—; tal como lo decía uno de los manifestantes, “mientras nos están masacrando, los medios transmiten a Bob Esponja”.

Apelaron al capital moral del movimiento y a cierto paternalismo racista para intentar aislar al movimiento del resto de la protesta, diciendo que el movimiento no es violento. Usaron la imagen de la Contraloría en llamas y los actos de violencia para deslegitimar la movilización, negando e invisibilizando el impresionante despliegue de violencia estatal. Incluso intentaron apropiarse de los actos de solidaridad de la población para con el paro nacional, afirmando que el cercolazo era la ciudadanía que saludaba la paz sembrada por las fuerzas armadas en las calles. Finalmente, aprovechando las declaraciones de Rafael Correa y la participación de los representantes de la Revolución Ciudadana, quienes, erradamente, salieron a apoyar el paro seguros de contar con el respaldo popular, el Gobierno logró de manera eficiente activar una de sus mejores estrategias de contención, el anticorreísmo.

El punto es que, en un sentido gramsciano, el anticorreísmo se ha convertido en

un consenso entre las élites y la sociedad que se ha instalado como un dispositivo de fragmentación y desmovilización. El anticorreísmo en las élites se explica porque, a pesar de que el gobierno de Correa garantizó su reproducción y ampliación económica, logró al mismo tiempo mantenerlos a un margen relativo de la administración del Estado y de la distribución del excedente o la renta estatal. El anticorreísmo de las organizaciones se fraguó en la política de contención que de forma deliberada y consciente la Revolución Ciudadana lanzó sobre los movimientos sociales, en especial sobre los indígenas y trabajadores, al punto de fragmentarlos, perseguirlos y situarlos en la polarización permanente. El anticorreísmo de Moreno se convirtió en una estrategia para orillar políticamente a Correa y hacer de sus consignas —el progresismo y la inversión pública— contrasentidos de época.

En el proceso, la figura de Correa y el progresismo fue evocada para deslegitimar las acciones de protesta y levantar un argumento conspiranoico que articula a Correa con Maduro, las FARC y los Latin King. Además, sirvió a las organizaciones para deslegitimar a los dirigentes y otras organizaciones que en su momento estuvieron con Correa; en las mismas filas del propio movimiento

El movimiento indígena logró una histórica articulación entre la Conaie, Feine, Fenocin y la estratégica representación de las mujeres amazónicas, recuperando el lugar de representación política para el conjunto de las fuerzas populares.

indígena algunos dirigentes lo usaron para decir que la movilización había sido tomada por el correísmo y con eso deslegitimar la acción de su propia dirigencia. A su vez, el anticorreísmo sirvió para legitimar la judicialización de asambleístas de la Revolución Ciudadana, hecho sobre el cual se produjeron varios memes celebratorios, a costa de festejar la fractura de las instituciones y el debido proceso, pasando por alto que con eso el Gobierno logró fortalecer su posición en la Asamblea Nacional a favor de las reformas económicas que deberán debatirse ahí.

Al finalizar el diálogo y una vez pacificada la insurrección, la ministra María Paula Romo fue enfática en afirmar que se buscarán los responsables del vandalismo y la violencia, y anunció el reforzamiento de los procesos

de criminalización y judicialización de la protesta. Con este argumento, el Gobierno fue tras los representantes más visibles del correísmo. Contradictoriamente, el gobierno usa las normas del Código Penal Integral que, a pesar de la oposición y críticas de la sociedad en su momento, nació y se legitimó en las propias manos de lo que fuera Alianza País. Pero, como decía, el problema es que el anticorreísmo es un dispositivo que legitima la violencia del Estado, y una vez que termina con el núcleo duro de la Revolución Ciudadana, va en busca de los dirigentes y líderes sociales que protagonizaron la insurrección.

Con la fortaleza que el Gobierno muestra gracias a la alianza conservadora que lo sostiene y el fortalecimiento de la judicialización y la criminalización de las y los dirigentes, resulta claro que el trabajo pendiente es enorme y nos exige reapropiarnos de la resistencia, fortalecer las articulaciones que se produjeron y mantener viva la solidaridad de la sociedad. Pero decirlo es fácil; velar a los muertos, curar a los heridos y sostener a los presos es un trabajo enorme y costoso para las organizaciones y sus dirigentes. Con todo, como dijimos al principio, ganamos en

muchas formas y El Arbolito volvió a ser nuestra cancha. Tras varios años en los cuales el movimiento indígena se piensa desde la crisis o el fin de ciclo, fue evidente que el tejido organizativo lo dota de una fortaleza política explosiva que no puede compararse con otros movimientos. Pero recuperar la capacidad de veto sobre la reconfiguración del neoliberalismo no es tarea solo del movimiento indígena. Al interior exige resolver las tensiones y rearmar los acuerdos políticos para lograr la reconstrucción de la conducción política e ideológica. Las rearticulaciones de las organizaciones de segundo grado en Tungurahua y Chimborazo muestran que avanzan superando las divisiones que se habían sembrado durante el gobierno de Rafael Correa y que tienen la capacidad de volver a sintonizar sus diferencias religiosas. Las tensiones con algunas autoridades electas y el PK se muestran como un problema más complejo: su atomía y distancia respecto de la dirección del movimiento social, su alineación con la agenda conservadora, la forma de actuación personalista de algunos de sus representantes y la falta de iniciativa de su bancada siguen siendo un problema interno, pero la el reposicionamiento del movimiento social también es una oportunidad para alinear sus posiciones.

Lo cierto es que el movimiento indígena guarda el capital moral y simbólico que le permite sostener la expectativa y la solidaridad de la población. El problema es que las organizaciones y la población suelen pedir más de lo que el movimiento puede dar. Luego de la movilización sigue siendo claro que uno de los problemas del proceso no tiene que ver solo con los límites del movimiento, sino también con las complejas y lentas articulaciones de los otros sectores, organizaciones y movimientos sociales, los zánganos. Sin embargo, la movilización mostró que son sectores que pueden activarse, están sintonizados con la coyuntura, su reacción fue rápida, lograron salir de sus parcelas y su iniciativa se mostró generosa con el momento. La plataforma de articulación amplia que nos permita potenciar las acciones a través de un mínimo de coordinación parece ser una tarea urgente. El FUT, el Frente Popular y la Conaie parecen

Una vez pacificada la insurrección, la ministra María Paula Romo fue enfática en afirmar que se buscarán los responsables del vandalismo y la violencia, y anunció el reforzamiento de los procesos de criminalización y judicialización de la protesta. Con este argumento, el Gobierno fue tras los representantes más visibles del correísmo.

avanzar en esa idea, pero la coyuntura mostró que está pendiente descifrar la forma en que los dirigentes puedan materializarlo antes de que las reformas económicas y laborales lleguen a la Asamblea Nacional.

**¿DE QUÉ HA
SERVIDO**

**LA REVUELTA EN
ECUADOR?**



Foto: Vicente Gaibor / Fluxus Foto

#REVUELTAS
#NEOLIBERALISMO
#MOVIMIENTOSINDÍGENAS
#MUJERES
#INSURGENCIAS
#REGIÓN

RAÚL ZIBECHI

Los grandes virajes estratégicos, esos que influyen a lo largo de décadas, se producen siempre abajo, a través de la irrupción de los sectores populares en el escenario político, el cual transforman al modificar las relaciones entre clases, grupos sociales, géneros y generaciones. Así sucedió con el Caracazo de 1989, que abrió un período de levantamientos populares y comenzó a erosionar el Consenso de Washington, creando las condiciones para impugnar el neoliberalismo privatizador. Del mismo modo, auscultando los latidos de la acción colectiva, consideramos que junio 2013 fue el comienzo del declive del progresismo, cuando millones ganaron las calles para cuestionar la perpetuación de la desigualdad.

¿Qué importancia tiene, entonces, la revuelta de doce días de los pueblos

originarios, trabajadores y estudiantes en Quito? En primer lugar, la revuelta abre una brecha entre conservadurismo y progresismo, entre derechas y pretendidas izquierdas. Uno de los lemas más coreados en las calles fue “Ni Correa ni Moreno”. Rechazaron y frenaron el paquete del FMI, la política de trasladar la deuda del Estado a los trabajadores, elevando precios e impuestos, pero, en la misma revuelta, recordaron que el Gobierno de Rafael Correa, durante una larga década, reprimió a las organizaciones indígenas, de trabajadores y estudiantes. Esa memoria estuvo presente y llevó a los manifestantes a crear una guardia que sacó de las marchas a los encapuchados correístas, que solo estaban allí para derrocar a Moreno y facilitar el retorno de su líder.

Debemos destacar que es la primera vez, en toda la región, que los pueblos abren una brecha en la polarización existente entre los dos sectores que pretenden la hegemonía. Por eso considero que estamos ante un viraje estratégico, que se consolidará o no en función de cómo actúe cada uno de los protagonistas. En este sentido, recordemos que la propia Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) no estuvo nada fina ante el Gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005), aceptando colaborar con su gestión.

En segundo lugar, se produjo una reactivación y reorganización del campo popular. Durante la revuelta, todos los sectores, duramente castigados por el Gobierno de Correa, volvieron a activarse. En Loja y Azuay, por ejemplo, se crearon Asambleas Populares Autónomas, “espacios organizativos para construir poder popular, dar continuidad al proceso levantado y articular planes y acciones”, como destaca el activista antimine-ro Paúl Jarrín. Los estudiantes “armaron centros de acopio, albergues y cocinas

comunitarias, integrando así una lucha campo-ciudad”, y las calles y plazas fueron espacios de formación y de relación intergeneracional, donde fue posible que las camadas que nacieron después de 2000 realizaran su primera experiencia de lucha junto a las generaciones anteriores.

El analista Decio Machado enfatiza en el papel de las mujeres y de los estudiantes en la construcción de nuevos liderazgos, así como la aparición de dirigentes jóvenes en la Conaie, tan necesitada de renovar a viejos y gastados cuadros. “El movimiento de estudiantes, de mujeres y especialmente de los indígenas estuvo dirigido por una nueva generación de militantes sociales que nada tienen que ver con el correísmo e incluso lo repudian”, señala (Brito, 2019). Tan importante como esa reorganización de abajo arriba es el papel de “amplios sectores de la sociedad quiteña y de otras localidades del país que expresaban diariamente su solidaridad con los movilizados entregándoles medicamentos para los enfermos

Es la primera vez, en toda la región, que los pueblos abren una brecha en la polarización existente entre los dos sectores que pretenden la hegemonía.

y heridos, mantas, alimentos, zapatos, agua y comida” (ibídem).

En tercer lugar, habría que hablar de la im-pronta que esta irrupción tendrá en toda la región. No será una influencia inmediata ni directa. Recordemos que el Caracazo, punto de inflexión del neoliberalismo, recién comenzó a impactar varios años después, cuando se produjeron el ¡Ya basta! del zapatismo cinco años después, y las revueltas de fines de la década de 1990 en Perú, Paraguay y el propio Ecuador, precursoras de las grandes insurrecciones bolivianas de 2003 y 2005 y de la revuelta argentina de 2001. Los tiempos de la historia de abajo no son lineales: se maceran lentamente al calor de los fogones, allí

donde se debaten y se toman las decisiones colectivas que cambian los rumbos del mundo. Para todas esas personas que hacen de lo colectivo el centro de sus vidas, los sucesos del Ecuador serán como la estrella polar para los navegantes: referencia y horizonte, guía y orientación en estos tiempos de caos y confusión.

Referencias

Brito, G. (2019). “Lo más interesante en el reciente proceso de luchas populares en Ecuador son sus nuevos liderazgos’: entrevista con Decio Machado”. *AlterInfos – Dial*. Recuperado de <http://www.dial-infos.org/alterinfos/spip.php?article8534>

FUE UNA REVUELTA HISTÓRICA



Foto: Karen Toro / Fluxus Foto

#MOVIMIENTOSSOCIALES
#CONAIE
#IGLESIACATÓLICA
#REVUELTAPOPULAR
#FENOCIN
#FEINE

PEDRO PIERRE

He aquí las conclusiones que saco de este levantamiento popular de doce días en estos meses de octubre de 2019. Hay que analizar más detenidamente lo sucedido y nuestra participación, profundizar en la dignidad y los derechos y sacar compromisos individuales y colectivos. Si miramos hacia atrás, vemos que son los transportistas y los taxistas quienes lanzaron el levantamiento, pero para sacar ventajas para sí mismos cuando aumentó el precio de los combustibles. Luego de haber pactado con el Gobierno el aumento de los pasajes y las carreteras, desaparecieron: siempre grandes egoístas y cómplices de los explotadores. Los indígenas de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), de la Federación de los Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) y la Federación Ecuatoriana de

Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) lograron, indeclinables, lo que se habían propuesto: la derogación del decreto presidencial que permitía el aumento de los combustibles.

El levantamiento fue popular porque participaron al nivel nacional muchas organizaciones (sindicatos, jóvenes, mujeres, campesinos, pobladores, iglesias, grupos de derechos humanos, de solidaridad y convocados por las redes sociales), y son ellas y ellos quienes sufrieron la mayor y más brutal represión tanto de la policía como del ejército. Lamentablemente, se presentaron muy dispersos y sin mayor articulación con los indígenas. Los partidos políticos (Pachakutik, en particular) fueron los grandes ausentes fuera de la Revolución Ciudadana. Sí, destacan particularmente la brutalidad de las fuerzas policiales —¿dónde quedó

Por primera vez en décadas, la Iglesia institucional (Conferencia Episcopal, obispos, congregaciones religiosas, parroquias...) se pronunció de una manera más positiva con relación a la justicia social y el respeto a los derechos humanos.

la ecuatorianidad?— y la responsabilidad de los ministros de Gobierno y de Defensa: una decena de muertos, más de 1000 presos y otro tanto de heridos, un centenar de desaparecidos... hechos que deben ser esclarecidos y castigados. Fue notoria la falta de ética profesional de los medios de comunicación comerciales, que silenciaron la realidad y auparon los atropellos. Por primera vez en décadas, la Iglesia institucional (Conferencia Episcopal, obispos, congregaciones religiosas, parroquias...) se pronunció de una manera más positiva con relación a la justicia social y el respeto a los derechos humanos.

Se trata de un levantamiento histórico, ya que es la primera vez que un presidente tiene que derogar un decreto emitido por él mismo. Si los movimientos

indígenas se hubieran unido a otros movimientos sociales y ciudadanos, se habría logrado mucho más: “¡Que se vayan todos!”, se escuchaba. De todos modos, eso significa que es posible hacer respetar nuestras orientaciones a los Gobiernos si estamos organizados. De ahora en adelante, los Gobiernos tendrán que pensar bien en las medidas que vayan tomando.

Al mirar hacia adelante, podemos darnos cuenta que los movimientos indígenas no tocaron el fondo del problema: es el sistema neoliberal que nos rige; esa es la bestia que nos devora. Sigue vigente la Carta de intención del FMI; además, están vivos tanto el estado de excepción como el toque de queda, lo que facilita la persecución y el apresamiento de asambleístas y de dirigentes correístas. Los callados y escondidos asambleístas apoyan mayoritariamente al actual Gobierno neoliberal. Están en marcha las privatizaciones de grandes y eficaces empresas nacionales: Refinería de Esmeraldas, Banco del Pacífico, Corporación Nacional de Telecomunicaciones... Es significativa la presencia oculta de agentes del Gobierno de Estados Unidos en las instancias estatales.

Nos quedan pendientes varios y serios desafíos. Al nivel nacional la falta de

consciencia, organización y valentía es patente, como también la ausencia de liderazgos populares. Una gran parte de la población se beneficia de los logros sin haber levantado ni el dedo meñique... Es bastante vergonzoso. ¿Cómo combatir el racismo descarado y valorar la herencia indígena y sus símbolos? “¡Yo también soy indígena y zángano!”. Es generalizada la debilidad de la formación política de los ciudadanos, presas fáciles de los medios de comunicación y de la derecha. La debilidad de la Iglesia de los pobres es una lástima; y ni hablar de la gran mayoría de los católicos, ciegos, sordos y mudos. Es el resultado de la ignorancia culpable de la dimensión política de la fe y del Reino inaugurado por Jesús de Nazaret. Es pecaminosa la falta de compromiso de los

cristianos en organizaciones sociales y movimientos políticos.

¿Cómo enfrentar la violencia mortal del sistema? “¡Con el diablo no se dialoga!”, dice el papa Francisco, pero sí se lo debe señalar, denunciar y combatir decidida, solidaria y organizadamente. ¿Cómo vamos a aprovechar las revoluciones de ayer y de hoy, y conocer más de la experiencia de Bolivia, México y de los Zapatistas? Dejémonos habitar y mover por la fuerza de la vida y del amor todopoderoso, que para los cristianos es Dios en nosotros, fortaleciendo una espiritualidad liberadora. En conclusión: fue una revuelta histórica, no una revolución: ¡La lucha sigue y la esperanza también! “¡Ánimo, nos dice Jesús, he vencido el mundo de la maldad!”

CIDH pide a Ecuador investigar violaciones de derechos humanos y delitos en pri... En el comunicado, la CIDH calificó de graves "los episodios de hostigamiento que sufrió la delegación durante su visita a la cárcel de Latacunga (centro), por parte ... ¿? confirmado.net

4:29 a. m. · 6 nov. 2019 · Twitter for iPhone



Lenin Moreno
@Lenin

He dispuesto el toque de queda y la militarización del DMQuito y valles. Empezará a regir a las 15:00. Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia.

4:22 p. m. · 12 oct. 2019 · Twitter for Android

17,5 mil Retweets 34,3 mil Me gusta



Luis Cubillos
@LuisCubillosGye

@virgiliohermand

¿Porqué es perseguido?

1. Rechaza #Paquetazo, exige derogatoria de decretos d aumento precio d gasolina y d Estado de excepción.
2. Conduce recuperación d organización política d

#RevoluciónCiudadana

Basta de #Mentiras

#FuezaVirgilio

@MashiRafael @GabrielaEsPais



Ana Acosta
@yakuana

Qué quiero decirle al gobierno @Lenin

Ocultar

Información

Es una forma

de

mentir

Eso.

Talvez no hoy. Pero todo lo que están ocultando sobre las violaciones a Derechos Humanos en el

#ParoNacionalecuador saldrán a la luz.

La verdad tarda, pero llega

6:52 p. m. · 28 oct. 2019 · Twitter for Android



5:21 p. m. · 16 oct. 2019 · Twitter for Android



Plataforma Digital Voces
@Voces_Ecu

#InformativoVoces | #ToqueDeQueda

-Siete muertos.

-937 heridos.

-1.127 detenidos.

-Toque de queda desde las 15h00, decretado por @Lenin.

-Gobierno retiró señal televisiva de @teleSUREcuador en Ecuador.



12:02 a. m. · 13 oct. 2019 · Twitter Web App



Sebastián Martínez
@sebastian_marth

¡Bravo! Van 4 grandes victorias del #ParoNacionalEc:

1. Reunificación de movimiento indígena como poder político importante y contrapeso del poder económico.
 2. Nebot nunca será Presidente.
 3. Derogatoria de decreto 883
 4. Archivo de #LeyDelSaqueo
- Pueblo 4 - FMI 0
Y contando...

8:57 p. m. · 17 nov. 2019 · Twitter Web App

333 Retweets 725 Me gusta

#FueraLeninFuera



5:21 p. m. · 16 oct. 2019 · Twitter for Android



Robinson Robles Villaverde
@robinrobles

#ALERTA canales de televisión de #Ecuador activistas de las élites empresariales y el Gobierno se esfuerzan en responsabilizar al #Correismo de varios ataques, desmereciendo la legítima protesta de la @CONAIE_Ecuador, y la responsabilidad del #FMI que nadie denuncia.

11:15 p. m. · 12 oct. 2019 · Twitter for Android



ConLaW/enEl
@Paralamas26

#ParoNacionalEcuador El verdadero ejercito del Ecuador fueron los cientos de muchachos de batas blancas que salieron a defender y curar al pueblo, de la brutalidad policial y militar de este desgobierno. PARA ELLOS DEBIÓ HABER SIDO EL BONO DE 20 MILLONES QUE DIERON A POLICIAS!



SinLinea.Mx
@SinLineaMx

#ULTIMAHORA:
@Lenin deroga decreto 883 tras mas de 10 muertes, 2000 heridos, más de 1000 detenidos, más de 100 desaparecidos. Manifestantes siguen exigiendo destitución de los ministros de interior y defensa, María Paula Romo y Oswaldo Jarrin. #EcuadorEnResistencia

12:56 a. m. · 14 oct. 2019 · Twitter for Android

516 Retweets 878 Me gusta



2:18 834.7 mil reproducciones

12:09 p. m. · 11 oct. 2019 · Twitter for Android

12.3 mil Retweets 19.5 mil Me gusta



Pueblos y Nacionalidades
@inclusionpueblo

¿Si el gobierno de @lenin vuelve a quitar el subsidio de los combustibles a pedido del #FMI, cree posible otro #ParoNacionalEcuador?

#EcuadorEnResistencia



555 votos · Resultados finales

9:26 p. m. · 24 oct. 2019 · Twitter for Android

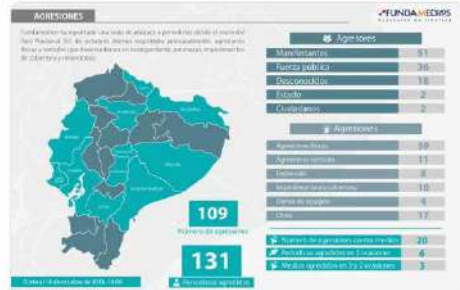


FUNDAMEDIOS
@FUNDAMEDIOS

La #prensa fue blanco de ataques durante 11 días de protesta.

#Fundamedios levantó el último balance de agresiones a los periodistas y medios ecuatorianos hasta el 14 de octubre.

Conozca cuántos trabajadores de prensa fueron agredidos mientras cubrían el #ParoNacionalEcuador



4:15 p. m. · 14 oct. 2019 · Twitter for iPhone

#EcuadorEnCrisis





REFLEXIONES

**INSURRECCIÓN
Y DESPUÉS**

Comunidad, ágora, barrio: pilares del levantamiento indígena-popular

Francisco Hidalgo Flor

Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales, que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 98)

La magnitud e intensidad de la revuelta indígena-popular por la derogatoria de las medidas que llevaron a la elevación del precio de las gasolinas y del transporte público sorprendió a todos. En primer lugar, a las élites gobernantes, que habían calculado una tibia y manejable respuesta desde las clases populares, pero también a los sectores populares de la ciudad y del campo que se iban reconociendo en la creciente masividad y fortaleza de las movilizaciones. Esa sorpresa y amplitud de la protesta, que llegó a copar buena parte del país, especialmente en la región andina del Ecuador, al punto de poner en cuestión la estabilidad del propio régimen de Moreno, fue la que obligó a que las clases dominantes, a regañadientes, se hayan visto obligadas a retroceder y echar abajo las medidas.

La revuelta indígena popular de octubre es un acontecimiento aún en movimiento. Por ejemplo, al momento de escribir este artículo se ha instalado un parlamento popular bajo iniciativa de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) para discutir las propuestas de los movimientos sociales, mientras que el Gobierno ha presentado una nueva ley tributaria y reabre las reuniones alrededor de la reforma laboral. Este levantamiento social, que pateó el tablero del *continuum* de la transición del retorno neoliberal, marca una presencia fortalecida de las reivindicaciones populares y tiene la virtud de evidenciar la multiplicidad de las resistencias;

ante los impactos de más de una década de modernización capitalista se hacen presentes en él los marginados, los excluidos.

LEVANTAMIENTO INDÍGENA Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE BASE

Con frecuencia, la potencialidad y masividad de levantamientos y revueltas populares son acontecimientos inesperados, que sorprenden porque rompen la dinámica regular y procedimental de los niveles institucionales del poder. Sus evoluciones no se presentan a simple vista, en la epidermis del quehacer político y social, sino que son como corrientes subterráneas que se mueven por los intersticios de las sociedades subalternas y pasan desapercibidas ante las miradas de las élites. Y de pronto irrumpen, sacuden con toda su potencia y diversidad; es un magma social contenido que se expresa con potencia, coraje e intensidad; en ocasiones deslumbra y asusta.

Estos acontecimientos de octubre tienen dos vertientes principales: el levantamiento indígena, cuya base es eminentemente rural, y las revueltas populares desde distintos sectores, tanto el obrero como el emergente de movimientos de jóvenes excluidos, marginados, y que abarcó las provincias y sacudió al centro del poder político. La columna vertebral y articuladora de la revuelta fue el levantamiento indígena, cuyas dinámicas contemporáneas ya quedaron esbozadas en aquel levantamiento del Inti Raymi en 1990, se repitió y enriqueció en el levantamiento que derrocó al Gobierno de Mahuad en el 2001, tuvo expresiones menores durante la década de Correa (por ejemplo, con la Marcha por la vida y por el agua de 2012) y volvió en toda su dimensión en este octubre de 2019. Al estudiar los levantamientos indígenas contemporáneos, de 1990 a 2019, uno pudiera quedarse en los acontecimientos de mayor impacto, por ejemplo la toma del edificio de la Asamblea Nacional (sede del poder legislativo), pero su esencia está en las bases del movimiento, en la persistencia de la estructura comunitaria dentro de los pueblos y nacionalidades indígenas; en la red de organizaciones territoriales de las regiones rurales, a la par, en momentos de levantamiento, de la capacidad del movimiento indígena de despertar y desencadenar la solidaridad y el apoyo de las clases populares y de las instituciones humanitarias en los centros urbanos. Lo notable es esa persistencia de la organización comunitaria de base en el conjunto del movimiento indígena, no solo en aquel ubicado en las regiones alejadas de la Amazonia, sino en regiones donde se presenta un claro avance

capitalista y con impactos de crecimiento urbano, como Cayambe con la florícolas, o Cotopaxi con florícolas y brocoleras; o quizás este asedio capitalista sea uno de los motivos de la mayor agudización de la protesta. Una de las novedades de este levantamiento de 2019 fue que en las marchas rurales se registraron intervenciones sobre instalaciones agroindustriales de flores y de brócoli.

La dinámica comunitaria organiza la vida social y política de la población indígena, por ejemplo, alrededor de asuntos como la gestión del agua y los canales hídricos, ahora más importantes que antes por la situación de cambio climático; la gestión y gobernanza del territorio; los controles respecto de la compraventa de parcelas, ante el asedio de la expansión urbana; la producción y comercialización agropecuaria, que implica mercados locales y en algunos casos la experimentación de producción agroecológica; los intercambios con territorios vecinos y con nuevos espacios; la relación entre las nuevas y las viejas generaciones de la comunidad, y, sin lugar a dudas, la comunidad organiza también los tiempos de las fiestas, como por ejemplo el *Inti Raymi*. Hay que destacar el rol protagónico que desempeña la mujer en la permanencia de esta forma de organización. Esta dinámica comunitaria adquiere ritmos y colores distintos cuando se decide a participar en un levantamiento indígena. Claro que no siempre eso acontece. Ha habido casos, de 1990 en adelante, en que las direcciones nacionales plantearon levantamientos y no tuvieron eco en las bases. Pero en octubre de 2019 esa conexión sí se generó, sí conectó, y fue masiva: las comunidades indígenas se movilizaron tanto en sus territorios como en los desplazamientos de contingentes hacia la capital. En algunos casos llegaron a desplegar relevos para sostener la lucha.

Junto a la estructura comunitaria está la red de organizaciones territoriales o de segundo grado en la cual confluyen las comunidades. Esta permite articulaciones de mayor nivel, pero también es la vía de comunicación con los poderes locales: los municipios y las oficinas de los ministerios. En algunos casos, sus representantes son parte de gobiernos de nivel cantonal o provincial. Una cuestión interesante es que en este nivel se gestionan los procesos de capacitación y de formación política; es aquí donde se procesa el discurso que se transmite a las comunidades. Cuando acontecen los levantamientos indígenas su dinámica se potencia o se restringe de acuerdo con el grado de compromiso de estas organizaciones territoriales. En octubre de 2019, este compromiso fue fuerte y decidido, tanto en el nivel de la

movilización como en renovar la dirección e incidir en los ritmos del proceso de lucha y de negociación.

Hemos destacado estos dos niveles, comunidad y organización territorial, para intentar entender las dinámicas internas de los levantamientos indígenas. Esto no es exclusivo de la Conaie: también está presente en las otras organizaciones nacionales indígenas, en especial en sus estructuras de región andina y amazónica, como la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos (Feine) y la Federación Ecuatoriana de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin). Uno de los factores para explicar la dimensión que alcanzó el levantamiento del 2019 es que estas tres federaciones nacionales participaron juntas como pocas veces antes se había visto.

El otro factor que habíamos mencionado es la solidaridad y el apoyo que alrededor de los levantamientos se despliegan en las ciudades, especialmente en Quito. Estos son vitales para que las movilizaciones puedan sostenerse. Se trata, por un lado, de los espacios para las asambleas y el debate social y político, centro que poco a poco fue girando alrededor del Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su entorno (conocido como el Parque del Arbolito) y, por otro, de los espacios de acogida, alimentación, descanso y comunicación, que poco a poco se fueron desplegando alrededor de las universidades Salesiana, Central y Católica. A lo largo de los diez días del levantamiento, el espacio en el cual se entretejieron la información, el debate y la síntesis del proceso y las propuestas políticas fue el Ágora. Allí emergieron los oradores indígenas y se evidenciaron nuevos liderazgos, se realizó el sepelio a los caídos en la lucha popular y se conocieron los detalles y resoluciones del diálogo con el Gobierno. Al Ágora también concurren a expresarse las otras organizaciones populares: los barrios, los sindicatos y los gremios estudiantiles. Una especificidad geográfica de Quito es que Ágora y universidades confluyen en un espacio relativamente cercano; el centro norte de la ciudad reúne los puntos del eje del debate y de la orientación política con los de albergue y refugio.

Los centros de albergue y refugio se sostienen por el trabajo de los estudiantes y docentes de las universidades. En ellos se acopian donaciones de apoyo que provienen de distintos sectores de la ciudad. En estos espacios se combaten el racismo, las culturas coloniales, se construye tejido social solidario, común: auténtico humanismo.

REVUELTA POPULAR EN LAS CIUDADES Y LOS EXCLUIDOS DE LA MODERNIDAD

Sostenemos que en la lucha popular contra el alza de los combustibles y las tarifas de transporte público se articularon al menos dos procesos; uno más orgánico, el levantamiento indígena, y otro un poco más espontáneo, la revuelta en los barrios populares, especialmente en Quito. A ellos hay que añadir la protesta desde los sindicatos obreros, agrupados en torno al Frente Unitario de los Trabajadores (FUT). Cuando se desatan estos procesos de luchas populares, levantamientos, huelgas, revueltas o un franco nivel de rebelión, los acontecimientos suelen desenvolverse con un ritmo vertiginoso y en ciertos momentos incontrolable. Son energías sociales de descontento, rebeldía e ira constreñidos, que encuentran la situación propicia, o inesperada, que les permite emerger, expresarse, adquirir protagonismo político. En ciertos niveles puede ser consciencia social más coraje; en otros, simplemente indignación ante unas condiciones estructurales de opresión. Una sociedad y una economía que no te dan opciones, que te condenan a la explotación o a la marginalidad.

De inicios de la década del 2000 para acá, la ciudad de Quito creció incontrolablemente, al punto de convertirse en la más poblada, superando incluso a Guayaquil. Quito, sede de las instituciones estatales, con el crecimiento del aparato público como motor de la economía, con las empresas financieras más boyantes del país (tras la quiebra de los bancos de la región litoral), con centros de educación consolidados, incrementó notablemente la migración interna, no solo desde los puntos cercanos de la región sierra, sino también de la costa. A partir de la crisis del Estado, sin embargo, con la caída del precio de las materias primas (2015-2016), y luego con el achicamiento del aparato gubernamental como producto del retorno neoliberal del régimen de Moreno (2017 – 2019), su incapacidad de cubrir a la población creciente se agudizó. El proyecto de modernización capitalista vía estatal, que fue la esencia de la acción gubernamental de Correa (2007-2017), potenció una capa social tecnocrática y colocó como divisa la meritocracia; promovió los centros de consumo para los sectores medios y altos, pero castigo a los sectores sociales, especialmente jóvenes, que no alcanzaban los estándares de eficiencia y eficacia que el modelo demandaba.

A esto se añade que estamos ante un fenómeno de crecimiento urbano sin crecimiento industrial. Las fuentes de trabajo son el Estado o el sector de servicios, en

condiciones cada vez más flexibilizadas. Los voceros del neoliberalismo demandan a gritos e insistentemente la reducción de un Estado al que califican de obeso, lo cual implica la desocupación de aquellos que antes se encontraban enrolados en las instituciones gubernamentales. Un ejemplo de ello fue el retorno de los exámenes de ingreso para acceder a la universidad pública, con escalas altas. Quienes pasaban esos filtros son los exitosos, pero quienes se ven relegados son los fracasados, sin futuro. Estas capas sociales estaban siendo desplazadas hacia los márgenes, las periferias, y la ciudad se tornaba en un hervidero que estalló con motivo de la revuelta popular contra el alza de los combustibles. Estaba presente la solidaridad con el levantamiento indígena, pero cada vez más se fueron haciendo presentes grupos de jóvenes que expresaban su ira contra un sistema que los condena a la exclusión. Por eso arremetieron reiteradamente contra los símbolos de poder estatal y del consumismo. Esta revuelta de los barrios y de los excluidos se expresó especialmente en los últimos días del levantamiento, en las barricadas colocadas en las zonas centro y sur de la ciudad; de allí provino buena parte de los detenidos y heridos de los enfrentamientos. La masividad de esta protesta de los barrios se expresó en los cacerolazos nocturnos del viernes 11 y sábado 12 de octubre, que se generalizó a lo largo y ancho de la ciudad. Pero no fue solo Quito: situaciones similares, aunque de menor dimensión, se expresaron en otras ciudades, especialmente del callejón interandino: Ibarra, Otavalo, Latacunga, Ambato, Riobamba o Cuenca.

Finalmente es necesario reseñar la importancia de otro actor social, que desempeñó una función trascendental en el debate previo al paquete de medidas y en el desmascaramiento de su contenido esencial. Se trata del movimiento obrero, en particular, del Frente Unitario de Trabajadores. Los sindicatos plantearon, desde meses antes del levantamiento indígena, la necesidad de una huelga nacional para proteger los derechos sindicales en juego: la estabilidad de los trabajadores, la jornada laboral de cuarenta horas, el derecho a la organización o el respeto al salario mínimo vital. En esta fase hubo una activación de los debates en los gremios de trabajadores tanto públicos como privados, pues desde inicios de 2018 se incrementaron los despidos en las instituciones gubernamentales. Luego se dieron diversos intentos de implantar la flexibilización laboral, y recientemente tuvieron lugar los debates sobre la reforma laboral que develaron su carácter de retroceso en cuanto a derechos.

MOMENTOS Y RITMO DE LA REVUELTA INDÍGENA-POPULAR

Los acontecimientos de lucha social de masas no son lineales, sino que presentan en su interior diversas fases y ritmos que los potencian o debilitan. En el caso de la revuelta indígena-popular, se dieron ritmos rápidos y hubo acontecimientos que la potenciaron y ampliaron.

Ubicamos tres momentos que marcaron el ritmo de los acontecimientos:

1. Su inicio el 3 de octubre con el paro a nivel nacional de los transportistas tanto de pasajeros, de carga y taxis contra la eliminación del subsidio a gasolinas y diésel. Para fines del día 4 de octubre este paro se suspendía por acuerdos con el Gobierno, que a su vez fijaba el aumento en las tarifas del transporte; casi de inmediato, el 5 de octubre, la Conaie anuncia la convocatoria a levantamiento indígena demandando la derogatoria del Decreto 883. Se presentan cortes de vías en provincias de la región andina y amazónica.
2. El 7 de octubre comienzan las marchas desde las provincias hacia la capital, que van accediendo al punto de encuentro: el Ágora de la Casa de la Cultura y el Parque del Arbolito. Las filas se engrosan el 8 de octubre; huelga nacional el 9 de octubre con presencia del movimiento obrero; se van haciendo presentes los barrios. El día 10 se intensifica la lucha alrededor del punto de concentración y se expande la movilización a los barrios.
3. El día 11 se alcanza el punto de mayor conflictividad. Grupos infiltrados atacan el edificio de la Contraloría; el 12 se abre la negociación, se transmite vía canales de televisión la sesión en la cual intervienen el Gobierno y las organizaciones indígenas.

Sin lugar a dudas, uno de los puntos a destacar fue esa transmisión en vivo de la reunión primera de diálogo; colocados frente a frente, en igualdad de condiciones, Moreno y su gabinete, ante la dirigencia nacional y provincial indígena, y la capacidad que los líderes sociales mostraron.

ANTE EL REAJUSTE EXTRACTIVISTA EMERGE EL DERECHO A LA RESISTENCIA

Así como el aumento del precio de gasolinas y diésel fue la gota que colmó el vaso de la indignación popular, el desencadenante de la protesta contenida frente a años de una crisis económica de igual manera dicho aumento, cuya lógica es la de avanzar hacia la progresiva eliminación de los subsidios estatales a favor de los sectores populares, es solo la punta del iceberg del reajuste neoliberal y la imposición de un patrón de acumulación que coloca como locomotora de la economía al extractivismo. La esencia del programa económico en movimiento es garantizar las condiciones estructurales para la recuperación de la tasa de ganancia del capital transnacional y local por la vía de montar un conjunto de políticas y legislación que garanticen la rentabilidad sobre la base de la flexibilización laboral, la protección de la inversión privada en la minería y petróleos, la reducción de la tributación sobre la repatriación de las ganancias y el retorno a los mecanismos de arbitraje internacional que protegen a las multinacionales.

Las clases dominantes quieren que este gobierno de transición complete la tarea, que realice el reajuste laboral, tributario y minero para avanzar aceleradamente en recuperar el terreno perdido. En la mentalidad neoliberal, el Ecuador tiene un retraso de más de dos décadas frente a las estrategias regionales de inserción en la globalización. Su respuesta actual es calificar las movilizaciones como intento de golpe de Estado; y, lo que es más grave, toma medidas para una escalada represiva, en nombre de la “amenaza insurreccional”. Pareciera ser que cobran protagonismo los partidarios de una vía autoritaria para imponer el patrón de acumulación extractivista. El gris de la transición y el retorno neoliberal, lleno de frases hechas y docilidad ante el gran capital, ha quedado mermado, débil. En el horizonte cobra fortaleza y vitalidad el multicolor de la *wiphala* indígena y de la ira de los y las excluidos. Es probable que los halcones de la derecha intenten agudizar una línea represiva y desempolvar los manuales de la seguridad nacional, pero el protagonismo social no podrá ser acallado. Este demanda el reconocimiento de la diversidad y de la justicia, la recuperación de sus derechos, y para ello apela a uno fundamental: el derecho a la resistencia.

REFERENCIAS

Constitución de la República del Ecuador. (20 de octubre de 2008). *Registro Oficial del Ecuador*. Quito: Editora Nacional.

Ecuador: regresión, ajuste y levantamiento indígena

Víctor Hugo Torres Dávila

La madrugada del 3 de octubre del 2019 el país amaneció con las principales vías urbanas y rurales bloqueadas por un paro masivo encabezado por los gremios de transportistas y las organizaciones indígenas y campesinas que rechazaban la eliminación de subsidios a la gasolina extra y diésel, puesta en vigencia el 1 de octubre por medio del Decreto ejecutivo 883 del Gobierno nacional. Tras dos días de malestar ciudadano por las dificultades de movilización y abasto, cerca de concluir el paro, el movimiento indígena, sorpresivamente, relevó a los transportistas y acentuó el bloqueo de vías y carreteras, dando paso a lo que se convirtió, por su duración y magnitud, en el mayor levantamiento indígena y popular en contra de las políticas neoliberales del FMI en la historia reciente del país. Dos años antes, desde el inicio de su gestión, el presidente Lenín Moreno encabezó la desactivación del progresismo del que, paradójicamente, había formado parte. Arguyendo que heredó un Estado abultado, endeudado y envuelto en una enorme corrupción, el presidente, apoyado en el empresariado, la banca y los importadores, se distanció de lo que consideró un descalificado socialismo del siglo **xxi** y emprendió la restitución de la institucionalidad estatal y el combate a la corrupción, magnificados por los medios de comunicación, asumiendo la agenda neoliberal que había sido contenida durante el progresismo precedente. Entre sus decisiones estuvo la condonación del pago de impuestos al sector empresarial por cinco mil millones de dólares, de los cuales al menos dos mil quinientos millones correspondían a las grandes empresas; la reducción de aranceles a la importación de maquinaria, equipos y materias primas; la devolución automática de tributos a los exportadores, y la eliminación del anticipo del impuesto a la renta a las empresas. Mientras tanto, en el área social se limitó a continuar con la política heredada de bonos focalizados en grupos de extrema pobreza, cuando, en contraste, en los últimos cinco años hay una tendencia regresiva de los logros conseguidos en

el período anterior: la pobreza por ingresos a nivel nacional subió del 22,9% al 25%; la extrema pobreza pasó del 7,4% al 9,5%; la pobreza rural que afectaba al 38% de la población subió al 43,8%, y la pobreza urbana pasó del 14,4% al 16,8%. En este proceso, Quito resultó la ciudad más impactada, ya que cerca del 20% de su población está en condición de pobreza. Asimismo, en medio del criticado endeudamiento público que se cifra en el 45% del PIB, el 11 de marzo del 2019 firmó un acuerdo con el FMI para un nuevo crédito de 4200 millones de dólares que aliviaría la crisis de la caja fiscal, aplicando a cambio un conjunto de medidas de ajuste entre las que estaba la liberalización del precio de los combustibles.

El movimiento indígena, las centrales sindicales y las organizaciones populares que habían sido estigmatizadas y perseguidas por el gobierno progresista de Alianza País (AP) –en su delirio de verse a sí mismo como la base del poder popular, aunque en la práctica estuviera distanciado de la sociedad– afincaron esperanzas en el diálogo con Moreno, en medio de la incertidumbre ante un gobierno en el que AP fue el principal actor del progresismo y ahora, en una mutación ideológica, en una suerte de autofagia partidaria, propugnaba su erradicación a riesgo de su propio fraccionamiento y eliminación. En el diálogo con las organizaciones indígenas el presidente ofreció restituir las escuelas comunitarias, fortalecer la educación intercultural bilingüe, crear la universidad indígena, impulsar programas de crédito rural y ampliar los sistemas de riego comunitario. Incluso, cuando anunció que el país saldría de la Unasur, en un paroxismo retórico dijo que su edificio sede sería para la universidad indígena. Aunque el presidente hizo sucesivos cambios en su gabinete para que se materializaran los ofrecimientos, transcurridos más de veinticuatro meses del diálogo no hay resultados tangibles. Y es que el Gobierno de Moreno se caracteriza por un desgastado discurso que explica todos los males del país como consecuencia de la gestión de su predecesor. Su equipo de ministros, asambleístas y autoridades locales alineados en AP busca desmontar las políticas y procesos públicos montados por ellos mismos cuando fungían de progresistas, cuestión nada fácil debido a los blindajes constitucionales y normativos y a las complejas rutinas burocráticas de un aparato público trazado con racionalidad regulatoria, que ahora opera con directrices desreguladoras de corte discrecional. Por simple derivación, era previsible advertir que la gestión de bienes y servicios públicos se entramparía entre los afanes estatales de restauración neoliberal y la inercia de una maquinaria burocrática cargada de

procedimentalismos (aunque envuelta en el manto de una gobernanza ágil en las respuestas a las presiones empresariales, es lenta ante los requerimientos populares). El ineludible efecto de esta dislocada gestión pública es el desgaste político de un Gobierno que se muestra parco en resultados, fustigado por sus propios aliados de derecha y erosionado del respaldo social; la credibilidad del presidente, en continuo descenso, había caído al 15% el 4 de octubre, día en que un inesperado levantamiento indígena radicalizó las protestas sociales gatilladas con el paro de transportistas.

En adelante, hasta el 13 de octubre se realizaron diversos eventos de protesta, resistencia pacífica y marchas ciudadanas en rechazo a las medidas gubernamentales en muchas ciudades y centros poblados (en diecinueve de las veinticuatro provincias del país, prácticamente en la totalidad de la geografía ecuatoriana). En siete capitales provinciales los manifestantes se tomaron pacíficamente las gobernaciones durante cuatro días, instalándose en asambleas populares. Asimismo, las organizaciones indígenas en la Sierra, Costa y Amazonía progresivamente bloquearon la mayoría de las principales carreteras, vías secundarias y terciarias, e incluso los caminos vecinales, paralizando durante once días el transporte de pasajeros, comercio y abastos, lo que provocó incertidumbres y angustias en ciudades y poblados por el masivo desabastecimiento de alimentos. Los municipios indígenas, pese a las diferencias ideológico-políticas de sus autoridades, se sumaron al levantamiento; unos, reforzando las protestas en sus localidades; otros, sin descuidar la seguridad de servicios en sus jurisdicciones, se sumaron y lideraron las marchas a la capital.

Desde el inicio de las protestas el presidente declaró el estado de excepción por sesenta días, movilizando a la policía nacional y las fuerzas armadas, que ocuparon el territorio nacional. Se suspendió el derecho de asociación, se restringió el de libre tránsito y se interrumpieron las clases en todos los niveles. Las fuerzas policiales y militares sofocaron las marchas y concentraciones en lugares públicos, cercando a los manifestantes con excesos de violencia y represión que provocaron numerosas detenciones y persecuciones, ante lo cual, el 7 de octubre, la Defensoría del Pueblo exhortó al Gobierno a suspender la medida de excepción. El mismo día, sin embargo, la Corte Constitucional, contrariamente a dicho pedido, ratificó el estado de excepción y lo redujo a treinta días, respaldando las acciones policiales y militares. El 5 de octubre, en medio del estado de excepción, el movimiento indígena emprendió la marcha a Quito. Bajaron de páramos y montañas de la serranía y subieron desde

las planicies amazónicas nutridas representaciones de las catorce nacionalidades y treintaidós pueblos indígenas que confluyeron en la marcha, estimándose que entre el 6 y el 9 de octubre más de veinte mil indígenas, por distintos flancos, paulatinamente entraron a la capital, convertida desde ese momento en escenario de la más cruenta y desproporcionada revuelta social.

El movimiento indígena, con larga experiencia de luchas agrarias y tomas simbólicas de la capital, mantuvo, de manera paralela a la marcha a Quito, protestas pacíficas en sus lugares de origen, en sus territorios, con innumerables barricadas y fogatas en las vías, en una suerte de división etaria de tareas: mientras las mujeres y hombres en su mayoría jóvenes, incluso adolescentes, protagonizaron las marchas y protestas en Quito, grupos de adultos mayores bloquearon las carreteras con relevos diurnos y nocturnos, apoyados por mujeres igualmente mayores que, apostadas en las inmediaciones, improvisaron cocinas y proveyeron continua alimentación y apoyo logístico. Si bien la simultaneidad de las protestas indígenas en el agro, en Quito y en las demás ciudades y los asedios en las carreteras estuvieron enlazados por medio de la telefonía celular, la elasticidad táctica de las movilizaciones indígenas fue posible por la pervivencia de las comunidades como fuentes culturales de solidaridad, reciprocidad y ayuda colectiva.

Durante siete días, hasta el domingo 13 de octubre, la ciudad de Quito, crecientemente desabastecida, sin transporte público y con la mayoría de sus calles bloqueadas, fue el epicentro del escalamiento de las protestas sociales que pedían la derogatoria del Decreto 883. Al igual que en eventos anteriores, los indígenas se apostaron en el Parque del Arbolito y en el Ágora de la Casa de la Cultura, convertidos en centro de operaciones y declarados “Zona Humanitaria y de Paz” por disponer de brigadas médicas, cocinas y comedores comunitarios, centros de acopio, lugares de descanso y albergue nocturno para los indígenas. Desde ahí se activaban las marchas hacia la Asamblea Nacional, los recurrentes intentos de llegar al Palacio de Carondelet (sede del Gobierno) en el centro histórico y las distintas acciones de resistencia pacífica, en una intermitente dinámica de propagación y repliegue de las manifestaciones, seguidas de la constante represión, persecuciones e intentos de desalojo por parte de las fuerzas de seguridad. Varios colectivos urbanos, estudiantes, pobladores y algunas organizaciones barriales buscaban sumarse a las marchas indígenas dirigiéndose hacia el Arbolito. Así fue ampliándose el perímetro de las manifestaciones y

aumentando la desmesurada represión policial y militar, aupada en las declaraciones del ministro de Defensa, quien interpretó las protestas con tono belicista. El 8 de octubre, el presidente y su gabinete se trasladaron al puerto de Guayaquil. En sus declaraciones, Moreno desestimó el descontento popular y calificó las protestas como vandalismo desestabilizador. Al siguiente día se convocó una marcha en Guayaquil, y el movimiento indígena y popular llamó a una huelga nacional y a nuevas marchas en Quito. En consecuencia, los cercos militares de contención a las manifestaciones repartidas en varios puntos del país se concentraron en las provincias de Pichincha y Guayas, al tiempo que las autoridades locales y los líderes políticos guayaquileños de distintos modos dijeron que los indígenas no serían bienvenidos en el puerto, resucitando así una anacrónica fractura regionalista teñida de racismo. Con la sucesiva llegada de los pueblos indígenas a Quito, las cinco universidades vecindadas en la zona del Arbolito abrieron sus puertas para prestar servicios médicos, cocinas y comedores comunitarios, sitios de descanso, guarderías y albergues nocturnos con brigadas voluntarias de docentes, administrativos y estudiantes, activándose una enorme y generosa solidaridad de la sociedad quiteña que donó medicinas, vituallas, víveres, ropa y enseres. Las cinco universidades, con apoyo del Municipio de Quito, fueron declaradas también “Zonas Humanitarias y de Paz”.

En los dos días subsiguientes aumentaron los bloqueos de vías en la Costa y la Amazonía, y se agravaron las protestas en el país, recrudeciendo la desmedida represión policial y militar. Mientras tanto, en Quito, en el funeral público de los primeros muertos del levantamiento, el movimiento indígena retuvo simbólicamente a un grupo de policías que descalzos cargaron los ataúdes. Al mediodía del 11 de octubre se autorizó una marcha pacífica hacia la colindante Asamblea Nacional, suspendiéndose momentáneamente la represión policial, pues en un operativo de emboscada fueron reprimidos los manifestantes, desatándose cruentos enfrentamientos en un escenario cubierto por la neblina de los gases, balas de goma, perdigones y francotiradores, así como por el humo de las barricadas encendidas por los manifestantes para disipar los gases que también afectaron a los cercanos Hospital Eugenio Espejo y Maternidad Isidro Ayora. Los enfrentamientos persistieron hasta las tres de la madrugada. Al amanecer del 12 de octubre se reiniciaron con mayor intensidad las protestas indígenas y populares y nuevamente se dispusieron barricadas y encendieron hogueras para despejar las nubes de gases lanzados por la policía. A media mañana

se dio la marcha de mujeres indígenas y organizaciones feministas por la derogatoria del Decreto 883 y el cese de la represión. En simultáneo surgieron nuevas barricadas y hogueras en los barrios populares del norte y sur de la ciudad, en algunas de las comunas ancestrales del distrito metropolitano, y se suspendieron las operaciones del aeropuerto. El mismo día, intensas protestas también se sucedieron en las principales ciudades del país, y se bloquearon otras carreteras, generalizándose en el territorio ecuatoriano el descontento social contra el paquetazo del Gobierno, así como el rechazo al excesivo uso de la fuerza contra la resistencia indígena.

En las protestas se mezclaron marginalmente eventos violentos como algunos saqueos de almacenes, especialmente en las ciudades costeñas. En Quito, grupos de encapuchados lanzaron cócteles molotov y llantas encendidas a las instalaciones del canal de televisión Teleamazonas y del diario *El Comercio* sin mayores consecuencias, pero más grave resultó el incendio y destrucción del edificio de la Contraloría General del Estado, el cual afectó a importantes archivos. Asimismo, un grupo político alineado con el progresismo, envuelto desde el comienzo en las protestas sociales, se lanzó en oposición al Gobierno con proclamas en favor de la destitución del presidente. Ante estos eventos, la dirigencia del movimiento indígena deslindó responsabilidades, porque no corresponden a sus propósitos ni accionar político. Al atardecer, en cadena nacional, el presidente invitó al diálogo a los indígenas con el fin de evaluar el Decreto 883. Dispuso además el toque de queda desde las quince horas y la militarización en todo el Distrito Metropolitano de Quito, medida que fue desoída por indígenas, pobladores, estudiantes y jóvenes que continuaron las marchas, protestas, barricadas y enfrentamientos con la policía y los militares, ya no solo en el perímetro de las zonas humanitarias de paz, sino a lo largo de toda la ciudad y hasta altas horas de la noche. A las 20:30, un sonoro cacerolazo en los barrios de clase media y populares ratificó el respaldo al levantamiento popular.

Entrada la noche, la dirigencia del movimiento indígena aceptó el diálogo con el presidente, por lo que domingo 13 de octubre se desactivaron las marchas y protestas a la expectativa del encuentro que se realizó a las 18 horas y que fue transmitido por cadena nacional. En este, el presidente ratificó su disposición al diálogo en beneficio de los ecuatorianos, mientras que los dirigentes de las distintas organizaciones del movimiento indígena con toda claridad condenaron la excesiva violencia ejercida en su contra y exigieron responsabilidad por los fallecidos. Además, pidieron

la derogación del Decreto 883, la renuncia de los ministros responsables de la represión, el respeto a la Constitución y a los derechos colectivos ante los eventos acaecidos, condenaron los actos vandálicos e insistieron en su histórico rechazo al correísmo, desmarcándose de cualquier acercamiento de este al movimiento indígena. El Gobierno derogó el Decreto 883 y formó una mesa técnica para redactar un decreto sustituto y continuar con el diálogo.

Así, con un costo de nueve personas fallecidas, 1340 heridas y 1192 detenidas, lo conseguido por el movimiento indígena se consideró un triunfo que fue festejado el día siguiente en el Arbolito. Luego, en mingas, las organizaciones indígenas y campesinas limpiaron los escombros de las protestas, despejaron las vías y se desmovilizaron en todo el país. El levantamiento popular dejó una estela de judicialización de las protestas; algunos de los políticos progresistas envueltos en las movilizaciones se exiliaron en la embajada de México, otros fueron apresados por instar a la insubordinación, y la Fiscalía levantó expedientes a las personas e instituciones que consideró involucradas en actos de vandalismo, terrorismo e insurrección.

Los eventos de octubre dejan muchos interrogantes. Un poderoso levantamiento indígena y popular con un magro resultado; la fuerza social activada en las calles disuelta en la mesa de negociación; la intención del Gobierno de continuar con el paquete de medidas de ajuste apoyado en el diálogo con un movimiento indígena desmovilizado. Lo cierto es que un levantamiento indígena y popular de la magnitud del acontecido no ocurre con frecuencia, ni se activa de modo recurrente; es un evento único que requiere condiciones excepcionales para que suceda. Su fuerza provocó un profundo temblor en la estructura social y develó dos hechos a los que me referiré para concluir el análisis: la incertidumbre ante la crisis del régimen político y las limitaciones de no ver que la sociedad ha cambiado.

El levantamiento indígena y popular dejó impávidos a los políticos, pues rebasó sus afanes de representación y vanguardismos. El régimen político ecuatoriano, antes de la década progresista, atravesaba una profunda crisis institucional, con partidos desgastados y ausencia de liderazgos. Eso mismo permitió la llegada de un *outsider* que ofreció cambiar y renovar la política y sus instituciones, pero que en realidad solo contuvo la crisis. Fue un paréntesis, pues acabado su período reapareció el régimen político decadente, con desgastados liderazgos carentes de representación; los

caducos políticos de la república liberal, aparentemente sepultados, resucitaron. El remezón del levantamiento indígena y popular removi6 e inhum6 sus pretensiones electorales. Unos solo necesitaban un leve empuj6n; otros, por su propia boca se acercaron al abismo.

El escenario pol3tico ecuatoriano muestra una severa erosi6n de la representaci6n de cara a las elecciones de 2021. A la izquierda, cr6nicamente dividida, en tanto no debate proyectos de cambio social, solo le queda juntarse en los dos partidos legalizados para las elecciones, pero ambos son el reino del canibalismo. La centroizquierda, en tensiones por reagrupar a “la tendencia” y diferenciarse de los remanentes del progresismo, es cercana a un Gobierno de confusa transici6n y sin rumbo cierto que probablemente arrastrar6 en el descr6dito a todos sus aliados, salvo que alguno haga algo extraordinario y se muestre como el redentor de la crisis. La deshabitada centroderecha, que estaba siendo paulatinamente ocupada por la derecha, fue removida a su primigenia postura de derecha localista. Parecer6 que el levantamiento indígena y popular despej6 el camino para un reposicionamiento electoral del movimiento indígena y su partido, que aspirar6 a liderar una amplia alianza, pero el desaf6o es lo alternativo m6s all6 del progresismo, para enfrentar una desvalida y autoritaria derecha que ser6 apuntalada desde todos los flancos para ganar las elecciones. Los protagonistas del levantamiento son evidencia de que la sociedad ecuatoriana cambi6, y que la acci6n colectiva ya no es la misma de cuarenta a6os atr6s. La organizaci6n piramidal del movimiento indígena, compuesto desde las bases por comunidades, agrupadas en federaciones de segundo grado, y afiliadas a organizaciones provinciales, regionales y nacionales, esto es, en una estructura organizacional de corte agrario, esta vez no oper6. Parece que ahora la organizaci6n sigue asentada en las comunidades, alguna federaci6n, arriba los gobiernos locales ind6genas y las organizaciones regionales y nacionales, y en el medio una abigarrada variedad de nuevas formas asociativas productivas, comerciales, de servicios y culturales con complejos flujos de relaciones econ6micas urbano-rurales, de continuidades culturales campo-ciudad que activaron in6ditas formas de protesta social.

Las nuevas dirigencias y participantes ind6genas, en su mayor6a mujeres y hombres j6venes, no solo expresan el relevo generacional, sino tambi6n una nueva composici6n social de las comunidades, con predominio de la poblaci6n joven que vivi6 en las ciudades y socializ6 en tribus urbanas, pandillas, jorgas y dem6s colectivos

asumiendo sus estilos, ropas, músicas y dialectos, quienes, al retornar a sus comunidades, recrean hibridismos identitarios, solapando las prácticas culturales urbanas en la ruralidad, y las rurales en la ciudad. No comprender estos nuevos flujos de identidades juveniles provoca estigmatizaciones y conceptualizaciones despectivas que generalizan a los indígenas. Si esto ocurre entre los jóvenes indígenas, en las demás clases y estratos de la sociedad ecuatoriana de seguro han ocurrido también cambios igualmente complejos y desafiantes. Se impone el reto de una relectura de la organización indígena en el acompañamiento a sus luchas.

La resistencia antineoliberal en Ecuador: causas y perspectivas progresistas

Ricardo Restrepo Echavarría

INTRODUCCIÓN

Tras un retroceso general, se suceden en la región diversas victorias y surgen perspectivas para las resistencias al neoliberalismo y la construcción de alternativas progresistas. Estos fenómenos en diferentes niveles de maduración que se ven en Argentina, Chile, Colombia, e incluso en los Estados Unidos prometen cambiar el panorama del continente y alcanzar repercusiones globales. En ese sentido, entre el 2 y el 13 de octubre de 2019 la ciudadanía de Ecuador escribió un capítulo en el libro de estas resistencias populares regionales y globales contra el neoliberalismo y el vaciamiento de la democracia.

La chispa que despertó los ánimos generales fue el alza de precios de combustibles, de acuerdo a las condiciones dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que el Gobierno de Lenín Moreno aceptó a cambio de un préstamo de 4200 millones de dólares, lo que equivale al 4% del PIB. Se trata de un monto idéntico al que meses atrás el mismo Gobierno había decidido condonar para deudores del fisco, principalmente del capital petrolero, financiero, de telecomunicaciones e importadores. La Federación de Transportistas del Ecuador declaró un paro que fue acompañado cada vez más por la ciudadanía. Cuando los líderes gremiales llegaron a un acuerdo con Moreno, la gente seguía en las calles y el movimiento indígena comenzó su movilización a la capital, donde encabezó y dio voz al rechazo general de esta política antipopular, que incrementaría la pobreza y la desigualdad, en una población ya cansada de las duras condiciones de vida, mientras al mismo tiempo se incrementaba la concentración de la riqueza.

Dos décadas habían pasado desde que, a causa de políticas neoliberales similares, se levantó el movimiento indígena en el año 2000 y tumbó al gobierno de Jamil

Mahuad, representante de esas políticas, promovidas por la banca nacional e internacional, que provocaron el incremento drástico de la pobreza, la desigualdad y la deuda, el colapso de todo pacto social y político nacional, del sistema financiero y de la moneda nacional, así como la expulsión de una parte sustancial de la ciudadanía. Pero la gente ya había visto la minimización de la democracia bajo el neoliberalismo desde el ascenso de Osvaldo Hurtado y la muerte de Jaime Roldós en 1981 hasta el comienzo de la década progresista 2006-2016, liderada por Rafael Correa. Reconociendo las políticas neoliberales antidemocráticas y el inicio de las mismas consecuencias experimentadas tiempo atrás, la ciudadanía expresó su resistencia a estas y al Gobierno que violaba la confianza pública depositada en él. A esta sensación generalizada de fraude se sumó el conocimiento de que es posible gobernar mejor. Durante el Gobierno de la Revolución Ciudadana hubo políticas que ampliaron el goce de derechos y condiciones de vida que elevaron las expectativas de lo posible, más allá de la ola ascendente en los precios internacionales de las materias primas.

En medio de muchos desafíos, la actual coyuntura abre una oportunidad para un nuevo ciclo de gobierno progresista, que se beneficie de los aprendizajes acumulados. Este escrito pretende realizar una síntesis de los aspectos críticos para la comprensión del paro nacional y su significancia. Con la vista en el futuro, se trata de generar una serie de aprendizajes de las experiencias neoliberales y progresistas con el fin de aportar a que la oportunidad sea bien aprovechada.

EL COMBUSTIBLE HUMANO

El Decreto 883 eliminaba el subsidio a los combustibles gasolina y diésel, una de las condiciones del FMI para la otorgación de un crédito que el Ecuador podría no haber solicitado, optando en su lugar por cobrar las deudas de los grandes capitales con el fisco. En 2018 la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Fomento Productivo propuesta como urgente por el Gobierno de Lenín Moreno. Esta ley incluyó el perdón de 228,3 millones de dólares adeudados por Andes Petroleum Ecuador Ltd. y de 194,4 millones de Oleoducto de Crudos Pesados, además de condonaciones a otras deudas de marcas conocidas como los 61,5 millones de Agip, los 38,9 millones de Otecel, los 41,2 millones de Exportadora Bananera Noboa, 18,3 millones de Banco del Pichincha, 14,9 millones de Produbanco, 19,7 millones de Almacenes Eljuri y

13,3 millones de Licores Nacionales y Extranjeros según los registros del Servicio de Rentas Internas (Arauz, 2019). En vez de cobrar estas deudas, se eleva el costo de los combustibles, incluyendo el del diésel en 119%, cuando este es usado para el transporte masivo y la producción y distribución de comida. El efecto inflacionario de la medida, sin contar los efectos macroeconómicos negativos, aumentaría la pobreza en aproximadamente 300 000 personas. Además, dada la omisión de cobro a los grandes capitales, doblemente aumentaría la desigualdad por su carácter regresivo (Oliva, 2019; BID, 2019).

Vale señalar dos puntos. Estas compañías registraron fuertes ganancias en los años anteriores, con lo cual no hay evidencia de que pueda haber un interés mayor por salvarlas, junto con los empleos y capacidades productivas que crean. Segundo, es verdad que el subsidio es para un bien contaminante y, especialmente en el caso de la gasolina, de consumo principal de clases medias y altas. Se debe mejorar el uso de este recurso, sin dejar de inyectarlo en la economía, focalizándolo en los sectores que lo necesitan y transformando el sistema de transporte masivo en uno de calidad y amigable con el ambiente. Se prometió aumentar un bono de 15 dólares mensuales a las familias pobres. Sin embargo, para tener una compensación más real y beneficiosa, desde el BID se estima que el bono tendría que subir 14% más y añadir transporte público completamente gratuito para dichas familias. Otra alternativa es que el bono suba 47 dólares (Schaffitzel, Jakob, Soria, Vogt-Schilb y Ward, 2019). Adicionalmente, si el Estado se *ahorra* los resultantes 1600 millones sin volver a inyectarlos a la economía, habría efectos negativos adicionales sobre la pobreza (Oliva, 2019), con lo cual el aumento de los 15 dólares del bono resultaría del todo insuficiente.

Desde hace cinco años, la tasa de pobreza (definiendo la línea en 84,99 dólares mensuales al 2019) ha estado básicamente estancada. La última cifra del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ubica índice de pobreza nacional en 23,9%, tasa que había sido superada a diciembre 2013 (INEC, 2019). La tasa de pobreza rural se ubica en 40,3% a septiembre 2019. Básicamente, uno de cada cuatro ecuatorianos y dos de cada cinco en zonas rurales vive con menos de 84,99 dólares mensuales, un estándar de por sí muy bajo. Hace nueve años, Ecuador ya había superado la tasa actual de desigualdad, ubicada en 48 puntos en el índice Gini (INEC, 2019).

La “reinstitutionalización y la nueva libertad” que enmarcan el gobierno de Moreno y los grupos políticos y económicos que lo sostienen incluyen también la liberalización de la banca privada, su liquidez e inversión en el exterior, la independencia del Banco Central (que implica la reducción de sus instrumentos de financiamiento público interno), la privatización de empresas públicas, la implementación del programa de gobierno del candidato de derecha Guillermo Lasso y la persecución de los integrantes de la Revolución Ciudadana. Para defender las medidas ante la movilización ciudadana encabezada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el presidente Moreno decretó el estado de excepción, aplicó el toque de queda y trasladó su Gobierno a Guayaquil, enclave del Partido Social Cristiano y del Movimiento Creando Oportunidades (Creo). Se trata de los partidos de derecha con los cuales Moreno gobierna desde que se encarceló al vicepresidente junto al que ganó las elecciones, Jorge Glas, por una presunta asociación ilícita para recibir dinero de Odebrecht, cuya evidencia es todavía incierta. El movimiento indígena se movilizó en masa a la capital, ocupó la Asamblea Nacional e instaló un foro y resguardo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más de 20 000 indígenas a la cabeza del paro nacional entraron en la capital, ampliamente acompañados por otros sectores de la ciudadanía, estudiantes y trabajadores incluidos, que salieron a las calles a protestar, así como a contribuir con comida y refugio para quienes venían de otras partes del país. La Universidad Católica, la Universidad Salesiana y la Universidad Central fueron clave en su acogida, que el ministro de Defensa Oswaldo Jarrín denominó como “centros logísticos de abastecimiento para manifestantes y grupos que actuaban vandálicamente” (Vélez, 2019) a fin de justificar los ataques por parte de uniformados a las instalaciones universitarias (Wambra, 2019). La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) también sirvió como centro de abasto. El Ecuador entero y sus municipios estuvieron en paro y las carreteras dejaron de funcionar. Hubo actos de saqueo y se quemó la Contraloría General de Estado, delito que el Gobierno atribuyó en declaraciones a pandilleros de la banda “Latin Kings, a los migrantes venezolanos y correístas infiltrados”. Despierta dudas que sea plausible que se la haya logrado prender fuego el 12 y el 13 de octubre de nuevo sin participación del Estado, dado el cerco policial que la custodiaba (Metro, 2019).

Un caso significativo fue el del arresto de quince conductores venezolanos de Uber con cargos de terrorismo, que la ministra del Interior María Paula Romo celebró en redes sociales, aunque no se encontrase ninguna evidencia de actos ilegales y tuvieran que ponerlos en libertad, lo cual la ministra no informó por el mismo medio (RT, 2019). El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, registró diez muertos, 1340 heridos y 1192 aprehensiones al 13 de octubre. De estas últimas, el 76% fueron arbitrarias, constituyendo uso excesivo de la fuerza, según la información entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (Europapress, 2019).

Finalmente, líderes del movimiento indígena, como el presidente de la CONAIE Jaime Vargas y el presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, Leonidas Iza, entre otros, se reunieron con el presidente Moreno, su Gobierno y representantes del Estado, bajo moderación de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal. El Gobierno, que había dicho que no se echaría atrás bajo ninguna circunstancia, aceptó revocar el Decreto 883. Un día después, apresaron a la Prefecta elegida y en funciones de Pichincha, Paola Pabón, junto a otros integrantes de la Revolución Ciudadana. En días subsiguientes continuaron los encarcelamientos de otras personas como el secretario y exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández. Asambleístas de este movimiento, como Gabriela Rivadeneira, tomaron refugio en la embajada de México (Teruggi, 2019; DW, 2019). Las acusaciones contra ellos se centran en el cargo de rebelión, aunque no hay evidencia presentada hasta el momento del presente escrito de promoción de la violencia por su parte, tal como exige el Código Orgánico Integral Penal, y se vierte en parte por su llamamiento a que caigan el Decreto 883 o el Gobierno. Este tipo de discurso político, sin embargo, está protegido, entre otros, no solo por la libertad de expresión sino porque el Artículo 130 de la Constitución permite que la Asamblea Nacional destituya al presidente (yendo a elecciones anticipadas ambas funciones del Estado). La represión, la xenofobia y la persecución política estuvieron presentes por parte de las fuerzas de represión del Estado y siguen en operación.

Durante el paro nacional los medios de comunicación privados y estatales decidieron o bien no reportar las manifestaciones, o mostrarlas como actos vandálicos terroristas. En el caso del canal de televisión Teleamazonas, optaron por dar

cobertura a la caricatura Bob Esponja y a otros programas de entretenimiento mientras se producían las manifestaciones. Su periodista Freddy Paredes y sus instalaciones en Quito fueron atacados. Las redes sociales y los medios comunitarios como Wambra Radio, Indymedia o Política con Manzanas proveyeron la información de interés público acallada. Así también Telesur, Russia Today y la BBC cubrieron los sucesos.

Esta base material también tiene una memoria. Por un lado, los ecuatorianos, y particularmente el movimiento indígena que derrocó a Mahuad, recuerdan las políticas impulsadas por Gobiernos que son elegidos al poder prometiendo una agenda popular y una vez ahí se alían al FMI y otros órganos neocoloniales nacionales e internacionales a costa de la mayoría de la población. La austeridad de los servicios públicos mientras se liberaliza al capital no es algo nuevo para el entendimiento nacional, ya que fue la forma dominante de gobierno durante veinticinco años. Este régimen que reduce la democracia en nombre de la libertad, la minimización del Estado, los derechos de propiedad, la seguridad y el crecimiento económico es exactamente lo opuesto de lo que pretende.

En Ecuador, el primer presidente desde el retorno de la democracia fue Jaime Roldós (1979-1981), quien traía una agenda de democratización, derechos humanos y desarrollo independiente. Promovía esas ideas en una nación que salía de una dictadura y se encontraba inmersa en una región llena de ellas (Sarmiento y Rivera, 2013). Su programa de Gobierno, directamente contrapuesto a las políticas neoliberales de las dictaduras chilena y argentina apoyadas por el gobierno de Reagan en Estados Unidos, planteaba el fortalecimiento de los derechos laborales, de la educación, de los derechos políticos y la soberanía sobre el petróleo. Cuando Roldós muere en un accidente aéreo, sube al poder su vicepresidente, quien inmediatamente eleva al principal sospechoso del siniestro, el vicealmirante Raúl Sorroza, al cargo de ministro de Defensa. En ese contexto, empieza el proceso conocido como la *sucretización* de la deuda externa del Ecuador, por el que pasivos internacionales de agentes privados, incluidos clubes de lujo, pasaron a ser pasivos del Estado. Este proceso continuó con León Febres Cordero entre 1984 y 1988, multiplicó más de tres veces la deuda externa pública como porcentaje del PIB, y socializó efectivamente los pasivos de privados.

Gráfico 1. Deuda externa pública como porcentaje del PIB.



Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia.

El pico de la deuda externa pública tuvo lugar en el año 2000, al colapsar la economía por la caída de los bancos liberalizados. Su liberalización se codificó en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero de 1994 y la Constitución de 1998, las cuales institucionalizaban el principio de que los bancos podrían tomar todos los riesgos que quisieran en el sistema financiero nacional y global y que, si perdían, el Estado los salvaría con recursos públicos. Vale señalar que la Constitución de 1998 fue impuesta a la ciudadanía desde la libertad que simboliza un recinto militar en las afueras de Quito, por parte de políticos sin autorización para redactar una nueva constitución y de partidos tradicionales en quienes solo el 15,5% de la población tenía algo de confianza (Latinobarómetro, 1997). De acuerdo a la base de datos del Banco Mundial, el PIB por persona cayó de 2,294 dólares en 1998 a 1445 dólares en el año 2000; es decir, una nueva socialización de pérdidas del 37% de la economía nacional. Desde 1981 hasta 1998, la ciudadanía había tenido la suerte de que la reducción de la economía de las personas a nivel nacional solo había sido de aproximadamente 300 dólares. La desigualdad, medida por el índice de Gini, pasó de 50,5 en 1987 a 58,6 en 1999 y 52,2 en 2006, colocando a Ecuador entre los diez países más

desiguales del mundo de acuerdo a la base de datos del Banco Mundial. La tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes se duplicó de 8,7 a 17,1 entre 1990 y 2006. En ese periodo, Ecuador fue el país de la región que menos progresó en el índice de desarrollo humano, fue el país número uno de la región en desalfabetizar la población (con la reducción de la tasa de población alfabetizada en 6,79 puntos). Fue, también, el último país de la región en porcentaje de inscripción escolar secundaria (Banco Mundial, 2019).

Sin embargo, asumir las pérdidas del capital no es barato y el tamaño del Estado se incrementó en un 48% respecto al PIB entre 1990 y 2006 (CEPAL, 2019). Lo que sí se redujo fue la democracia, no solo medida por la reducción de derechos garantizados que estas cifras revelan y por la imposición de una Constitución que cristalizaba la dominación del capital sobre el ser humano, sino porque bajo el fraude social de los gobernantes se produjo la tremenda inestabilidad del sistema de Gobierno, evidenciada por las protestas populares que impulsaron cambios de jefe de Estado en promedio una vez al año entre 1996 y 2006. En consecuencia, la tasa de confianza en el Gobierno se redujo en un 77% (Consejo Nacional Electoral, 2019; Latinobarómetro, 2019). Bajo la amenaza de la pobreza, la falta de oportunidades y de confianza, y de la mano invisible de esta nueva gran libertad, emigra uno de cada diez ecuatorianos, convirtiendo a Ecuador en el país de la región con mayores índices de exportación humana (Jokisch, 2014; Departamento de Estadística de Naciones Unidas, 2019). De esta experiencia queda una lección: el discurso y las políticas de austeridad, la liberalización del capital y la minimización del estado, por parte de grupos económicos y de poder, son una falacia elitista que atenta contra la democracia, el bienestar, los derechos y el buen manejo de la economía, la sociedad y la política. Son necesarios Gobiernos alternativos.

También el aprendizaje de que las cosas se pueden hacer mejor está presente en la memoria de las personas. Durante la década 2006-2016, todas estas restricciones a la libertad, a los derechos y al bienestar fueron revertidas. 38% de la tasa de pobreza fue eliminada. Ecuador se convirtió en el sexto país del mundo en cuanto a la reducción de la desigualdad medida por el índice de Gini, en el que pasó de 52,2 a 45 puntos (Banco Mundial, 2019). En lugar de elevarse, la tasa de homicidios bajó en un 65%, de 17 a 6 homicidios por cada 100 000 habitantes, y pasó del último lugar en cuanto a mejorar el índice de desarrollo humano a convertirse en uno de los

países de la región que más lo mejora. En el mismo periodo, Ecuador pasó de ser el último en el ranking de inclusión en el aprendizaje, producción y comprensión de la palabra escrita a ser el primero de la región tanto en alfabetización, como en aprendizaje de competencias de lectura y matemáticas en los exámenes regionales comparativos (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2014; Banco Mundial, 2019).

Igualmente, en la región pasó de penúltimo a primero en avances respecto del acceso a la educación secundaria. Después de mostrar los más altos índices de inestabilidad, desconfianza y emigración en la región, Ecuador pasó a tener un único Gobierno durante diez años, elegido con porcentajes ascendentes de votación en primera vuelta. Se quintuplicó la tasa de confianza en el Gobierno, en el marco de una Constitución democráticamente elaborada y popularmente aprobada, y se logró el mayor incremento en el índice de competitividad global de la región, así como el segundo puesto en reducción de la fragilidad del Estado. Ecuador pasó de ser el primero en emigración de la población a ser el primero en migración hacia el país dentro de la región (Consejo Nacional Electoral, 2019; Latinobarómetro, 2019; Banco Mundial, 2019; UNESCO, 2019; Foro Económico Mundial, 2016; Fund for Peace, 2016; Departamento de Estadística de las Naciones Unidas, 2019). Mientras tanto, la deuda pública bajó de 29% a 26% del PIB, como muestra el gráfico anterior.

Si bien durante la década de la Revolución Ciudadana se produjeron grandes avances en cuanto a derechos, bienestar y democratización del país, esos años dejaron asuntos pendientes en varias áreas fundamentales, que aquí me limito a enumerar:

- La formación de un sujeto político progresista y de liderazgos más amplios. Rafael Correa tuvo un papel protagónico esencial para lograr el progreso general, pero la figura que le sucedió y la manera tan fácil en la que buena parte de la población se volcó en contra de su legado evidencia una deficiencia de sujeto y opciones de liderazgo.
- Un mayor esfuerzo por tener una relación armónica y de trabajo reparatorio con las comunidades indígenas. Por ejemplo, se cerró la Universidad Amawta Wasi, concebida y creada por el movimiento indígena, porque no cumplió con los estándares del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad. Son necesarios un mayor reconocimiento y una mejor distribución de recursos.

- Volver a priorizar la erradicación de la pobreza por ingresos y multidimensional. Uno de cada cuatro ecuatorianos es pobre.
- Mayor eficiencia en el gasto. El gasto en la Refinería del Pacífico fue alto y no produjo resultados; además, se trató de una apuesta fuerte por una industria sucia. Hay similares ineficiencias en el manejo de las becas internacionales. La medición de resultados de la metodología Gobierno por Resultados (GPR) no es buena.
- Mayor fortalecimiento del periodismo de interés público, particularmente en los medios públicos y comunitarios. El periodismo de investigación, con su respectiva autonomía responsable, fue muy incipiente desde estos sectores.
- Mayor respeto a los derechos a la libertad de expresión, oposición y resistencia. El caso de los 10 de Luluncoto fue un caso claro de criminalización de la diferencia, donde un grupo de jóvenes de izquierda y oposición fueron arrestados por reunirse a conversar.
- Mayores esfuerzos contra la corrupción en el sector público y privado. Hay indicios de corrupción por parte de personas del sector privado y público que no fueron investigados.
- Encontrar mejores soluciones para el financiamiento de los partidos y campañas políticas para evitar el control del sistema político por parte de intereses particulares del capital. El Código de la Democracia reconoce el financiamiento público, pero es un área cuyos límites, como en el resto del mundo, el capital logra trascender.
- Llegar a una economía de carbono cero y de reforestación neta. Con el crecimiento de la economía han seguido incrementando las emisiones de CO₂ y las tasas altas de deforestación se han mantenido. Esto hay que revertirlo y construir una economía verde centrada en la sostenibilidad.

UNA OPORTUNIDAD: DE LA RESISTENCIA AL PODER

En el diálogo con el Gobierno transmitido por televisión en directo el 13 de octubre, Jaime Vargas declaró al movimiento indígena como un constructor del Estado, particularmente del Estado plurinacional. El movimiento indígena logró dar voz a la

ciudadanía en general; pide revisar el modelo económico del Estado y propone una agenda de transformación de la economía hacia un modelo en el cual se respeten y fomenten los ecosistemas que mantienen una naturaleza saludable. Este tipo de demandas expresan el republicanismo indígena que puede inspirar una nueva ola progresista que conlleve un mejoramiento de las condiciones y garantías de derechos de todos y todas.

Las alianzas con la derecha que ha probado el movimiento indígena, traicionado por el gobierno de Lucio Gutiérrez, al igual que cuando se alió al banquero neoliberal Guillermo Lasso en el 2016, no han dado frutos y resultan contraproducentes. Tampoco funcionó haber apoyado el intento de golpe de Estado que fue el alzamiento encabezado por la Policía en el 2010 (también conocido como 30S). Revisando los datos históricos de votación por Pachakutik, partido político de la Conaie, se comprueba que este está lejos de ser votado por sí solo al poder en los órganos del Estado, aún si los últimos acontecimientos aumentan sustancialmente su potencial electoral. Durante las marchas, tuvieron el 68,46% de apoyo solo en Quito y Guayaquil (según el reporte de la consultora Click Research para 2019). En el 2013 Pachakutik obtuvo el 3,26% del voto y en el 2017, el 6,71%.

Por otro lado, aunque bajó durante las protestas, el potencial de voto instantáneo en primera vuelta de Rafael Correa todavía sigue siendo más alto que el de cualquier otro político del Ecuador, ubicándose alrededor del 23%. El porcentaje de voto por Lasso y Jaime Nebot es de 15% y 13%, respectivamente. En segunda vuelta, Nebot ganaría la presidencia. El voto nulo sería del 23,6%, el cual debe ser movilizado (según datos de la consultora EureK Now). Hay una necesidad mutua en los sectores progresistas tanto para ganar, como para no perder más territorio ante la derecha. La conformación de un frente progresista que ordene en equilibrio programático y político las prioridades del manejo sostenible, ecológico, económico, político y social del Estado, que pueda generar una nueva oleada progresista, con aprendizajes en sabiduría y participación, es quizás la agenda más crítica de las fuerzas políticas transformadoras del país actualmente. ¿Tendrán la visión para tomar la oportunidad?

REFERENCIAS

- Arauz, A. (2019). “Trole 3. Cincuenta beneficiarios de la remisión tributaria: hacer más ricos a los más ricos”. En *Observatorio de la dolarización*. Recuperado de <https://dolarizacion.ec/2018/06/21/trole-3-50-beneficiarios-de-la-remision-tributaria-hacer-mas-ricos-a-los-mas-ricos/>
- Cárdenas, M. (13 de octubre de 2019). “Se reaviva el fuego en la Contraloría este 13 de octubre”. En *Metro Ecuador*. Recuperado de <https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2019/10/13/segundo-dia-vuelven-incendiar-la-contraloria.html>
- Código Orgánico Integral Penal. (10 de febrero de 2014). *Registro Oficial del Ecuador*. Quito: Editora Nacional.
- Consejo Nacional Electoral. (2019). *Resultados de elecciones*. Recuperado de <http://cne.gob.ec/es/estadisticas/publicaciones/category/877-publicaciones>
- Constitución de la República del Ecuador. (20 de octubre de 2008). *Registro Oficial del Ecuador*. Quito: Editora Nacional.
- Constitución Política del Ecuador. (5 de junio de 1998). *Registro Oficial del Ecuador*. Quito: Editora Nacional.
- Departamento de Estadística de Naciones Unidas. (2017). *Trends in International Migrant Stock: The 2017 Revision*. Recuperado de <https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.asp>
- Ecuador: arrestan a gobernadora del ‘correísmo’ tras fin de las protestas. (14 de octubre de 2019). *Deutsche Welle*. Recuperado de <https://www.dw.com/es/ecuador-arrestan-a-gobernadora-del-corre%C3%ADsmo-tras-fin-de-las-protestas/a-50830101>
- El Parlamento de los Pueblos, Organizaciones y Colectivos Sociales del Ecuador. (2019). *Propuesta al país (resumen ejecutivo)*. Recuperado de https://drive.google.com/file/d/18HrMmA8fFUo8lkJKNgHO2ZYurG_XbRDE/view
- Foro Económico Mundial. (2016). *The Global Competitiveness Report*. Recuperado de <https://es.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1>
- Fund for Peace. (2018). Country Dashboard: Ecuador. Recuperado de <https://fragilestatesindex.org/country-data/>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019). *Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. Indicadores de pobreza y desigualdad*. Recuperado de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2019/Diciembre-2019/201912_PobrezayDesigualdad.pdf

- Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2014). *Tercer estudio regional comparativo y explicativo: Ecuador mejora sus datos. 2006-2013*. Recuperado de http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/wp-content/uploads/2017/07/DAGI_Terce14_InformeEjecutivo_20141203.pdf
- Jokisch, B. (2014). *Ecuador: From Mass Emigration to Return Migration?* Recuperado de <https://www.migrationpolicy.org/article/ecuador-mass-emigration-return-migration>
- La Defensoría del Pueblo de Ecuador sitúa en una decena los muertos durante las protestas (29 de octubre de 2019). *Europa Press*. Recuperado de <https://www.europapress.es/internacional/noticia-defensoria-pueblo-ecuador-situa-decena-muertos-protestas-20191029020538.html>
- Latinobarómetro. (1997). *Informe de prensa Encuesta Latinobarómetro 1997*. Recuperado de http://www.latinobarometro.org/LATold/LATBD/LATBD_Latinobarometro_Informe_1997.pdf
- Latinobarómetro. (2006). *Informe Latinobarómetro 2006*. Recuperado de http://www.latinobarometro.org/LATold/LATBD/LATBD_Latinobarometro_Informe_2006.pdf
- Latinobarómetro. (2016). *Informe 2016*. Recuperado de <http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp>
- Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. (4 de julio de 1994). *Registro Oficial del Ecuador*. Quito: Editora Nacional.
- Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia (27 de abril de 2009). *Registro Oficial del Ecuador*. Quito: Editora Nacional.
- Oliva, N. (2019). *El combustible de la pobreza*. Recuperado de <https://www.celag.org/ecuador-el-combustible-de-la-pobreza>
- Policías disparan bombas lacrimógenas al interior de universidades. (11 de octubre de 2019). *Wambra*. Recuperado de <https://wambra.ec/policias-disparan-bombas-lacrimogenas-al-interior-de-universidades/>
- Russia Today. (11 de octubre de 2019). “*En libertad y sin cargos: venezolanos detenidos con supuesta información sobre Lenin Moreno en Quito eran conductores de taxi*”. Recuperado de <https://actualidad.rt.com/actualidad/330016-venezolanos-detenido-ecuador-choferes-uber-cabify>
- Sarmiento, M. y García, L. (2013) *La muerte de Jaime Roldós*. [Documental cinematográfico]. La maquinita films.
- Schaffitzel, F.; Jakob, M.; Soria, R.; Vogt-Schilb, A. y Ward, H. (2019). ¿Pueden las transferencias del Gobierno hacer que la reforma de las subsidios energéticos sea socialmente aceptable?: Un estudio de caso sobre Ecuador. doi: 10.18235/0001740.

- Teruggi, M. (2019). “¿Cómo funciona la persecución política en Ecuador?”. *Sputnik News*. Recuperado de <https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201910161088999351-como-functiona-la-persecucion-politica-en-ecuador/>
- Vélez, R. (23 de octubre de 2019). “Oswaldo Jarrín: Universidades ‘eran centros logísticos de abastecimiento para manifestantes y grupos que actuaban vandálicamente’”. En *El Comercio*. Recuperado de <https://www.elcomercio.com/actualidad/oswaldo-jarrin-universidades-abastecimiento-vandalicos.html>
- Vogt-Schilb, A. y Soria, R. (15 de agosto de 2019). *La reforma del subsidio energético en Ecuador podría generar beneficios sociales, fiscales y climáticos*. Recuperado de <https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/es/la-reforma-del-subsidio-energetico-en-ecuador-podria-generar-beneficios-sociales-fiscales-y-climaticos/>
- Weisbrot, M. y Aráuz, A. (20 de julio de 2019). *Obstáculos al crecimiento: el programa del FMI en Ecuador. Tiempo de crisis*. Recuperado de <http://tiempodecrisis.org/2019/07/obstaculos-al-crecimiento-el-programa-del-fmi-en-ecuador/>

Sobre el sentido común antineoliberal y otros debates necesarios

Magdalena León T.

Quito, 31 octubre 2019

La vertiginosa sucesión de acontecimientos en la región en este octubre de 2019 ha traído aparejados elementos de realidad y de análisis que abren una perspectiva ampliada para ubicar la reacción inédita que vivió Ecuador frente al acuerdo con el FMI y la agenda neoliberal en curso. Esta parecía inicialmente estar muy localizada espacial y temporalmente, e incluso referida a unos protagonistas concretos. Los estallidos y movilizaciones sociales que “no se vieron venir”, según han declarado varios actores, muestran la intensidad del conflicto capital-vida que caracteriza esta fase del neoliberalismo y dejan ver el acervo social para hacerle frente. Si la reacción en Chile sucede tras treinta años, la de Ecuador se da tras algo más de dos años desde el retorno a un régimen económico, político y social que había sido superado en la década precedente. En ambos casos, sin embargo, está presente ese rastro histórico de resistencias y búsquedas de cambio más o menos lejanas, de símbolos, consignas y propuestas que se expresan ahora en un sentido común antineoliberal. En ambos casos, la refundación constitucional aparece como elemento clave.

Tras lo aparentemente espontáneo está ese patrimonio popular, el ensamble de vivencias múltiples. No es casual que en Chile los símbolos y consignas que vienen de la experiencia de la Unidad Popular tengan tanta vigencia hoy como aquellos que se acaban de crear. Tampoco que, a su vez, algunos de esos símbolos y consignas hayan sido desde hace tiempo integrados al repertorio ecuatoriano y de otros países y se combinen con los propios y los nuevos. La saga progresista supo recuperar y resignificar esa memoria como sustrato de las transformaciones buscadas. En Ecuador, como se podía vislumbrar desde los inicios de esos once días de paro nacional, se trató de un momento de síntesis (León T., 2019). Afloraron a la superficie fenómenos subyacentes y nuevos, procesos de larga y mediana data junto con otros provocados en la

coyuntura inmediata. Desde los primeros días, varios elementos estuvieron presentes y conjugados en una suerte de continuidad de lo conocido y emergencia de lo nuevo, si bien en un contexto de incertidumbre y turbulencia. La escala de la represión, que a su vez catapultó más movilización, resultó uno de los hechos diferenciales, por sus efectos inmediatos y por lo que anticipa a futuro. ¿Un ensayo de hasta dónde puede llegar la violencia represiva, no solo con impunidad sino con criminalización de las víctimas?

En torno a la reivindicación central de derogatoria de un decreto se movilizó un espectro social amplio y un descontento aún mayor. Las comunidades indígenas fueron una suerte de columna vertebral de la paralización en los territorios de buena parte del país y de las acciones en Quito, pero junto a ellas, y posibilitando la jornada en su conjunto, estuvieron sectores populares en el más amplio sentido; grupos y entornos llamados ‘correístas’, entidades y colectivos de perfil progresista, mujeres, grupos, familias y gentes identificadas por un común descontento, pero también portadoras de esas experiencias que convergen al tiempo que juntan generaciones. Se reactivó la memoria de los levantamientos indígenas, de las luchas sindicales y poblacionales de otros tiempos, de las grandes jornadas contra otros acuerdos con el FMI y de los más recientes esfuerzos por construir un país diferente.

El descontento tuvo como detonante el ‘paquetazo’ de medidas económicas, especialmente la eliminación de los subsidios a los combustibles (Decreto 883), pero activó además lo represado por una escalada de motivos en estos dos años: el engaño político-electoral de un Gobierno que asumió un programa contrario al respaldado por la mayoría en las urnas, el golpe blando subsecuente, la persecución desatada contra el movimiento Revolución Ciudadana y sus integrantes en distintos niveles, el sometimiento internacional que ha supuesto no solo declinar intereses del país –incluyendo el pago a transnacionales– sino también dañar una imagen bien ganada de soberanía y proyecto propio. Y, por supuesto, el progresivo declive de las condiciones de vida por efecto del deterioro de los servicios públicos, del empleo, de los ingresos, la crisis y la recesión inducidas como condición del retorno del FMI.

El desenlace, muy distante del tono de victoria total asumido por algunos entornos mediáticos y políticos según los cuales el FMI ya fue derrotado, está abierto, en disputa. Ciertamente se marcó una inflexión, se abrió una nueva fase de resistencia con un escenario reconfigurado, pero los resultados concretos tras la mesa de

negociación con que culminó la jornada no son concluyentes. Tres resultados, de distinto signo, sí quedaron claros: la derogatoria del Decreto 883 y su reemplazo por otro acordado con participación de delegados de las organizaciones indígenas —que implicará pasar a un formato focalizado del subsidio a los combustibles—; una mayor intensidad en la persecución al movimiento Revolución Ciudadana —la prefecta de Pichincha y otros de sus integrantes ya han sido apresados con acusaciones de rebelión—, y la instauración de un nuevo umbral para la represión y la impunidad¹, que deja paradójicamente relegitimado a un Gobierno débil.

Queda abierta toda una agenda para la interpretación y el análisis. En estas líneas procuramos un acercamiento a tres de las muchas dimensiones en juego: el sentido común antineoliberal; las comunas indígenas y su proyección actual, y los diálogos políticos como posibles herramientas de gobernabilidad.

LA IMPORTANCIA DE UN SENTIDO COMÚN ANTINEOLIBERAL

Si bien la reivindicación central y la negociación subsecuente se dieron en torno al Decreto Ejecutivo 883, que eliminaba los subsidios a los combustibles y asumía la aplicación de precios internacionales, entre la gente movilizada primó un sentido de rechazo al neoliberalismo en términos amplios, al FMI y al Gobierno que lo encarna. Esta postura es de la mayor importancia ante la posible continuidad en la aplicación del acuerdo con el FMI suscrito en marzo de 2019. Se trata de un acuerdo de servicio ampliado, modalidad que va más lejos de los dieciocho de tipo *stand by* que se aplicaron entre 1961 y 2003. Establece metas fiscales, monetarias y estructurales con un cronograma de cumplimientos que se extiende hasta 2021. La Carta de intención contiene también lo que ya no es novedad en estos instrumentos, un enunciado sobre la ‘igualdad de género’ que se usa, entre otras cosas, para justificar la flexibilización laboral regresiva: “La introducción de contratos laborales menos rígidos beneficiará en particular a las mujeres que prefieran trabajar a tiempo parcial o en empleos temporales, lo

1 Quedó un saldo de diez personas muertas, 1340 heridas y 1192 aprehendidas, según datos de la Defensoría del Pueblo.

cual aumentará su participación en el mercado laboral” (Ministerio de economía y finanzas, 2019).

En la trayectoria de construcción de este sentido común antineoliberal pueden identificarse, *grosso modo*, distintos momentos o etapas. En las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado, la reacción apuntaba hacia medidas que afectaran el costo de vida, al tiempo que se condenaba la deuda externa y se defendía la existencia y la ampliación de los servicios públicos. En el cambio de siglo, ante el saqueo y la virtual quiebra del país a manos del esquema financiero especulativo impuesto, y al calor de iniciativas regionales de resistencia a la agenda de libre comercio, las posturas avanzaron hacia una crítica integral al sistema económico y a la propuesta de alternativas de esa escala. Todo esto confluyó en el proceso constituyente de 2007-2008, y se convirtió en el sustrato de los cambios adoptados, del régimen económico acordado con un horizonte de economía social y solidaria y buen vivir.

En 2007, el Gobierno terminó su relación con el FMI. Durante la década siguiente, junto con las políticas públicas posneoliberales, una de las constantes en el discurso y en la pedagogía presidencial de Rafael Correa fue la crítica del neoliberalismo: establecer comparaciones, marcar distancias y señalar diferencias con las realidades nacionales y globales en la materia. Fue también la referencia en los procesos de integración e institucionalidad regional alternativos avanzados en esos años. Durante ese período operó un fenómeno imposible de ignorar. Sectores que debían alinearse naturalmente con dicha postura anti- o, cuando menos, posneoliberal fueron adoptando la contraria desde un ejercicio ciego de oposición. La convergencia de las dirigencias sindicales u otras con las tesis de las élites empresariales fue en aumento, al punto que pasaron a utilizar idénticos discursos y razones de oposición, y a movilizarse conjuntamente por causas convertidas en comunes (por ejemplo la oposición a la llamada ley de plusvalía, que establecía gravámenes a grandes propiedades y reducía los de las pequeñas).

Ante el giro neoliberal adoptado por el Gobierno en curso, algunas dirigencias sociales, a título grupal o personal, fueron condescendientes y se mantuvieron en alianzas expresas o tácitas, que en unos casos continúan y en otros han sido revisadas prácticamente en vísperas del paro. Así también, varios analistas supuestamente críticos, con sus lentes antiprogresistas han llegado a justificar el acercamiento

al FMI, insistiendo en que el Gobierno anterior habría creado condiciones que inevitablemente llevarían al actual a semejante decisión. Hasta antes del paro, la oposición y la crítica a la agenda neoliberal provenía del espacio político y social de Revolución Ciudadana², así como de entornos académicos y de medios de comunicación alternativa. Tras el paro, la implementación del acuerdo no se ha detenido; no ha cambiado un ápice el rumbo neoliberal iniciado en el año 2017. Cerca de la medianoche del 18 de octubre se presentó ante la Asamblea Nacional un extenso proyecto de ley de crecimiento económico³ que avanza en los objetivos de desmantelar instituciones, controles y regulaciones; restituir y ampliar la presencia empresarial en instancias públicas; privatizar no solo empresas sino porciones de la gestión pública; eliminar derechos laborales, y proteger la fuga de capitales, entre otras. Esta nueva legislación ha estado precedida de otras leyes y decretos ejecutivos que apuntan en igual dirección, y que sirvieron para preparar el terreno. Una etapa que, de algún modo, culminó con la eliminación de la Secretaría Nacional de Planificación en mayo de 2019. En julio visitó el país el Secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo; el Gobierno le agradeció “por expresar todo el respaldo de Estados Unidos a lo que estamos haciendo respecto a seguridad, economía, democracia y lucha contra la corrupción” (Lazos bilaterales del país con EE. UU. cambian de rumbo, 2019).

El verdadero alineamiento presidencial en materia económica –ya que su adhesión implícita previa había sido aparente o falsa– se fue develando sin tardanza y no ha parado de rodar hacia las posturas más a la derecha. Un momento ilustrativo ocurrió a inicios de noviembre de 2017, cuando acudió, junto a todo su gabinete, al lanzamiento del proyecto Ecuador 2030 Productivo y Sostenible, elaborado por el Comité Empresarial Ecuatoriano. Dijo entonces que con ese proyecto ya prácticamente no hacía falta un plan nacional de desarrollo, ya que ahí estaban los objetivos y pasos a

2 Ya a inicios del período de gobierno, en agosto de 2017, el vicepresidente electo Jorge Glas denunciaba que la persecución desatada en su contra obedecía a su oposición a la agenda de ajuste y privatizaciones que el Gobierno buscaba imponer en contra de su propio programa electoral.

3 Su largo nombre es “Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, Afianzamiento de los Sistemas Monetario y Financiero y Manejo Responsable de las Finanzas Públicas”, contiene más de 400 artículos que modificarían veintidós cuerpos legales.

seguir. Los presentadores principales fueron Richard Martínez, entonces presidente de dicho Comité Empresarial, y Pablo Dávila, gerente del proyecto. El primero pasó más tarde a convertirse en el ministro de Economía y Finanzas; el segundo, en miembro del Consejo de Participación Transitorio. En aquel acto también tuvo presencia destacada el representante de la ONU en Ecuador, Arnaud Peral, quien habría de cumplir el papel de mediador en la mesa de negociación entre líderes indígenas y Gobierno.

Así, entender las trayectorias y perfiles del antineoliberalismo, su dinámica social y política y sus expresiones tanto anteriores como actuales es de la mayor relevancia. Los impactos previsibles de una reimplantación neoliberal de la escala prevista seguirán provocando una reacción social múltiple, que estará expuesta a los niveles de represión y autoritarismo indisociables de tal proyecto.

COMUNAS, ORGANIZACIÓN Y POLÍTICA

La presión de las bases del movimiento indígena y su acción durante el paro fueron decisivos para los alcances que logró esta iniciativa. Mientras algunos dirigentes, ex-dirigentes y autoridades locales indígenas prolongaron una alianza y cercanía con el Gobierno hasta días próximos a la publicación del Decreto 883, el descontento en las comunas⁴, junto con sus dinámicas (que han desbordado conceptos, percepciones e interpretaciones previas), señalaban otro rumbo de acción. Su protagonismo y fortaleza fueron perceptibles desde los primeros momentos, cuando impulsaron una confrontación que se hallaba represada, y se mostraron cruciales en los once días de movilización. Actuando desde la cohesión –y también coerción– interna, desde la flexibilidad de una dinámica más horizontal que piramidal, pudieron encarar el control del tiempo y el espacio que implicó paralizar el país por un período tan largo. La comuna desbordó los límites de la organización (agenda, dirigencia) para responder a las contingencias de una movilización de semejante escala, así como a una represión nunca antes vista. Tanto en sus territorios rurales como en las ciudades a las que se desplazaron o en donde viven, actuaron en conexión y conjunción con otros actores, organizados y no, en una gestión compartida de todos los recursos

4 Las comunas son el núcleo básico de las catorce nacionalidades y dieciocho pueblos indígenas ubicados principalmente en la Sierra y la Amazonía del país. Oficialmente representan un 7% de la población total.

involucrados. Se apreció que la comuna se mantiene como matriz que cobija y articula las trayectorias múltiples, individuales y colectivas que viven sus integrantes. Es palpable su capacidad de retroalimentarse con las vivencias y experiencias más recientes de sus miembros, entre ellos los jóvenes que estrenan educación superior. Se ratifica también como fuente de poder para las mujeres, ya que les permite actuar por sobre el machismo más presente a nivel familiar.

La represión operó como convocatoria. Afloró la necesidad de movilizarse desde un sentido de pertenencia que va más allá de las diferencias que pueden derivarse de las múltiples adscripciones organizativas y políticas de sus integrantes (las cuales recorren todo el arco político derecha-izquierda)⁵, e incluso de los conflictos y disputas locales que les enfrentan entre sí y que han sido vistos como un rasgo constante de ‘faccionalismo’.

Si ya desde la década de los ochenta del siglo pasado fueron analizadas las estrategias de sobrevivencia que permitían sostener las comunas con una combinación de recursos materiales derivados del trabajo local y la migración, hoy su realidad se ha complejizado mucho más, cuando parte de la población indígena es ya urbana. Su condición agraria se ha visto erosionada por las transformaciones del mercado y los límites de la acción pública para contrarrestarlas. Sin embargo, otras experiencias y políticas públicas han operado, al parecer, como factores de continuidad. Esto lleva a la necesidad de considerar la diversidad de interacciones y los efectos directos o mediatizados de las políticas públicas y de las relaciones políticas establecidas en el decenio de la Revolución Ciudadana (2007-2017). Se ha insistido mucho en los límites para avanzar hacia el Estado Plurinacional que señala la Constitución, y quizá mucho más en un supuesto enfrentamiento entre aquel Gobierno y la dirigencia indígena. Muy poco se han analizado, en cambio, las múltiples líneas de relación e iniciativas de políticas de inclusión que se desplegaron a lo largo de esos años. El registro es amplio, y va desde la integración de indígenas a altos cargos ejecutivos y diplomáticos hasta la presencia inédita del idioma quichua y otras lenguas ancestrales en los medios públicos de

5 Las principales organizaciones son la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), y la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE). Si bien se considera que el Movimiento Plurinacional Pachakutik es la expresión político-partidaria por excelencia, hay presencia indígena en la mayoría de partidos de todas las tendencias.

comunicación y en los enlaces presidenciales cumplidos cada semana, pasando por políticas de acción positiva para la inclusión laboral en el sector público y en la educación superior.

La importancia estratégica de fortalecer las comunas como corazón de un Estado Plurinacional se planteó en un encuentro histórico de exdirigentes indígenas en el año 2012 (I Encuentro Nacional de ex Dirigentes Indígenas del Ecuador, 2012). Sus propuestas fueron motivo de encuentro con distintas instancias públicas del Gobierno de la época, en un marco de intercambio y acuerdos para avanzar en la concreción de los enunciados constitucionales. Este perfil de relación ha sido sustituido hoy por una instrumentalización, por diálogos y acuerdos aparentes en torno a ofertas que al calor de la movilización fueron rechazadas como “espejos y bambalinas” por las bases. Mientras tanto, el esquema de represión durante el paro y la persecución posterior se basan en el desconocimiento expreso del carácter plurinacional del Estado por parte de los voceros del Gobierno actual.

Las comunas indígenas, en su diversidad de condiciones, no permanecen atadas a un modelo campesino y han experimentado otras vías de fortalecimiento en el marco de la fase progresista. ¿Cómo se proyectará esto hacia la agenda electoral también contemplada por la dirigencia indígena en este paro? Esa es apenas una de las interrogantes.

DIÁLOGOS, PACTOS Y AUTORITARISMO

El principal instrumento democrático del país en estos años es la Constitución vigente desde 2008, no solo por su jerarquía formal en el ordenamiento del Estado, sino porque es fruto del proceso histórico-político de mayor consenso y participación social. La Constitución fue una respuesta a la profunda crisis económica, política y social que asoló a un país sometido a la voracidad de los capitales especulativos y sus expresiones políticas. Propuso refundar el país: colocar la vida por sobre el capital, los derechos por sobre los intereses particulares, el bien común y el buen vivir como horizonte compartido. La Constitución es una suerte de escudo antineoliberal. Limitar o burlar su aplicación, alterar sus contenidos o modificar las normas e instituciones que se derivan de ella ha sido una constante durante el Gobierno en curso.

La reimplantación del neoliberalismo requiere un régimen político que deje fluir el poder del mercado por sobre todo. No es un giro sencillo: en Ecuador se aplicó, entre otras cosas, un golpe blando para apartar a las autoridades electas en distintas funciones y reemplazarlas por otras designadas desde el Ejecutivo. La reconfiguración de entidades y atribuciones empezó el primer día de Gobierno con la eliminación de ministerios coordinadores, el traslado de competencias y recursos del frente social hacia la Presidencia, la restitución de la figura de primera dama y su nombramiento al frente del Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida, creado a tal efecto. Se abrían así las puertas al patrimonialismo y clientelismo en la gestión del Estado. Otras competencias fueron trasladándose hacia la Presidencia y puestas en manos de individuos, de consejeros de Gobierno depositarios del poder de decisión sobre asuntos y áreas estratégicas. Uno destacado fue el Consejero de Gobierno para la Austeridad Fiscal del Estado, que dejó listo el esquema para privatizar las empresas públicas más exitosas, compradores incluidos.

De este modo se fue configurando un curioso híbrido de régimen presidencialista con un presidente débil. Tal debilidad de origen, de la figura en sí, estaba en principio compensada o relativizada por un colectivo político con un recorrido inédito de una década, y plasmado en un programa de gobierno para el período que contó con el voto de la mayoría. Esas condiciones cambiaron radicalmente a partir de lo que se conoció como *la traición*, pero se hallaron otros canales de compensación. Así, al cobijo de las élites realmente al mando y de los medios de comunicación corporativos, se ha sostenido una imagen presidencial⁶ inevitablemente precaria por sobre cualquier esfuerzo, carente de capital político propio y con niveles de aceptación que oscilan en las cifras más bajas.

La intervención en el conjunto de poderes y funciones del Estado se dio a través de una consulta popular (en marzo de 2018), llevada adelante al margen de la Constitución, que sirvió para conformar un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Esta instancia se atribuyó poderes supraconstitucionales y tomó decisiones en todos los campos del quehacer público a toda escala para, según los interesados, reinstitucionalizar el país. Uno de los recursos invocados en este proceso ha sido el del diálogo,

6 Algún titular llegó a contener los términos presidente y primer mandatario en un solo enunciado, como para que no queden dudas.

expuesto como mecanismo para superar un supuesto autoritarismo previo, conciliar una sociedad que habría sido polarizada o dividida a voluntad, y lograr pactos que aseguren la gobernabilidad. ¿Es el diálogo bueno *per se*? Depende, parece ser una respuesta obvia. Como mínimo, depende de los interlocutores, las condiciones, los objetivos y el momento; más aún, cuando se da en contextos de poder y de conflicto o confrontación. En otros tiempos y otras condiciones, se consideraron logros los espacios de diálogo demandados desde la ciudadanía, desde organizaciones y movimientos sociales, para hacer escuchar su voz, su propuesta y acaso impulsar decisiones que significaran alguna conquista, algún paso adelante. Luego, al amparo de la Constitución, los diálogos buscaron más bien una asociación entre lo público y lo social para encarar el poder del mercado y sus expresiones (tanto locales como trasnacionales) en función del interés público.

En el otro extremo se ubican las mesas de diálogo *ad hoc* para encaminar los intereses particulares por sobre el interés público, para bajarle el perfil a la Constitución, en la línea de un pacto social controlado, subordinado a agendas e intereses particulares. Así, hay situaciones en las que la herramienta del diálogo puede servir, paradójicamente, para legitimar actitudes o pretensiones antidemocráticas, para desdibujar instituciones, para alterar consensos conseguidos en procesos amplios y complejos como son los constitucionales, al someterlos a decisiones o pactos bilaterales. Una primera etapa de los diálogos propiciados por el Gobierno llevó a la recomposición del balance de poder con ventaja para actores político-empresariales o tendientes a la derecha. Se transfirió un poder duramente defendido y conseguido en el proceso electoral hacia los actores que no resultaron precisamente ganadores. El evidente desgaste de este recurso para otros fines que no fueran el de solapar la sustitución de una lógica de derechos por otra de intereses llevó a bajar su perfil, hasta cuando en el conflicto de octubre resurgió como la salida. La demanda social y el tema de negociación se ubicaron esta vez en el interés colectivo, el bien común y el respeto a la Constitución. Pero mucho más se escenificó en la mesa de la noche del 12 de octubre. Por un lado estaban los representantes indígenas con la legitimidad de una causa y la adhesión de un pueblo en pie, en las calles, desafiando el estado de excepción, el toque de queda y la violencia represiva. Por el otro, los representantes del Gobierno con serios problemas de legalidad y legitimidad, agravados en esos días, que lograban validar su perfil de interlocutores y cuyo principal objetivo parecía ser descalificar

y aislar al correísmo. Esta maniobra resultaba imposible dada la presencia y el rol transversal del movimiento en la jornada, pero se la intentó intensamente por medio de la criminalización, la persecución, la difamación y otros recursos similares. Así, uno de los resultados visibles de ese momento cumbre fue también la relegitimación de un Gobierno crónicamente débil en un sentido, pero con fortalezas, paradójicamente, para sostener una gobernabilidad neoliberal.

La consigna *¡Fuera, Moreno!*, hoy exhibida como prueba de un supuesto intento de golpe de Estado, se ha mantenido latente en estos dos años. Esta fue tomando forma a partir del giro restaurador, amparada en la norma que habilita como causal de destitución el incumplimiento del programa de gobierno electo. Como consigna de rechazo, fue ampliamente repetida durante la protesta, sin que signifique, como ahora se procura mostrar, la existencia de una conspiración golpista aunada a planes y acciones ‘terroristas’⁷. Estas versiones, que parecen absurdas o delirantes, tienen por desgracia usos muy concretos, consecuencias presentes y, en el futuro, amenazantes agendas regionales.

El Gobierno asegura que durante y después de la movilización ha cumplido ya más de setenta mesas de diálogo; es decir, se vuelve a la proliferación y vaciamiento, en procura de relativizar los compromisos adquiridos en la mesa de negociación con los indígenas y la importancia de sus interlocutores. ¿Hasta dónde podrá llegar la acción destructiva y autoritaria de un Gobierno débil, su permanencia?

A partir de octubre han cambiado muchos referentes. El conflicto de clases que se develó en las jornadas del paro y los días siguientes rebasa cualquier falso consenso, incluso el que se había conseguido al amparo de un anticorreísmo esgrimido con diversos formatos y usos hasta la fecha. Quizá está ya roto el hilo del diálogo como mecanismo privilegiado de la coyuntura, sus alcances como medio para afectar la vigencia de la Constitución, para minimizar o eludir la respuesta al estallido social o, peor aún, para intentar un blindaje social al programa neoliberal acordado con el FMI. Se abre un nuevo ciclo de resistencia, con actores y dinámicas nuevos o renovados, con una proyección de la experiencia progresista que acelera la confrontación con el neoliberalismo, en medio de una escalada del conflicto capital-vida y de la ofensiva violenta de las fuerzas restauradoras.

7 Pronunciamientos oficiales y de otros sectores señalan que se trata de planes ‘maduristas’, del Foro de Sao Paulo o del Gobierno cubano.

REFERENCIAS

- Lazos bilaterales del país con EE. UU. cambian de rumbo. (22 de julio de 2019). *El Telégrafo*. Recuperado de <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/lazosbilaterales-eeuu-ecuador>
- León T, M. (9 de octubre de 2019). “Ecuador: violencia neoliberal y respuestas sociales”. *América Latina en Movimiento*. Recuperado de <https://www.alainet.org/es/articulo/202594>
- Ministerio de Economía y Finanzas. (2019). *Carta de intención*. Recuperado de <https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/LOI-MEFP-Espa%C3%B1ol.pdf>
- 1 Encuentro Nacional de ex Dirigentes Indígenas del Ecuador. (2012). *¿Cómo fortalecer las comunidades para un Estado Plurinacional? Declaración y Propuestas*. Quito: FEDAEPS.

Ecuador en movilización contra el totalitarismo neoliberal

Luis Herrera Montero y Fernando Vera Cabrera

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, Ecuador dignifica a personas que fueron asesinadas, desaparecidas, heridas y encarceladas, ilegalmente, durante las manifestaciones en oposición al paquete económico que oficializara e impusiera dictatorialmente el presidente Moreno el 2 de octubre de 2019⁸. El espíritu de estas movilizaciones siempre fue pacífico. Las manifestaciones de agresividad fueron minoritarias y en defensa mínima, frente al accionar violento, principalmente, de la policía. Entonces, procede realizar un análisis de la situación política de terror que impuso el actual Gobierno, como estrategia represiva, para aplicar las medidas de ajuste determinadas por el Fondo Monetario Internacional y basadas en la política internacional de Estados Unidos, y específicamente de su presidente, Donald Trump, en complicidad directa con grupos oligárquicos nacionales.

El presente texto integra un análisis de los acontecimientos, como la imposición de lógicas de terrorismo de Estado, que riesgosamente el neoliberalismo globaliza como práctica totalitaria. Desde la otra perspectiva, también se incluye un análisis sobre la capacidad de respuesta de la población; los movimientos sociales y la sociedad se movilizaron multitudinariamente a nivel nacional. Estas manifestaciones incrementaron el ya alto nivel de crisis gubernamental, colocaron en situación de desgaste a la clase política ecuatoriana, y alertaron sobre las consecuencias catastróficas que las medidas implicarían para la sobrevivencia del pueblo ecuatoriano; sobre todo, de las poblaciones en estado de mayor vulnerabilidad, como son niños, jóvenes y mujeres que viven en pobreza y extrema pobreza.

En definitiva, pese a la aplicación de estrategias de terror y totalitarismo, el pueblo ecuatoriano no se amedrentó y logró la derogatoria del Decreto 883, a pesar del estado de excepción y los toques de queda. El nivel de resistencia política de los

movimientos indígenas⁹, obreros¹⁰, estudiantiles¹¹ y de mujeres¹² fue indiscutible, bajo el lema de *el pueblo unido jamás será vencido*, pese a ser sectores que responden a proyectos y agendas políticas heterogéneas. Tuvo gran relevancia el desmantelamiento de las acusaciones de golpismo y de auspicio e infiltración internacional, presuntamente por parte del gobierno venezolano y de integrantes de las FARC. La dirección del proceso la asumieron los movimientos indígenas, al punto de que el diálogo, televisado en cadena nacional, se realizó con sus dirigentes y produjo decisiones para la terminación de las movilizaciones. No obstante, aún no se cuenta con un proyecto estructurado que dimensione el agenciamiento político en cuanto a orientar la acción respecto de desafíos grandes en plazos inmediatos¹³.

TOTALITARISMO NEOLIBERAL-GLOBAL Y RESISTENCIAS EN MOVILIZACIÓN

La gran mayoría de acontecimientos mostraron inadmisibles niveles de violencia, expresados en hechos de represión desenfadada y persecución ilegal, e incluso invasiva de hogares y contraria al derecho ciudadano a la privacidad. La Defensoría del Pueblo, instancia del Estado ecuatoriano, con reconocimiento pleno en la Constitución de 2008, hizo público un informe oficial el 14 de octubre donde precisa que, a consecuencia del estado de excepción, que se emitió con Decreto Presidencial 884, fallecieron ocho personas, fueron heridas 1340 y detenidas un total de 1192¹⁴. En cuanto

9 Los movimientos indígenas se integraron paulatinamente en movilizaciones que contribuyeron con el paro nacional en diversos territorios locales en todas las regiones. Este proceso también contó con movilizaciones desde esos territorios hacia Quito, produciéndose un levantamiento local y nacional simultáneamente.

10 Para tener una clara diferencia con los gremios del transporte, el Frente Unitario de Trabajadores anunció un paro nacional para el 9 de octubre, el cual contó con pronunciamientos de apoyo del Frente Popular y de la Confederación de Nacionalidades indígenas de Ecuador.

11 Las movilizaciones estudiantiles comenzaron desde el primer día de paro y concluyeron cuando se hizo pública la terminación de las medidas de hecho; estas fueron lideradas por la Federación de Estudiantes Universitarios en Quito y Cuenca, principalmente.

12 Mujeres realizaron una marcha feminista en contra de las medidas económicas el 12 de octubre de 2019.

13 Apenas hay un llamado a conformar un parlamento popular de pueblos y organizaciones sociales. Ya hay trayecto de mayor peso en la historia de las movilizaciones.

14 El colectivo de Geografía Crítica realiza un interesante aporte analítico y cartográfico de lo sucedido en once días de represión, persecución y encarcelamiento, que puede servir de refuerzo a esta exposición de datos.

a las detenciones arbitrarias, dentro de escenarios de hogar, se llevaron a cabo contra dirigentes del transporte público y contra la prefecta de Pichincha¹⁵ y la exalcaldesa de Durán¹⁶. El asambleísta Fabricio Villamar también procesa denuncia en contra del prefecto de la provincia del Azuay, Yacu Pérez, por delito de rebelión. Se conoce de procesamientos también en contra de los principales dirigentes indígenas y que asambleístas del movimiento Revolución Ciudadana han solicitado asilo en la embajada de México.

Ecuador atraviesa la peor crisis política desde el retorno a la democracia en 1979. Probablemente, incluso, desde unas décadas más atrás. Si hacemos una revisión de datos, con un nivel de irrespeto a los derechos políticos y humanos inferior se destituyó a ministros e inclusive a Gobiernos: Bucaram en 1997, Mahuad en 2000 y Gutiérrez en 2005. El actual Gobierno, en cambio, se niega a pedir la renuncia a la ministra del interior, María Paula Romo, y al ministro de defensa, Oswaldo Jarrín, en una postura que legitima la violencia y los deja impunes de toda responsabilidad penal respecto de lo ocurrido en once días de fatal represión. En cambio, sí se tomaron medidas con miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuyo papel no alcanzó los niveles de agresividad de integrantes de la Policía Nacional, cuyos mandos también fueron ratificados y condecorados. En síntesis, el irrespeto a los derechos políticos y humanos llegó a niveles inadmisibles.

Las teorizaciones de Hannah Arendt sobre el totalitarismo se centraron principalmente en el abordaje de las prácticas fascistas y estalinistas que se vivieron durante la Segunda Guerra Mundial, sin excluir los factores sociales previos al conflicto, como también los posteriores, sobre todo, en cuanto al régimen de terror impuesto por Stalin en la Unión Soviética (Arendt, 2004). En la reflexión de Arendt, el totalitarismo se sustenta en una concentración excesiva de poder, en la imposición del terror, la manipulación propagandística-comunicacional y el irrespeto extremo de los derechos políticos y humanos.

15 Paola Pabón fue detenida la madrugada del 13 de octubre para investigaciones por delito de rebelión. Fue trasladada a la cárcel en la provincia de Tungurahua.

16 Alexandra Arce fue detenida la madrugada del 13 de octubre para investigaciones por promover vandalismo. El 14 de octubre se dicta prisión preventiva por asociación ilícita.

Gilles Deleuze y Felix Guattari (2007) prefieren diferenciar el totalitarismo del fascismo. Al primero lo conciben en el campo estrictamente estatal, como dimensión molar¹⁷ de la realidad. Al segundo, por el contrario, lo analizan desde lo molecular¹⁸, donde destacan su condición expansiva y compleja en lo social. No obstante, el tema no puede delimitarse en su existencia estatal: en la dimensión social está su médula. Retomando a Arendt: el totalitarismo se desarrolló como organización a través de los movimientos fascistas y estalinistas, como expresión de Gobiernos que transformaron lo militar en ejercicios policiales —de persecución, control y genocidio— y como dominación social, que bien puede irradiarse a instancias posfascistas y posestalinistas.

Herbert Marcuse definió al totalitarismo con contenidos que refuerzan la lógica en su dimensión social. Concibió que la industrialización contemporánea es un proceso social totalitario. Su síntesis, escrita hace décadas, es de indudable vigencia:

En virtud de la manera en que ha organizado su base tecnológica, la sociedad industrial contemporánea tiende a ser totalitaria. Porque no es solo “totalitaria” una coordinación política terrorista de la sociedad, sino también una coordinación técnico-económica no-terrorista que opera a través de la manipulación de las necesidades por intereses creados, impidiendo por lo tanto el surgimiento de una oposición efectiva contra el todo. No solo una forma específica de gobierno o gobierno de partido hace posible el totalitarismo, sino también un sistema específico de producción y distribución que puede muy bien ser compatible con un “pluralismo” de partidos, periódicos, “poderes compensatorios”, etc. (Marcuse, 1993)

A partir de las teorizaciones de Marcuse es posible sostener que la sociedad contemporánea, de carácter predominantemente neoliberal, reproduce características totalitarias, que pueden explicarse en un mundo de globalización. A partir de la caída del mundo socialista, la intención unipolar¹⁹ de dominación es estrictamente totalitaria, y su expresión social subordina a los Estados nacionales, tanto en materia económica como en materia política, al trasnacionalizar y expandir el ejercicio del terror a

17 Lo molar es estrictamente estructural, arbóreo, vertical.

18 Lo molecular conlleva la proliferación de procesos interconectados en calidad de rizoma.

19 Existen posturas que defienden la multipolaridad del mundo, pero el neoliberalismo se torna una sociedad unipolar más allá de la conformación y contradicciones de estados nacionales.

través de campañas mediáticas-comunicacionales de demonización xenofóbica, del irrespeto a los derechos políticos y humanos, la represión-persecución policial y la producción de genocidios²⁰. En esta área de análisis específica, el sistema global-neoliberal propició prácticas de totalitarismo en sus intervenciones político militares en Medio Oriente y con poblaciones vinculadas al Islam. En consecuencia, pese a que no se niega valor a las sustentaciones conceptuales de catalogar las reacciones de Al Qaeda y de grupos talibanes como terroristas (Beck, 2005), su emergencia en el mundo son producto de la política errónea de Occidente²¹. Al respecto, Ulrich Beck afirma también que la defensa de los derechos humanos, de manera impositiva y desde la perspectiva occidental, reforzó la proliferación de reacciones terroristas. Ahora, el neoliberalismo es totalitario no solamente por ejercicio de Estados Unidos: impone su propuesta social al multiplicar la extrema pobreza y la desigualdad en el mundo como nunca antes se hizo a nivel planetario²². En nuestra argumentación, en cambio, afirmamos que el terrorismo neoliberal provocó la emergencia de terroristas de reacción a sus políticas de acumulación de capitales en la economía petrolera y en el negocio armamentista. Al respecto, Agamben sostiene la existencia de totalitarismo con la siguiente argumentación:

El totalitarismo moderno se define como la instauración de una guerra civil legal a través del estado de excepción, y esto corre tanto para el régimen nazi como para la situación en que se vive en los EE. UU. desde que George W. Bush emitió el 13 de noviembre de 2001 una *military order* que autoriza la “detención indefinida” de los no-ciudadanos estadounidenses sospechados de actividades terroristas. (Agamben, 2005)

En términos estrictos del análisis de lo sucedido en Ecuador, retomando a Agamben, los estados de excepción suponen el hecho de garantizar la paz ante amenazas externas o internas, pero son formas de imponer legalidad a través de la destrucción del

20 Las fuerzas armadas desempeñan funciones que fortalecen la represión a la población civil, responsabilidad directa de la policía.

21 En diversas fuentes se evidenció que estas corrientes tuvieron estrechos nexos con la política internacional de Estados Unidos durante gran parte de la Guerra Fría. Además, los costos sociales vividos el 11 de septiembre de 2001 no son equiparables a los efectos militares en Irak, Afganistán, Libia y Siria, en términos de muerte y destrucción patrimonial.

22 Rusia y China son naciones neoliberales, en contradicción con Estados Unidos, pero nada exentas de aplicar el totalitarismo en su dimensión social.

derecho y la creación de totalitarismos. En consecuencia, el totalitarismo moderno es definido, según Agamben, como la instauración, mediante los estados de excepción, de una guerra civil legal, que permite la eliminación física de los adversarios y de ciudadanos no integrables en el sistema político.

En conformidad con todos los autores mencionados, en América Latina las dictaduras del Cono Sur fueron expresiones con características totalitarias. Se constatan hechos a partir de parámetros de nacionalismo y conservadurismo, con una maquinaria militar genocida, con roles y responsabilidades de índole policial, además de contenidos de desprecio clasista, racista y xenofóbico. El régimen de Pinochet fue una combinación entre fascismo y neoliberalismo, pese a que estas corrientes evidencian contradicciones en cuanto a liberalización de aranceles, por mencionar un ejemplo medular. En Ecuador, un devenir totalitario no estaría para nada fuera de contexto; es una conjetura que no debe ignorarse. El escenario hacia este tipo de práctica empezó a visualizarse a través del terrorismo de Estado; se atentó contra civiles como acto deliberadamente planificado. El estado de excepción se decretó desde el primer día de paro y posteriormente dos toques de queda, supuestamente dictados para precautelar el orden y la estabilidad pública, provocaron todo lo contrario²³.

Otra connotación de índole totalitaria es la masiva desinformación y demonización de las manifestaciones como actos vandálicos, así como las acusaciones generalizadas e improcedentes de delincuencia, golpismo y terrorismo. Frente a las falsas acusaciones, los movimientos indígenas y sociales de Ecuador, que dirigieron todo el proceso de lucha y levantamiento, enfatizaron que el propósito de las movilizaciones jamás radicó en exigir la destitución del presidente, por lo que quedó desmentido su supuesto golpismo. A su vez, recalcaron que tampoco hubo intervención internacional del Gobierno de Venezuela ni de las FARC, que el Gobierno insinuó pero no supo demostrar; es más, tras detener arbitrariamente a ocho ciudadanos venezolanos, debió de inmediato dejarlos en libertad. Finalmente, insistieron mediante la infiltración de agentes de la fuerza estatal;

23 Es oportuno comparar esta situación con lo que sucede hoy en Chile, pues las connotaciones son muy similares tanto respecto a las razones de la movilización, como de la represión con declaraciones de estado de emergencia y toques de queda (uno a nivel nacional y otro a nivel de Quito y sus valles). Estas fueron estrategias de terror y amedrentamiento.

un ejemplo destacable se produjo en el primer intento de ataque a la Contraloría General del Estado²⁴.

En cuanto a los sucesos de saqueos, esa responsabilidad corresponde, sin que nunca la hayan asumido, a los Gobiernos que refuerzan los niveles de pobreza, extrema pobreza y desempleo. La delincuencia no obedece a procesos de movilización social; por el contrario, es resultado de medidas de exclusión del sistema socioeconómico, y más aún cuando se globaliza la aplicación de políticas neoliberales. Entonces, culpar a las movilizaciones de los actos delictivos es tergiversar la realidad y omitir las responsabilidades socioestatales de los sistemas alineados con los grupos oligárquicos tanto a nivel nacional como internacional. Cuando la policía es eficiente en las represiones brutales contra los pueblos movilizados pero ineficiente para controlar la delincuencia y el contrabando de combustibles, que el Gobierno pretendía evitar con la eliminación del subsidio, se constituyen esos ejercicios de violencia y terror que mostramos como totalitarismo.

A pesar de esta situación de crisis, las últimas reacciones gubernamentales, luego de derogar el Decreto 883 y de evidenciarse su derrota frente al pueblo movilizado, consisten en la acusación de Moreno de que en Quito y en la Sierra hay sectores que se arman y ponen en peligro a la sociedad (*El Universo*, 18 de octubre de 2019). Por su parte, el ministro de Defensa asegura que las universidades, en vez de ser centros de paz y acogida humanitaria, funcionan como centros de abastecimiento logístico para manifestantes y vándalos (*El Universo*, 23 de octubre de 2019). Como era de esperar, las instituciones de educación superior rechazaron públicamente las afirmaciones del ministro Jarrín. Tales acusaciones están fuera de lugar y obligan a la ciudadanía a plantear serios interrogantes: ¿pretenden acaso justificar persecuciones ilegales a líderes sociales, como hacen los gobiernos uribistas en Colombia? ¿planifican acciones de mayor nivel de violencia para detener al pueblo si este retoma las movilizaciones ante la posibilidad de reactivarse otro paquetazo económico?

24 Los movimientos indígenas descubrieron a un miembro de la fuerza pública en las acciones atentatorias a la Contraloría. Uno de los causales de un estado de excepción es el cuidado de las instituciones del Estado. Unos días más tarde, se ataca nuevamente esta institución, que en ambas ocasiones fue fácilmente vulnerada. Por estos hechos se responsabilizó, sin pruebas, a grupos correístas. Otros, en cambio, vieron inexplicable la negligencia y la entendieron como autoatentado.

En la perspectiva opuesta, el análisis no puede obviar tampoco la capacidad de respuesta e indignación de los diversos sectores sociales. La recomposición del movimiento indígena es un acontecimiento que debe reconocerse. No puede negarse el legado ético que contiene la historia de las movilizaciones populares; no lograron revoluciones estructurales, pero sí recordar que el poder se desgasta y que los pueblos se manifiestan legítimamente desde donde pueden hacerlo. En esta ocasión, las protestas fueron generalizadas a nivel nacional. La capacidad de movilización puede compararse a otros eventos históricos como el de la Gloriosa²⁵. Dentro de este aspecto, se aplican las categorías de multitudes democráticas en movilización (Negri, 2004) y de resistencias políticas (Deleuze y Guattari, 2007) también como acontecimientos de envergadura y de contrapoder respecto del terrorismo de Estado y de la globalización de la sociedad totalitaria-neoliberal. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el impacto de estas multitudes en movilización y resistencia se ha limitado a instancias de índole coyuntural y constituyente, evidenciándose debilidades en ámbitos instituyentes y de práctica estatal, aspecto que conlleva también necesidades que requieren análisis²⁶.

Las propuestas de los movimientos indígenas modificaron sustancialmente las concepciones y prácticas de organización y lucha. Ello invitó a la sociedad a incursionar en los procesos desde otros legados históricos y desde otras modalidades de relación territorial —otras maneras de actuar y concebir tiempo y espacio— ausentes anteriormente en las dinámicas políticas de revolución. La dificultad radica en que las poblaciones indígenas son minoritarias en la escena política y en que el posicionamiento de un proyecto intercultural y plurinacional requiere de plazos opuestos a la aceleración global capitalista.

Lograr el sostenimiento de procesos revolucionarios, direccionados por manifiestos y proyectos políticos de cambio social, es una legítima utopía. El problema se presenta al acceder a instancias de poder estatal. En este escenario surgen desconexiones

25 La Revolución del 28 de mayo de 1944, conocida como “La Gloriosa”, fue una gran rebelión social de impacto nacional que terminó por destituir del poder al presidente Arroyo del Río.

26 Hay una sensación de que se generó un alto costo social con escasos logros. Peor aún, si esto se compara con lo que sucede en Chile, donde no solamente se derogaron las medidas de los pasajes, sino que se emitieron otras con visión social. Pese a estas conquistas de mayor envergadura, el pueblo chileno tiene claro que la lucha contra el neoliberalismo es integral.

con los procesos sociales y organizativos que motivaron la resistencia y movilización. Este desencuentro se debe a que el Estado responde a una historia clasista, que estructuró relaciones excluyentes, corruptas e incluso mafiosas. Entonces, los manifiestos y proyectos se topan con un *habitus*, tal y como lo formuló Bourdieu (1991), desconocido para el accionar político transformador, en lo local y nacional. En consecuencia, afloran prácticas en sintonía con largos procesos de ejercicio hegemónico que, a la postre, reacomodan el funcionamiento estatal en su estructuración clasista; en unos casos a través de prácticas también totalitarias, como sucedió con el estalinismo; en otros, mediante una recomposición capitalista-desarrollista, como se evidenció con los progresismos latinoamericanos²⁷ cuando se trataba de responder a procesos societales poscapitalistas

Un proceso político implica el fortalecimiento prioritario de sus condiciones organizativas en relación a contextos y correlaciones de fuerza. El movimiento indígena tuvo experiencias locales de gobierno, que empezaron con contundencia a través de procesos participativos de gestión y distribución democrática de presupuestos. Lamentablemente, en Ecuador no se pudo lograr la continuidad esperada por el afloramiento de caudillismos y clientelismos que se desviaron del proyecto político en localidades como Guamote, Cotacachi y Nabón, entre otras, factor que significó posteriores derrotas electorales.

En Ecuador, no fue una derrota electoral la que provocó la recomposición neoliberal y el evidente riesgo de degeneración totalitaria de la política de Estado. Lenín Moreno se deslindó del proyecto de gobierno con el que triunfó en las elecciones; dividió al movimiento Alianza País y el sector mayoritario acordó apoyar tal deslinde²⁸. El país se alineó con los sectores oligárquicos, opuestos políticamente a los parámetros constitucionales; se plegó con el bloque neoliberal del continente, se

27 El retorno del progresismo se dio en Argentina. En Bolivia se marca su continuidad. En ambos casos deberán modificar las relaciones Estado-pueblos; es decir, de reemplazar gobernabilidad por gobernanza: menos predominio estatal y más consolidación societal desde lo público, con del desafío de multiplicar liderazgos para evitar desgastes muy próximos. En Uruguay se definirá el futuro Gobierno en segunda vuelta.

28 A diferencia de otras regiones de América Latina, el progresismo en Ecuador se caracterizó por una mayor debilidad orgánica. La estructura del movimiento Alianza País no puede compararse con las del Partido de los Trabajadores o del Movimiento MAS, que cuentan con un trayecto político indiscutible.

sumergió en perspectivas fondomonetaristas y terminó por aplicar medidas de índole totalitaria en el ejercicio político. Ahora bien, esto no puede llevar a equiparaciones erróneas en el análisis: los gobiernos progresistas²⁹ no son neoliberales, a pesar del desencuentro entre Estado y pueblo organizado. Las acciones fueron de intervención para el desarrollo, no de potenciación de los valores de la Constitución de 2008, que buscan el buen vivir y no la modernización capitalista. Buscar una vía alternativa, excluyente de poblaciones que apoyan los logros gubernamentales-progresistas, resulta inaplicable, además, por constituir un sector con apoyo significativo. El fraccionamiento hace juego al neoliberalismo y al riesgo de instauración de políticas totalitarias con mayor poder de sostenimiento. Al respecto, resulta prioritario conformar un frente nacional antineoliberal, como un bloque político que acuerde procesos de lucha orgánica hacia una sociedad nueva, acorde a la Constitución de 2008, pero que delimite también estrategias de lucha electoral para detener la arremetida totalitaria de regímenes neoliberales. Hacer revoluciones es legítimo, pero cuando las correlaciones son aún adversas, procede construir alianzas, bloques en el poder y planes rigurosos de negociación.

CONCLUSIONES

Existe una multipolaridad económica en el mundo globalizado, porque la dominación neoliberal es contradictoria, pero termina por imponer regímenes totalitarios. En esa lógica se encuentran muchos procesos en América Latina. Ecuador se insertó en ella no por una derrota electoral, sino por viraje del gobierno de Lenín Moreno. Las represiones que se vivieron en el país durante el mes de octubre se caracterizaron por el terrorismo de Estado, la represión brutal de índole policial, la manipulación mediática y la demonización en contra de las movilizaciones, y el irrespeto extremo a los derechos políticos y humanos con la consecuencia de muertos, heridos, desapariciones y detenciones ilegales a causa de los decretos de estado de excepción y los toques de queda destinados a detener las movilizaciones. Todo esto, por la

29 Los Estados progresistas sustituyeron, desde instancias gubernamentales, los roles y funciones propias de movimientos y organizaciones, y provocaron serias rupturas políticas con repercusiones en la capacidad de continuidad de tales Gobiernos, además de debilitar la capacidad organizativa de los pueblos. Con todo, las diferencias son claras respecto del neoliberalismo, tanto en cifras como en la percepción mayoritaria de la ciudadanía.

imposición de medidas impopulares. En definitiva, se vieron claras expresiones de totalitarismo.

Las contribuciones teóricas de Hannah Arendt, Herbert Marcuse, Gilles Deleuze, Felix Guattari y Giorgio Agamben invitan, desde posturas heterogéneas, a interpretar el totalitarismo en su amplia connotación. En síntesis, teorizan al totalitarismo como la extinción social de los adversarios y las diferencias políticas por el ejercicio del terror socioeconómico y político. En América Latina y Ecuador, actualmente, los regímenes neoliberales-totalitarios tienen serias dificultades de posicionamiento social por sus imposiciones socioeconómicas impopulares y por los altos niveles de resistencia desde diversos sectores políticos y poblaciones. Los logros de la movilización en Ecuador fueron de gran envergadura; no obstante, se requiere de un frente antineoliberal para el agenciar político contra el eminente riesgo de caer en el totalitarismo.

REFERENCIAS

- Agamben, G. (2005). *Estado de excepción. Homo sacer II*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Arendt, H. (2004). *El origen del totalitarismo*. México D. F.: Santillana.
- Beck, U. (2005). *La mirada cosmopolita o la guerra es paz*. Barcelona: Paidós.
- Bourdieu, P. (1991). *El sentido práctico*. Madrid: Taurus.
- Deleuze, G. y Guattari, F. (2007). *Mil mesetas; capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pre-textos.
- Las universidades fueron centros de abastecimiento para manifestantes, dice ministro Oswaldo Jarrín. (23 de octubre de 2019). *El Universo*. Recuperado de <https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/23/nota/7572656/universidades-fueron-centros-abastecimiento-manifestantes>
- Lenín Moreno advierte que en Quito y en la Sierra hay gente que se está armando. (18 de octubre de 2019). *El Universo*. Recuperado de <https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/18/nota/7563806/moreno-advierte-que-quito-sierra-hay-gente-que-se-esta-armando>
- Marcuse, H. (1993). *El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada*. Barcelona: Paidós.
- Negri, T. (2004). *Guías. Cinco lecciones en torno a imperio*. Barcelona: Paidós.

“Venimos a luchar por el pueblo, no por el poder”: el levantamiento indígena y popular en Ecuador 2019³⁰

Adrián Bonilla y Mónica Mancero

ANTECEDENTES

El Ecuador acaba de vivir a finales del año 2019 uno de los momentos más intensos de la historia de las luchas sociales. Un levantamiento que, convocado por el movimiento indígena, movilizó a incontables actores y a decenas de miles de personas espontánea y organizadamente para oponerse a una medida gubernamental. Este texto busca explicar el hecho alrededor del análisis de la política gubernamental y la reacción que provocó, la naturaleza contemporánea de la protesta, la descripción de los principales actores e intereses y las causas de la violencia.

El movimiento indígena en Ecuador irrumpió con fuerza hace tres décadas, convirtiéndose no solo en un movimiento social sino en un actor político. En octubre de 2019, el movimiento encabezó un proceso de levantamiento popular, con el liderazgo de la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador (Conaie), la más importante agrupación social del Ecuador contemporáneo, que fue el telón de fondo de una crisis social e institucional que obligó al presidente Lenín Moreno a aceptar su demanda de derogar un decreto que terminaba con los subsidios a los combustibles fósiles. El país tiene una historia reciente de levantamientos protagonizados por la Conaie. En efecto, en 1990 el país pudo presenciar el primer levantamiento en época contemporánea; en aquel entonces, las demandas estaban relacionadas con reivindicaciones históricas y de carácter redistributivo como el derecho y la legalización de tierras; el acceso al agua y riego, y los precios

30 La cita del título la recoge Diego Cazar Baquero y pertenece a una mujer indígena que acompañaba el duelo de Inocencio Tucumbi, muerto en el levantamiento (Cazar Baquero, 2019).

justos, así como otras demandas de reconocimiento como la de construcción de un Estado plurinacional, con educación bilingüe y medicina indígena. A partir de allí, el movimiento indígena se constituye en un actor político capaz de superar el ventriloquismo que caracterizaba, según algunos académicos, a las formas anteriores de organización indígena; es decir, la mediación que ejercían blanco-mestizos respecto del discurso y accionar de los indígenas. En contraposición, otros autores sostienen que los indígenas siempre mostraron capacidad de agencia e inclusión de sus agendas políticas.

Si bien las demandas específicas de los indígenas en los levantamientos de 1992, 1994, 1997, 2001 y 2015 han variado a lo largo del tiempo, el hilo conductor ha sido su lucha a favor de temas de identidad étnica, equidad, ambientalismo y contra varias políticas neoliberales de Gobiernos erigidos en una sociedad inequitativa y excluyente, que no ha dejado de ser racista en el Ecuador contemporáneo.

LA DECISIÓN GUBERNAMENTAL

Desde el año 2016, el Ecuador, que está dolarizado, afronta una contracción económica por la disminución en la demanda y en los precios de los bienes primarios en los mercados internacionales, y particularmente por la baja de los precios del petróleo, que ha producido un importante déficit fiscal y de la balanza de pagos. El Gobierno de Lenín Moreno respondió implementando medidas de corte ortodoxo para disminuir el gasto público tales como el despido de aproximadamente 20 000 servidores públicos, la contratación de una voluminosa deuda y la negociación con el FMI de un crédito por 4 500 millones de dólares que implicó compromisos de reducción del déficit. El plan de ajuste gubernamental incluyó medidas de compensación para los sectores más ricos de la población tales como la reducción de aranceles a dispositivos electrónicos y del impuesto a la salida de divisas; la eliminación del pago anticipado del impuesto a la renta; la contribución especial para aquellas empresas que facturen más de 10 millones de dólares anuales y la liberalización del precio de los combustibles que mantenían un subsidio de cuatro décadas; en cambio, propuso la flexibilización de las relaciones laborales, con el riesgo de precarizar el trabajo formal que ello implica, y no consideró seriamente ofrecer compensaciones para los más pobres.

Las medidas fueron rechazadas por distintos sectores laborales e indígenas. La oposición más enfática fue al decreto que liberaba los precios de gasolina y diésel, subiéndolos en un 25% y un 120%, respectivamente. Para los sectores populares, una medida de esta naturaleza impactaba no solo en el costo del transporte público sino también en el precio de los productos de primera necesidad. Fue de dominio público que el régimen analizaba subir el IVA en varios puntos, a fin de elevar los ingresos fiscales. Sin embargo, esta medida se descartó porque los partidos de la derecha política ecuatoriana, que con frecuencia votan junto al Gobierno en el Parlamento, anunciaron su rechazo a esa posibilidad. En su lugar, el Ejecutivo decidió eliminar los subsidios a los combustibles y presentó débiles medidas compensatorias para los estratos de pobreza. Estas decisiones no fueron aceptadas por las organizaciones indígenas, quienes convocaron a una marcha hacia Quito y llamaron a un paro general para rechazar el plan de ajuste y las políticas neoliberales que se habrían acordado con el FMI.

LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTE LEVANTAMIENTO

La intensidad de la movilización indígena en el levantamiento de 2019 fue inédita: su capacidad de convocatoria a las comunidades, la adhesión del conjunto de organizaciones laborales y de movimientos sociales, así como la articulación espontánea de organizaciones locales y la vinculación no siempre orgánica de grupos de jóvenes a las movilizaciones fueron características nuevas en la protesta vivida en el Ecuador. A lo largo de su historia, la Conaie ha convocado a levantamientos indígenas con cierta frecuencia. Algunos de ellos fueron muy exitosos. El primero, por ejemplo, en 1990, abrió el camino a una modificación de la estructura del Estado que dio paso a los conceptos de “nacionalidades indígenas”, multiculturalidad y territorialidad, que incluso llegaron a plasmarse en las constituciones posteriores. En el año 2015, un levantamiento durante el gobierno de Correa dejó decenas de detenidos en todo el país con acusaciones de rebelión, pero ninguna de las convocatorias tuvo la capacidad de movilización y la intensidad en la protesta que tuvo la de 2019.

La explicación de este fenómeno no radica necesariamente en la fortaleza orgánica de la Confederación. La entidad indígena es muy heterogénea en su composición y la articulación de posiciones comunes aún dentro de su dirigencia nunca ha sido fácil. No es una organización vertical y piramidal con un mando único, ni cuenta con bases disciplinadas.

De hecho, durante las jornadas de protesta fueron frecuentes las contradicciones dentro de la dirigencia e incluso la cuenta de Twitter de la organización expresó posiciones diferentes. Por supuesto que hay federaciones y organizaciones locales, sobre todo a nivel rural, pero el éxito de la convocatoria parece haberse radicado en el momento, en la oportunidad que fue provocada por las medidas económicas, antes que en la preparación de las movilizaciones con prolijidad militante. El llamado al paro nacional fue realizado, además, por la organización sindical más importante del país, el Frente Unitario de los Trabajadores; sin embargo, el protagonismo de la dirección política perteneció al movimiento indígena. De todas maneras, el respaldo de esta última organización legitimó el llamado sobre todo en los ámbitos en donde la izquierda tradicional ecuatoriana se desempeña. Se sumaron todas las organizaciones de un muy fragmentado movimiento estudiantil y una infinidad de colectivos de movimientos sociales: ambientalistas, feministas, maestros y organizaciones de la sociedad civil. En algunos casos, esto ya había ocurrido en el pasado, pero no en la última década, en que desde el Estado se crearon organizaciones sociales destinadas a vincularlas a la agenda gubernamental. El éxito de ellas duró lo que ese Gobierno, y no se arraigaron nunca en la sociedad.

La movilización indígena se convoca casi al mismo tiempo que un paro nacional de los transportistas, que finalmente duró tan solo un día. Las comunidades indígenas rurales salen hacia Quito para realizar una concentración y marcha y son acompañadas por decenas de miles de personas que se vuelcan a las calles. La magnitud de la movilización, en realidad, no fue prevista por nadie; la respuesta por parte del Gobierno fue cercar el centro histórico de Quito y trasladar sus operaciones a la ciudad de Guayaquil. La capital ecuatoriana, si bien fue el epicentro de la protesta, no fue el único lugar en donde esta se desarrolló. De hecho, en prácticamente todas las provincias del Ecuador, muchas de ellas en donde no hay organizaciones filiales de la Conaie, se desplegaron episodios de bloqueo de calles y carreteras y otras formas de protesta que efectivamente generaron un paro total en el país.

QUÉ INTERESES ESTUVIERON EN JUEGO Y QUÉ ACTORES LOS REPRESENTARON

El levantamiento indígena y popular tuvo la capacidad de hacer confluir a diversos actores sociales: el movimiento indígena, trabajadores sindicalizados, federaciones

de transportistas, estudiantes, maestros, mujeres y pobladores urbanos salieron a protestar en las diferentes ciudades del país, así como en carreteras, barrios y plazas. El protagonista del levantamiento fue, sin duda, el movimiento indígena, el cual mostró una notable recomposición al convocarse en número creciente a la marcha hacia Quito.

Durante el decenio en que gobernara el expresidente Rafael Correa, numerosos movimientos sociales, y muy especialmente la Conaie, habían sido estigmatizados, reprimidos y criminalizados como resultado de un discurso homogeneizador que en su retórica buscaba eliminar los corporativismos y volver al país una sociedad transparente sin lo que, a juicio del ex jefe de Estado, eran las ataduras, prebendas y negociaciones permanentes que exigían los diversos actores sociales y que se habían desplegado desde la década de los noventa. Esta contención social, provocada durante el período de la denominada Revolución Ciudadana, se desbordó en el régimen de Moreno que, luego de la ruptura al interior del movimiento político Alianza País con el exgobernante, produjo cierta apertura democrática con los movimientos sociales y diferentes actores políticos. Por ejemplo, se otorgó un comodato a fin de que la casa sede de la Conaie en Quito pudiera continuar en manos del movimiento indígena, distanciándose así de la política de Correa, en cuyo Gobierno la organización fue despojada de su local. Al mismo tiempo se legisló la restitución de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi, que había sido cerrada durante el correísmo. Igualmente, se iniciaron diálogos para restituir la educación intercultural bilingüe, que también fue afectada durante la gestión del expresidente.

No obstante, estos diálogos no prosperaron y el Gobierno, en medio de una marcada debilidad y de la división de su antiguo partido, con bajas calificaciones de gestión en las encuestas, y con una representación minoritaria en la Asamblea, terminó apoyándose en la derecha ecuatoriana, que aprovechó la ruptura con Correa para incidir en forma determinante en las políticas gubernamentales. El debilitamiento paulatino del régimen es un dato importante. En diciembre de 2017, meses luego de asumir el poder, el índice de credibilidad del presidente registraba un 62,8% y el de aceptación de su gestión, 70,9% (Metro, 2017). En ese mismo año, el 38% consideraba que se gobernaba “para el bien de todo el pueblo”, pero este indicador sufrió una caída estrepitosa de 21 puntos porcentuales en 2018 (Latinobarómetro, 2018). En 2019, antes de las medidas, la credibilidad del primer mandatorio se ubicaba en apenas 16% y

el malestar por la situación del país era evidente, pues la mayoría de la población se sentía “preocupada, incierta, triste, pesimista, y molesta” (Cedatos, 2019).

Era previsible que medidas tan drásticas como la liberalización de los precios de los combustibles, que se mantuvieron estables durante cuatro décadas, sin que medie ninguna socialización sobre sus efectos y compensaciones, generasen malestar en la ciudadanía. Más aún si tomamos en cuenta las experiencias de conflicto social en reacción a políticas económicas que han ocurrido en el país desde el retorno a la democracia, que, por ejemplo, en las décadas pasadas terminaron en confluencias con los militares y el Parlamento y precipitaron la caída de tres presidentes. La reacción popular a las medidas fue masiva a lo largo del territorio nacional, pero la protesta estuvo acompañada no solo de marchas y manifestaciones en las calles sino también de incendios de edificios públicos; daños a infraestructura y medios de comunicación; intentos de sabotaje contra sistemas de agua y de infraestructura petrolera; interrupción de vías, y secuestro de policías y militares. Frente a esta convulsión social se desplegó la policía, salió el Ejército a las calles, se declararon el estado de excepción y el toque de queda. El saldo del conflicto fue de diez muertos y más de mil de heridos y otros tantos detenidos en el país.

El respaldo de las Fuerzas Armadas fue determinante para la continuidad del Gobierno del presidente Moreno. En tres derrocamientos de Gobiernos anteriores fue la pérdida de respaldo de las Fuerzas Armadas lo que precipitó la caída del Ejecutivo. En la agenda del movimiento indígena no estuvo contemplada la renuncia del presidente sino el rechazo del plan de ajuste y específicamente la derogatoria del Decreto 883.

La respuesta política del Gobierno ecuatoriano fue atribuir la protesta a una conspiración internacional protagonizada por el expresidente Correa y sus partidarios. El hecho cierto es más bien que esta fuerza política cometió un error estratégico importante, pues intentó sumar a la agenda social una demanda electoral, que básicamente consistía en exigir la salida del presidente y en el adelanto de las elecciones en el Ecuador. La reacción de los movimientos sociales fue el desacoplamiento explícito de la agenda electoral de Correa y una retórica de distanciamiento que evocó los diez años de un Gobierno intolerante y represivo en contra de los movimientos sociales. El resultado de esta política fue el aislamiento del expresidente y de su partido y la

generación de un escenario de vulnerabilidad. Luego del levantamiento, varios de sus dirigentes han sido apresados bajo cargos de conspiración o han buscado la protección del gobierno de México sin que ninguna fuerza social o política, ni siquiera las entidades de defensa de los Derechos Humanos, los hayan protegido. El uso político en lógica electoral del movimiento social fue extremadamente costoso para esa organización política y su caudillo.

La salida a la tensa situación generada se provocó luego de la mesa de diálogo que, con mediación de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal, determinó la derogatoria del decreto que ordenaba las medidas económicas y la elaboración de uno nuevo, esta vez, con el aporte del movimiento indígena. Los líderes indígenas llamaron a suspender las movilizaciones y el país entró, inmediatamente, en una aparente calma.

La popularidad del Gobierno ecuatoriano no parece mejorar luego de la gestión política de la movilización social. Si bien es cierto que los medios de comunicación convencionales, las cabezas de los distintos poderes del estado, los aparatos de seguridad y las voces de las élites económicas del país han salido en su respaldo, la credibilidad del presidente luego del levantamiento popular se ubica en 13,8% y la calificación a su gestión en 16% (Peralta, 2019). La sociedad ecuatoriana, luego de estos acontecimientos, se ha mostrado polarizada. Los medios de comunicación desempeñaron su propio rol; los institucionalizados, en respaldo del régimen y cuestionando el “vandalismo” en las manifestaciones; los medios comunitarios y redes sociales, cubriendo la fuerte represión por parte del Estado. Sin embargo, esta polarización es más aparente que real, puesto que el argumento de que los indígenas son una minoría que se quiere imponer en el país, utilizado por medios y opinión pública que expresa los intereses de las élites, se desbarata cuando conocemos que el 68,5% de la población apoyó el levantamiento, y apenas un 26,5% respaldó el decreto que eliminaba los subsidios (datos de la consultora Click Research en octubre de 2019).

QUÉ EXPLICA LA VIOLENCIA

El levantamiento indígena y popular en contra de las medidas de ajuste en el Ecuador da cuenta de un fenómeno social complejo, que tiene que ver con varias

causas estructurales y con otras que se explican en el escenario contingente. Entre las primeras, se debe considerar que el Ecuador sigue siendo una sociedad profundamente fracturada, atravesada por una pesada carga colonial en la cultura política, que se refuerza con los procesos de concentración de la propiedad contemporáneos y que se explica en lógicas de exclusión y discriminación por identidad étnica y por pertenencia de clase. La inequidad de la sociedad ecuatoriana no ha sido resuelta por los últimos procesos políticos. Aunque el índice de Gini bajó levemente durante la gestión del Gobierno anterior, las lógicas de exclusión y los escenarios de clausura en los procesos de participación no democratizaron la sociedad. Los sectores menos afortunados de la población fueron y siguen siendo vulnerables a las decisiones informadas por los discursos de las élites. El deterioro de las condiciones de vida debido a la ausencia de recursos gubernamentales y la localización de estos según la lógica empresarial aumentaron, por ejemplo, la pobreza, especialmente en el ámbito rural.

En este marco, la insatisfacción de la población con su situación es un dato de la realidad. Todas las encuestas a propósito de expectativas inmediatas y futuras, por ejemplo, evidencian un profundo pesimismo, sobre todo en los quintiles económicos más bajos de la población. Este sentimiento de frustración y de expectativas sin posibilidades está especialmente arraigado en la población más joven: muchachos y chicas de secundaria que intuyen que sus posibilidades de movilidad social son mínimas, o que las de repetir o empeorar la pobreza en la que vivieron sus padres en su propia vida son altas. Precisamente los más jóvenes fueron los protagonistas de innumerables hechos violentos y de vandalismo, como los intentos de asalto a negocios privados (sobre todo en los barrios populares), la destrucción de la propiedad pública y distintas agresiones a personas y fuerzas del orden. Estas conductas generaron, luego de la protesta, una reacción sin precedentes inmediatos de racismo y clasismo en el discurso de los medios de comunicación convencionales y entre los estratos económicos más altos del país. Los términos más abyectos han sido usados contra los dirigentes indígenas, y varios de ellos, incluso, han sido enjuiciados por políticos de la derecha. Pero el hecho cierto es que buena parte de los destrozos obedecen a un sentimiento antisocial que tiene explicaciones sociológicas antes que conspirativas.

Independientemente de lo anterior, el intento de la fuerza política que respalda al expresidente de fundir con la reivindicación social su demanda electoral de adelantar

los comicios permitió que se la responsabilizara del caos, que la dirigencia social se apartara de ella, y que incluso se forjaran las más insólitas teorías de conspiración internacional para explicar los incidentes violentos de la protesta. Las conspiraciones, que por supuesto existen, no son causas de los procesos sociales, sino productos de ella: no explican los escenarios estructurales, sino episodios aislados. En el caso ecuatoriano, ello le costó a la fuerza política que promocionaba una agenda electoral su vulnerabilidad y aislamiento.

Finalmente, como en otros países, la tecnología de redes sociales, mensajería y contacto virtual cambió muchísimo el contexto de la protesta social y de su control. La movilidad de las masas, la convocatoria, el desplazamiento de las comunidades y la dureza de la fuerza pública deben leerse también a la luz de estas circunstancias. Fueron jornadas cuya intensidad nadie intuyó; ni quienes la convocaron, ni las excluyentes élites ecuatorianas, ni tampoco el Gobierno.

REFLEXIÓN FINAL

La intensidad de la protesta ecuatoriana se explica por la insatisfacción social con el modelo económico, la dificultad gubernamental para comprender las causas de la movilización, la producción de políticas económicas que excluyeron las necesidades de los sectores más pobres de la población y la sensación de anomia y ausencia de expectativas de movilidad social, especialmente de los más jóvenes. Todo esto, además, en un contexto de carencia de recursos. Los movimientos sociales, y particularmente las organizaciones indígenas, retornaron al centro del escenario con inusitada fuerza luego de haber sido sitiados, divididos y controlados en la década precedente. ¿Quién pudo capitalizar la situación políticamente? Al parecer, ninguno de los actores políticos conocidos, lo que provocaría un vacío de representación. Especialmente golpeadas salen las fuerzas que intentaron inmiscuir una agenda electoral en la protesta.

Sin embargo, la reacción de los grupos de la elite, luego de los eventos, ha sido agresiva. Las lógicas racistas y clasistas que atraviesan en forma subrepticia a la sociedad ecuatoriana se han expresado abiertamente. Los discursos que correspondían al lenguaje político más rudimentario de la Guerra Fría han retornado también al debate. Las fracturas históricas del Ecuador, su pasado colonial y las perversiones de la sociedad oligárquica y terrateniente no han desaparecido. La continuidad de la

confrontación política y social, expresada de muy diversas formas, parecería inevitable en el mediano plazo si quienes ejercen el poder económico no comprenden la necesidad de construir democracia y revertir las bases de la inequidad y la injusticia social.

REFERENCIAS

- Acción Ecológica. (2010). *A los veinte años del levantamiento indígena*. Recuperado de <http://www.accioneologica.org/editoriales/1232-a-los-20-anos-del-levantamiento-indigena>
- Cazar Baquero, D. (2019). “Radiografía de un país roto y amnésico”. *La barra espaciadora*. Recuperado de <https://www.labarraespaciadora.com/cronica/radiografia-de-un-pais-roto-y-amnesico/>
- Cedatos: Credibilidad de Lenín Moreno se ubica en 62,8%. (27 de diciembre de 2017). *Metro*. Recuperado de <https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/12/27/cedatos-credibilidad-lenin-moreno-se-ubica-628.html>
- Cedatos. (2019). *Estudio al 30 de junio de 2019*. Recuperado de <https://wambra.ec/wp-content/uploads/2019/07/CEDATOS-BOLETIN-Estudio-a-30-JUNIO-2019-10-07-2019.pdf>
- Latinobarómetro. (2018). *Informe 2018*. Recuperado de http://www.latinobarometro.org/latdocs/INFORME_2018_LATINOBAROMETRO.pdf
- Peralta, P. (27 de octubre de 2019). “El 83,97% califica de negativa la gestión del presidente Moreno, según Click Report”. *Pichincha Comunicaciones*. Recuperado de <http://www.pichinchauniversal.com.ec/el-83-97-califica-de-negativa-la-gestion-del-presidente-moreno-segun-click-report/>

REFERENCIAS DE MEDIOS

Agencia de Noticias RedAcción

<https://www.anred.org/>

América Latina en Movimiento - Alai Net

<https://www.alainet.org/>

Amerindia en la Red

<https://amerindiaenlared.org/>

Comunizar

<http://comunizar.com.ar/>

Confirmado.net

<http://confirmado.net/>

Ctxt

<https://ctxt.es/>

David Díaz Arcos

<https://www.instagram.com/diaz.arcos/>

Fluxus fotos. Colectivo de fotógrafxs emergentes

https://www.instagram.com/fluxus_foto/

Interferencia

<https://interferencia.cl/>

Kaos en la Red

<https://kaosenlared.net/>

Karen Toro

<https://www.instagram.com/karentoroea/>

La Jornada

<https://www.jornada.com.mx/>

La Línea de Fuego

<https://lalineadefuego.info/>

La República Invisible

<http://larepublicainvisible.blogspot.com/>

Nueva Sociedad

<https://www.nuso.org/>

Other News

<https://www.other-news.info/>

Página 12

<https://www.pagina12.com.ar/>

Público.es

<https://www.publico.es/>

Rebelión

<https://rebelion.org/>

Revista Crisis

<https://www.revistacrisis.com/>

Revista La Periodica

<https://twitter.com/laperiodicanet>

Ruta Kritica

<https://www.facebook.com/RutaKritica/>

Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura ISIP

<https://www.facebook.com/ISIPcoyuntura/>

Wambra

<https://wambra.ec/>

REFERENCIAS DE LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS

Ecuador: del centro al fin del mundo

Boaventura de Sousa Santos

Publicado originalmente en *Other News* el 14 de octubre de 2019. Traducción de Antoni Aguiló.

<http://www.other-news.info/noticias/2019/10/ecuador-del-centro-al-fin-del-mundo/>

Fin de ciclo (corto) en Ecuador

Alfredo Serrano Mancilla

Publicado originalmente en *Página 12* (Argentina) el 10 de octubre de 2019.

<https://www.pagina12.com.ar/224426-fin-de-ciclo-corto-en-ecuador>

Crisis en Ecuador: de protestas y privilegios

Nicolás Oliva Pérez

Publicado originalmente en *La Jornada* (México) el 6 de octubre de 2019.

<https://www.jornada.com.mx/2019/10/06/opinion/021a1mun>

El gran carpetazo ecuatoriano

Guido Leonardo Croxatto

Publicado originalmente en *Página 12* el 16 de octubre de 2019.

<https://www.pagina12.com.ar/225622-el-gran-carpetazo-ecuatoriano>

Ecuador contra Lenín Moreno

Pablo Ospina Peralta

Publicado originalmente en *Nueva Sociedad* en octubre de 2019.

<https://nuso.org/articulo/ecuador-lenin-moreno/>

Lenín y la dictadura del capital en Ecuador

Katu Arkonada

Publicado originalmente en *La Jornada* (México) el 12 de octubre de 2019.

<https://www.jornada.com.mx/2019/10/12/opinion/021a1mun>

Ecuador: Lenín vs. Lenin

Isaac Bigio

Publicado originalmente en *Alai Net* el 15 de octubre de 2019.

<https://www.alainet.org/es/articulo/202646>

“Lenín Moreno no va a derogar el gasolinazo”

Entrevista a Guillaume Long por María Iglesias

Publicado originalmente en *Público.es* el 15 de octubre de 2019.

<https://www.publico.es/internacional/lenin-moreno-no-derogar-gasolinazo.html>

Abuso de poder en Ecuador

Virgilio Hernández

Publicado originalmente en *Página/12* el 17 de octubre de 2019.

<https://www.pagina12.com.ar/225603-abuso-de-poder-en-ecuador>

Recetas del FMI: Arma de destrucción masiva, inestabilidad social, pérdida de soberanía

CLAE

Publicado originalmente en *América Latina en Movimiento* de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI) el 15 de octubre de 2019.

<https://www.alainet.org/es/articulo/202658>

No hay peor reaccionario que el progresista arrepentido

Iván Mora Manzano

Publicado originalmente en el blog *La República Invisible* el 12 de octubre de 2019.

<http://larepublicainvisible.blogspot.com/2019/10/no-hay-peor-reaccionario-que-el.html>

La estigmatización de las pérdidas económicas por la movilización social

Marcelo Varela

Publicado originalmente en *Confirmado.net* el 9 de octubre de 2019. <https://confirmado.net/2019/10/09/la-estigmatizacion-de-las-perdidas-economicas-por-la-movilizacion-social-analisis-marcelo-varela/>

¿Ecuador sin proyecto nacional?

Isaías Campaña C.

Publicado originalmente en *Línea de Fuego* el 17 de octubre de 2019. <https://lalin-eadefuego.info/2019/10/17/ecuador-sin-proyecto-nacional-por-isaias-campana-c/>

Vía empresarial: Bajar salarios, bajar el impuesto a la renta a las grandes empresas, eliminar el impuesto a la salida de capitales, subir el IVA, eliminar aranceles, exportar o morir

Bayardo Tobar

Publicado originalmente en *Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura ISIP*, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central de Ecuador el 11 de junio de 2019. Recuperado de <https://coyunturaisip.wordpress.com/2019/06/11/via-empresarial-bajar-salarios-bajar-el-impuesto-a-la-renta-a-las-grandes-empresas-eliminar-el-impuesto-a-la-salida-de-capitales-subir-el-iva-eliminar-aranceles-exportar-o-morir/>

La perversidad del discurso mediático

Lucrecia Maldonado

Publicado originalmente en *Ruta Kritica*.
<https://rutakritica.org/la-perversidad-del-discurso-mediatico/>

Toque de queda en Ecuador: vía libre para el uso de armas letales

Artículo sin firma del diario La Jornada

Publicado originalmente en *La Jornada* de México el 13 de octubre de 2019.
<https://www.jornada.com.mx/2019/10/13/mundo/020n1mun?fbclid>

Ecuador: Lenín Moreno persigue a comunicadores y opositores políticos

Artículo sin firma de Anred

Publicado originalmente en Agencia de Noticias RedAcción el 18 de octubre de 2019. <https://www.anred.org/2019/10/18/ecuador-lenin-moreno-persigue-a-comunicadores-y-opositores-politicos/>

“El movimiento social que botó a tres presidentes ya no existe”

Entrevista a Santiago Ortiz por Lissette Fossa

Publicado originalmente en *Interferencia* el 5 de octubre de 2019. <https://interferencia.cl/articulos/el-movimiento-social-que-boto-tres-presidentes-ya-no-existe>

Ecuador gana el primer round al FMI

Adoración Guamán

Publicado originalmente en *ctxt* el 9 de octubre de 2019. <https://ctxt.es/es/20191009/Politica/28852/ecuador-fmi-indigenas-protestas-adoracion-guaman.htm>

Inocencio de los páramos

Leonardo Parrini

Publicado originalmente en *wambra*.

<https://wambra.ec/hay-quienes-suenan-con-monstruos-quien-sostuvo-al-movimiento-indigena/>

Hay quienes sueñan con monstruos: ¿quién sostuvo al movimiento indígena?

Milena Almeida

Publicado originalmente en *wambra*.

<https://wambra.ec/hay-quienes-suenan-con-monstruos-quien-sostuvo-al-movimiento-indigena/>

Apuntes sobre el triunfo popular de octubre

Revista Crisis

Publicada originalmente en *Revista Crisis* el 16 de octubre de 2019. <https://www.revistacrisis.com/coyuntura/apuntes-sobre-el-triunfo-popular-de-octubre>

Ecuador: A pesar de la represión, “Drone Revolution” socava el poder

Denis Rogatyuk

Publicada originalmente en *Le Vent Se Lève* el 9 de octubre de 2019. <https://lvsl.fr/equateur-malgre-la-repression-la-revolution-des-bourdonnements-ebroule-le-pouvoir/>

Movimientos populares espontáneos, entre el espontaneísmo y la transformación

Marcelo Colussi

Publicada originalmente en *Kaos en la Red* el 19 de octubre.

<https://kaosenlared.net/movimientos-populares-espontaneos-entre-el-espontaneismo-y-la-transformacion/>

Triunfo de la insurrección indígena ecuatoriana

Magdalena Gómez

Publicado originalmente en *La Jornada* el 15 de octubre de 2019. <https://www.jornada.com.mx/2019/10/15/opinion/017a2pol>

Protestas en Ecuador: ¿símbolo de un cambio anunciado?

Entrevista a Guillaume Long por el *Institut de Relations Internationales et Stratégiques* de Francia

¿Por qué la victoria del movimiento indigenista no es total?

Marco Teruggi

Publicado originalmente en *Página/12* el 15 de octubre de 2019. <https://www.pagina12.com.ar/225246-por-que-la-victoria-del-movimiento-indigenista-no-es-total>

“Fue una negociación pública inédita en la historia de Ecuador”

Entrevista a Soledad Stoessel por Guido Vassallo

Publicado originalmente en *Página/12* el 16 de octubre de 2019.

<https://www.pagina12.com.ar/225390-fue-una-negociacion-publica-inedita-en-la-historia-de-ecuado>

El fracasado discurso del éxito, turno de Ecuador

Emilio Cafassi, Noam Chomsky, Manuel Castells y Jorge Majfud

Publicado originalmente en *Rebelión* el 15 de octubre de 2019. <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=261384&titular=el-fracasado-discurso-del-C3%A9xito-turno-de-ecuador->

El movimiento indígena y la insurrección de los zánganos

Stalin Herrera

Publicado originalmente en *La Línea de Fuego* el 22 de octubre de 2019. <https://lalineadefuego.info/2019/10/22/el-movimiento-indigena-y-la-insurreccion-de-los-zanganos-por-stalin-herrera/>

¿De qué ha servido la revuelta en Ecuador?

Raúl Zibechi

Publicada originalmente en *Comunizar*.
<http://comunizar.com.ar/ha-servido-la-revuelta-ecuador/>

Fue una revuelta histórica

Pedro Pierre

Publicada originalmente en *Amerindia en la Red* el 17 de octubre de 2019. <http://www.amerindiaenlared.org/contenido/15654/fue-una-revuelta-historica/>

LAS Y LOS AUTORES

Adoración Guamán. Profesora titular de derecho del trabajo en la Universitat de València y autora del libro *TTIP, el asalto de las multinacionales a la democracia*.

Adrián Bonilla. Profesor titular principal de FLACSO Sede Ecuador.

Alfredo Serrano Mancilla. Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona (España). Especialista en Economía Pública, Desarrollo y Economía Mundial. Actual Director Ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). Autor de libros como *América Latina en disputa*, *El pensamiento económico de Hugo Chávez*, *¡A redistribuir! Ecuador para todos*, *Ahora es cuándo carajo*. Articulista en *Página 12*, *La Jornada*, *Público* y *Russia Today*.

Bayardo Tobar. Investigador de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Central del Ecuador. Unidad de análisis y estudios de coyuntura.

Boaventura de Sousa Santos. Académico portugués. Doctor en Sociología, catedrático de la Facultad de Economía y Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial.

Denis Rogatyuk. Periodista e investigador. Publicó en medios como *Jacobin*, *Le Vent Se Lève*, *Sputnik* o *The Gray Zone*.

Emilio Cafassi. Es profesor de Teoría Sociológica en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Publicó los libros *Internet: políticas y comunicación* y *Olla a presión*, sobre los cacerolazos en Argentina.

Fernando Vera Cabrera. Investigador de la Universidad de Cuenca.

Francisco Hidalgo Flor. Sociólogo, participa en el Grupo de Trabajo CLACSO Estudios críticos del desarrollo rural. Es también investigador de Sipae y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador.

Guido Leonardo Croxatto. Investigador UBA-Conicet. Director del Tribunal Experimental en Derechos Humanos Rodolfo Ortega Peña (UNLa).

Guillaume Long. Sirvió como ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador durante el Gobierno de Rafael Correa.

Isaac Bigio. Ha obtenido grados y posgrados en Historia y Política Económica en la London School of Economics & Political Sciences, donde ha sido profesor. Es columnista regular de *Correo* (Perú), *La Opinión* (Estados Unidos) y *Noticias* (Gran Bretaña). En 1998 obtuvo el premio de la Excelencia de Dillons-Waterstone y el E. H. Carr del Departamento de Política Internacional de la Universidad de Gales.

Isaías Campaña C. Economista, docente universitario y exdirector del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador.

Iván Mora Manzano. Músico y cineasta ecuatoriano. Dirigió el largometraje *Sin otoño, sin primavera* (2012).

Jorge Majfud. Escritor y profesor universitario. Recibió numerosas distinciones tanto por su trabajo académico como por sus novelas y ensayos. Actualmente enseña en la Universidad de Jacksonville.

Katu Arkonada. Diplomado en Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas. Ha sido asesor del Viceministerio de Planificación Estratégica, de la Unidad Jurídica Especializada en Desarrollo Constitucional y de la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia. Escribe regularmente en *La Jornada*, *Gara* y *Le Monde Diplomatique*.

Leonardo Parrini. Periodista, fotógrafo y productor de televisión. Dirige la revista digital LAPALABRABIERTA. Publicó los libros *La hora del lobo* (2000), *Decapitar a la Gorgona: ¿la corrupción, una moral de la crisis?* (2001), *Eva sin paraíso* (2003), *Diálogo comunitario en democracia* (2013), *Éguez. La memoria insumisa* (2016) y *Escritos en clave morse* (2018).

Lucrecia Maldonado. Escritora. Ha publicado volúmenes de narrativa, ensayo y poesía. Obtuvo en 2005 el Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Pólit por su novela *Salvo el calvario*.

Luis Herrera Montero. Antropólogo y docente de la Universidad de Cuenca.

Magdalena Gómez. Licenciada en Derecho, es integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, miembro de la Junta Directiva del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA) y maestra fundadora de la Universidad Pedagógica Nacional.

Magdalena León T. Economista e investigadora especializada en economía feminista y solidaria. Coordinada la Red de Mujeres Transformando la Economía (REMTE) y el Grupo Nacional sobre la Deuda de Ecuador. Preside la Fundación de Estudios, Acción y Participación Social (FEDAEPS).

Manuel Castells. Sociólogo, economista y profesor universitario, es desde 2020 ministro de Universidades del Gobierno de España. En su campo de estudio, relacionado con la sociedad de la información, la comunicación y la globalización, es uno de los investigadores más citados del mundo.

Marcelo Colussi. Investigador en ciencias sociales y catedrático universitario. Es cofundador del Centro de Estudios sobre Conflictividad, Poder y Violencia (CENDES) y coeditor de la página electrónica *ARGENPRESS*.

Marcelo Varela. Economista. Docente e investigador en la Universidad Central del Ecuador.

Marco Teruggi. Licenciado en Sociología por la Universidad de La Plata, es también militante, periodista y poeta. Ha colaborado con medios como *Sudestada*, *Anfibia* y *Contrahegemonía*.

María Iglesias. Escritora y periodista, publicó *El granado de Lesbos*, una crónica sobre la crisis de los refugiados en Europa.

Milena Almeida. Docente e investigadora. Dirige el Instituto de Igualdad de Género y Derechos de la Universidad Central de Ecuador.

Mónica Mancero. Profesora titular de la Universidad Central del Ecuador.

Nicolás Oliva Pérez. Economista por la Universidad Católica del Ecuador. Máster en economía del desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO. Máster en economía aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Ha sido parte de los equipos que diseñaron e implementaron las últimas reformas tributarias en Ecuador.

Noam Chomsky. Destacadísimo lingüista, filósofo, politólogo, crítico social y activista. Es autor de más de cien libros; el último de los cuales, titulado *Réquiem por el sueño americano*, se publicó en 2017.

Pablo Ospina Peralta. Historiador. Es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, investigador del Instituto de Estudios Ecuatorianos y militante de la Comisión de Vivencia, Fe y Política.

Pedro Pierre. Nacido Pierre Riouffrait en Francia en 1942, Pedro Pierre reside en Ecuador desde 1976, donde es Acompañador de las CEB (Comunidades Eclesiales de Base) urbanas y campesinas para la formación.

Raúl Zibechi. Periodista, escritor y activista. Es autor de títulos como *Genealogía de la revuelta. Argentina: la sociedad en movimiento* y *La mirada horizontal. Movimientos sociales y emancipación*.

Ricardo Restrepo Echavarría. Docente e investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

Santiago Ortiz. Doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador. Ha publicado libros y artículos sobre los temas de ciudadanía, movimientos sociales, Estado y gobiernos indígenas.

Soledad Stoessel. Doctora en Ciencias Sociales y Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata. Tiene una Maestría en Ciencias Políticas por FLACSO-Ecuador, donde es profesora-investigadora visitante.

Stalin Herrera. Investigador y Coordinador Académico del Instituto de Estudios Ecuatorianos. Miembro del Grupo de Trabajo Desarrollo Rural y Estudios Críticos de CLACSO.

Víctor Hugo Torres Dávila. Director del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales, Humanidades y Educación. Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador.

Virgilio Hernández. Abogado y político, fue dirigente del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik y luego formó parte de la Alianza PAÍS, por la cual representó a Pichincha en la Asamblea Nacional de Ecuador.



Lenín Moreno ✓
@Lenin



En las próximas horas derogaré el Decreto 883. Hemos hecho una elección por la paz.
Se expedirá un nuevo decreto que nos asegure que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.

1:30 p. m. · 14 oct. 2019 · [Twitter for Android](#)

ECUADOR

LA INSURRECCIÓN
DE OCTUBRE

El Ecuador acaba de vivir a finales del año 2019 uno de los momentos más intensos de la historia de las luchas sociales. **Adrián Bonilla y Mónica Mancero**

En Ecuador se ha corroborado lo que ya se ha ido plasmando en otros escenarios, como Brasil: el neoliberalismo actual no solo es incompatible con el bienestar de las mayorías sociales, sino también con la propia democracia. **Adoración Guamán**

Ecuador es un ejemplo más de la incapacidad que tiene el neoliberalismo para brindar estabilidad política, social y económica. Y también lo es de cómo el EMI puede llegar a ser un 'arma de destrucción masiva' en tiempo récord. **Alfredo Serrano Mancilla**

La respuesta del presidente ecuatoriano al levantamiento consistió en ampliar la represión e implantar un toque de queda. **Magdalena Gómez**

Como es sabido, el neoliberalismo es la versión más antisocial del capitalismo global porque está estrictamente vinculada a los intereses del capital financiero. Dado que no reconoce otra libertad que la libertad económica, le resulta fácil sacrificar todas las demás. **Boaventura de Sousa Santos**

Los grandes virajes estratégicos, esos que influyen a lo largo de décadas, se producen siempre abajo, a través de la irrupción de los sectores populares en el escenario político, el cual transforman al modificar las relaciones entre clases, grupos sociales, géneros y generaciones. **Raúl Zibechi**

Moreno promovió una estigmatización profunda del indígena, de los sindicatos, de los estudiantes; en suma, de los sectores populares. Se encargó de abrir una brecha entre el campo popular y su propio Gobierno. **Soledad Stoessel**

Asegurar que las protestas son solo el resultado de la quita del subsidio es contar la mitad de la historia. Lo que vive Ecuador es una crisis de representación. **Nicolás Oliva Pérez**

La presión de las bases del movimiento indígena y su acción durante el paro fueron decisivos. **Magdalena León T.**

CLACSO reúne un conjunto de textos breves y ensayos producidos para contribuir a una lectura en diferentes tiempos y desde diferentes perspectivas sobre la insurrección de la sociedad ecuatoriana en octubre de 2019. Nos mueve un doble propósito: aportar en la construcción de una vía para interpretar los acontecimientos que marcaron la historia contemporánea de nuestros pueblos y efectuar un aporte a la memoria de las luchas por sociedades más justas e igualitarias.



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

